MEMORIAL PARA REGISTRAR DR. CHAVARRO MAHECHA RV: MEMORIAL PROCESO No. 11001310302920190064302

Secretario 02 Sala Civil Tribunal Superior - Seccional Bogota <secsctribsupbta2@cendoj.ramajudicial.gov.co>
Jue 09/02/2023 14:36

Para: **2 GRUPO CIVIL <2grupocivil@cendoj.ramajudicial.gov.co>**

MEMORIAL PARA REGISTRAR DR. CHAVARRO MAHECHA

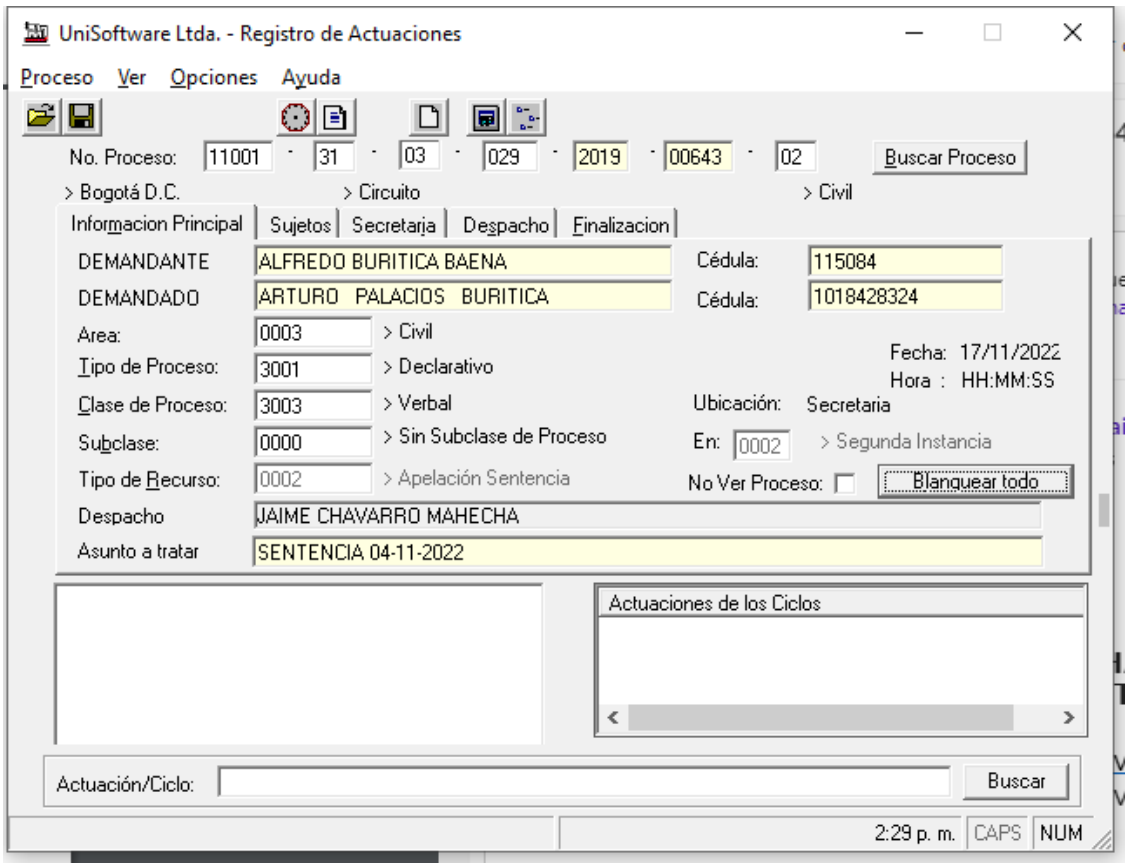
Cordial Saludo,

OSCAR FERNANDO CELIS FERREIRA
Secretario Sala Civil
Tribunal Superior de Distrito Judicial de Bogotá
Avenida Calle 24 N° 53-28 Torre C Oficina 305
Teléfono 423 33 90 Extensión 8349
Email: secsctribsupbta2@cendoj.ramajudicial.gov.co

De: Notificaciones Tutelas Secretaria Sala Civil Tribunal Superior - Seccional Bogotá <ntssctsbta@cendoj.ramajudicial.gov.co>
Enviado: jueves, 9 de febrero de 2023 2:31 p. m.
Para: Secretario 02 Sala Civil Tribunal Superior - Seccional Bogota <secsctribsupbta2@cendoj.ramajudicial.gov.co>
Asunto: RV: MEMORIAL PROCESO No. 11001310302920190064302

Cordial saludo

Envío memorial a proceso en referencia para los fines pertinentes.



Por favor CONFIRMAR recibido del presente mensaje así como los archivos adjuntos y archivos compartidos por google drive sí los hay.

FAVOR CONFIRMAR EL RECIBIDO DEL PRESENTE CORREO Y SU

ANEXO, CON NOMBRE Y CARGO DEL FUNCIONARIO.

RESPUESTAS UNICAMENTE AL

CORREO ntssctsbta@cendoj.ramajudicial.gov.co.

GLADYS CASALLAS LAVERDE
NOTIFICADORA GRADO IV
Sala Civil - Tribunal Superior de Bogotá
(571) 423 33 90 Ext. 8354 - 8352

Fax Ext.: 8350 – 8351
ntssctsbta@cendoj.ramajudicial.gov.co
Avenida Calle 24A No. 53-28, Of. 305 C
Bogotá D.C.

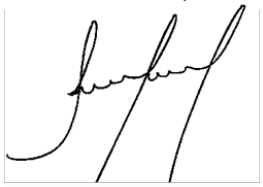
De: JAIME HERNAN ARDILA <abogadohernan@gmail.com>
Enviado: jueves, 9 de febrero de 2023 2:22 p. m.
Para: Despacho 00 Sala Civil Tribunal Superior - Bogotá D.C. <des00sctsbta@cendoj.ramajudicial.gov.co>; Despacho 02 Sala Civil Tribunal Superior - Bogota - Bogota D.C. <des02sctsbta@cendoj.ramajudicial.gov.co>; ABOGADO.CARLOS.GARCIA@GMAIL.COM <ABOGADO.CARLOS.GARCIA@GMAIL.COM>
Asunto: MEMORIAL PROCESO No. 11001310302920190064302

H. Magistrado
Doctor JAIME CHAVARRO MAHECHA
TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL
BOGOTÁ – SALA CIVIL
des00sctsbta@cendoj.ramajudicial.gov.co
des02sctsbta@cendoj.ramajudicial.gov.co
E. S. D.

REF.: VERBAL DE ALFREDO BURITICÁ BAENA contra ARTURO PALACIOS BURITICÁ Y OTRA.
No. 11001310302920190064302

JAIME HERNAN ARDILA, identificado como aparece al pie de mi firma, actuando en mi condición de apoderado judicial del **demandante,** encontrándome dentro del término consagrado en el artículo 12 de la Ley 2213 de 2022, me permito **sustentar el recurso de apelación** interpuesto contra la sentencia proferida en primera instancia, lo cual remito en archivo PDF adjunto.

Atentamente,



JAIME HERNÁN ARDILA
C.C. No. 93.374.584 de Ibagué
T.P. No. 107.460 del C. S. de la J.

H. Magistrado
Doctor JAIME CHAVARRO MAHECHA
TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL
BOGOTÁ – SALA CIVIL
des00sctsbta@cendoj.ramajudicial.gov.co
des02sctsbta@cendoj.ramajudicial.gov.co
E. S. D.

REF.: VERBAL DE ALFREDO BURITICÁ BAENA contra ARTURO PALACIOS BURITICÁ Y OTRA.
No. 11001310302920190064302

JAIME HERNAN ARDILA, identificado como aparece al pie de mi firma, actuando en mi condición de apoderado judicial del **demandante,** encontrándome dentro del término consagrado en el artículo 12 de la Ley 2213 de 2022, me permito **sustentar el recurso de apelación** interpuesto contra la sentencia proferida en primera instancia, en los siguientes términos:

PRIMER REPARO: Como ya lo indiqué, la sentencia considera que no hubo suficientes medios probatorios para demostrar que el demandado, contrario a lo citado en la cláusula CUARTA de la escritura pública No. 1696 del 16 de agosto de 2017 de la Notaría Catorce de este Círculo, no pagó el precio allí pactado.

Sin embargo, no podemos dejar de lado que fue el mismo Juzgado el que, con sus omisiones de publicidad ordenadas por el Decreto 806 de 2020 vigente para ese momento, al no registrar ningún movimiento del proceso en la página de la Rama Judicial – Consulta de Procesos, entre el 12 de abril y el 29 de noviembre de 2021 tales como ingresos al Despacho, salidas del Despacho, presentación de la contestación de la demanda, y el traslado de ésta, impidió al suscrito enterarme del traslado que se corrió de las excepciones propuestas y por consiguiente, solicitar pruebas adicionales atendiendo los argumentos de dichos medios exceptivos.

Esta situación fue alegada en tiempo a través de nulidad, la cual fue negada en la audiencia de que trata el artículo 372 del Código General del Proceso y se encuentra surtiendo el recurso de apelación ante esta misma Sala bajo el número de radicación **11001310302920190064301.**

Por consiguiente, previo a entrar a decidir su Señoría el recurso de apelación interpuesto contra la sentencia aquí proferida, debe dilucidarse si en verdad se omitieron las oportunidades para solicitar pruebas, esto es, resolverse sobre la decisión que negó la nulidad formulada en tiempo y de encontrarse probada esta causal, anular todo lo actuado para en su

lugar ordenar correrme traslado de las excepciones propuestas, lo que cobijará la decisión de fondo en cita.

SEGUNDO REPARO: Existió un erróneo análisis probatorio en la sentencia, al considerar que no se demostró fehacientemente que lo consignado en la cláusula cuarta de la escritura pública antes indicada, no corresponde a la realidad.

Lo anterior, por cuanto se dejó de lado:

2.1. Que todo el actuar del demandado ARTURO PALACIOS BURITICÁ estuvo revestido de dolo, aprovechándose de la circunstancia que demandante y demandado residían solos en el apartamento, por lo que entonces no hubo testigos para el momento de la supuesta "entrega" del dinero.

Del análisis integral de las pruebas recaudadas, interrogatorios de parte, sentencia de segunda instancia proferida por el Juzgado 35 Civil del Circuito_ desechada de plano por la Juez *A Quo* so pretexto de la autonomía judicial_ y testimonio, podemos evidenciar toda la trazabilidad del negocio jurídico que nos ocupa, no sin antes analizar que en realidad fueron dos negocios jurídicos de idénticas características, conforme a los cuales, supuestamente el demandante recibió de manos del demandado en efectivo, en un lapso de un mes y diez días, las sumas de US$10.000 dólares y $60'000.000.00 para pagarle el apartamento de Bogotá y de US$35.000 dólares y $36'000.000.00 para pagarle el precio del inmueble en Armenia, para un total de **US$45.000 dólares y $96'000.000.00 de pesos colombianos en el año 2017.**

Estos dólares no fueron declarados al momento de ingresar al país, por cuanto según dicho de la demandada los iba entrando en pequeños montos menores a diez mil, por lo que en consideración de la sentencia, no se hacía necesario dicho reporte.

Lo anterior es errado toda vez que contraviene lo preceptuado por el artículo 1º de la Resolución Externa 8 de 2000 de la Junta Directiva del Banco de la República, **que ordena a los residentes y no residentes que efectúen en Colombia una operación de cambio, presentar la respectiva declaración de cambio.** Y el artículo 82 *ibídem* consagra los eventos regulados para la entrada o salida del país de divisas o moneda legal colombiana y títulos representativos de las mismas, así:

> *"(…) Los viajeros que entren o salgan del país con divisas o moneda legal colombiana en efectivo* ***por un monto superior a diez mil dólares de los Estados Unidos de América (US$10.000)****, o su equivalente en otras monedas,* ***deben declarar ante la autoridad aduanera tales operaciones en el formulario que ésta establezca.*** *La obligación de declarar se efectuará por grupo familiar de viajeros cuando el monto total de divisas o moneda legal colombiana por grupo supere el límite señalado…*

> ***Las personas que ingresen*** *o saquen del país títulos representativos de divisas o de moneda legal colombiana,* ***por un monto superior a diez mil dólares de los Estados Unidos de América (US$10.000)*** *o su equivalente en otras monedas,* ***cualquiera que sea la modalidad de ingreso o salida,*** *deberán informarlo a la autoridad aduanera, en el formulario que ella indique.*
>
> *Parágrafo 1.* ***Las obligaciones previstas en el presente artículo se aplican a todas las personas naturales*** *y jurídicas, públicas o privadas, incluyendo a los intermediarios del mercado cambiario que actúen por cuenta propia o de terceros. Estas obligaciones no se aplican al Banco de la República por tratarse del administrador de las reservas internacionales…"*

Esta modalidad se aplica a la utilizada por la demandada para ingresar los dólares al país, esto es, durante mucho tiempo atrás en pequeños montos, al punto que en los meses de julio y agosto de 2017, según sus propios interrogatorios rendidos en los dos procesos, tenían en efectivo la suma de **cuarenta y cinco mil dólares sin declarar,** que sumados a los noventa millones de pesos colombianos para esa misma data, los obligaba a declarar renta para el año 2016, la cual no aparece en el plenario, lo que demuestra fehacientemente **que dichos dineros no existieron.**

A su turno, el demandado aseguró que prestó servicios profesionales en el extranjero, declarando que fungió como consultor jurídico en los Estados Unidos de Norte América, incurriendo en contradicciones, a saber:

"Minuto 58:28: Era un particular que ejercía asesorías, que conoce del tema y no es necesario ser abogado.

Minuto 59:50: No firmaba contratos ni recibos, no afirmó que cobraba hasta 10.000 dólares, dijo que un abogado podía cobrarlos, pero él no podía hacerlo en la barra de la Florida, 1:01:24 pero él no cobraba, esto lo podía cobrar un abogado.

Minuto 1:02:10: Afirmó que él, por una consulta cobraba 200 dólares, por evaluar sus documentos, por hablar con la persona, por preguntar qué quiere.

Minuto 1:03:15: Hacía contratos con las personas en las que había confianza; sin embargo, viajaba esporádicamente.

Minuto 1:03:28: Dejaba constancias muchas veces, otras veces no, por concepto de honorarios o asesorías.

Minuto 1:05:06: Le entregaba los recibos por concepto de honorarios cobrados al cliente sin dejar copia para él, pues no esperaba la mala fe del abuelo al instaurar las demandas en su contra.

Minuto 1:06:06: Aduce que el cliente le daba 2.000 dólares como soporte inicial para llenar un formulario, pero no guardaba recibos.

Minuto 1:07:05: No expedía recibos por dos o tres mil dólares para él, porque era discrecional y más en EEUU donde opera la confianza. Lo anterior es totalmente falso, pues si existe un país más rígido en cuestión de impuestos es precisamente Estados Unidos.

Minuto 1:07:20: Eso es para acá donde la mala fe impera, lo cual efectivamente está demostrado fehacientemente con este y el otro proceso.

Todo lo anterior contraviene las normas legales que imperan en Estados unidos, por lo que la actividad que supuestamente realizó allí el demandado requiere aval estatal, e, incluso, superar un examen de conocimiento y destreza de la barra[11] - BAR Exam y character and fitness – (Bar Association)[12], so pena de ejercer ilegalmente la abogacía en dicho país[13]; entonces, no cabe duda que por prestar tal asesoría calificada, sin demostrar en el proceso su autorización para ello en los Estados Unidos de Norte América, percibió una remuneración en moneda extranjera (dólares americanos) que ingresó a Colombia; sin que, durante el proceso, demostrase el ingreso regular de dichas divisas, que son el soporte del precio que se hizo constar en la cláusula cuarta de la escritura pública No. 1696 del 16 de agosto de 2017 de la Notaría Catorce de este Círculo.

O, en su defecto, como es lógico, **dichos dólares jamás existieron**.

Mucho menos cuando los dos demandados aseguraron que los guardaban en una "bodega" que se encuentra en el mismo apartamento y que, como quedó plenamente demostrado, **la misma tampoco existe,** pues lo que se evidenció y demostró fehacientemente, es que hay un mueble en madera con entre paños en la parte superior, y en la parte inferior hay una cavidad con puertas sin ningún entrepaño, donde las cosas deben dejarse en el piso ya que ni base tiene; tampoco tiene al menos cajones donde hubiesen podido guardarse esos objetos de valor _dinero en dólares, pesos colombianos y joyas_.

Es decir, ese mueble denominado por los demandados como "bodega", no tiene el espacio y menos la seguridad para guardar 45.000 dólares, $90'000.000 en efectivo, títulos valores producto de los préstamos realizados por el demandado a terceras personas y joyas de la demandada, lo cual corrobora que dicho dinero no existió y que, por consiguiente, la cláusula cuarta consignada en la escritura pública base de esta acción que hizo elaborar el demandado por ser abogado especializadP, es totalmente falsa y, el dinero del precio allí estipulado jamás se pagó.

---

11 Walker, David Maxwell. The Oxford Companion to Law. Clarendon Press, 1980. Universidad de Michigan.
12 https://www.americanbar.org/about_the_aba/
13 Izaguirre Artaza, Jurdana. Los Abogados y el Sistema Jurídico en Estados Unidos septiembre 2014. Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Washington Washington Washington, DC.

Volviendo con la trazabilidad del negocio, aparece plenamente demostrado con el interrogatorio absuelto por el demandante, que cuando compareció al primer negocio en julio de 2017 y no vio a la persona que supuestamente iba a comprar el inmueble de Bogotá y su nombre no figuraba como comprador, el aquí demandado, su nieto de su entera confianza, le manifestó que él lo representaba y que por esa razón aparecía él como comprador. Y al indagársele por el precio, se ofuscó manifestando que no tenía tiempo, que cuál era la desconfianza, que como siempre poniendo problemas, que quien conocía de ese tipo de negocios era él como abogado, que luego le cancelaría el precio, pues por ahora iba a cancelarse una hipoteca que gravaba el inmueble.

Y en cuanto al negocio del inmueble de Armenia, como bien lo manifestó el demandante al absolver interrogatorio en este asunto, adicional a lo anterior tuvo la amenaza que si no firmaba nuevamente no se le cancelaría ningún dinero y por ende, no tuvo más remedio que firmar esta nueva escritura pública que nos ocupa.

Fue así como expresamente indicó:

Minuto 56:40: Se suponía que la escritura era a nombre del familiar, pero no, quedó a nombre de Arturo. El ya no podía hacer nada.

Minuto 57:00: *"Él se emberracó pues, o se disgustó o como digo yo,* ***él se puso bravo,*** *él me dijo a mí que él no estaba dispuesto a hacer esa cosas no, entonces* ***que él había hablado y que él era honorable y que él era abogado especializado y que él sabía cómo eran las cosas y que si no, entonces no me pagaban la plata. Entonces en base a eso pues yo firmé****, obviamente sí se firma una escritura en el nombre de él".* (resalto y subrayo).

Minuto 58:52: *"****Celebró el otro negocio porque no le había pagado lo de Bogotá****. Entonces pues yo, en realidad de verdad,* ***yo creía firmemente que él me iba a resolver ese problema y me iba a pagar esa plata,*** *pero entonces, bueno, puede decir que si uno cae una vez no cae otra,* ***pero yo caí dos veces****,* ***por confiado, por demasiado afecto a él, por demasiado defensa de la familia****".* (resalto).

Minuto 1:00:15: Le dijo que él representaba al comprador. El demandante esperaba que finalmente le pagaran para resolver ese problema.

Y por qué no demandó con anterioridad por la vía civil o penal, simple y llanamente por cuanto era su único nieto, confiaba que le pagaría los dineros, propendió por la unidad familiar y le estaba dando tiempo para que realizara dicho pago.

Como puede apreciarse, hubo una maquinación por parte del demandado Arturo Palacios Buriticá, aprovechando: primero, que se encontraba sólo en Colombia residiendo en el mismo apartamento con su abuelo aquí demandante; segundo, la extrema confianza que éste le tenía; tercero, el

temor reverencial que para ese momento ya le profesaba a su abuelo; cuarto, su calidad de abogado especializado y la poca experiencia del demandante en cuestión de compra venta de bienes inmuebles; quinto, la intención del demandante en concretar esas ventas para favorecer a sus tres hijas, y, finalmente en el caso concreto, que si no firmaba esta nueva escritura no recibiría ni el precio aquí pactado ni el que se hizo constar en la escritura del apartamento de Bogotá, todo lo cual debe conllevar a que se acceda a ambas pretensiones tanto principales como subsidiarias, que, de lógica, por sustracción de materia, de prosperar las primeras no será necesario estudiar lo relativo a las segundas.

Así las cosas, pese al poco acervo probatorio que se recaudó debido a la nulidad planteada en torno al traslado de las excepciones de mérito, se encuentra plenamente demostrado que el precio pactado en la cláusula cuarta de la escritura pública No. 1696 del 16 de agosto de 2017 de la Notaría Catorce de este Círculo, en realidad de verdad, nunca fue pagado al demandante vendedor.

En cuanto al usufructo constituido en favor de la demandada madre del demandado, para terminar de defraudar al demandante y a sus tías, como lo he indicado en mis alegaciones, en la escritura pública No. 2374 del 21 de octubre de 2019 otorgada en la Notaría Catorce de este Círculo, se hizo constar que se realizaba a título gratuito, **lo cual es falso como quedó plenamente demostrado,** pues a no dudarlo, dicho usufructo fue oneroso.

Fue así como el demandado en su interrogatorio, al minuto 45:15 indica que en el año 2019 cuando la mamá viene a Colombia, le confiere un usufructo vitalicio, a pesar que nunca lo acosó para que le pagara los dineros que le había prestado, pues a él no le gusta tener deudas porque es una persona muy correcta, y al minuto 46:30 indica que en razón de ese préstamo suscribe dicho usufructo.

Por su parte, la demandada al absolver interrogatorio, al minuto 1:52:57 indica que su hijo le pagó los préstamos que le realizó, con el usufructo vitalicio que constituyó a su favor en octubre de 2019.

En cuanto a los ingresos y labores del demandado, como se ha venido indicando y analizando, no aparece una sola prueba que los demuestre antes del año 2017, pues no existen saldos bancarios que pruebe su liquidez para comprar dos inmuebles en cuantía de $240’000.000.00, no se aportan contratos laborales o de prestación de servicios profesionales, no se aportaron consignaciones a su favor en monedas extranjeras o nacionales, no se declaraba renta para el año 2016; por el contrario, el testigo José Hermes Rojas Osorio es enfático al indicar al minuto 21:00 que no sabe de dónde derivaba ingresos el demandado, sólo sabía que era subvencionado por su abuelo, y al minuto 22:06 indica que sí le consta que el abuelo subvencionaba al nieto, porque a él le tocó pagar los estudios profesionales de Arturo y para su especialización, con préstamos que hizo a través de la Cooperativa de la Universidad Nacional ya que lo

acompañó en varias oportunidades a ello, lo cual es corroborado por el interrogatorio que absolvió el demandante.

Y vuelve y lo corrobora la misma demandada María Isabel Buriticá Escobar, madre de Arturo Palacios Buriticá, cuando al minuto 1:47:01 indica que cuando se da este negocio ella le dice Arturo como le va a pagar la plata y él le contesta: **"YO VOY A EMPEZAR A TRABAJAR".** La misma mamá confiesa que el demandado Arturo Palacios Buriticá iba a comenzar a trabajar luego del año 2017.

Es tan falsa su declaración, que indica que sus ingresos provienen, entre otros, de Asesorías técnicas con rectores de colegios, pero sin contratos. No puede ser posible que un colegio realice contratos de trabajo o de prestación de servicios profesionales sin un contrato en ese sentido y, que tampoco exista ningún soporte de los pagos que por ese concepto percibió la demandada, que para el demandante es imposible localizarlos, máxime que, como estamos plenamente seguros, no existieron. No podemos demostrar lo imposible y, por el contrario, era la parte demandada la que debía demostrar su solvencia económica para pagar el precio consignado en la escritura pública base de estas acciones.

2.2. Lo anterior nos lleva a concluir sin lugar a dudas, que Arturo Palacios Buriticá, aprovechando su condición de nieto único y abogado especializado, lo cual lo favorecía al profesarle aquél un infinito cariño y confianza, que lo llevaba inclusive a tenerle un temor reverencial debido a su comportamiento impetuoso, despectivo e irrespetuoso, tal como lo afirmó en repetidas oportunidades el demandante al absolver interrogatorio y especialmente al minuto 19:42 cuando indicó que **le cogió temor a él** _Arturo_ porque el comportamiento había cambiado, era confianzudo, mal educado, le daba papirotazos en las orejas, le daba coscorrones en la cabeza, le faltaba al respeto.

2.3. Como puede apreciarse, los interrogatorios absueltos por los demandados se encuentran desprovistos de toda prueba que demuestre lo allí afirmado y sólo se escudan en lo consignado en la cláusula cuarta de la escritura pública No. 1696 del 16 de agosto de 2017 de la Notaría Catorce de este Círculo, esto es, que el dinero objeto del precio se recibió a satisfacción por el vendedor, sin entrar a demostrar en lo más mínimo sus ingresos antes del año 2017, el origen del dinero supuestamente "entregado" al demandante y el sitio donde se encontraba "guardado"; por el contrario las respuestas de los demandados son evasivas, falsas y titubeantes.

2.4. Por el contrario, el demandante al absolver interrogatorio es enfático y reiterativo al indicar que no recibió suma alguna de dinero, máxime que en ese apartamento no existe un lugar seguro donde puedan guardarse esas cantidades, mucho menos en dólares que jamás ha manejado en dichos montos; así mismo, que los demandados no tenían los recursos para cancelar dichos precios, pues siempre fue él quien les ayudó económicamente ofreciéndoles habitación, comida, estudio y salud.

2.5. Reitero, no se analizó que la parte demandada no aportó un solo documento que demostrara los contratos de honorarios celebrados con entidades o personas extranjeras y nacionales, como tampoco que tuvieran saldos bancarios u otro tipo de ingresos que les permitieran pagar esa suma en efectivo.

2.6. No se analizó que los ingresos frente a los gastos referidos por los demandados no les daba la posibilidad de ahorrar las cantidades de dinero supuestamente entregadas a mi poderdante para cancelarle dos negocios celebrados en menos de dos meses, pues téngase en cuenta que no admitieron la ayuda económica que les brindó por siempre el aquí demandante como su padre y nieto.

2.7. Se consideró en las sentencia erróneamente que los montos de dinero en dólares y efectivo "supuestamente entregados a mi poderdante", por haber sido ingresados en pequeñas cantidades, no debían ser declarados, lo cual no es así como ya quedó dilucidado al comienzo de este libelo.

2.8. Se analizó erróneamente que sí existe total imposibilidad de mi poderdante para demostrar la negación indefinida realizado en la demanda, esto es, que no recibió el precio pactado en la escritura pública que nos ocupa, por tratarse de un hecho inexistente, por lo que la carga de la prueba se invertía; sin embargo, con todo, se demostró fehacientemente que los demandados no tenían la capacidad económica para pagar dichos precios y montos, al punto que incurrieron en contradicciones y confesiones, tal como sucedió con la demandada cuando al minuto 1:47:01 indica que cuando se da este negocio ella le dice Arturo como le va a pagar la plata y él le contesta: **"YO VOY A EMPEZAR A TRABAJAR".** La misma mamá confiesa que el demandado Arturo Palacios Buriticá iba a comenzar a trabajar luego del año 2017.

2.9. Incurre la sentencia en un error craso al considerar que la prueba indiciaria es exclusiva para los procesos de simulación y por ende, no hacer un análisis de la misma, cuando dicha prueba es admisible e idónea para todo tipo de procesos, tal como lo prevé el artículo 165 del Código General del Proceso, en armonía con el artículo 240 cuyo tenor es: *"Para que un hecho pueda considerarse como indicio deberá estar debidamente probado en el proceso"* y acá se encuentra plenamente demostrada la falta de solvencia y capacidad económica de los demandados para pagar el precio consignado en la cláusula cuarta de la escritura pública No. 1696 del 16 de agosto de 2017 de la Notaría Catorce de este Círculo; así mismo, aparece plenamente demostrada la mala fe y falsedad de los demandados al hacer constar en la escritura pública No. 2374 del 21 de octubre de 2019 otorgada en la Notaría Catorce de este Círculo, que se constituía usufructo vitalicio y gratuito a favor de María Isabel Buriticá Escobar, cuando quedó plenamente demostrado que el mismo fue oneroso. Entonces, si se engañó al señor Notario, a no dudarlo engañaron al aquí demandante.

Lo anterior da lugar a que se apliquen los artículos 241 y 242 que prevén que el **Juez podrá deducir indicios de la conducta procesal de las partes** y que el Juez apreciará **los indicios en conjunto,** teniendo en consideración su gravedad, concordancia y convergencia, **y su relación con las demás pruebas que obren en el proceso**; por el contrario, la sentencia deja de lado los indicios considerando erróneamente que sólo proceden en tratándose de procesos de simulación.

2.10. Se analiza en la sentencia erróneamente el objeto del testimonio recepcionado, que no era demostrar la entrega y desarrollo del negocio jurídico enervado, sino la falta de capacidad económica y el comportamiento del demandado frente a su abuelo, lo cual quedó plenamente dilucidado por el testigo.

Fue así como al solicitar esta prueba expresamente indiqué: "…, especialmente la afinidad que existe entre demandante y demandados, su relación o trato y actividades de los demandados".

2.11. No se analizó la falsedad de lo consignado en la escritura pública de usufructo, que se hace constar como gratuito cuando aparece plenamente demostrado que fue a título oneroso, lo cual, además, es un indicio en contra del extremo pasivo.

2.12. Se abstuvo la Juez de Primera Instancia de analizar bajo un argumento ilegal como lo es la "autonomía judicial", la sentencia proferida por otro juzgador en un caso idéntico entre las mismas partes, aportada oportunamente al proceso, simplemente amparándose en la autonomía judicial, cuando la norma le impone la obligación de analizar la totalidad de las pruebas de manera singularizada y concatenada con los demás medios probatorios.

2.13. Por el contrario, la sentencia finalmente se centra exclusivamente en que la escritura pública objeto de esta demanda hizo constar el pago y ello es más que suficiente para denegar las pretensiones incoadas, análisis ilegal, pues debe contrastarse esa afirmación, que es la finalidad del objeto y de las pretensiones, con la totalidad de los medios probatorios aportados y recaudados en el proceso.

TERCER REPARO: Efectivamente existió un erróneo análisis y aplicación de normas de carácter procesal y sustancial como son los artículos 1616 (dolo), 1849 (pagar el precio), 1934 (acción contra terceros y precisamente se está alegando la nulidad relativa), todos del Código Civil.

Y artículos 167 (carga de la prueba), 244 (documento auténtico admite prueba en contrario), 176 (análisis probatorio de manera tangencial, individual y conjunta), tal como quedó dilucidado en los anteriores argumentos.

Así mismo, se interpreta erróneamente el 1934 del Código Civil al indicarse que sólo se admite la acción de nulidad o falsificación de la escritura pública cuando allí se hace constar el pago del precio, dejando

de lado que esta norma es aplicable a las acciones contra terceros poseedores y no entre las mismas partes contratantes; pero lo más relevante, que efectivamente se está alegando y demostrando la nulidad relativa de la escritura pública de compra venta.

Conforme a lo anterior, solicito se revoque en todas sus partes la sentencia atacada, para en su lugar acceder a las pretensiones de la demanda reformada, denegar los medios exceptivos propuestos y condenar en costas a la parte demandada.

Atentamente,



JAIME HERNÁN ARDILA
C.C. No. 93.374.584 de Ibagué
T.P. No. 107.460 del C. S. de la J.

MEMORIAL PARA REGISTRAR DR. CHAVARRO MAHECHA RV: RAD. 202081316- SUSTENTACION APELACION

Secretario 02 Sala Civil Tribunal Superior - Seccional Bogota <secsctribsupbta2@cendoj.ramajudicial.gov.co>
Vie 3/02/2023 10:13 AM

Para: **2 GRUPO CIVIL <2grupocivil@cendoj.ramajudicial.gov.co>**

MEMORIAL PARA REGISTRAR DR. CHAVARRO MAHECHA

Cordial Saludo,

OSCAR FERNANDO CELIS FERREIRA
Secretario Sala Civil
Tribunal Superior de Distrito Judicial de Bogotá
Avenida Calle 24 N° 53-28 Torre C Oficina 305
Teléfono 423 33 90 Extensión 8349
Email: secsctribsupbta2@cendoj.ramajudicial.gov.co

De: Secretaria Sala Civil Tribunal Superior -Seccional Bogota <secsctribsupbta@cendoj.ramajudicial.gov.co>
Enviado: viernes, 3 de febrero de 2023 10:11 a. m.
Para: Secretario 02 Sala Civil Tribunal Superior - Seccional Bogota <secsctribsupbta2@cendoj.ramajudicial.gov.co>
Cc: VICTOR PEREZ ALVAREZ <vopa@outlook.com>
Asunto: RV: RAD. 202081316- SUSTENTACION APELACION

Cordial saludo,

Se remite por competencia a OSCAR CELIS FERREIRA - SECRETARIO JUDICIAL DE LA SALA CIVIL, cualquier inquietud sobre su proceso debe dirigirla al correo secsctribsupbta2@cendoj.ramajudicial.gov.co

Margarita Mendoza Palacio
Secretaria Administrativa de la Sala Civil
Tribunal Superior de Bogotá
(571) 423 33 90 Ext. 8352
Fax Ext.: 8350 – 8351
secsctribsupbta@cendoj.ramajudicial.gov.co
Avenida Calle 24A No. 53-28, Of. 305 C
Bogotá D.C.

De: VICTOR PEREZ ALVAREZ <vopa@outlook.com>
Enviado: viernes, 3 de febrero de 2023 10:10
Para: Secretaria Sala Civil Tribunal Superior -Seccional Bogota <secsctribsupbta@cendoj.ramajudicial.gov.co>; secsctribsubta2@cendoj.ramajudicial.gov.co <secsctribsubta2@cendoj.ramajudicial.gov.co>

Cc: Competencia <competencia@esguerra.com>; Carolina Deik <c.deik@deikabogados.com>
Asunto: RAD. 202081316- SUSTENTACION APELACION

Señor Magistrado:
JAIME CHAVARRO MAHECHA TRIBUNAL SUPERIOR DE BOGOTÁ - SALA CIVIL
Su Despacho

Referencia: PROCESO VERBAL SOBRE COMPETENCIA DESLEAL
Demandante: KARDIUP SAS
Demandadas: EPS SOS y COMFANDI
Radicación: ***2020-81316-01***
Asunto: SUSTENTACION APELACION SENTENCIA

Por medio del presente, se remite adjunto y con destino al expediente de la referencia el siguiente documento:

1. Sustentación apelación Sentencia (24 folios)

Atentamente,

VICTOR OSWALDO PEREZ ALVAREZ
Abogado Especialista Derecho Procesal, Civil y Comercial
ASESORES Y CONSULTORES ASOCIADOS VOPA S.A.S.
Oficina: Carrera 50 No.9B-20 Of. 210 Edif. Torres de la Cincuenta
Telefono: (57) 602 3835422
***Celular*:** 300-5253930 / 316-7487210
***Correo*:** vopa@outlook.com - vopa@icloud.com
Santiago de Cali - Colombia

Señor Magistrado:
JAIME CHAVARRO MAHECHA
TRIBUNAL SUPERIOR DE BOGOTÁ - SALA CIVIL
Su Despacho

Referencia:	PROCESO VERBAL SOBRE COMPETENCIA DESLEAL
Demandante:	KARDIUP SAS
Demandadas:	EPS SOS y COMFANDI
Radicación:	***2020-81316-01***
Asunto:	SUSTENTACION APELACION SENTENCIA

Soy **VICTOR OSWALDO PEREZ ALVAREZ**, de condiciones civiles y procesales conocidas dentro del rubro procesal en referencia y, de manera respetuosa, atendiendo a lo dispuesto en el **articulo 109 del CGP,** me dirijo a su despacho con el propósito de presentar oportunamente ***SUSTENTACION*** del recurso de apelación interpuesto con la **sentencia de primera instancia del 6 de diciembre de 2022** por parte de la **Delegatura para Asuntos Jurisdiccionales - Grupo Competencia Desleal y Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio,** de la siguiente forma:

SOBRE LA SENTENCIA IMPUGNADA:

En relación con lo expuesto en la sentencia de primera instancia objeto de esta impugnación se puede establecer que, tanto en su parte considerativa como en la declaratoria, se esgrimieron los siguientes aspectos jurídicos, fácticos y probatorios sobre los que nos pronunciaremos mas adelante y que a continuación citamos de forma compendiada,:

- Después de hacer exposición de los fundamentos legales, jurídicos y jurisprudenciales que en forma general regulan la llamada competencia desleal, el operador judicial anuncia que su decisión se circunscribirá específicamente a los comportamientos de las demandadas señalados como

desleales bajo un solo análisis, en razón a que a su juicio los reclamos de la demanda contra ellas se fundan en los mismos argumentos de hecho y de derecho.

- Según los términos del articulo 17 de la Ley 256 de 1996 y de acuerdo con el contenido de la demanda, se resume la fase fáctica en que la demandada COMFANDI implementó una estrategia, aprovechando la ventaja que tenía como sociedad controlante de la también demandada EPS SOS SA, consistente en que esta última rompiera la relación contractual que mantenía con IPS KARDIUP SAS a traves de un contrato de prestación de servicios de salud celebrado el 1o de noviembre de 2018 en la modalidad de atención para enfermedades crónicas, y que todos los pacientes o usuarios que venia atendiendo la accionante pasaran a ser atendidos por COMFANDI.

- Lo anterior se hizo a través de diferentes comportamientos: primero, se indujo a la terminación del contrato entre KARDIUP y SOS; segundo, SOS cesó los pagos de octubre y noviembre a favor de KARDIUP y, tercero, SOS celebró contrato de prestación de servicios con COMFANDI y obtuvo el traslado de la totalidad de pacientes que tenía a su cargo KARDIUP.

- El supuesto legal a analizar es el del inciso segundo del articulo 17 de la ley de competencia desleal, que se refiere a la llamada inducción a la ruptura contractual, el cual exige para que se entienda configurada la respectiva causal no solo que se produzca la terminación del contrato en perjuicio del demandante, si no que ademas esta conducta tenga por objeto la expansión de un sector industrial o empresarial, estar acompañado de comportamientos como el engaño, la intención de eliminar al competidor, entre otras. Esto obliga a analizar, además de la inducción a la ruptura del vinculo contractual, las circunstancias en que las demandadas la llevaron a cabo.

- Dice el fallo impugnado que aunque la demandante pone de presente que debido a la terminación abrupta, unilateral e indebida del contrato y de sus prorrogas, la entrega de población de usuarios a COMFANDI y el retraso en el pago de facturas, KARDIUP se vio impelida a suspender su actividad de servicios de salud no solo con relación a EPS SOS SA sino también con otras EPS que operan en el mismo mercado de salud, se considera que estos hechos no configuran ninguna de las circunstancias que permita hacer reproche de las conductas alegadas como desleales.

- Considera por el *a quo* que las conductas de las demandadas estuvieron acordes con la buena fe comercial, y que pese a que es evidente que EPS SOS SA dio por terminada su relación contractual con KARDIUP, ello no acarrea como consecuencia una violacion de las normas de competencia desleal establecidas en la ley 256 de 1996.

- A la conclusión anterior se llega, según el fallo, porque ni el material probatorio allegado en el expediente, ni la prueba documental y testimonial incorporadas y practicadas durante el proceso, permiten establecer que COMFANDI, aprovechando su posición de controlante de EPS SOS SA, obligara a su controlada a terminar el contrato celebrado con KARDIUP en beneficio propio y con miras a eliminar a un competidor del mercado; aunque se observa es que existieron algunas circunstancias que llevaron a la terminación del mencionado contrato, este aspecto es meramente contractual y no hace parte del objeto del presente proceso.

- En relación con el hecho del no pago oportuno de las facturas de servicios por parte de EPS SOS a KARDIUP, en el fallo impugnado se considera que este asunto fue objeto de una transacción celebrada entre dichas partes en el mes de diciembre de 2019. Por tanto, este hecho no puede considerarse irregular en razón a que es el fruto de un acuerdo en el que las partes establecieron montos, fechas y demás aspectos relacionados con las obligaciones pendientes, aspecto este que no se puede desconocer.

- Se afirma que, a pesar de que la parte demandante allegó bastante material probatorio, mas allá de los hechos que se demuestran a través de tales pruebas, no se logra probar con ellas la inducción a la ruptura contractual y, mucho menos, que existiera la intención de las demandadas de eliminar a un competidor del mercado.

- En relación con la prueba de indicios aducida por la parte demandante, después de replicar la relación de hechos indicadores que se hizo, el *a quo* considera que dichos indicios no están probados y que algunos de ellos escapan, incluso, a la órbita de competencia de la Superintendencia de Industria y Comercio, sobre todo a lo referente a la terminación del contrato mencionado, por lo que se concluye que el proceso, en su gran mayoría, discurrió sobre temas contractuales que no correspondían al objeto del mismo.

- Finalmente, se menciona que EPS SOS no es competidora en el mercado frente a KARDIUP, toda vez que los pacientes o clientes que trataba

KARDIUP eran de la EPS SOS que se los transfería para prestar estos servicios especializados, lo que sitúa a dicha demandada por fuera de los alcances de la demanda y del mismo proceso judicial en ciernes.

SUSTENTACIÓN FACTICA Y JURÍDICA DE LA APELACIÓN:

1. Problema jurídico planteado con la demanda

En esta sustentación, tal como lo planteamos en su oportunidad a traves de los reparos concretos formulados anteriormente, consideramos necesario reiterar que, de acuerdo con los términos generales y específicos de la demanda impetrada y de las diversas actuaciones y pronunciamientos de la parte actora en el marco del presente proceso judicial el problema jurídico planteado en este caso en particular tiene los siguientes elementos básicos:

- ¿Incurrieron las demandadas COMFANDI y EPS SOS SA, siendo la primera controlante de la segunda, en las conductas generales y especificas de competencia desleal contempladas en los **artículos 7 y 17 de la Ley 256 de 1996,** en contra de la demandante KARDIUP SAS?

- ¿Y, como consecuencia de dichas conductas, las mismas demandadas ocasionaron a la demandante KARDIUP SAS **daños patrimoniales indemnizables**, consistentes en **DAÑO EMERGENTE y LUCRO CESANTE**, en razón a su marginación del mercado de salud especializada en enfermedades crónicas de la red de servicios implementada por EPS SOS, en donde KARDIUP y COMFANDI eran, además, competidores directos?

2. Fundamentos legales y jurídicos

Resulta claro, a despecho de lo que se concluye en el fallo *sub judice*, que desde el punto de vista material, jurídico y legal las conductas desplegadas por las accionadas son de carácter prohibido, pues tanto la Constitución Política como la Ley 256 de 1996 así lo contemplan. En el primer caso, el **artículo 333 de la Constitución Política** establece que la libre competencia económica es un derecho de todos que supone responsabilidades y que el Estado, por mandato de la ley, tiene a su cargo impedir que se obstruya o se restrinja la libertad económica, evitando cualquier abuso que personas o empresas hagan o pretendan hacer en ejercicio de su posición dominante en el mercado nacional.

En cuanto a la ley, las conductas descritas ampliamente en la demanda y en otras actuaciones procesales se hallan perfectamente tipificadas en la **Ley 256 de 1996, especialmente en sus artículos 7 y 17**. El articulo 7 contempla una serie de conductas consideradas genéricas, es decir, que subsisten como causales lesivas a las reglas de competencia, aunque no se encuentren establecidas de forma especifica en otras disposiciones de la misma ley. En lo que concierne a lo dispuesto en el articulo 17, este consagra la causal denominada *"inducción a la ruptura contractual"*, que a su vez aparece compuesta por varios elementos fácticos normativos.

De manera aun mas precisa se observa que la inducción a la ruptura contractual, de acuerdo con pronunciamientos judiciales[1] que la misma entidad falladora ha venido sosteniendo de antaño y a los que nos podemos referir como precedentes del presente caso, se ha entendido que consta de **tres modalidades factuales,** a saber:

a. La **inducción a infringir los deberes contractuales** básicos.
b. La **inducción a la terminación regular de un contrato**, y
c. El **aprovechamiento en beneficio propio o de un tercero, de una infracción contractual ajena**.

Por su parte y sobre la misma materia, la jurisprudencia nacional[2] ha establecido que al instituto de la inducción a la ruptura contractual concurren varios **componentes axiológicos,** que tienen como función precisar bajo cuales circunstancias especificas, ademas de la existencia de la inducción en cualquiera de las modalidades antes mencionadas, se puede considerar que se está ante un acto de competencia de desleal. Dichos componentes serían los siguientes:

I. **Que el acto sea realizado en el mercado**.

II. **Que sea de índole concurrencial**, es decir, que tenga el propósito de mantener o incrementar la participación en el mercado de quien lo realiza o de un tercero.

III. **Que corresponda a una de las conductas expresamente prohibidas por el ordenamiento**, sea general o específica.

---

[1] Sentencia 1024 del 31 de octubre de 2011

[2] Sentencia SC4174-2021 de la Corte Suprema de Justicia

3. Articulación entre conceptos legales y jurídicos y los hechos planteados en la demanda

Según estos conceptos, resulta cierto y verificable probatoriamente en el presente caso, como mas adelante se precisa, que las conductas desplegadas por ambas demandadas corresponden con exactitud a los hechos que se encuentran establecidos como requisito fáctico de las causales contempladas en los artículos 7 y 17 de la ley 256 de 1996. Y estas conductas consisten específicamente en que dichas demandadas incurrieron en la inducción a la ruptura contractual a cargo de COMFANDI, a traves de su entidad controlada EPS SOS SA, en relación con el contrato de servicios de salud especializada en enfermedades crónicas que celebrado entre IPS KARDIUP SAS y EPS SOS desde el 1o de noviembre de 2018, aprovechándose en beneficio propio de la terminación unilateral de dicho contrato por una eventual infracción contractual atribuida a KARDIUP por la entidad contratante.

Además, en cuanto a los **componentes axiológicos** antes mencionados, las conductas desplegadas por las demandadas tuvieron el propósito evidente de expandir a favor de COMFANDI, a traves de su controlada EPS SOS SA, su participación dentro del mercado especifico de salud de enfermedades crónicas a cargo de esta ultima entidad. Esto se generó, como se ha demostrado ampliamente dentro del presente proceso judicial mediante prueba documental y testimonial, por cuanto la demandada COMFANDI había perdido parte significativa de ese mercado por cuenta del contrato celebrado entre EPS SOS SA y KARDIUP SAS el 1o de noviembre de 2018, al tener que trasladar a esta ultima entidad desde esa época un gran porcentaje de la población de pacientes y usuarios que venía atendiendo. Esta situación, obviamente, le produjo merma significativa por varios meses de los ingresos asociados al servicio de salud que les venía prestando.

En convergencia con lo anterior, con el fin de asegurarse de que IPS KARDIUP perdiese de forma permanente su concurrencia en dicho mercado a favor de su controlante COMFANDI, la demandada EPS SOS dilató injustificadamente y en violacion de compromisos pactados contractualmente varios pagos pendientes de facturas de servicios de meses anteriores a la ruptura del contrato. Esto se hizo con el propósito de asfixiar económicamente a la entidad demandante, obteniendo de paso su desmantelamiento como unidad económica comercial y su practica desaparición en el mercado especifico, en el que actuaba como competidor directo de COMFANDI.

En cuanto a los hechos realizados por las demandadas que configuran las conductas lesivas a la competencia y que aparecen plenamente demostrados en múltiples medios de prueba dentro del presente proceso judicial, se puede establecer que fueron básicamente los siguientes:

a. Existencia del **contrato de prestación de servicios de salud celebrado entre KARDIUP SAS y EPS SOS** el 24 de octubre de 2018 y vigente a partir del 1o de noviembre de ese mismo año. Dicho contrato tenía una vigencia inicial de 36 meses, bajo la modalidad de pago global prospectivo, con una tarifa única por nota técnica permanente para toda la vigencia del contrato, para ejecutarse en una población global de afiliados a EPS SOS SA destinada a ir en crecimiento por el termino de duración de la relación contractual.

b. Existencia de una **comunicación escrita remitida por EPS SOS a KARDIUP el día 6 de julio de 2018**, denominada como "carta de intención". En esta se anunciaban todas las condiciones y obligaciones principales que tendría el contrato a firmarse posteriormente, incluyendo tarifa, vigencia, población a asignar por municipios y modalidad de pago, ademas del periodo durante el cual se extenderían los servicios prestados por KARDIUP.

c. Existencia de **cuatro (4) otrosíes de fechas 1 de diciembre de 2018, 15 de enero de 2019, 1 de marzo de 2019 y 1 de abril de 2019, en los cuales se entregaba población para Cali, Tulua, Buga, Palmira, Zarzal, Cerrito, Yumbo, Vijes y Yotoco**, según lo acordado por las partes contratantes tanto en el contrato de prestación de servicios de salud del 1o de noviembre de 2018 como en la citada carta de intención. Estos otrosíes, considerados como modificaciones validas del contrato original, incluso contemplaban vigencias diferentes de dicho contrato, por lo que a partir de la firma de cada uno se entendía alargado o prorrogado el plazo de vigencia inicialmente pactado.

d. Existencia de una comunicación escrita de fecha 15 de julio de 2019, que contenía la decisión por parte de EPS SOS sobre la **terminación unilateral de contrato de servicios de salud celebrado con KARDIUP SAS,** por aduciendo como causal principal la supuesta subcontratación que esta ultima habría hecho con la IPS COLCAN para los servicios de laboratorio.

e. Existencia de una **comunicación escrita de fecha 19 de julio de 2019,**

dirigida por KARDIUP SAS a EPS SOS SA, dando respuesta a la carta de terminación unilateral del contrato en el sentido de rechazar la existencia de la causal de terminación del contrato aducida y del procedimiento seguido para hacer efectiva dicha terminación.

f. Existencia de **prorrogas del contrato entre EPS SOS y KARDIUP a partir del 1o de septiembre hasta 30 de noviembre de 2019**, en las mismas condiciones contractuales originales.

g. Existencia de **actas de visitas técnicas** realizadas a las sedes de KARDIUP por funcionarios de EPS SOS a cargo de la auditoria interna del contrato, en las cuales se evidencia conocimiento pleno que tenía EPS SOS SA desde el inicio de la relación contractual del convenio o alianza estratégica existente entre KARDIUP SAS y COLCAN, sin que se reportara esta circunstancia como violacion de normas contractuales.

h. Existencia de **contrato de transacción** celebrado entre EPS SOS y KARDIUP SAS para dar por terminado contrato de servicios de salud suscrito el día 24 de octubre de 2018 y vigente desde el 1o de noviembre de ese mismo año, en el cual se incluye como contraprestación por parte de EPS SOS el pago de las facturas correspondientes a meses anteriores y adeudas KARDIUP.

i. Existencia de **pagos de facturas correspondientes a los últimos tres meses de servicios** prestados por KARDIUP SAS a EPS SOS, que solo se hicieron efectivos entre **enero y abril de 2020**, a instancias del contrato de transacción mencionado.

j. Existencia de una **situación de control y de mayorías accionarias por parte de COMFANDI sobre EPS SOS**.

k. Existencia de **contrato de servicios celebrado entre EPS SOS e IPS COMFANDI** para cubrir la población que tenia KARDIUP SAS en Santiago de Cali, a partir del 1o de diciembre de 2019.

l. Existencia de **carta de intención dirigida por EPS SOS a IPS COMFANDI el día 18 de agosto de 2018**, comprometiéndose en la firma del contrato que después se firmó entre las mismas entidades.

m. Existencia del **nombramiento y posesión como gerente y representante legal del señor JAIRO HERNANDO VARGAS** en mayo de

2019, quien venia desempeñandose como funcionario de COMFANDI y quien habría tenido por varios años amplios, continuos y alternados vínculos laborales con ambas entidades demandadas.

n. Existencia de varios **contratos de arrendamientos de locales comerciales** a cargo de KARDIUP SAS, que corresponden a las diversas sedes abiertas en Cali y otros municipios del Valle del Cauca para la ejecución del contrato suscrito con EPS SOS SA, y de sus respectivas terminaciones anticipadas con los arrendadores.

o. Existencia de **contratos laborales de funcionarios y empleados de KARDIUP y su terminación por conciliación** en diversas fechas ubicadas en periodo comprendido entre diciembre de 2019 y junio de 2020.

Estos hechos, apreciados en su conjunto y cuya existencia no tuvo mayor controversia procesal, demuestran fehacientemente que las conductas lesivas de la competencia realizadas por las entidades demandadas efectivamente ocurrieron y que estas se enmarcan dentro de los postulados fácticos establecidos en la ley que regula la materia, especialmente en el articulo 17 de la Ley 256 de 1996.

En otras palabras, dichas conductas, concatenadas y articuladas entre sí, tuvieron el efecto de afectar el mercado de salud especializada en el que venía participando KARDIUP SAS. A través de ellas se demuestra que las demandadas incurrieron, no solo en la inducción a la terminación regular del contrato celebrado entre EPS SOS SA y KARDIUP SAS, sino también en el aprovechamiento en beneficio propio -en este caso de COMFANDI- de una infracción contractual ajena plenamente conocida. Todo ello, encaminado a lograr que COMFANDI expandiera su participación en el mercado de salud de enfermedades crónicas en el mismo porcentaje que había perdido por cuenta del contrato antes citado.

Igualmente, estos mismos hechos demuestran la intención de las demandadas de eliminar a un competidor, en este caso KARDIUP SAS frente a COMFANDI, a través de su controlada EPS SOS SA, tal como lo expresa el **articulo 17 de la Ley 256 de 1996**. En este punto, resulta necesario señalar que esta norma, en su segundo inciso, presenta los siguientes elementos fácticos configurantes:

- Se produce infracción a la competencia bajo dos conductas alternativas, que serian: a) **cuando se induce a la terminación regular de un contrato**, o

b) **cuando exista aprovechamiento en beneficio propio o de un tercero de una infracción contractual ajena**.

- Ambas conductas deben ser **conocidas** por el infractor.

- Ambas conductas o una sola de ellas, la inducción o el aprovechamiento, para ser consideradas como infracciones a la competencia desleal, a su vez deben **tener como objeto la expansión de un sector industrial o empresarial o estar acompañada de circunstancias tales como el engaño, la intención de eliminar a un competidor del mercado u otros análogos**.

Así las cosas, estos hechos sobre los que se insiste que aparecen plenamente demostrados en este proceso, indicarían la existencia concurrente de las conductas lesivas de la competencia que venimos mencionando en el sentido de que COMFANDI, a través de su controlada EPS SOS y sobre la que ejerce pleno control sobre todas sus decisiones administrativas, contractuales y financieras, aprovechando esta circunstancia, pudo inducir a su controlada a declarar terminado el contrato de servicios que tenía celebrado con KARDIUP SAS con el claro propósito de tomar para sí la población de usuarios que venía atendiendo su competidora por cuenta del citado contrato.

Igualmente, si se aceptara en gracia de discusión que la terminación del contrato existente entre EPS SOS y KARDIUP SAS se hubiese hecho de forma adecuada y bajo los términos contractuales pactados, tal como se desprende de la tesis argüida por el *a quo*, entonces tenemos que la conducta anticompetitiva, según los lineamientos del articulo 17 ibídem, sería la de **aprovecharse de una infracción contractual ajena**, cometida por KARDIUP SAS, en favor de COMFANDI. Bajo esta circunstancia, los componentes fácticos de la disposición legal precitada se cumplirían sin que sea necesario entrar en la discusión de si dicha terminación fue o no de carácter irregular, o si fue inducida o no por la demandada COMFANDI.

La reflexión a que se llega por cuenta de esta tesitura es que si el fallador de instancia, al considerar que no se aprecia demostración o prueba de la existencia de la inducción a la terminación regular del contrato de KARDIUP SAS, entonces **debió entrar a examinar si la segunda conducta alternativa, es decir, la de aprovechamiento de una infracción contractual ajena, aparecía demostrada o no bajo los mismos hechos expuestos y probados en este proceso**. Al no hacerlo, como se evidencia en el fallo impugnado, cercenó la posibilidad de ampliar el universo probatorio de su análisis y afectó el

derecho que tenía la demandante a que la acción impetrada tuviese la acogida que se esperaba frente a los hechos demostrados a través del despliegue de pruebas debidamente incorporadas al plenario.

Este reproche parte del hecho, incluso alegado insistentemente por las demandadas y acogido por el *a quo*, de que KARDIUP pudo haber infringido el contrato mediante la subrogación derivada de su convenio con la IPS COLCAN y, por ende, hacerse merecedor de la terminación del mismo. Siendo así, esta eventualidad representaría una **infracción contractual ajena**, que habría sido claramente **conocida** por EPS SOS, y por COMFANDI como entidad controlante, y **aprovechada** en beneficio de esta ultima, como lo describe el tipo legal examinado.

Se puede agregar que el contrato existente entre EPS SOS y KARDIUP SAS pudo haberse terminado por causas regulares y que este aspecto no hace parte de la discusión jurídica del tipo de proceso que aquí se adelanta, lo cual es cierto. Pero, dado el carácter contractual que tiene la causal invocada en la demanda y al despliegue probatorio que inevitablemente debía girar en torno al contrato mencionado, este énfasis no implica un desenfoque del demandante. Si la causal legal refiere la posibilidad de una terminación regular del contrato, establecer si dicha terminación regular existió o no debía ser parte esencial del debate procesal.

Lo mismo sucede cuando se pretende establecer si lo que existió fue la existencia de una infracción contractual cometida por KARDIUP SAS, que desembocó en la terminación unilateral del contrato por parte de EPS SOS. Establecida la existencia de dicha infracción, como parece ser la tesis esgrimida por el *a quo*, entonces el examen probatorio debía enfocarse en si esta era de conocimiento de las demandadas y si hubo aprovechamiento de la misma para obtener el favorecimiento predicado por la norma legal. Esta falencia luce evidente en el fallo impugnado.

Ahora, respecto de la **existencia de la infracción contractual**, abundan argumentos probatorios a cargo de las demandadas, que se enfocaron especialmente en el clausulado contractual aducido en la carta de terminación unilateral del contrato, en donde se asegura que las cláusulas en las que se determinó la prohibición de una eventual subcontratación fueron violadas o desconocidas por KARDIUP. Si se admite esta circunstancia, en gracia de discusión, no es menos abundante el caudal probatorio que existe en relación con el evidente aprovechamiento que de esa infracción contractual ajena hizo la demandada COMFANDI, quien, usando como instrumento a su controlada EPS

SOS, obtuvo que esta, una vez terminado el contrato con KARDIUP por esa causa, le adjudicara toda la población que en su momento esta venía atendiendo en la ciudad de Cali. Todo esto aparece objetivamente probado, principalmente a través del contrato de servicios de salud celebrado entre EPS SOS y COMFANDI, vigente a partir de 1o de diciembre de 2019, y en la carta de intención que desde el mes de agosto de 2019 remitió EPS SOS al juez de tutela para demostrar la continuidad en el servicio que venía prestando la demandante.

En cuanto al **elemento del aprovechamiento** que contiene la norma analizada, resulta necesario mencionar que, a diferencia de lo que parece interpretar la operadora judicial en el fallo impugnado, el **articulo 17 de la Ley 256 de 1996** no prevé ninguna condición en cuanto al tiempo o la forma como este se deba producir. Aunque en el caso que nos ocupa el reemplazo de COMFANDI en el mercado de salud se produjo a partir del 1o de diciembre de 2019, exactamente al día siguiente de vencerse la prorroga pactada entre EPS SOS y KARDIUP SAS, a nuestro entender resulta irrelevante discutir si ese relevo se produjo de forma mediata o inmediata, porque es evidente que efectivamente se produjo. Al respecto, vale señalar que la intención de contratar a COMFANDI en reemplazo de KARDIUP era una decisión tomada en fecha en la que ni siquiera se había agotado el plazo inicial de terminación fijado por EPS SOS al contrato de la segunda, tal como lo demuestra la carta de intención antes mencionada, siendo este tipo de documento un modo contractual recurrente y efectivo al momento de vincular prestadores de salud por parte de EPS SOS.

En lo relativo al **factor de conocimiento de la terminación del contrato y de su aprovechamiento en beneficio propio o de terceros**, las demandadas conocían sobradamente ambas circunstancias. En el proceso aparecen pruebas indubitadas, tanto documentales como testimoniales, por ejemplo, de la existencia de tramites judiciales de tutela en las que ambas participaron y en los que la terminación del contrato fue ampliamente mencionado. También existe demostración de la injerencia que ambas tenían frente a las decisiones de vinculación contractual y terminación de contratos en EPS SOS, ademas de la forma como estos aspectos contractuales se discutían ampliamente en sus órganos directivos internos, dada su relación simbiótica de controlante y controlada.

Por otro lado, el fallador de instancia incurre en error al considerar que en el articulo 17 de la Ley 256 de 1996 las conductas infractoras de la competencia solo son las que en ella casuísticamente se mencionan. Al considerarlo así, desecha la posibilidad de que existan **hechos análogos** a los allí descritos mediante los cuales se pueda también configurar la conducta lesiva. Es decir, que

la expansión de un sector industrial o comercial es solo uno de los elementos fácticos alternos que plantea la disposición legal que se analiza, de forma que otros similares o análogos pueden aparecer demostrados en el proceso y es deber del juez examinarlos en detalle. Este parámetro obliga al operador judicial, entonces, a considerar no solo lo factual que registra expresamente la norma sino todo **hecho de carácter análogo que aparezca indicado probatoriamente**, tal como esa misma disposición legal lo contempla.

En consonancia con lo anterior, es claro que en el expediente existe la **prueba de un hecho análogo** que se ajusta a los términos de la norma legal citada. Lo podemos sintetizar así: La demanda COMFANDI se aprovechó de una infracción contractual de KARDIUP, que conocía ampliamente, para recuperar y asegurar a su favor la cuota de mercado de servicios de salud de enfermedades crónicas que había perdido previamente a manos de KARDIUP a través del contrato que este celebró con EPS SOS. Esto le significaba tener de forma gradual y creciente menos usuarios e ingresos económicos a partir del 1o de noviembre de 2018 hasta, por lo menos, el mes de noviembre de 2021, tal como estaba pactado en el contrato en comento.

Este hecho, en contravía de lo afirmado en la sentencia impugnada, se encuentra ampliamente demostrado tanto por la existencia del contrato celebrado entre COMFANDI y EPS SOS, así como también en la entrega definitiva que se hizo de la población que estaba a cargo de KARDIUP a la misma COMFANDI, todo lo cual consta en la prueba documental aportada en el proceso y refrendada en varios testimonios recaudados.

4. Análisis sobre el examen probatorio realizado en el fallo impugnado. Prueba indiciaria.

En el fallo impugnado se hace mención al carácter objetivo que deben tener los hechos que configuran la competencia desleal, lo cual es cierto. Sin embargo, cuando en el proveído se emprende el análisis del acervo probativo se aprecia que la objetividad predicada se entiende solo como la presencia en el expediente de una prueba directa que lleve convicción al fallador acerca de la existencia del factor intencional que tendrían las demandadas para la inducción a la terminación del contrato, es decir, demostración unívoca de la manifestación expresa de que COMFANDI indujo a su codemandada ESPS SOS a terminar el contrato que tenía suscrito con KARDIUP SAS.

En relación con este particular la Corte[3] ha expresado lo siguiente en cuanto a los procesos de competencia desleal:

> *"En lo singular, despuntan en los casos en que se desconocen las normas que regulan su solicitud, incorporación, admisión, decreto, práctica, asunción y valoración. A la par, los preceptos que involucran su contradicción y conducencia. Tienen lugar cuando, al decir de la Corte:*
>
> *[Se] exige, para demostrar un acto o un hecho, una prueba especial que la ley no reclama; o cuando viendo la prueba en su exacta dimensión no le atribuye a ella el mérito que la ley le asigna para demostrarlo; o, en fin, cuando se lo niega por estimar que el medio fue ilegalmente producido cuando así no sucedió».*
>
> *En lo relacionado con la valoración de las pruebas en conjunto, se presentan en los casos en que se contrarían los dictados de la lógica, de la ciencia y de la experiencia, que son las reglas de la sana crítica (CPC, art. 187 y CGP, art. 76).*
>
> *Ello precisa un claro objetivo. Lograr, dice la Sala, «plena coherencia (…), de modo que se tengan en cuenta las necesarias conexiones, concordancias o discrepancias entre esos diversos componentes; y (…) se tenga "por derrotero únicamente las reglas de la lógica, de la ciencia y de la experiencia (…) aplicables a un determinado caso"».*
>
> *Lo dicho, mediante la conjugación de los métodos analítico y sintético. El primero, consistente en el estudio de lo constatado de cada prueba. El otro, traducido en el análisis integral y sistemático del todo con la parte. De esa manera, el muestrario probatorio permite sacar las inferencias respectivas."*

La búsqueda de este tipo de prueba dentro del conjunto probatorio, por supuesto que resulta infructuoso por varios factores. En primer lugar, se tiene que las partes procesales son todas personas jurídicas, cuyo actuar solo se refleja en los diversas actuaciones que desplieguen material y jurídicamente sus representantes, órganos directivos y/o personas con vinculo jurídico o legal. Esto conlleva a que, salvo que se obtenga una confesión directa y plena de cualquiera

[3] Sentencia SC3781-2021 de 01 de septiembre de 2021

de ellos, la persona jurídica como tal no puede vincularse a una conducta de carácter tan subjetivo como la de inducir a otro.

En segundo lugar, el termino *"inducir"*, forma verbal del concepto *"inducción"*, se entiende en su acepción natural como la acción de *"mover a alguien a algo o darle motivo para ello"*[4]. Bajo esta definición, es claro que esta acción contiene un elemento sicológico o de reserva mental que hace referencia a la intención con que alguien actúa frente a otro para moverlo o llevarlo a que haga algo en lo cual tiene interés o propósito. Por tanto, demostrar la acción de inducir requeriría demostrar tanto el acto volitivo de inducir propiamente dicho, así como el resultado que se materializa como efecto directo de dicho acto. Como demostrar el aspecto sicológico resultaría una prueba imposible bajo las reglas de la experiencia, mas aun en una persona jurídica, lo que corresponde entonces es probar la inducción con la observación comprobada del acto material en si mismo (comunicaciones, mensajes, conversaciones, etc.) o con el resultado que se quiere inducir al sujeto pasivo de la acción, o la combinación de ambos aspectos.

En tercer lugar, el termino inducción desde el punto de vista de la norma legal que venimos analizando contiene varios escenarios fácticos que ya examinamos anteriormente. Por ende, probar la inducción dentro de este tipo de procesos no tiene relación tanto con la acción verbal que aparece en su significado natural, sino con su definición legal, que en este caso se enmarca en las conductas que aparecen consignadas en el articulo 17 de la Ley 256 de 1996.

Por ende, es una clara equivocación en materia de análisis probatorio la que se aprecia en el fallo impugnado cuando se afirma que la inducción a la ruptura contractual no fue demostrada en ninguna forma, incluso mencionando que en ninguno de los testimonios recaudados se dijo expresamente que la demandada COMFANDI hubiese inducido a EPS SOS con el propósito señalado en la norma. Esta posición del despacho *a quo* riñe con conceptos jurídicos emitidos sobre este tópico por la misma Superintendencia de Industria y Comercio[5], cuando afirma lo siguiente:

> "*Sobre esto ultimo, es importante tener en cuenta que en materia de competencia desleal* ***cuando se reprochan conductas que tengan "por objeto" no se hace referencia a la intención del agente presuntamente desleal de cometer el comportamiento, sino a la***

[4] Diccionario de la Real Academia Española de la Lengua

[5] Sentencia No. 4407- 29 de abril de 2021

capacidad o potencialidad de un comportamiento de generar el efecto negativo que la ley pretende evitar."

Dadas las dificultades probatorias ya mencionadas sobre el acto de inducir, la necesidad de establecer los hechos violatorios de la competencia de forma objetiva y el enfoque demostrativo que debe hacerse sobre la capacidad o potencialidad del agente infractor de realizar la conducta prohibida por la ley, entonces la parte demandante expuso oportunamente, ademas de todos los hechos objetivamente demostrados que relacionamos con anterioridad en este mismo escrito, la presencia en el expediente de la **demostración de los actos inductivos a traves de la técnica de la prueba de indicios**.

Sobre este tipo probatorio dice al respecto el tratadista Parra Quijano[6]:

"Cuando el juez recepciona un testimonio, el testigo le cuenta, por ejemplo, que ha observado que B ha cometido varios robos y cuenta cómo han sido. En este caso la narración del testigo le representa al juez los hechos que configuraron el robo. El juez, una vez que el hecho está narrado aplica las reglas de la experiencia a fin de saber si ello pudo ocurrir o no; en cambio, cuando nos referimos a la prueba indiciaria, los hechos probados no representan el hecho a probar, sino que el juez aplicando las reglas de la experiencia induce-deduce el hecho a probar"

Al decir de la Corte[7] sobre la prueba de indicios se extrae:

"Precisa la Corte que el indicio es un medio de prueba crítico, lógico e indirecto, estructurado por el juzgador a partir de encontrar acreditado por otros medios autorizados por la ley, un hecho del cual razonadamente, y según las reglas de la experiencia, se infiera la existencia de otro hasta ahora desconocido que interesa al objeto del proceso, el cual puede recaer sobre los hechos, o sobre su agente, o sobre la manera como se realizaron, cuya importancia deviene de su conexión con otros acaecimientos fácticos que, estando debidamente demostrados y dentro de determinadas circunstancias, permite establecer, de modo más o menos probable, la realidad de lo acontecido"

---

[6] JAIRO PARRA QUIJANO, Apuntes sobe la prueba indiciaria. Documento PDF extraído de internet https://www.sic.gov.co/sites/default/files/files/Apuntes%20de%20la%20prueba%20indiciaria.pdf

[7] CORTE SUPREMA DE JUSTICIA - Sentencia de 26 de octubre de 2000, radicado 15.610

Teniendo en mente estos conceptos, resulta claro que la referencia que hizo la parte demandante a la prueba indiciaria, de forma detallada y puntual, mereció en el fallo poca o escasa consideración y, en lo que se expresó, se refleja un deficiente, por no decir inexistente, análisis lógico critico de la inferencia entre hechos indicadores y el hecho indicado que se pretendía demostrar. Esta falla grave en el análisis de este tipo de prueba surge como consecuencia, seguramente, del desconocimiento o la inaplicación por parte del operador judicial de los postulados contenidos en los **artículos 240 y 242 del CGP**[8], sobre la naturaleza y la técnica demostrativa a tener en cuenta en cuanto a los hechos que se pretenden demostrar bajo la **prueba de indicios**.[9]

Se echa de menos en la providencia *sub judice*, por tanto, la presencia de un examen serio, ponderado y preciso sobre si existía o no relación de concomitancia, causalidad o conexión entre los hechos indicadores reseñados y hecho indicado, examen que se hace indispensable para establecer dentro del mismo fallo las razones de fondo, de hecho y de derecho, por las cuales el fallador decidió que la prueba indiciaria no probaba la existencia de la causal de competencia desleal. Este aspecto se opone al mandamiento establecido para el juez en el **articulo 280 del CGP**, cuando le demanda que en sus providencias incluya un examen critico de las pruebas con explicación razonada de las conclusiones que realice sobre ellas, lo cual no se cumple a cabalidad en este caso.

En el expediente del presente proceso aparecen plenamente demostrados varios hechos indicadores, que se citaron con detalle tanto en los alegatos finales como en los reparos concretos presentados oportunamente, los cuales se vuelven a citar en este análisis de forma precisa, estableciendo tanto el hecho indicador como el hecho indicado, así como el tipo de indicio de que se trata, por considerarse que todos ellos tienen correspondencia probatoria con las conductas establecidas en la norma legal y atribuidas a las demandadas EPS SOS y COMFANDI:

---

[8] Según el articulo 242 del CGP, el juez deberá observar los indicios en conjunto. Debe considerar su gravedad, concordancia y convergencia, y su relación con las demás pruebas que obran en el proceso.

[9] "Debemos entender por indicio, un hecho conocido del cual se induce otro hecho desconocido, mediante un argumento probatorio que de aquel se obtiene, en virtud de una operación logico-critica basada en normas generales de la experiencia o en principios científicos o técnicos" - TEORIA GENERAL DE LA PRUEBA JUDICIAL - TOMO II - Hernando Devis Echandía, pagina 587

HECHO INDICADOR	TIPO DE INDICIO
Existencia de la **situación de control** de parte de COMFANDI sobre EPS SOS.	Aunque por sí misma no constituye conducta de competencia desleal, sus existencia demostrada con documentos como certificado mercantil y actas de junta directiva de EPS SOS, así como en declaración de parte de COMFANDI y EPS SOS, como un **indicio de oportunidad.** Esto, por la facilidad que implicaría para COMFANDIcontrolar las decisiones del representante legal JAIRO HERNANDO VARGAS, empleado de esa entidad por muchos años, con claros vínculos de dependencia con ella. Igualmente, por las mayorías accionarias sobre EPS SOS, que le da mayorías decisorias con las cuales se decidió aprobar la terminación el contrato con KARDIUP como contratar con COMFANDI.
Existencia de **negociación por parte de COMFANDI con la empresa LEAP** para tener la administración y control de EPS SOS, a través de la cual estas dos entidades entraron en un **cogobierno de EPS SOS**.	Al deshacerse la negociación COMFANDI recuperó el control de EPS SOS, como aparece en acta de junta directiva en la cual se nombró nuevo gerente y nuevos integrantes de la JuntaDirectiva. La nueva administración derivada de este negocio le quitó a COMFANDI el contrato de salud en favor de KARDIUP, lo que generó perdida de usuarios, de ingresos económicos y de cuota del mercado de salud a cargo de EPSSOS. Cuando recuperó el gobierno corporativode EPS SOS entonces recuperó también los usuarios y la cuota del mercado que había perdido mediante las terminación del contrato con KARDIUP. Es un **indicio de aprovechamiento en beneficio propio, de conveniencia y de oportunidad**
Existencia de una **decisión de dar por terminado el contrato celebrado con KARDIUP SAS bajo una causal discutible**, sobre una alianza estratégica con COLCAN calificada unilateralmente como subcontratacion.	Este punto de la alianza estratégica fue **conocido previamente por EPS SOS antes de la celebración del contrato y después de que este empezó a ejecutarse**. Por tanto, indica un indicio de falsa o simulada motivación en la terminación del contrato con KARDIUP
Los **funcionarios técnicos a cargo de la auditoria del contrato nunca reportaron ningún inconveniente ni causal para su terminación** por la alianza con Colcan, lo cual solo se convirtió en causal de terminación del contrato cuando COMFANDI retomó el control de gobierno de EPS SOS	**Indicio de conveniencia y oportunidad en la inducción de la terminación y en el aprovechamiento de la infracción contractual ajena**

La terminación del contrato por parte de EPS SOS supuestamente se fundamentó en un **informe de auditoria externa** según el cual se presentaban inconvenientes con la nota técnica y otro aspectos	Se estableció por declaración testimonial que **en dicho informe no se mencionaba ningún tema de KARDIUP** relacionado con subcontratación y ademas fue posterior al aviso de terminación del contrato. En el informe rendido ante órgano directivo de EPS SOS se menciona esta misma auditoria y tampoco se alude el tema de subcontratación. Es un **indicio de falsa o contradictoria motivación de la terminación del contrato con KARDIUP**.
La decisión de la junta directiva de EPS SOS de dar por terminado el contrato con KARDIUP SAS y de aprobar la contratación de COMFANDI en reemplazo de la anterior **se votó unánimemente por todos los miembros de dicha junta, incluyendo a los que representaban mayoritariamente a la misma COMFANDI**, a pesar de existir **prohibición estatutaria** para hacerlo.	Es **indicio de utilización de las mayorías estatutarias para favorecer a COMFANDI** en detrimento de KARDIUP.
La terminación del contrato de KARDIUP fue conocido ampliamente por COMFANDI por su condición de controlante de EPS SOS. Después, IPS COMFANDI, de propiedad de COMFANDI, aparece como beneficiaria de un contrato a través del cual atendería toda la población que venia atendiendo KARDIUP en Cali.	Es un **indicio de que la infracción contractual atribuida a KARDIUP era una situación conocida por ambas demandadas**.

EPS SOS expidió una **carta de intención para contratar a COMFANDI en fecha anterior al plazo inicial de terminación**.	Esto es un **indicio de inducción a la terminación regular del contrato o, incluso, de aprovechamiento evidente de una supuesta o real infracción contractual ajena, en este caso de la demandante KARDIUP,** en favor de COMFANDI a través de su entidad controlada.
El contrato con KARDIUP, pese a la gravedad de la infracción contractual señalada por EPS SOS, fue **prorrogado por tres meses en las mismas condiciones en que venía ejecutándose**, incluyendo la alianza con Colcan.	Esto indica que la causal no generaba ningún riesgo en la prestación del servicio ni de sanción alguna para EPS SOS. **Indicio de falsa motivación de la terminación del contrato**.

Los **anuncios que se dieron dentro de las acciones de tutela** impetradas por los usuarios por parte de EPS SOS en relación con la contratación para la prestación de servicios por COMFANDI en reemplazo de KARDIUP.	Es un **indicio de la intención de recuperar la cuota de mercado** por COMFANDI que se había entregado a KARDIUP.
La demora en los pagos de facturas adeudadas desde el mes de agosto de 2019, a pesar de la obligación contractual y de la trayectoria de pago a 30 dias.	Esto indica la **intención de afectar económicamente a KARDIUP** para obtener suaceptación de la terminación del contrato a través de la transacción y de propiciar su salida del mercado de salud a cargo de EPS SOS para que COMFANDI pudiera recuperar su cuota de mercado.

De acuerdo con lo anterior, son abundantes y contundentes los hechos plenamente demostrados en el proceso que indicarían que las codemandadas EPS SOS y COMFANDI incurrieron en algunas de las conductas fácticas alternativas reguladas en el articulo 17 de la Ley 25 de 1996, no solo en su núcleo principal, sino también en los aspectos complementarios y condicionantes que dicha norma establece. En ese orden de ideas, las afirmaciones que se hace por el *a quo* en el sentido de no encontrar demostrados tales conductas va en contra de la evidencia probatoria y reflejan el precario e insuficiente análisis probatorio realizado, en especial de la prueba indiciaria, al que hemos hecho referencia.

Según la doctrina[10] es indispensable que cada hecho indicador aparezca plenamente probado, de forma tal que no exista duda sobre su existencia. No es necesario que el hecho indicador aparezca probado por un único medio; puede resultar su prueba de un conjunto diverso (testimonios, inspecciones, dictámenes, documentos y otros indicios). También es posible que de un medio de prueba cualquiera pueden resultar plenamente probados varios indicios. En todo caso, para la validez de la prueba de indicios el juez debe tener en cuenta los siguientes requisitos: a) que las pruebas del hecho indicador o indiciario hayan sido decretadas, practicadas o aportadas legalmente; b) que no se haya utilizado prueba ilícita o prohibida por la ley para demostrar el hecho indicado; c) que no exista nulidad del proceso que vicie la prueba del indicio; d) que la ley no prohiba investigar el hecho indicador o el indicado.

A estos conceptos, que se cumplen a cabalidad en este proceso, resulta oportuno sumarles los siguientes, surgidos de la jurisprudencia nacional[11]:

---

[10] Devis Echandia, obra antes citada, paginas 620-622

[11] Sentencia No. 4407- 29 de abril de 2021

"En materia de competencia desleal, para efectos de la configuración de las conductas, ***es irrelevante la intención del demandado al ejecutar el comportamiento reprochable.*** *Esto significa que un acto desleal puede tener ocurrencia al margen de si el demandado quería o no generar el efecto perjudicial que la ley pretende evitar.*

En ese orden de ideas, nótese que ***la ley de competencia desleal habilita la posibilidad de formular la pretensión incluso cuando el acto de competencia desleal no se ha materializado o cuando habiéndose realizado no ha causado daño.*** *En otras palabras, se juzgan bajo las normas de competencia desleal no solo las conductas que se han materializado o que produjeron efectos, sino también aquellas que solamente constituyen una amenaza, esto es, aquellas que no pasan de ser potenciales".*

Los razonamientos anteriores sirven para apuntalar la tesis de que si la parte demandante logra demostrar que las conductas o actos realzados por las demandadas coinciden con plenitud con los supuestos factuales de la norma sancionadora, considerando que se encuentra eximida de probar el aspecto subjetivo involucrado en dicho acontecer, solo queda el camino jurídico procesal para el fallador de declarar que la causal legal existió y que, en consecuencia, las demandadas son responsables de ese actuar frente a la demandante.

De lo anterior se desprende que como la prueba material documental recogida en este proceso demuestra que en verdad existió un **evidente aprovechamiento de la infracción contractual adjudicada a KARDIUP** por parte de la demandada COMFANDI, reflejado en la carta de intención y en el contrato posterior que celebró esta entidad con su controlada EPS SOS, la inferencia lógica que corresponde solo puede ser la de que la conducta lesiva de la competencia efectivamente ocurrió. Más aun, cuando quedó también plenamente demostrado que COMFANDI y KARDIUP son competidores directos dentro del mercado de salud a cargo de EPS SOS[12].

Incluso, si se considera que COMFANDI no tuvo ninguna intención, participación o acción de inducir a EPS SOS a dar por terminado el contrato con KARDIUP SAS por no existir la prueba directa de esa inducción a la que hace referencia el fallo apelado, por el contrario resulta indudable que COMFANDI, a traves de su controlada EPS SOS, se benefició de la ruptura contractual producida

[12] Declaración de parte de representante legal de COMFANDI

por la infracción al contrato cometida por la demandante, lo cual se ha demostrado fehacientemente por cuenta de las piezas probatorias que indican su posterior contratación por su controlada EPS SOS para asumir las funciones y servicios prestados por KARDIUP SAS. Decisión esta que incluso se tomó por EPS SOS violando la norma estatutaria expresa que le impedía a los representantes de COMFANDI en su junta directiva participar en este tipo de decisiones contractuales.

5. **Sobre el daño causado con las conductas de competencia desleal**:

En cuanto al **daño causado** con las conductas lesivas de la competencia desarrolladas por las demandadas a la demandante se ha establecido en este proceso que consistirían principalmente el menoscabo de las facultades o prerrogativas jurídicas que tiene toda persona para tener, usar y disponer de un bien patrimonial o extramatrimonial cuando es causado en forma ilícita por otra persona. Esto se traduce, en este caso particular, en **la exclusión de su participación en un mercado especifico**, que podría calificarse como la **perdida de oportunidad** para KARDIUP de permanecer y crecer dentro de dicho mercado a través de las relaciones contractuales presentes y futuras que así se lo permitían.

Debe anotarse que el mercado de salud, en general, y el especifico enfocado en la atención del llamado nivel III dentro de dicho sistema, es un mercado, no solo altamente controlado por el Estado, sino que ademas **se configura primordialmente a través de los contratos de servicios de salud** que celebran las EPS con las IPS con las que configuran su red de prestadores. Esto significa que solo puede ingresar a ese mercado especifico la IPS que logra ser contratada por la EPS que tiene a su cargo la atención de usuarios con ese tipo de patologías de la población general que le ha sido asignada. Por ende, una vez que dicha vinculación contractual termina, por la causa que sea, la IPS o entidad prestadora del servicio queda automáticamente excluida de ese mercado especifico, perdiendo su cuota de participación y los ingresos derivados de esta cuota.

Dicho lo anterior, se puede inferir que el hecho de la **terminación UNILATERAL e IMPREVISTA** del contrato suscrito entre EPS SOS y KARDIUP, mas allá del conflicto jurídico de carácter contractual que de ese hecho se desprenda, generó para esta ultima un **daño patrimonial** sustentado en la **expectativa objetiva, razonable y probada de permanecer dentro del mercado de salud de enfermedades crónicas de la red de EPS SOS**, por un

periodo mínimo de 36 meses o mas, según su vínculo contractual a la fecha del daño, y de obtener dentro de ese mínimo periodo ganancias o utilidades similares a las obtenidas hasta el momento de las conductas lesivas.

Dicha expectativa, razonable y fundada, surge de la **relación contractual existente entre EPS SOS y KARDIUP**, que además estaba pactada para que la aquí demandante tuviese un crecimiento en el tiempo de su participación en el mercado concurrente a través de los usuarios de EPS SOS que, tanto en los municipios ya asignados como en los que estaban por asignarse, serían atendidos por KARDIUP. Este hecho se puede apreciar no solo en los términos del contrato antes mencionado sino también en el análisis del mercado concurrencial que se hizo en la defensa del juramento estimatorio realizado durante el proceso y corroborado a través del experticio aportado. En ambas piezas procesales se pudo establecer que los márgenes de utilidad para empresas del mismo rango de servicio de la demandante correspondían de forma casi idéntica a los que se pudieran determinar bajo el contenido del contrato celebrado con EPS SOS.

Los hechos principales que acreditan la existencia del daño patrimonial se encuentran en la **prueba documental** aportada con la demanda, en varios de los **testimonios** rendidos, especialmente por la representante legal de KARDIUP y los testigos OSCAR RINCON COVELLI y FELIPE LATORRE, y en el análisis y contenido en el **JURAMENTO ESTIMATORIO**. En dichos documentos aparecen probados todos los gastos, costos e inversiones relevantes que se hicieron por KARDIUP para afrontar la ejecución del contrato de salud suscrito con EPS SOS, a partir del momento en que se estableció la intención de celebrar el contrato respectivo. Estos rubros después se implementaron gradualmente y se ampliaron sus costos, gastos e inversiones a partir de la firma del contrato y de los subsiguientes otrosíes, al conocerse y pactarse la población y los municipios donde se desarrollarían las prestaciones de salud a cargo de KARDIUP.

El concepto de **DAÑO EMERGENTE** surge de la destrucción o deterioro consistente en la disminución del valor económico que sufrió la actividad empresarial desarrollada por KARDIUP a causa de los hechos lesivos. Se refiere en concretos a los pagos, gastos e inversiones realizados directamente por KARDIUP relacionados en la demanda y en el análisis pericial, que salieron de su patrimonio, tanto antes del contrato como durante el desarrollo del mismo. En cuanto al **LUCRO CESANTE** surge de la **perdida de oportunidad de permanecer y crecer dentro del mercado de salud especifico de enfermedades crónicas.** Se ha demostrado a través del mismo juramento estimatorio y de los hechos indicadores contenidos en la carta de intención, en el contrato de servicios de salud y en los sucesivos otrosíes, ademas de la prueba

pericial acopiada.

De esta forma dejamos presentada, en tiempo, la sustentación del recurso de apelación que cursa ante su despacho.

PETICIÓN:

De conformidad con lo anteriormente expuesto, previo el análisis jurídico y probatorio que corresponda, respetuosamente me permito solicitar se sirva REVOCAR en su totalidad la **sentencia de primera instancia del 6 de diciembre de 2022,** expedida por parte de la Delegatura para Asuntos Jurisdiccionales - Grupo Competencia Desleal y Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio, dentro del proceso señalado en la referencia de este escrito.

Atentamente,



VICTOR OSWALDO PEREZ ALVAREZ
C.C 10542517
TP 85932 CSJ

Honorables Magistrados
TRIBUNAL SUPERIOR DE BOGOTÁ.
Sala Civil.
E. S. D.

Expediente: **No. 21-159854**

Referencia: **ACCIÓN DE INFRACCIÓN DE DERECHOS DE PROPIEDAD INDUSTRIAL.**

Demandante: **PABLO ADRIÁN RIOS URIBE.**

Demandado: **PRIMITIVO RESTAURANTE BOLERA BAR S.A.S.**

I. SUSTENTACIÓN DEL RECURSO DE APELACIÓN, EN LO DESFAVORABLE, INTERPUESTO EN CONTRA DE LA SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA, PROFERIDA POR LA SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO EN AUDIENCIA DEL 03 DE OCTUBRE DE 2022.

JORGE E. VERA VARGAS, obrando como apoderado de la sociedad demandada **PRIMITIVO RESTAURANTE BOLERA BAR S.A.S.,** mediante el presente escrito, en tiempo oportuno, me permito sustentar el recurso de apelación interpuesto en contra de la sentencia en referencia, en lo desfavorable.

II. OBJETO DEL RECURSO.

Tiene por objeto el recurso de apelación, el que se revoque, en lo desfavorable para mi poderdante, la decisión contenida en la sentencia de primera instancia, y en su lugar se nieguen las pretensiones de la demanda y se condene en costas y agencias en derecho a la parte actora.

III. FUNDAMENTOS DEL RECURSO DE APELACIÓN.

Respetuosamente me aparto de la decisión del Despacho de primera instancia, contenida en la sentencia proferida en audiencia del pasado 03 de octubre de 2022, por lo reparos que oportunamente he efectuado y los cuales paso a concretar cada uno de ellos:

PRIMERO: Desconocimiento de pruebas. El Despacho de primera instancia, para efectos de proferir su sentencia, desecha las pruebas presentadas por la parte demandada al afirmar sin razón jurídica que mi poderdante ***probó*** que el término PRIMITIVO se encontraba registrado a nombre de varias personas para distinguir productos de la clase 30 y 31, mientras que las marcas registradas por la parte actora se encuentran registradas para distinguir productos de la clase 29 y servicios de las clases 35 y 43. Es decir que ***no se probó*** que PRIMITIVO fuera de uso común, para distinguir productos de la clase 29 y servicios de las clases 35 y 43.

Desconoció el juez de primera instancia que la parte demandada no solamente aportó prueba de la existencia de varias marcas registradas PRIMITIVO para distinguir productos de las clases 30 (alimentos), 31 (alimentos) sino que aportó varios certificados de Cámara de Comercio que prueban la existencia de múltiples establecimientos de comercio cuya actividad principal es el de prestar servicios de restaurante (servicios protegidos por la clase 43)

Se probó la existencia de los siguientes establecimientos de comercio dedicados al comercio de alimentos:

1. Establecimiento de comercio **PRIMITIVOS.**
   Domicilio social: Bogotá D.C.
   Matrícula mercantil No. 3268534
   Actividad económica: 1084. Elaboración de comidas y platos preparados.

1089. Elaboración de otros productos alimenticios.

2. Establecimiento de comercio **PRIMITIVOS AHUMADOS.**
   Domicilio social: Bucaramanga.
   Matrícula mercantil No. 467978
   Actividad económica: 5611. Expendio a la mesa de comidas preparadas.

3. Sociedad **DOSSEL PRIMITIVO RESTAURANTE PUB S.A.S**
   Domicilio social: Leticia – Amazonas.
   N.I.T. No. 901396603-9
   Actividad económica: 5611. Expendio a la mesa de comidas preparadas.

4. Establecimiento de comercio **CAFÉ PRIMITIVO.**
   Domicilio social: Armenia.
   Matrícula mercantil No. 239265
   Actividad económica: 4729. Comercio al por menor de otros productos alimenticios.

5. Establecimiento de comercio **CAFETERÍA PRIMITIVOS.**
   Domicilio social: Envigado.
   Matrícula mercantil No. 88633
   Actividad económica: 5613. Expendio de comidas preparadas en cafeterías.
   5619. Otros tipos de expendio de comidas preparadas.

6. Establecimiento de comercio **PANADERÍA Y PASTELERÍA RICURAS DE PRIMITIVO.**
   Domicilio social: Cali.
   Matrícula mercantil No. 805555
   Actividad económica: 1081. Elaboración productos panadería.

7. Establecimiento de comercio **RESTAURANTE PRIMITIVO.**
   Domicilio social: Sabaneta – Antioquia.
   Matrícula mercantil No. 206077.
   Actividad económica: 5611. Expendio a la mesa de comidas preparadas.

8. Establecimiento de comercio **PRIMITIVO LIQUOR STORE RESTAURANTE BAR.**
   Domicilio social: Cartagena.
   Matrícula mercantil No. 09-366525-02
   Actividad económica: Comercio al por menor en establecimientos de comercio no especializados con surtido compuesto principalmente por alimentos.

9. Establecimiento de comercio **PRIMITIVO LODGE.**
   Domicilio social: Bahía Solano – Chocó.
   Matrícula mercantil No. 29-025520-02
   Actividad económica: 5611. Expendio a la mesa de comidas preparadas.

10. Establecimiento de comercio **PRIMITIVO GOURMET.**
    Domicilio social: Moniquirá – Boyacá.
    Matrícula mercantil No. 181032
    Actividad económica: Elaboración y comercialización de productos alimenticios (…)

11. Establecimiento de comercio **INSTINTO PRIMITIVO.**
    Domicilio social: Popayán.
    Matrícula mercantil No. 176077
    Actividad económica: 5611. Expendio a la mesa de comidas preparadas.
    5619. Otros tipos de expendio de

comidas preparadas.

12. Establecimiento de comercio **PRIMITIVO CHOCOLATE.**
Domicilio social: Medellín.
Matrícula mercantil No. 21-696704-02
Actividad económica: 1082. Elaboración de cacao, chocolate y productos de confitería.

13. Establecimiento de comercio **PRIMITIVO FOOD & GRILL.**
Domicilio social: Neiva.
Matrícula mercantil No. 302123
Actividad económica: 5611. Expendio a la mesa de comidas preparadas.
5619. Otros tipos de expendio de comidas preparadas.

14. Establecimiento de comercio **PRIMITIVO AMAZONAS RESTAURANTE PUB ROCK HOUSE.**
Domicilio social: Leticia.
Matrícula mercantil No. 19470
Actividad económica: 5611. Expendio a la mesa de comidas preparadas.

Adicionalmente el despacho de primera instancia desconoció las pruebas legalmente aportadas que contiene un archivo digital de 10 videos con la ruta para acceder a la información de cada una de las páginas de redes sociales (Facebook e Instagram) en las que se evidencia el uso del signo común de carácter débil PRIMITIVO, cuyo objeto es el de prestar servicios de restaurante, como son los siguientes:

1. httpswww.picuki.comprofileprimitivo.rockhouse
https://www.dropbox.com/s/jozx67dw72oyy3t/httpswww.picuki.comprofileprimitivo.rockhouse.mp4?dl=0

2. httpswww.instagram.comprimitivochocolates
https://www.dropbox.com/s/rgngtzwe85iekjh/httpswww.instagram.comprimitivochocolates.mp4?dl=0

3. httpswww.facebook.comprimivitosahumados
https://www.dropbox.com/s/bvtkmzg6lyxye0g/httpswww.facebook.comprimivitosahumados.mp4?dl=0

4. httpswww.facebook.comPrimitivoRestauranteRockHouse
https://www.dropbox.com/s/mb0kyawg94f8fbq/httpswww.facebook.comPrimitivoRestauranteRockHouse.mp4?dl=0

5. httpswww.facebook.comprimitivomushroomcoffee
https://www.dropbox.com/s/joc6hfs1dhgqs0s/httpswww.facebook.comprimitivomushroomcoffee.mp4?dl=0

6. httpswww.facebook.comprimitivofg
https://www.dropbox.com/s/7b69cwces7pzmj2/httpswww.facebook.comprimitivofg.mp4?dl=0

7. httpswww.facebook.comprimitivochocolates
https://www.dropbox.com/s/8plufsl37bnu44d/httpswww.facebook.comprimitivochocolates.mp4?dl=0

8. httpswww.facebook.comPrimitivo-Liquor-Store-542104599307750
https://www.dropbox.com/s/sdpouofa9735ha4/httpswww.facebook.comPrimitivo-Liquor-Store-542104599307750.mp4?dl=0

9. httpswww.facebook.comcafeprimitivo.co
https://www.dropbox.com/s/mkhoe7nlp6hcj8n/httpswww.facebook.comcafeprimitivo.co.mp4?dl=0

10. httpswww.booking.com
https://www.dropbox.com/s/n9i0s4864tc8qos/httpswww.booking.com.mp4?dl=0

SEGUNDO: Los productos de las clases 30 y 31.

La clase 30 comprende los siguientes productos alimenticios:

Café, té, cacao y sucedáneos del café; arroz; tapioca y sagú; harinas y preparaciones a base de cereales; pan, productos de pastelería y confitería; helados; azúcar, miel, jarabe de melaza; levadura, polvos de hornear; sal; mostaza; vinagre, salsas (condimentos); especias; hielo.

La clase 31 comprende los siguientes productos alimenticios:

Productos agrícolas, acuícolas, hortícolas y forestales en bruto y sin procesar; granos y semillas en bruto o sin procesar; frutas y verduras, hortalizas y legumbres frescas.

El despacho de primera instancia entra en la siguiente contradicción en materia probatoria:

a) A pesar de estar probado que el término PRIMITIVO se encuentra registrado a nombre de varios titulares para distinguir productos alimenticios de las clases 30 y 31, manifiesta que dichas clases nada tienen que ver con las clases 29, 35 y 43 para las cuales se encuentran registradas las marcas PRIMITIVO de la parte actora, desconociendo que todas estas clases protegen productos y servicios del sector alimenticio. Desconoce dicho despacho que lo que se debe examinar es la relación de naturaleza y no las clases en las cuales se encuentran los productos o servicios.

b) No obstante, en la decisión tomada en la sentencia, al mismo tiempo condena a mi poderdante por presunta violación de las marcas PRIMITIVO de la parte actora registradas en 3 clases diferentes, o sea, en las clases 29, 35 y 43, aceptando tácitamente que existe relación de naturaleza entre dichas 3 clases. Como una cosa no puede ser y no ser al mismo tiempo, es imposible, jurídicamente, tratándose de productos y servicios del sector alimenticio que exista relación de naturaleza entre las clases 29, 35 y 43, pero que no exista relación de naturaleza entre las clase 30 y 31 y las mencionadas clases 29, 35 y 43.

Veamos qué comprenden las clases 29, 35 y 43:

La clase 29 comprende los siguientes productos alimenticios:

Carne, pescado, carne de ave y carne de caza; extractos de carne; frutas y verduras, hortalizas y legumbres en conserva, congeladas, secas y cocidas; jaleas, confituras, compotas; huevos; leche y productos lácteos; aceites y grasas comestibles.

La clase 35 comprende los siguientes servicios alimenticios:

Gestión de negocios comerciales. Servicios relacionados con la organización de establecimientos comerciales; servicios de consultoría en gestión empresarial y en organización de negocios; servicios de franquicias; dirección de empresas, tramitación administrativa de pedidos de compra, servicios de gestión de información; gestión de negocios de terceros; agencias de importación-exportación; organización de ferias y exposiciones, sistematización de bases de datos. Adquisición, procesamiento, transformación y en general la venta bajo cualquier modalidad comercial de productos nacionales; importación y exportación de productos de toda clase; adquisición, creación, organización, administración y explotación de establecimientos mercantiles destinados a la adquisición de productos de todo género; prestación de servicios complementarios susceptibles de comercio de acuerdo con sistemas modernos de venta en establecimientos de comercio múltiple y/o autoservicio; servicio de difusión de publicidad por cualquier medio de toda clase de productos y servicios. Servicios de mercadeo (marketing), incluyendo servicios de estrategias de promoción, distribución de muestras de publicidad y precio de toda clase de productos y servicios.

La clase 43 comprende los siguientes servicios alimenticios:

Servicios de restauración (alimentación); hospedaje temporal.

Si se acepta que existe relación de naturaleza entre estas 3 clases y que por ello mi poderdante violó el derecho de la parte actora en las 3 clases, necesariamente debe aceptarse que el término PRIMITIVO es de uso común al haberse probado que se encuentra múltiplemente registrado a nombre de varios titulares en las clases 30 y 31 y que existen múltiples establecimientos de comercio identificados con el signo PRIMITIVO, a nombre de múltiples titulares dedicados a la prestación del servicio de restaurantes.

TERCERO: Valor probatorio equivocado.

Con lo expuesto en el punto anterior queda demostrado que el juez de primera instancia se equivoca con error grave no solamente al desconocer la prueba de la existencia de la múltiple titularidad de la marca PRIMITIVO en las clases 30 y 31 sino que le da un valor probatorio totalmente equivocado a las mismas al considerar que dichas clases no pertenecen al sector alimenticio, como sí pertenecen los productos y servicios de las clases 29, 35 y 43.

Desconoce en la sentencia el juez de primera instancia que la jurisprudencia y doctrina internacional en materia de clasificación de marcas que lo que se debe tener en cuenta es la naturaleza de los bienes y servicios y no las clases independientemente consideradas o dicho en otras palabras no es posible desconocer jurídicamente la vinculación de naturaleza que exista entre productos y servicios así se encuentren incluidos en diferentes clases.

Vale repetir que no puede aceptarse la conclusión del juez de primera instancia que mi poderdante violó los registros de la marca PRIMITIVO en las clases 29, 35 y 43 al mismo tiempo y con el mismo uso, pero a renglón seguido desconocer la debilidad por uso común del término PRIMITIVO al encontrarse múltiplemente registrado en las clases 30 y 31 y múltiplemente usado en establecimientos de comercio sin darle el valor de conexidad de naturaleza existente con las clases 29, 35 y 43.

CUARTO: Prueba de la múltiple titularidad de establecimientos de comercio.

Como ya quedó anotado, a lo largo y ancho de la República de Colombia se encuentran en funcionamiento una serie de establecimientos de comercio dedicados a la prestación de servicios de restaurante, que incluyen alimentos comprendidos en las clases 29, 30, 31, 32 y 33.

Para demostrar la existencia de dichos establecimientos de comercio se aportaron como pruebas:

a) Los respectivos certificados de Cámara de Comercio.

b) La declaración juramentada rendida por el experto Franklin Useche, ante el notario 28 de Bogotá, de fecha 27 de julio de 2021, mediante la cual da fe acerca de la forma como se obtuvo, archivo y conservo la integridad de la información tomada de las redes sociales Facebook e Instagram de los diferentes establecimientos de comercio que se identifican con el signo común de carácter débil PRIMITIVO.

c) Se aportó un archivo digital que contiene 10 videos con la ruta para acceder a la información de cada una de las redes sociales Facebook e Instagram, así como a los archivos relacionados con la información tomada de las mismas en las que se evidencia el uso común del signo de carácter débil PRIMITIVO por parte de diferentes establecimientos de comercio dedicados al sector de los alimentos.

QUINTO: Condena a la parte demandada.

El Juez de primera instancia condena triplemente a la parte demandada por la violación de 3 marcas registrada PRIMITIVO en las clases 29, 35 y 43 de la Clasificación Internacional de Niza.

De acuerdo con el material probatorio del proceso mi poderdante usa la marca PRIMITIVO para distinguir servicios de restaurante, servicios que están relacionados con productos de las clases 29, 30 y 31 y con servicios de la clase 43.

Para el Despacho de primera instancia tal uso del signo PRIMITIVO para distinguir servicios de restaurante viola los derechos de las 3 marcas de uso común PRIMITIVO, registradas en las clases 29, 35 y 43, sin explicar jurídicamente en qué consiste la violación de la marca en la clase 29, en qué consiste la violación de la marca en la clase 35 y en qué consiste la violación de la marca en la clase 43, cuando tal signo PRIMITIVO es de uso común para todo el sector alimenticio.

SEXTO: Petición de revocación de la sentencia.

Con todo respeto solicito al despacho de segunda instancia, atendiendo la jurisprudencia del TAJ, del Consejo de Estado y la doctrina internacional, revocar la sentencia de primera instancia, por desconocer el material probatorio aportado que demuestra fehacientemente que el signo PRIMITIVO es de uso común para todo el sector alimenticio, es decir, para los productos de las clases 29, 30, 31, 32 y 33 y los servicios de las clases 35 y 43.

Honorables Magistrados,

JORGE E VERA VARGAS
C.C. No. 17'150.455
T.P. No. 12.122

MEMORIAL PARA REGISTRAR DR. CHAVARRO MAHECHA RV: Expediente: 21-159854; Demandante: PABLO ADRIÁN RIOS URIBE; SUSTENTACIÓN DEL RECURSO DE APELACIÓN

Secretario 02 Sala Civil Tribunal Superior - Seccional Bogota <secsctribsupbta2@cendoj.ramajudicial.gov.co>
Jue 02/02/2023 16:50

Para: **2 GRUPO CIVIL <2grupocivil@cendoj.ramajudicial.gov.co>**

MEMORIAL PARA REGISTRAR DR. CHAVARRO MAHECHA

Cordial Saludo,

OSCAR FERNANDO CELIS FERREIRA
Secretario Sala Civil
Tribunal Superior de Distrito Judicial de Bogotá
Avenida Calle 24 N° 53-28 Torre C Oficina 305
Teléfono 423 33 90 Extensión 8349
Email: secsctribsupbta2@cendoj.ramajudicial.gov.co

De: notificaciones@veraabogados.com <notificaciones@veraabogados.com>
Enviado: jueves, 2 de febrero de 2023 4:44 p. m.
Para: Reparto Procesos Civiles Sala Civil Tribunal Superior De Bogota <rprocesosctsbta@cendoj.ramajudicial.gov.co>; secsctribsupbta2@cendoj.ramajudicial.gov.co. <secsctribsupbta2@cendoj.ramajudicial.gov.co.>
Cc: andres.segura@alicanto.legal <andres.segura@alicanto.legal>; JORGE VERA <jvera@veraabogados.com>; mcheyne@veraabogados.com <mcheyne@veraabogados.com>
Asunto: Expediente: 21-159854; Demandante: PABLO ADRIÁN RIOS URIBE; SUSTENTACIÓN DEL RECURSO DE APELACIÓN

VERA
50 AÑOS

Honorables Magistrados
TRIBUNAL SUPERIOR DE BOGOTÁ.
Sala Civil.
E. S. D.

Expediente: **No. 21-159854**

Referencia: **ACCIÓN DE INFRACCIÓN DE DERECHOS DE PROPIEDAD INDUSTRIAL.**

Demandante: **PABLO ADRIÁN RIOS URIBE.**

Demandado: **PRIMITIVO RESTAURANTE BOLERA BAR S.A.S.**

I. SUSTENTACIÓN DEL RECURSO DE APELACIÓN, EN LO DESFAVORABLE, INTERPUESTO EN CONTRA DE LA SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA, PROFERIDA POR LA SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO EN AUDIENCIA DEL 03 DE OCTUBRE DE 2022.

JORGE E. VERA VARGAS, obrando como apoderado de la sociedad demandada **PRIMITIVO RESTAURANTE BOLERA BAR S.A.S.,** mediante el presente escrito, en tiempo oportuno, me permito sustentar el recurso de apelación interpuesto en contra de la sentencia en referencia, en lo desfavorable.

En cumplimiento de lo establecido por la Ley 2213 de 2022, se envió copia al apoderado del demandante al correo electrónico 'andres.segura@alicanto.legal'

Honorables Magistrados,

_____

JORGE E VERA VARGAS
C.C. No. 17'150.455
T.P. No. 12.122

Nota: Favor acusar recibo de esta comunicación a vuelta de correo electrónico, con copia a jvera@veraabogados.com y cvera@veraabogados.com
Note: Please acknowledge receipt of this communication by return e-mail, copied to jvera@veraabogados.com and cvera@veraabogados.com

Oficina Principal/Main Office
Calle 70 A No. 11 - 43, Bogotá D.C. Colombia.
T: (57) 601 3176650 / 601 3127928
www.veraabogados.com

Quito, Ecuador
Av. 6 de dic. y la niña - Ed. Multicentro Of:603
T: (593) 2 255 5308 / (57) 601 3176650 Ex:200
www.veraabogados.com

Cuida el medio ambiente, ahorra papel

VERA ASESORES FINANCIEROS

VERA ABOGADOS de conformidad con la Ley 1581 de 2012 y el Decreto 1377 de 2013, sobre protección de datos personales, quiere informarle que los datos por usted suministrados serán usados única y exclusivamente en relación con nuestra actividad profesional, para la cual hemos sido contratados por usted. De todas formas, usted está autorizado para solicitar darse de baja o ser excluido de nuestra base de datos, o hacer las modificaciones que usted considere, por lo cual le rogamos darnos sus instrucciones a través del correo electrónico: habeasdata@veraabogados.com

Para más información sobre nuestra política de datos personales, por favor siga este enlace: www.veraabogados.com/politica-de-datos-personales

AVISO IMPORTANTE: La información y los archivos adjuntos a este mensaje de correo electrónico contienen material de la firma **VERA ABOGADOS ASOCIADOS S.A.** www.veraabogados.com, por tanto son confidenciales, privilegiados y / o de exenta de divulgación en virtud de la legislación aplicable. Están destinadas sólo para el uso de la persona (s) o entidad (es) al que va dirigida. Si el lector no es el destinatario (s), o el empleado o agente responsable de entregar este mensaje y cualquier archivo adjunto (s) al destinatario (s), tenga en cuenta que cualquier divulgación, copia o distribución de este correo electrónico y / o de los archivos adjuntos o el uso de su contenido está estrictamente prohibido. Si ha recibido esta comunicación por error, por favor notifique.

IMPORTANT NOTICE: The information and attachments to this e-mail message contain information and material from the legal firm **VERA ABOGADOS ASOCIADOS S.A.** www.veraabogados.com, and therefore it is confidential, privileged and / or exempt from disclosure under applicable law. They are destined only for the use of the person (s) or entity (ies) to which it is addressed to. If the reader is not the recipient (s), or the employee or agent responsible for delivering this message and any attachment (s) to the recipient (s), be aware that any disclosure, copying or distribution of this email and / or attachments or the use of its content is strictly prohibited. If you have mistakenly received this communication, please notify.

MEMORIAL PARA REGISTRAR DR. IVAN DARIO ZULUAGA CARDONA RV: SUSTENTACIÓN DEL RECURSO DE APELACIÓN INTERPUESTO CONTRA LA SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA Proceso: 11001310303420120064102

Secretario 02 Sala Civil Tribunal Superior - Seccional Bogota <secsctribsupbta2@cendoj.ramajudicial.gov.co>
Vie 3/02/2023 2:40 PM

Para: **2 GRUPO CIVIL <2grupocivil@cendoj.ramajudicial.gov.co>**

MEMORIAL PARA REGISTRAR DR. IVAN DARIO ZULUAGA CARDONA

Cordial Saludo,

OSCAR FERNANDO CELIS FERREIRA
Secretario Sala Civil
Tribunal Superior de Distrito Judicial de Bogotá
Avenida Calle 24 N° 53-28 Torre C Oficina 305
Teléfono 423 33 90 Extensión 8349
Email: secsctribsupbta2@cendoj.ramajudicial.gov.co

De: Camargo&Cartagena Abogados en Salud <camargocartagena@gmail.com>
Enviado: viernes, 3 de febrero de 2023 2:25 p. m.
Para: Secretario 02 Sala Civil Tribunal Superior - Seccional Bogota <secsctribsupbta2@cendoj.ramajudicial.gov.co>
Cc: milciadesnovoa77@gmail.com <milciadesnovoa77@gmail.com>; abogado3@diazgranados.co <abogado3@diazgranados.co>; lrincon@ordenhospitalaria.org <lrincon@ordenhospitalaria.org>; OHSJD - Abogado Junior - Edwar Andrey Corredor Rodriguez <ecorredor@ordenhospitalaria.org>; abcm.nuevaeps <abcm.nuevaeps@gmail.com>
Asunto: SUSTENTACIÓN DEL RECURSO DE APELACIÓN INTERPUESTO CONTRA LA SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA Proceso: 11001310303420120064102

Señores:
TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE BOGOTÁ – SALA CIVIL
secsctribsupbta2@cendoj.ramajudicial.gov.co
E.S.D.

Proceso: 11001310303420120064102
Demandante: MARIA FARID GUERRERO Y OTROS
Demandado: CORPORACIÓN HOSPITALARIA JUAN CIUDAD Y OTROS

ASUNTO: SUSTENTACIÓN DEL RECURSO DE APELACIÓN INTERPUESTO CONTRA LA SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

CARLOS ALBERTO CAMARGO CARTAGENA, mayor de edad, vecino de la ciudad de Bogotá, identificado con Cédula de Ciudadanía No. 79.318.915 de Bogotá, Abogado Titulado e inscrito portador de la Tarjeta Profesional No. 168.358 del Consejo Superior de la Judicatura, en mi

condición de apoderado judicial de la parte demandante, por medio del presente escrito, de manera respetuosa me permito SUSTENTAR EL RECURSO DE **APELACIÓN INTERPUESTO CONTRA LA SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA.**

Camargo & Cartagena Abogados S.A.S
Altos expertos en Negligencia y Responsabilidad Médica.
057 + 1 + 4639174
Móvil: 3506201754
Dirección: Calle 12B No. 8 - 23 Edif. Central Oficina. 214, Bogotá.
NOTA: POR FAVOR CONFIRMAR EL RECIBIDO DE ÉSTE CORREO

Señores:
TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE BOGOTA – SALA CIVIL
secsctribsupbta2@cendoj.ramajudicial.gov.co
E.S.D.

Proceso: 11001310303420120064102
Demandante: MARIA FARID GUERRERO Y OTROS
Demandado: COORPORACIÓN HOSPITALARIA JUAN CIUDAD Y OTROS

ASUNTO: SUSTENTANTACION DEL RECURSO DE APELACIÓN INTERPUESTO CONTRA LA SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

CARLOS ALBERTO CAMARGO CARTAGENA, mayor de edad, vecino de la ciudad de Bogotá, identificado con Cédula de Ciudadanía No. 79.318.915 de Bogotá, Abogado Titulado e inscrito portador de la Tarjeta Profesional No. 168.358 del Consejo Superior de la Judicatura, en mi condición de apoderado judicial de la parte demandante, por medio del presente escrito, de manera respetuosa me permito SUSTENTAR EL RECURSO DE **APELACIÓN INTERPUESTO CONTRA LA SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA,** en los siguientes términos:

SOBRE LA SENTENCIA

La sentencia de primera instancia en efecto reconoce y deja sentado (i) la existencia del hecho dañoso, a saber, la muerte del señor ARISTOBULO RODRIGUEZ ESPINOZA, (ii) el actuar culposo del HOSPITAL UNIVERSITARIO CLINICA SAN RAFAEL en términos del actuar imperito y negligente que ocasiono la muerte del señor ARISTOBULO RODRIGUEZ ESPINOZA, el cual hubiera tenido mayor posibilidad de recuperarse si la institución hubiera actuado de manera diligente. Así como la responsabilidad endilgable a la NUEVA EPS por el vínculo ineludible que existe entre esta y las IPS's mediante las cuales presta el servicio de salud, y (iii) el nexo de causalidad entre la conducta culposa y el hecho dañoso.

Todo lo anterior, permite al fallador de primera instancia arribar a la declaración de responsabilidad solidaria y civilmente de los demandados por los daños y perjuicios irrogados a los demandantes con ocasión del fallecimiento del señor ARISTOBULO RODRIGUEZ ESPINOZA por el actuar negligente del personal de salud del HOSPITAL UNIVERSITARIO CLINICA SAN RAFAEL.

No obstante, en el marco de la declaración de daños y la tasación de perjuicios, el a quo yerra pues se advierte que: (i) aun estando sentada jurisprudencialmente la presunción de daño moral, acompañada de los topes indemnizatorios en cada caso, el juzgador no se atiene a ellos sino que, en el caso de los hijos, esposa y nieta, establece los perjuicios debajo del máximo estimado; (ii) no se declara daño moral ni se condena al pago de perjuicio alguno por este concepto en el caso de las señoras ASTRID MILENA RINCON RINCON y ELIANA MARCELA AFANADOR MELENDEZ, aun cuando la afección se encuentra plenamente acreditada.

DAÑO MORAL Y TASACIÓN DE PERJUICIOS EN LOS CASOS DE MARIA FARID GUERRERO VIVAS, OSCAR FABIAN RODRIGUEZ GUERRERO, DARIO ALFONSO RODRIGEZ GUERRERO Y MARIA PAULA RODIGUEZ RINCON

Como lo ha señalado la Corte Suprema de Justicia, el daño moral que se le ocasiona a los familiares de la víctima directa goza de presunción jurisprudencial o presunción de hombre, como quiera que la regla de la experiencia dicta que, en este caso, el fallecimiento del señor ARISTORBULO RODRIGUEZ ESPINOZA supone una gran pérdida e incalculable dolor.

Ahora bien, sobre su intensidad, si bien es cierto que en la jurisdicción ordinaria se ha señalado que este es un factor frente al cual el juez debe acudir al arbitrium judicis para lograr establecer, conforme a los hechos y circunstancias, el valor de la cuantía; no es menos cierto que la propia Corte Suprema de Justicia ha estimado razonables determinados montos indemnizatorios con miras a orientar los fallos y las indemnizaciones y ha señalado que:

> *En el ejercicio del arbitrium judicis orientado a fijar el quantum en dinero del resarcimiento del perjuicio moral, se tendrán en cuenta, además de las orientaciones jurisprudenciales que han sido citadas, las circunstancias personales de la víctima; su grado de parentesco con los demandantes; la cercanía que había entre ellos y la forma siniestra en que tuvo lugar el deceso.*

Sin embargo, el juzgador condenó por una suma inferior a la que ha sido señalada por la Corte Suprema de Justicia, sin que para arribar a tal conclusión en el fallo se haya esgrimido argumento alguno que justificase la reducción, teniendo en cuenta las circunstancias propiasdel caso.

De esta manera, se trata de una indemnización que, en concepto de la parte demandante, resulta insuficiente en atención al grado de parentesco y las circunstancias que rodean el desafortunado deceso del señor ARISTOBULO RODRIGUEZ ESPINOZA, y que escapa de los criterios sentados jurisprudencialmente respecto a las orientaciones indemnizatorias, sin que haya razón que permita soportar tal decisión.

Así, y teniendo en cuenta que en el presente caso la esposa, hijos y nieta del señor ARISTOBULO RODRIGUEZ ESPINOZA han sufrido y seguirán sufriendo durante toda su vida la zozobra y la aflicción de perder a su ser querido, quien falleció por el actuar negligente del personal médico del HOSPITAL UNIVERSITARIO CLINICA SAN RAFAEL y quien incluso en los interrogatorios de parte y testimonios morales fue señalado de ser el núcleo y eje de la vida familiar hasta el momento de su fallecimiento; es dable concluir que no existen razones para estimar que los perjuicios con ocasión de los daños morales en el presente caso ameritan una cuantía inferior a la sentada jurisprudencialmente, pues finalmente se trata del daño injustificado e incesante que sufre una esposa hijos y nieta al perder a su ser querido.

Así las cosas, se pretende que las indemnizaciones por daño moral en favor de MARIA FARID GUERRERO VIVAS, OSCAR FABIAN RODRIGUEZ GUERRERO, DARIO ALFONSO RODRIGEZ GUERRERO sean ajustadas a un monto igual o cercano a los $60’000.000. Y la indemnización por daño moral en favor de MARIA PAULA RODRIGUEZ RINCON sea ajustada a un monto igual o cercano a los $30’000.000.

RECONOCIMIENTO DEL DAÑO MORAL EN EL CASO DE LA SEÑORA ASTRID MILENA RINCON RINCON YELIANA MARCELA AFANADOR

Respecto a la declaración de daño moral en el caso de la señora ASTRID MILENA RINCON RINCON con ocasión del deceso del señor ARISTOBULO RODRIGUEZ ESPINOZA, y la consecuente condena por los perjuicios respectivos, el juzgador señala en el fallo que:

> *“No ocurre lo mismo en lo que tiene que ver con las pretensiones demandadas por ASTRID MILENA RINCON RINCON quien aduce la calidad de nuera y amiga del fallecido* y, *ELIANA MARCELA AFANADOR MELENDEZ, en su condición de amiga del occiso, pues de las testimoniales e interrogatorios no se observa ni demuestra el grado de cercanía, dependencia moral o apoyo, pues nótese como es que aluden a que la relación de conocimiento, deviene de otra de estas para con uno de los miembros de la familia, lo que condijo al conocimiento de esta.”*

De esta manera, el a quo da por no probado, estándolo, el daño moral de las señoras ASTRID MILENA RINCON RINCON y ELIANA MARCELA AFANADOR MELENDEZ, la primera cuñada y amigas del señor ARISTOBULO RODRIGUEZ ESPINOZA, quienes asistieron a audiencia inicial del 18 de abril de 2018, donde ASTRID MILENA RINCON RINCON señaló que:

> *"El núcleo familiar se ve afectado, fue muy difícil afrontar la muerte de Don Aristóbulo, porque él era una persona muy especial y muy especial con María Paula ….*
>
> *Yo frecuenté la clínica muchas veces, e incluso mientras estuvo en coma, yo iba día de por medio, salía de la oficina para allá y le llevaba grabaciones de María Paula y se las ponía al oído, para que las escuchara"*

En el interrogatorio de parte de la señora ELIANA MARCELA AFANADOR, esta señaló lo siguiente:

> *"Yo era una persona supremamente apegada a ellos, a él, y lo sigo siendo. En el momento que Don Aristóbulo falleció, yo tenía una relación sentimental con Darío, el señor Aristóbulo y la señora Farid, me acogieron en su casa como si fuese una hija más, entonces yo me sentía como si fuese una hija adoptiva, era una relación muy cercanay éramos muy amigos"*

Finalmente, la señora IVETH YADIRA RIAÑO MELENDEZ rinde testimonio el día 4 de junio de 2019 en donde señala lo siguiente:

> *"En cuanto a la cercanía de Eliana Afanador con el Sr. Aristóbulo, era bastante cercana, tuvo una relación como de suegros muy allegados con ellos dos, tanto como si fuese una hija adoptiva de ellos, cariño especial e incondicional, la sentí muy comprometida con la relación con Darío y su familia. La afectación que tuvo Eliana fue bastante, la vi triste y afectada durante muchísimo tiempo, muy deprimida. Eso llegó a afectar la relación con Darío incluso…*
>
> *Eliana seguía acompañando a la Sra. Farid en el proceso, sé que ella hizo parte de seguir yendo al cementerio y demás. Al menos después de haber terminado con Darío, sí siguió cercana a Sra. Farid, no sé al resto de personas."*

De esta manera, y en atención a que contrario a lo señalado en la sentencia, sí se encuentra probado en el marco del proceso el daño moral de las señoras ASTRID MILENA RINCON RINCON y ELIANA MARCELA AFANADOR mediante interrogatorio de parte y testimonio moral antes referenciado, se pretende que se reconozca el daño moral en favor de las demandantes en mención y se condene al pago de los perjuicios morales en atención a las pautas jurisprudenciales.

SOLICITUD:

POR LO ANTERIOR, EN OPORTUNIDAD PROCESAL, SOLICITO AL HONORABLE TRIBUNAL SE REVOQUE LA SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA Y EN SU LUGAR, SE ACCEDA A TODAS LAS PRETENSIONES DE ACUERDO A LO DESARROLLADO POR LA JURISPRUDENCIA Y A LAS PRUEBAS QUE OBRAN DENTRO DEL EXPEDIENTE Y SE CONDENE EN COSTAS Y AGENCIAS EN DERECHO.

Atentamente,



CARLOS ALBERTO CAMARGO CARTAGENA,
C.C. No. 79.318.915 de Bogotá.
T. P. No. 168358 del C. S. de la J
Calle 12 B número 8 - 23 oficina 214.
Correo electrónico de notificación judicial: camargocartagena@gmail.com

MEMORIAL PARA REGISTRAR DR. IVAN DARIO ZULUAGA CARDONA RV: Recurso Apelación RAD 11001310303420120064102 Maria Farid Guerrero Vs. Corp Hosp. Juan Ciudad

Secretario 02 Sala Civil Tribunal Superior - Seccional Bogota
<secsctribsupbta2@cendoj.ramajudicial.gov.co>
Vie 3/02/2023 3:45 PM

Para: **2 GRUPO CIVIL <2grupocivil@cendoj.ramajudicial.gov.co>**

MEMORIAL PARA REGISTRAR DR. IVAN DARIO ZULUAGA CARDONA

Cordial Saludo,

OSCAR FERNANDO CELIS FERREIRA
Secretario Sala Civil
Tribunal Superior de Distrito Judicial de Bogotá
Avenida Calle 24 N° 53-28 Torre C Oficina 305
Teléfono 423 33 90 Extensión 8349
Email: secsctribsupbta2@cendoj.ramajudicial.gov.co

De: Avanzar Abogados Consultores S.A.S <avanzar.a.c@gmail.com>
Enviado: viernes, 3 de febrero de 2023 3:33 p. m.
Para: Secretario 02 Sala Civil Tribunal Superior - Seccional Bogota <secsctribsupbta2@cendoj.ramajudicial.gov.co>
Cc: abogado3@diazgranados.co <abogado3@diazgranados.co>; lrincon@ordenhospitalaria.org <lrincon@ordenhospitalaria.org>; OHSJD - Abogado Junior - Edwar Andrey Corredor Rodriguez <ecorredor@ordenhospitalaria.org>; abcm.nuevaeps <abcm.nuevaeps@gmail.com>
Asunto: Recurso Apelación RAD 11001310303420120064102 Maria Farid Guerrero Vs. Corp Hosp. Juan Ciudad

Magistrado
IVAN DARIO ZULUAGA CARDONA
TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE
BOGOTÁ - SALA CIVIL
E. S. D.

MILCIADES ALBERTO NOVOA VILLAMIL en mi calidad de apoderado de La Previsora S.A., llamada en garantía en el proceso de la referencia y estando dentro del término legal procedo a presentar el recurso de apelación adjunto.

Dando cumplimiento a lo exigido por la Ley copio este correo a los demás sujetos procesales.

Cordialmente,
Milciades Alberto Novoa Villamil
C.C.No.6.768.409
T.P. 55.201 del C.S. de la J.

--

Milciades Alberto Novoa Villamil
Carrera 13A No. 28 - 38 oficina 226
Bogotá, Colombia
Teléfono: +57 (601) 7165980
Celular 3012329525
Email: avanzar.a.c@gmail.com

MILCIADES ALBERTO NOVOA VILLAMIL
Abogado

H. MAGISTRADO
DR. IVAN DARIO ZULUAGA CARDONA
TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE BOGOTA
SALA CIVIL
secsctribsupbta2@cendoj.ramajudicial.gov.co
E. S. D.

Ref.: Proceso Ordinario de María Farid Guerrero Vivas y Otros Vs. Corporación Hospitalaria Juan Ciudad, Nueva EPS S.A. y Hospital Universitario Clínica San Rafael.

Llamamiento en Garantía La Previsora S.A. Compañía de Seguros.
RAD. 110013103034 2012 00641 02

En mi calidad de apoderado de **LA PREVISORA S.A. COMPAÑÍA DE SEGUROS** dentro del proceso de la referencia y encontrándome dentro de la oportunidad legal, procedo a sustentar el ***RECURSO DE APELACIÓN*** contra la Sentencia proferida el día diez (10) de marzo de 2022, lo cual hago en los siguientes términos:

En el proceso quedo demostrado:

1. Al señor Aristóbulo Rodríguez Espinosa (q.e.p.d.) se le atendió en el Hospital Universitario Clínica San Rafael de manera acertada toda vez que se le dio el diagnóstico adecuado y se le ordenaron todos los exámenes que necesito para así poder prescribir la terapéutica que requería conforme a las patologías que lo afectaban.

2. En la Historia Clínica obran de manera detallada todos los tratamientos suministrados al paciente por parte del Hospital Universitario Clínica San Rafael, pudiéndose observar que el cuerpo médico que intervino en su atención, hizo un seguimiento continuo en la evolución de las patologías tanto de base como asociadas que presentaba y aplico de manera correcta todos los protocolos de manejo establecidos, los cuales fueron ejecutados de manera correcta y conforme a la literatura médica universal y dando con ello estricto cumplimiento a todas sus obligaciones.

3. De conformidad con el testimonio rendido por el Doctor Rafael Oswaldo se pudo concluir que señor Aristóbulo Rodríguez Espinosa (q.e.p.d.) era un paciente que presentaba una enfermedad demasiado avanzada.

4. Conforme la historia clínica del paciente, los tratamientos que recibió siempre buscaron la recuperación de su salud afectada por las patologías de base que padecía, siendo atendido por personal altamente calificado y experimentado, quienes de acuerdo con su criterio medico científico obraron con prudencia diligencia y de manera oportuna, ajustándose los tratamientos dispensados y los protocolos establecidos internacionalmente y exigidos por la literatura médica para dichas patologías.

5. Las graves patologías que padecía el señor Aristóbulo Rodríguez Espinosa (q.e.p.d.) como lo son la hipertensión arterial, la diabetes mellitus, síndrome coronario, hipotiroidismo e insuficiencia cardiaca congestiva, fueron las causas que determinaron que se presentara el evento cerebro vascular hemorrágico

severo y que impidió el implante del cardioressincronizador al cual se refirió la demanda, sin embargo, de acuerdo a los testimonios presentados por el Doctor Rafael Oswaldo y Rómulo Paipilla la falta de la implantación no tuvo injerencia en la ACV que presentó el paciente

6. La atención medica prestada por parte del Hospital Universitario Clínica San Rafael, estuvo encuadrada dentro de un actuar diligente y bajo una correcta aplicación de los protocolos establecidos aplicables en medicina, los cuales fueron ejecutados de manera correcta y por lo tanto, no existe obligación de indemnizar a su cargo.

7. Los daños que alegan haber sufrido los actores no se ocasionaron ni en razón ni con ocasión de la conducta desplegada por el Hospital Universitario Clínica San Rafael quien en la atención prestada al señor Aristóbulo Rodríguez Espinosa (q.e.p.d.), actuó de conformidad con la *lex artis* por cuanto realizó todos los actos que estaban a su alcance a efectos de prestar un servicio médico idóneo, adecuado y oportuno para las patologías que presentaba.

De conformidad a los hechos narrados en la demanda, puede concluirse que no se presentan los elementos que fundamentan la responsabilidad por falla en la prestación del servicio, en la medida en que los perjuicios sufridos por los demandantes no fueron producto de una falla del servicio derivada de los actos imputables a la Corporación Hospitalaria Juan Ciudad, pues es evidente que conforme a la historia clínica del paciente, los daños que alegan haber sufrido los demandantes, no tiene su causa en una conducta negligente y violatoria de reglamentos que se le pueda imputar a la Corporación Hospitalaria Juan Ciudad, sino que obedece exclusivamente al estado de salud que presentaba el paciente señor Aristóbulo Rodríguez Espinosa (q.e.p.d.).

8. No obstante, están demostradas las excepciones presentadas por La Previsora S.A, el juzgado omitió su estudio y en especial las siguientes:

Primera: Ausencia de los Elementos Constitutivos de la Responsabilidad Médica.

Conforme se demostrará en el proceso, mediante las pruebas aportadas y las que se recaudaran, al señor Aristóbulo Rodríguez Espinosa (q.e.p.d.) de manera acertada se le atendió desde su ingreso al Hospital, ordenándosele los exámenes, proporcionándole la medicación que necesito y en general realizando la actividad necesaria para su mejoramiento y la preservación de su vida.

En la Historia Clínica se consignaron todos los tratamientos suministrados al paciente por parte de la Corporación Hospitalaria Juan Ciudad, pudiéndose observar que el cuerpo médico que intervino en su atención, diagnóstico de manera oportuna el tratamiento que requería el paciente y aplicó de manera correcta todos los protocolos de manejo establecidos, los cuales fueron ejecutados de manera correcta y conforme a la literatura médica universal y dando con ello estricto cumplimiento a todas sus obligaciones.

En la responsabilidad médica la culpa del agente deber ser establecida por el actor, en virtud del artículo 2144 del C.C., que equipara dicha actividad a la de los mandatarios y que conforme al art. 2184 de la misma codificación, la determinación de la prestación defectuosa de su servicio, está supeditado a que se demuestre su culpa.

De acuerdo con ese lineamiento los elementos constitutivos de la responsabilidad médica son:

- Un comportamiento culposo que deberá probarse.
- El perjuicio sufrido por el demandante, y
- El nexo de causalidad entre el comportamiento y el daño.

Los anteriores elementos deben darse simultáneamente, ya que ante la ausencia de uno de ellos no es posible hablar de indemnización de perjuicios por la responsabilidad civil médica.

Conforme a la Historia Clínica del paciente, en la misma se puede constatar que se realizaron todos los estudios necesarios para el oportuno diagnóstico y se estableció el tratamiento que se necesitaba el cual fue autorizado por la Nueva EPS en otra institución hospitalaria, siendo trasladado el paciente de manera inmediata y entregado en dicha institución en un estado estable y sin complicaciones.

Al señor Aristóbulo Rodríguez Espinosa (q.e.p.d.) se le suministro la atención que requería conforme a las patologías que padecía, siendo atendido por personal altamente calificado y experimentado, quienes de acuerdo con su criterio medico científico obraron con prudencia, diligencia y de manera oportuna.

Los tratamientos realizados se ajustaron a los protocolos establecidos internacionalmente y exigidos por la literatura médica para dicha patología.

Por lo anterior, se concluye que al paciente se le brindo una atención adecuada a sus patologías y se le diagnóstico de manera acertada por parte del personal médico de la Corporación Hospitalaria Juan Ciudad.

Por lo brevemente expuesto, se concluye que no existe relación de causalidad entre la atención dispensada por la Corporación Hospitalaria Juan Ciudad y el fallecimiento del señor Aristóbulo Rodríguez Espinosa (q.e.p.d.) en la Clínica San Rafael, estando asociado su deceso a las a sus condiciones orgánicas, morfológicas o fisiológicas, lo cual se escapa del control tanto de los médicos como de las instituciones Hospitalarias.

Segunda: Inexistencia de la Obligación de Indemnizar a Cargo de la Corporación Hospitalaria Juan Ciudad.

La atención medica prestada al señor Aristóbulo Rodríguez Espinosa (q.e.p.d.) por parte de la Corporación Hospitalaria Juan Ciudad, estuvo encuadrada dentro de un actuar diligente y bajo una correcta aplicación de los protocolos establecidos aplicables en medicina, los cuales fueron ejecutados de manera correcta y por lo tanto, no existe obligación de indemnizar a su cargo.

De tiempo atrás es sabido que la ciencia médica comporta una serie de riesgos implícitos, muchas veces desconocidos (alea terapéutica) a los cuales se enfrenta el profesional que han permitido a la sociedad contextualizar la naturaleza de la actividad del médico dentro de unos cánones, éticos, técnicos y jurídicos, que permiten determinar la forma de graduar la responsabilidad del profesional que realiza un acto médico.

En ese orden de ideas, al momento de valorar un resultado no querido o deseado en el que estuvo involucrado entre otros, un acto médico, es preciso tener en

cuenta que existen factores concomitantes a dicho acto, tales como edad, preexistencias, antecedentes patológicos o genéticos de la paciente, tiempo transcurrido desde que apareció el síntoma o se causó la lesión hasta el momento de la consulta, etc., ajenos a la pericia y destreza del galeno, que pueden influir o ser determinantes en lo que a prima facie puede catalogarse como un fracaso médico.

Debido a esta particularidad, al momento de abordar el tema para determinar si existió responsabilidad o no por parte de los médicos que intervinieron en el manejo del paciente, sea lo primero acreditar la diligencia y pericia en el actuar de los galenos, lo que de contera los exoneraría de la responsabilidad por el resultado adverso, ya que no existió culpa en su actuar, supuesto fundamental de la responsabilidad profesional.

Como quiera que no existe un modelo de la conducta prefijado y no hay una norma que regule la actuación del médico, es necesario acudir a los códigos éticos de la profesión, conjunto de saberes, protocolos, prácticas habituales, procedimientos previamente definidos, etc., que forman un referente plural y complejo denominado la lex artis, que permite inferir las obligaciones y deberes a cargo del profesional de la medicina.

En ese orden de ideas, el médico no tiene a su cargo una sola obligación, ya que el acto médico en sí mismo considerado, contiene un sinnúmero de actuaciones de diversa índole que persiguen un solo objetivo, consistente en obtener o preservar el restablecimiento de la salud del paciente, en todos sus espectros, físico, mental y espiritual, en resumen, su recuperación íntegra.

En esa medida para el médico, el cumplimiento de su obligación no se agota en un solo acto sino que comprende un deber primario de cumplimiento y unos deberes de conducta que deben ser ejecutados en una sucesión o cadena de eventos.

Como primer colorario, para dicho estudio, es imperativo tener en cuenta que el médico, como sustrato para el cumplimiento de sus obligaciones tanto primarias como secundarias, debe contar con los conocimientos, habilidades o pericia y la debida actualización correspondiente a su área de desempeño, que garanticen una conducta competente, leal y oportuna para afrontar la gama de situaciones que a menudo se le presenten en el desarrollo de su actividad, que de contera sirven como prueba de su diligencia profesional, que además le dan la tranquilidad al paciente de estar en manos idóneas para el manejo de su patología.

En otras palabras, el profesional debe dominar el conocimiento y técnica y debe adecuar su actividad a ese saber, lo que le va a permitir adoptar las medidas necesarias como exámenes de laboratorio, diagnósticos, cuestionario exhaustivo sobre los indicios de riesgo, comunicación del diagnóstico y tratamiento adecuado, propias de su área, ya que el profesional no puede ser tenido como negligente que no tuvo en cuenta conocimientos que no forman parte de su ciencia.

De acuerdo con el tratadista colombiano Dr. Carlos Ignacio Jaramillo, en su obra Responsabilidad Civil Médica, las obligaciones del médico se pueden dividir en:

“El deber céntrico o primario efectivamente, estriba en la asistencia médica -o prestación de salud -, propiamente dicha, la comprende in extenso, los cuidados médicos -o sanitarios- y, en estricto rigor, la auscultación previa, el diagnóstico profesional y el tratamiento ulterior, grosso modo (eslabones del acto médico).

Por su parte los deberes secundarios de conducta, corolario de la buena fe y, de ordinario, fruto de recepción legislativa (preceptiva deontológico), atañen a variados débitos galénicos, entre otros: el deber de información, el deber de guardar secreto médico; el deber de prescripción farmacéutica; el deber de certificación; el deber progresivo de continuar con el tratamiento iniciado; el deber de diligencia la historia clínica, etc., los cuales, en asocio con el precitado deber de prestación medular -céntrico, basilar o primaran el plexo de deberes sanitarios que incumben al profesional de la medicina o, si se prefiere, que conciernen a la relación médico-paciente, examinada –obvio- desde el prisma asignado al deudor (schuld o extremo pasivo in negotio). Otro tanto sucede de cara al paciente, quien tampoco tiene a su cargo un solo debitum, tal como se apreciará más adelante (pago de honorarios, deber de información veraz y oportuna, deber de ceñirse al tratamiento indicado o prescrito, etc.)" (Carlos Ignacio Jaramillo, Pontificia Universidad Javeriana Facultad de Ciencias Jurídicas, Bogotá., pags. 201 y 202).

Es por lo tanto, de cara a ese conjunto de obligaciones y deberes que conforman la actividad médica, que se debe analizar la prestación de los servicios por parte de la Corporación Hospitalaria Juan Ciudad, el cual obró mediante un grupo de profesionales multidisciplinario de la salud que laboran en esta entidad de manera diligentemente atendiendo las reglas esenciales que rigen su arte, en el manejo del paciente señor Aristóbulo Rodríguez Espinosa (q.e.p.d.), actuando además de manera diligente y según los procedimientos rigurosos de la técnica médica aplicable al caso.

Igualmente debe tenerse en cuenta que las obligaciones que se le pueden endilgar, por regla general, a los profesionales de la salud y en especial a los médicos son de medio y no de resultado.

En ese sentido reiteradamente se ha manifestado la Corte Suprema de Justicia lo siguiente:

"La obligación profesional del médico, no es por regla general de resultado sino de medio, o sea que el facultativo está obligado a desplegar en pro de su cliente los conocimientos de su ciencia y pericia y, los dictados de su prudencia sin que pueda ser responsable del funesto desenlace de la enfermedad que padece su cliente o de la no curación de éste." (Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, Sent. 5 de Marzo de 1.940 M.P. Dr. Liborio Escallón).

Igualmente, en otro pronunciamiento la alta Corporación manifestó:

"Con relación a las obligaciones que el médico asume frente a su cliente, hoy no se discute que el contrato de servicios profesionales implica para el galeno el compromiso si no exactamente de curar al enfermo, sí al menos de suministrarle los cuidados concienzudos, solícitos y conformes con los datos adquiridos por la ciencia, según expresiones con que la jurisprudencia francesa describe su comportamiento. Por tanto, el médico tan sólo se obliga a poner en actividad todos los medios que tenga a su alcance para curar al enfermo; de suerte que en caso de, reclamación, éste deberá probar la culpa del médico, sin que sea suficiente demostrar ausencia de curación". (Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación, Sent. 12 de Sept. De 1.985, M.P. Dr. Horacio Montoya Gil.).

Sobre la base de lo expuesto y teniendo en consideración, de que obra en las piezas procesales existentes que la Corporación Hospitalaria Juan Ciudad obró con la diligencia y el cuidado necesarios, que excluyen cualquier imputación de

culpa, no es posible encontrar probada la falla médica que se pretende endilgar por parte de los demandantes.

En lo referente al llamamiento en garantía está demostrado en el proceso que la póliza que sirve de base al llamamiento en garantía no tiene cobertura sobre los hechos mataría de proceso y por lo tanto la condena impuesta carece de soporte debiéndose revocar la misma por el superior.

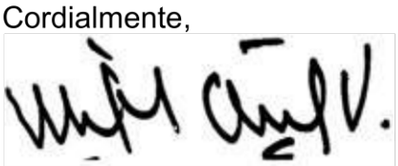
De la misma manera, la solidaridad que se establece por el señor Juez frente a la Aseguradora no tiene sustento contractual o legal que la establezca.

PETICION

En razón de lo expuesto, comedidamente solicito del H. Tribunal, se sirva **REVOCAR** en su totalidad la sentencia impugnada y en su lugar se declare libre de toda responsabilidad a La Previsora S.A. Compañía de Seguros.

En subsidio de lo anterior comedidamente solicito del H. Tribunal se declaren probadas las excepciones propuestas por La Previsora S.A. Compañía de Seguros contra la demanda y el llamamiento en garantía.

Cordialmente,



MILCIADES ALBERTO NOVOA VILLAMIL
C.C. No. 6.768.409 de Tunja
T.P. No. 55.201 del C. S. de la J.

MEMORIAL PARA REGISTRAR DR. IVÁN DARIO ZULUAGA CARDONA RV :USTENTACIÓN RECURSO DE APELACIÓN SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA - 11001310303420120064102

Secretario 02 Sala Civil Tribunal Superior - Seccional Bogota
<secsctribsupbta2@cendoj.ramajudicial.gov.co>
Vie 3/02/2023 11:36 AM

Para: **2 GRUPO CIVIL <2grupocivil@cendoj.ramajudicial.gov.co>**

MEMORIAL PARA REGISTRAR DR. IVÁN DARIO ZULUAGA CARDONA

Cordial Saludo,

OSCAR FERNANDO CELIS FERREIRA
Secretario Sala Civil
Tribunal Superior de Distrito Judicial de Bogotá
Avenida Calle 24 N° 53-28 Torre C Oficina 305
Teléfono 423 33 90 Extensión 8349
Email: secsctribsupbta2@cendoj.ramajudicial.gov.co

De: OHSJD - Edwar Andrey Corredor Rodriguez <ecorredor@ordenhospitalaria.org>
Enviado: viernes, 3 de febrero de 2023 11:14 a. m.
Para: Secretario 02 Sala Civil Tribunal Superior - Seccional Bogota <secsctribsupbta2@cendoj.ramajudicial.gov.co>
Cc: camargocartagena@gmail.com <camargocartagena@gmail.com>; milciadesnovoa77@gmail.com <milciadesnovoa77@gmail.com>; abcm.nuevaeps <abcm.nuevaeps@gmail.com>; Diana María Hernandez Diaz <abogado3@diazgranados.co>; Maria Consuelo Gonzalez Pinto <Mariacgonzalezp@outlook.com>; OHSJD - Dependiente Juridico - Norbey Mora Mur <nmora@ordenhospitalaria.org>; OHSJD - Liliana Rincon Peña <lrincon@ordenhospitalaria.org>
Asunto: SUSTENTACIÓN RECURSO DE APELACIÓN SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA - 11001310303420120064102

Doctor
IVÁN DARIO ZULUAGA CARDONA
MAGISTRADO
TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE BOGOTÁ - SALA CIVIL
E. S. D.

REF. Proceso **ORDINARIO RESPONSABILIDAD MÉDICA**
De: **MARIA FARID GUERRRERO VIVAS y OTROS**
Contra: **HOSPITAL UNIVERSITARIO CLÍNICA SAN RAFAEL y OTROS**
Radicación: **110013103 034 2012 00641 02**
Asunto: Sustentación Recurso de Apelación contra la sentencia de primera instancia de fecha 10 de marzo de 2022

EDWAR ANDREY CORREDOR RODRIGUEZ, identificado con la cédula de ciudadanía 1.013.661.852 de Bogotá D.C., Portador de la Tarjeta Profesional de Abogado 330.254 del Consejo Superior de la Judicatura, obrando como

apoderado especial del Hospital Universitario Clinica San Rafael, tal como consta en el expediente, dentro de la oportunidad procesal correspondiente y con el debido respeto, me permito adjuntar sustentación del recurso de apelación contra la sentencia de primera instancia de fecha 10 de marzo de 2022, notificada por estado el 14 de marzo de la misma anualidad, proferida por el Juzgado 49 Civil del Circuito dentro del proceso de la referencia.

Lo anterior, para los fines procesales pertinentes.

Cordialmente,

ORDEN HOSPITALARIA DE
San Juan de Dios
PROVINCIA AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE

Edwar Andrey Corredor Rodriguez
Abogado – Zona Andina
Cel: 3196765873

AVISO DE CONFIDENCIALIDAD: Este correo electrónico contiene información de la Rama Judicial de Colombia. Si no es el destinatario de este correo y lo recibió por error comuníquelo de inmediato, respondiendo al remitente y eliminando cualquier copia que pueda tener del mismo. Si no es el destinatario, no podrá usar su contenido, de hacerlo podría tener consecuencias legales como las contenidas en la Ley 1273 del 5 de enero de 2009 y todas las que le apliquen. Si es el destinatario, le corresponde mantener reserva en general sobre la información de este mensaje, sus documentos y/o archivos adjuntos, a no ser que exista una autorización explícita. Antes de imprimir este correo, considere si es realmente necesario hacerlo, recuerde que puede guardarlo como un archivo digital.

Doctor
IVÁN DARIO ZULUAGA CARDONA
MAGISTRADO
TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE BOGOTÁ - SALA CIVIL
E. S. D.

REF.	Proceso	**ORDINARIO RESPONSABILIDAD MÉDICA**
	De:	**MARIA FARID GUERRRERO VIVAS y OTROS**
	Contra:	**HOSPITAL UNIVERSITARIO CLÍNICA SAN RAFAEL y OTROS**
	Radicación:	**110013103 034 2012 00641 02**
	Asunto:	Recurso de Apelación contra la sentencia de primera instancia.

EDWAR ANDREY CORREDOR RODRIGUEZ, identificado con la cédula de ciudadanía 1.013.661.852 de Bogotá D.C., Portador de la Tarjeta Profesional de Abogado 330.254 del Consejo Superior de la Judicatura, obrando como apoderado especial del Hospital Universitario Clinica San Rafael, tal como consta en el expediente, dentro de la oportunidad procesal correspondiente y con el debido respeto, me permito sustentar el recurso de apelación contra la sentencia de primera instancia de fecha 10 de marzo de 2022, notificada por estado el 14 de marzo de la misma anualidad, dictada por su despacho dentro del proceso de la referencia en los siguientes términos:

I. RAZONES DEL RECURSO

1.- ERROR EN LA APRECIACIÓN Y VALORACIÓN DE LAS PRUEBAS

El A-quo sostiene en relación con las pruebas aportadas al dossier, que "*desde el arribo del paciente al HOSPITAL UNIVBERSITARIO CLINICA SAN RAFAEL se evidencia descuido en la prestación del servicio, dado que fue ingresado directamente a piso, cual era la orden que debí cumplir el transportador - ambulancia, sin que en ese momento se hiciera una revisión detallada por parte de quien recibe el estado de salud del paciente, descuidando las ordenes medicas dadas en el HOSPITAL UNIVERSITARIO MAYOR - MEDERI – SEDE DE LA COPORACIÓN HOSPITALARIA JUAN CIUDAD, pues el traslado se realizó a efectos de efectuar el procedimiento de implantación del cardio-resincronizador, al punto que se hace constatar en la entidad receptora que el objeto de la consulta de este paciente fue hinchazón de pies, sin tener en cuenta que el motivo del traslado era una situación diferente, respecto del cual no se hizo anotación alguna por el Hospital receptor*".

Acto seguido coligió "*que desde el momento del recibo e ingreso del paciente en el HOSPITAL UNIVERSITARIO CLINICA SAN RAFAEL, la entidad desconoció el plan de manejo del mismo, como: medicamentos, oxígenos, aditamentos, alimentación y demás que se le estaban aplicando en el Hospital Remisor, pues simplemente se evidencia del acervo probatorio, tanto testimonial como documental, que fue dejada dieciocho (18) horas, sin que se le diera una debida atención y tan cierto es que ello originó la sanción que le fue impuesta por la SECRETARIA DISTRITAL DE SALUD mediante la Resolución 0662 del 29 de mayo de 2013, la que cobra relevancia en este caso*".

Y más adelante concluye

> "*que dada la falta de cuidado y atención medica al paciente en las instalaciones del HOSPITAL UNIVERSITARIO CLINICA SAN RAFAEL, el mismo se agravó y presentó el evento*

vascular cerebral, lo que fue impeditivo para la realización del procedimiento, - implante del cardio – resincronizador, que fue la razón por la que se remitió del HOSPITAL UNIVERSITARIO MAYOR – MEDERI – SEDE DE LA CORPORACIÓN HOSPITALARIA JUAN CIUDAD, afectación que además de postrarlo en coma, lo condujo al fatal desenlace causándole la muerte, configurándose así, la causación del daño en la humanidad del señor ARISTOBULO RODRIGUEZ ESPINOSA (q.e.p.d.).

En cuanto a la CULPA refiere, y atendiendo para el efecto las declaraciones vertidas en el diligenciamiento las que analizadas en bloque dan al traste con la TACHA DE SOSPECHA planteada por el gestor de la parte demandante respecto del testimonio del galeno RAAFAEL VILLABONA LUNA, pues sus conceptos médicos, son contestes con las demás pruebas acopladas, el dictamen pericial, historia clinica y demás informes dados por los médicos que depusieron en su oportunidad, respecto de sus especialidades, se evidencia en cuanto a la NUEVA EPS, que esta obro dentro de sus funciones de manera oportuna y cumplida, ya que ante la solicitud que se le hiciera por parte del HOSPITAL UNIVERSITARIO MAYOR – MEDERI – SEDE DE LA CORPORACIÓN HOSPITALARIA JUAN CIUDAD, para la autorización del implante del aditamento cardio-resincronizador, procedió a emitir la correspondiente autorización, siendo diferente que no lo hizo al tener como impedimento la falta de contratación con respecto de la dicha institución, por lo que remite hacia el HOSPITAL UNIVERSITARIO CLINICA SAN RAFAEL, con quien si tenia contrato para ello; siendo procedente el traslado del paciente, dado que tal procedimiento no es de los determinados como de URGENCIAS, sino estaba sujeto a la evolución de salud, la que cuando se solicitó la autorización, era el momento apropiado para ello, y por lo tanto perfectamente viable su traslado. Por ende, con respecto a esta entidad (NUEVA EPS) no le es imputable el hecho a titulo de culpa.

…

No así, con respecto del HOSPITAL UNIVERSITARIO CLINICA SAN RAFAEL, donde no le fue dispensada al paciente la atención medica requerida, al punto que desde su ingreso no existe anotación alguna inherente al motivo por el cual fue remitido, que no era otro que la implantación del cardio-resincronizador, ordenado por los médicos tratantes del hospital remisor pues el estado de salud del paciente lo permitía. Nótese que la anotación efectuada por el Hospital receptor, aduce que el motivo de la consulta lo fue por hinchazón pies y nada dijo sobre la real razón que originó el traslado del enfermo.

No se concibe que desde el momento de ingreso del paciente a las dependencias del HOSPITAL UNIVERSITARIO CLINICA SAN RAFAEL, quien entro de forma estable, no se le hubieran administrado los medicamentos que venían siendo aplicados en la entidad remitente, ordenado y practicando los examenes correspondientes para respaldar el objeto de su traslado, que no era otro que la implantación del cardio-resincronizador, pues contrario a ello, desde su arribo a la institución hospitalaria permaneció por espacio de dieciocho (18) horas sin control medico alguno, no obstante las alertas dadas por el personal de enfermería, resultando así, por el descuido en la atención médica, la agravación de la salud del paciente, independiente de las comorbilidades que tuviera, pues no obstante ellas fue estabilizado en la entidad hospitalaria inicial, esto es la remitente, circunstancia que dio lugar al episodio de evento cerebrovascular hemorrágico severo, el que pudo ha verse evitado o atenuado, lo que no fue detectado por la falta de atención medica oportuna".

En torno a tales afirmaciones, corresponde advertir que las mismas emergen equivocas, y por ende inversas a la realidad, en tanto:

Conforme se registra en la historia clínica, folios 1618 -2674 del expediente, el paciente ingresó a la institución como paciente con cama reservada sobre las 19:00 del 3 de febrero de 2011, donde se le adjudico cama de manera inmediata en la habitación 710B como consta en las notas de enfermería. Seguidamente, esto es a las 8:30 pm de este día fue valorado por el servicio de medicina interna donde se registró:

> *MOTIVO DE CONSULTA "se me hincharon los pies"*
>
> *ENFERMEDAD ACTUAL: paciente con 60 años con cuadro de 15 días de evolución consistente en edema progresivo en miembros inferiores, que inicio de grado I a III, asociado a distensión abdominal, no asociado a vomito ni diarrea. Manifiesta además deterioro de la clase funcional de II a IV. Niega dolor torácico u alguna otra sintomatología. Acudió a hospital universitario mayor, donde se hospitalizo y fue valorado por electrofisiología,* ***se considero como candidato para cardioresincronizador por alto riesgo de muerte súbita. Se remite a esta institución para manejo por electrofisiología****. Actualmente asintomático. (subrayado y negrilla fuera de texto9*
>
> ….
>
> Análisis: (… **se solicitan paraclínicos, se ajusta medicación para patología de base** y se realiza interconsulta de traslado para manejo por cardiología -electrofisiología, servicios al cual fue remitido…) (negrilla y subrayado fuera de texto).

Igualmente, en el CD, folio 16-18, pagina 13 de los registros físicos, se extrae la orden No. 176032, cuyo cuerpo determina los medicamentos que se registraron y administraron al paciente al momento de ingreso al Hospital Universitario Clinica San Rafael, entre los cuales se hallan: Dieta hiposódica, que es usada para pacientes hipertensos; oxigeno, ayudar a oxigenar los tejidos, lo cual es positivo para el paciente; losartan, espironolactona, carvedilol, todos estos medicamentos antihipertensivos; e Insulina cuya función es tratar la diabetes.

Dichos medicamentos, valga precisar, tenían como finalidad tratar las múltiples patologías de base que aquejaba el paciente.

Igualmente reposan dentro del expediente, en el CD de la historia Clinica, páginas 328 al 342 las notas de enfermería, donde se evidencia atención a las **17 horas, 18 horas control, 19 horas, 21 horas control y 23 horas control** del 03 de febrero de 2011, además registros de atención a la 01 de la mañana y 6 de la mañana del 4 de febrero de 2011, de las cuales se desprenden observaciones de enfermería y la aplicación de los medicamentos.

De acuerdo con el acervo probatorio atrás trasuntado, sin mayor ambage resulta fácil diagnosticar, que las conclusiones probatorias a las que llegó el A-quo para estribar la responsabilidad endilgada a mi representada gravitan en el espectro de una valoración caprichosa y arbitraria, pues brota claro que el A-quo efectuó una valoración equivoca e incompleta de las pruebas obrantes en el plenario.

En efecto, una vez el paciente arribó a la institución fue valorado por medicina interna, evaluación que arrojo registros tanto en el item de enfermedad actual como de análisis que **destacaban que el paciente era trasladado para manejo por electrofisiología por ser candidato para cardioresincronizador** por alto riesgo de muerte súbita, lo cual derrumba el argumento utilizado por el A-quo, dado que aquel esgrime que en dicha consulta no se tuvo en cuenta el motivo de traslado del paciente, aunado que no obraba anotación alguna al respecto, lo cual no se adecua a la realidad fáctica.

En cuestión de segundo orden el A-quo afirmó que "*desde el momento del recibo e ingreso del paciente en el HOSPITAL UNIVERSITARIO CLINICA SAN RAFAEL, la entidad desconoció el plan de manejo del mismo, como: medicamentos, oxígenos, aditamentos, alimentación y demás que se le estaban aplicando en el Hospital Remisor, pues simplemente se evidencia del acervo probatorio, tanto testimonial como documental, que fue dejada dieciocho (18) horas, sin que se le diera una debida atención";* empero, estas aseveraciones resultan contrarias a la realidad, como quiera que en el CD, folio 16-18, pagina 13 de los registros físicos, se extrae la orden No. 176032, cuyo cuerpo determina los medicamentos que se registraron y administraron al paciente al momento de ingreso, entre los cuales se hallan: Dieta hiposódica, que es usada para pacientes hipertensos; oxigeno, ayudar a oxigenar los tejidos, lo cual es positivo para el paciente; losartan, espironolactona, carvedilol, todos estos medicamentos antihipertensivos; e Insulina cuya función es tratar la diabetes.

De la misma forma, la historia clínica patenta que el paciente fue valorado a las **17 horas**, **18 horas control, 19 horas, 21 horas control y 23 horas control** del 03 de febrero de 2011, además ostenta registros de atención a la 01 de la mañana y 6 de la mañana del 4 de febrero de 2011, entonces no es cierto el dicho del A-quo en sostener que el paciente quedo descuidado por 18 horas, desde el ingreso el día 03 de febrero de 2011 hasta las 8 am del 04 de febrero de 2011.

Ahora, el A-quo no tuvo en cuenta al momento de emitir la decisión, el concepto medico científico del testigo, RAFAEL OSWALDO VILLABONA LUNA (minuto 1:53:59 a 2:32:36) quien al respecto expreso que el paciente ARISTOBULO RODRIGUEZ ESPINOZA sufría de muchas comorbilidades como (hipertensión arterial, diabetes mellitus, hiperlipidemia entre otras), igualmente que el paciente era de alto riesgo de muerte súbita. Adicionalmente manifestó que desde el momento de ingreso a la institución al paciente se le brindo el cuidado necesario, ya que los medicamentos formulados en dicho momento por medicina interna eran pertinentes y adecuados para tratar las patologías referidas. En igual sentido refirió que el cambio de medicamentos no influyeron en el desenlace del paciente y tampoco influyo la no colocación del cardiodesfibrador; nos explicó que un accidente cerebro vascular (ACV) sucede de manera súbita, la hemorragia sucede en una arteria perforante, una vez que la arteria se rompe no hay manera de evitarlo, el mismo tejido es el que contiene el sangrado y previene que la hemorragia siga creciendo pero una vez que se presente no hay como evitarlo, lo que se hace en estos pacientes de riesgo es tener las enfermedades controladas, era un paciente que presentaba una enfermedad bastante avanzada, el corazón la parte de sus vasos sanguíneos en el riñón tenía una nefropatía, y la situación que se presentó ya era irreversible, así el paciente tuviera controlada su hipertensión arterial se puede presentar que la pared este dañada y se presente el sangrado el hecho que este el 100% controlado no evita que se presente un ACV.

El doctor ROMULO PAIPILLA MALDONADO, igualmente coincidió que cuando se iniciaba un ACV no hay posibilidades de evitarlo, se debe controlar muchas variables, como el azúcar, el estrés la hipertensión arterial, el CV no se puede evitar solo disminuir, en caso de tener controlada la hipertensión arterial también se puede producir un ACV.

Por su parte, el A-quo ignoró que en la audiencia de contradicción del dictamen pericial se concluyó la falta de idoneidad y experiencia del perito frente a la emisión de dictámenes periciales de casos semejantes al que nos cupa, toda vez que aquel fue instruido 3 años, pero con abordaje de necropsias, lesiones personales, y violencia sexual. Además, no había estudiado ni atendido pacientes hospitalizados y desconocía la atención en una institución hospitalaria.

En suma, en la misma diligencia se desvirtuó la conclusión 2 del dictamen, la cual indicaba que el paciente duro 18 horas sin ser valorado; en efecto, el perito llego a tal conclusión por cuanto el apoderado de la demandante le remitió una historia Clinica incompleta en la cual precisamente no se observaba la atención durante tal lapso. No obstante, con las notas de enfermería que

obran en la historia Clinica y en el plenario, se dilucido que el 3 de febrero de 2011 el paciente si recibió atención médica.

A pesar de ello, conviene subrayar, que en la misma diligencia, el perito determinó que los medicamentos administrados al paciente al ingreso si cubren el tratamiento de las demás patologías, pues estos son utilizados para insuficiencia cardiaca, efectos antihipertensivos, y para manejar la diabetes como la insulina y la aspiria. De suyo, afirmó que el ACV HEMORRGICO, está relacionado con todas las patologías que el venia presentando. Paciente muere por ACV. Las patologías son causa eficiente del ACV.

De todo lo anterior expuesto y demostrado en este proceso, la prestación del servicio de salud prestado por el **HOSPITAL UNIVERSITARIO CLINICA SAN RAFAEL**, se desarrolló acorde con la lex artis, se le aplicaron los medicamentos necesarios para controlar sus patologías y el lamentable fallecimiento del paciente, no es producto de la conducta de los galenos, sino que es producto de las comorbilidades que presentaba el paciente. Desde luego, el paciente presentó un evento cerebrovascular hemorrágico severo debido a las dolencias que lo aquejaban con antelación a su ingreso a las instalaciones del HOSPITAL UNIBVERSITARIO CLINICA SAN RAFAEL, pues en efecto, el paciente padecía de hipertensión arterial, diabetes melittus, síndrome coronario, hipotiroidismo e insuficiencia cardiana, aunado que ingresó a la institución con riesgo de muerte súbita, múltiples patologías que a pesar de la atención que se le brindara lo predisponían a sufrir un accidente cerebrovascular, evento que impidió el implante del cardio- resincronizador.

Es importante traer a cuento en este punto, lo dispuesto en el articulo 176 del C.G.P. cuya previsión impone al Juez la obligación de sustentar razonadamente sus conclusiones sobre los hechos “Las pruebas deberán ser apreciadas en conjunto, de acuerdo con las reglas de la sana crítica, sin perjuicio de las solemnidades prescritas en la ley sustancial para la existencia o validez de ciertos actos”.

En relación con la función de la prueba, uno de los grandes inspiradores del Derecho Procesal Civil, expresó:

> *“Probar indica una actividad del espíritu dirigida a la verificación de un juicio. Lo que se prueba es una afirmación; cuando se habla de probar un hecho, ocurre así por el acostumbrado cambio entre la afirmación y el hecho afirmado. Como los medios para la verificación son las razones, esta actividad se resuelve en la aportación de razones.” (*CARNELUTTI, Francisco. Sistema de Derecho Procesal Civil. Trad. de Niceto Alcalá-Zamora y Castillo y Santiago Sentís Melendo. Buenos Aires, Editorial Uteha Argentina, 1944, Tomo II, Ps. 398-399).

Las reglas de la sana crítica son, ante todo, las reglas del correcto entendimiento humano. En ellas interfieren las reglas de la lógica, con las reglas de la experiencia del juez. Unas y otras contribuyen de igual manera a que el magistrado pueda analizar la prueba (ya sea de testigos, peritos, de inspección judicial, de confesión en los casos en que no es lisa y llana) con arreglo a la sana razón y a un conocimiento experimental de las cosas.

El juez que debe decidir con arreglo a la sana crítica, no es libre de razonar a voluntad, discrecionalmente, arbitrariamente. Esta manera de actuar no sería sana crítica, sino libre convicción. La sana crítica es la unión de la lógica y de la experiencia, sin excesivas abstracciones de orden intelectual, pero también sin olvidar esos preceptos que los filósofos llaman de higiene mental, tendientes a asegurar el más certero y eficaz razonamiento.

2.- FALTA DE LOS ELEMENTOS INTEGRANTES DE LA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL. NO SE DEMOSTRÓ EL NEXO CAUSAL EN ESTE PROCESO.

Se entiende por responsabilidad civil, la necesidad de reparar los daños y perjuicios causados a otros, por un hecho ilícito o por la creación de un riesgo.

En el caso concreto de la responsabilidad del médico, es la necesidad que tiene éste de reparar los daños o perjuicios personales (tanto en su salud, como económicamente), que llegaran a producirse durante el diagnostico o tratamiento médico en agravio del paciente, derivadas de un hecho ilícito o de la creación de un riesgo.

La responsabilidad civil contrae entonces, la obligación de indemnizar los daños y perjuicios causados por un hecho ilícito o por un riesgo creado.

El hecho ilícito es la conducta antijurídica, culpable y dañosa. Para efectos de responsabilidad médica, se dice que el hecho ilícito es cuando el médico contraviene algunos de los elementos de existencia o de validez del acto jurídico clínico, produciéndose por su culpa o negligencia, algún daño económico, moral o sobre la integridad física del paciente.

Ninguna de estas situaciones se presentó en la atención prestada al señor ARISTOBULO RODRIGUEZ (q.e.p.d.) En otras palabras, el resultado que el hombre no se halla en capacidad concreta de impedir no puede serle imputado.

> *"Al médico se le pide la razonable diligencia que es dable exigir a todo ser humano a quien se le confían delicados intereses de terceros, tal vez los más preciados: la salud y la vida. Por ello, la falta de éxito en la prestación del servicio no importa la obligación de resarcir necesariamente al damnificado; ni siquiera es suficiente para generar la responsabilidad el error de diagnóstico por si solo, mientras no exista culpa o negligencia..." (CNCIV, Sala 19/12/77, JA 1978-11-1977; DE 77-248 integrada por los doctores Marcelo Padilla, Néstor Chichero y Jorge y F. Filess. (Tomado de "Daño, culpa y nexo causal en la responsabilidad civil médica" de Carlos Alberto Ghersi; pág. 172, Responsabilidad médica en los servicios de salud, Ed. Diké).*

Los médicos son hombres, no dioses. No tienen el poder sobre la vida y la muerte y no pueden responder más allá de lo que su esfera de previsibilidad les permite; de no aceptarlo así, se estaría haciendo sobre su conducta un reproche basado en la responsabilidad objetiva la cual, reitero, se encuentra proscrita de nuestro ordenamiento jurídico.

Logrando acreditar la no previsibilidad concreta y la no evitabilidad del resultado debe exonerarse al médico de la responsabilidad.

Al respecto ha dicho la doctrina ha establecido que:

> *“La responsabilidad médica, salvo excepciones en que se persigue seguridad de resultados (en Bancos de Sangre o en Cirugía Plástica) se considera como obligación de medios”. (Sobre la Prueba de la Culpa Médica. Tamayo Jaramillo Javier. Bogotá. 1998).*

El doctrinante Enrique Paillás, en su libro "Responsabilidad Médica" tras un análisis de estos conceptos, menciona que el profesional tiene en el fondo una obligación de diligencia, tomando antiguos conceptos de tratadistas franceses, describiéndolo como el deber de aportar todos los cuidados de un buen Pater Familiae.

Últimamente se acepta que a un médico se le exija normalidad de conducta (uso de conocimiento promedio, destreza promedio, prudencia promedio), siempre que exista normalidad de circunstancias, de tiempo y lugar.

El destacado abogado Vicente Acosta, en su excelente texto "De la Responsabilidad Médica", refiere que el profesional podrá eximirse de toda responsabilidad demostrando que el evento dañoso se produjo a pesar de haber cumplido diligentemente su deber.

Así bien, en la demanda, infructuosamente, la parte actora intenta establecer los elementos de la responsabilidad; empero, no se prueba fehacientemente el nexo causal, pues en el plenario se encuentra probado que:

- Una vez el paciente arribó a la institución fue valorado por medicina interna, evaluación que arrojo registros tanto en el item de enfermedad actual como de análisis que destacaban que el paciente era trasladado para manejo por electrofisiología por ser candidato para cardioresincronizador por alto riesgo de muerte súbita.

- En el CD, folio 16-18, pagina 13 de los registros físicos, se extrae la orden No. 176032, cuyo cuerpo determina los medicamentos que se registraron y administraron al paciente al momento de ingreso al Hospital Universitario Clinica San Rafael, entre los cuales se hallan: Dieta hiposódica, que es usada para pacientes hipertensos; oxigeno, ayudar a oxigenar los tejidos, lo cual es positivo para el paciente; losartan, espironolactona, carvedilol, todos estos medicamentos antihipertensivos; e Insulina cuya función es tratar la diabetes. Dichos medicamentos, valga precisar, tenían como finalidad tratar las múltiples patologías de base que aquejaba el paciente.

- Reposan dentro del expediente, en el CD de la historia Clinica, páginas 328 al 342 las notas de enfermería, donde se evidencia atención a las 17 horas, 18 horas control, 19 horas, 21 horas control y 23 horas control del 03 de febrero de 2011, además registros de atención a la 01 de la mañana y 6 de la mañana del 4 de febrero de 2011, de las cuales se desprenden observaciones de enfermería y la aplicación de los medicamentos.

- Concepto medico científico del testigo, RAFAEL OSWALDO VILLABONA LUNA (minuto 1:53:59 a 2:32:36) quien al respecto expreso que el paciente ARISTOBULO RODRIGUEZ ESPINOZA sufría de diversas comorbilidades como (hipertensión arterial, diabetes mellitus, hiperlipidemia entre otras), igualmente que el paciente era de alto riesgo de muerte súbita. Adicionalmente manifestó que desde el momento de ingreso a la institución al paciente se le brindo el cuidado necesario, ya que los medicamentos formulados en dicho momento por medicina interna eran pertinentes y adecuados para tratar las patologías referidas. En igual sentido refirió que el cambio de medicamentos no influyeron en el desenlace del paciente y tampoco influyo la no colocación del cardiodesfibrador; nos explicó que un accidente cerebro vascular (ACV) sucede de manera súbita, la hemorragia sucede en una arteria perforante, una vez que la arteria se rompe no hay manera de evitarlo, el mismo tejido es el que contiene el sangrado y previene que la hemorragia siga creciendo pero una vez que se presente no hay como evitarlo, lo que se hace en estos pacientes de riesgo es tener las enfermedades controladas, era un paciente que presentaba una enfermedad bastante avanzada, el corazón la parte de sus vasos sanguíneos en el riñón tenía una nefropatía, y la situación que se presentó ya era irreversible, así el paciente tuviera controlada su hipertensión arterial se puede presentar que la pared este dañada y se presente el sangrado el hecho que este el 100% controlado no evita que se presente un ACV.

  El doctor ROMULO PAIPILLA MALDONADO, igualmente coincidió que cuando se iniciaba un ACV no hay posibilidades de evitarlo, se debe controlar muchas variables, como el azúcar, el estrés la hipertensión arterial, el CV no se puede evitar solo disminuir, en caso de tener controlada la hipertensión arterial también se puede producir un ACV.

- El perito determinó que los medicamentos administrados al paciente al ingreso si cubren el tratamiento de las demás patologías, pues estos son utilizados para insuficiencia cardiaca, efectos antihipertensivos, y para manejar la diabetes como la insulina y la aspiria. De suyo, afirmó que el ACV HEMORRGICO, está relacionado con todas las patologías que el venia presentando. Paciente muere por ACV. Las patologías son causa eficiente del ACV.

Enfocado el asunto desde el punto de vista de los elementos integrantes de la responsabilidad, puede sentarse como regla general que en los litigios sobre responsabilidad profesional médica, como en todo problema de responsabilidad, debe establecerse la relación de causalidad entre el acto imputado al médico y el daño sufrido por el paciente. Por lo tanto, el médico será responsable de la culpa o falta que se le imputan, sino cuando éstas hayan sido las determinantes del perjuicio causado. Al demandante incumbe probar esa relación de causalidad o en otros términos, debe demostrar los hechos de donde se desprende aquella.

En efecto, visto lo anterior, viable es afirmar que en el caso bajo examen no se demostró el nexo causal entre la atención brindada por el personal médico de la institución y el fallecimiento del paciente, tal aseveración se imprime al verificar el material probatorio, cuya sencilla apreciación destaca que el ACV sufrido por el paciente- causa de su fallecimiento, es propio de las múltiples patologías que sufría, máxime cuando el paciente ostentaba alto riesgo de muerte súbita. Desde luego, el paciente presentaba una enfermedad bastante avanzada, el corazón la parte de sus vasos sanguíneos en el riñón tenía una nefropatía, y la situación que se presentó ya era irreversible, y a pesar de tener controlada su hipertensión arterial se desencadenó el ACV, puesto que, el hecho de que este el 100% controlado no evita que se presente dicho evento.

Como puede observarse de las pruebas obrantes en el expediente, se evidenció que el paciente obtuvo todos los cuidados que la ciencia médica ha previsto para las patologías que presentaba. Las afectaciones y enfermedades propias que el paciente presentaba superaron los esfuerzos desplegados por un equipo interdisciplinario de profesionales que no escatimó recursos físicos y técnicos en procura de salvar su vida.

Se advierte, que no es posible concluir que la muerte del mencionado se hubiere evitado, toda vez que conforme quedó consignado en la historia clínica, se trataba de un paciente de alto riesgo, con antecedentes médicos marcados, quien en sus diferentes ingresos a los centros médicos siempre mostró regular estado general. “Debe recalcarse para el caso que la búsqueda de la preservación de la vida y la integridad del paciente es el fin último de toda actividad médica y, en consecuencia, mientras existan posibilidades de conseguirse dicho propósitos, deberá el médico privilegiar esa búsqueda”.

Por lo anterior, se considera que se brindó una atención adecuada y oportuna. El evento final desafortunado, no deriva de fallas en la atención sino de condiciones propias del paciente.

3.- INDEBIDA TASACIÓN DE LOS PERJUICIOS MORALES.

La Corte Suprema de Justicia en su sentencia del 5 de mayo de 1999, en la que la Sala señaló que especie de daño moral *“incide en el ámbito particular de la personalidad humana en cuanto toca sentimientos íntimos tales como la pesadumbre, la aflicción, la soledad, la sensación de abandono o de impotencia que el evento dañoso le hubiese ocasionado a quien lo padece”*, que para su valuación existen otros elementos de carácter externo, como son los que integran el *“hecho antijurídico que provoca la obligación de indemnizar, las circunstancias y el medio en que el acontecimiento se manifiesta, las condiciones sociales y económicas de los protagonistas y, en fin, todos los demás que se conjugan para darle una individualidad propia a la relación procesal”*

Ahora bien, si como lo señaló la Corte, "*la cuantificación del perjuicio moral no es asunto que la ley hubiese atribuido al antojo judicial"* sino que corresponde a un aspecto de la decisión, por una parte, de suma importancia y, por otra, de "carácter técnico" (Cas. Civ., sentencia del 5 de mayo de 1999, expediente No. 4978), y lo reiteró al precisar "*que, para la valoración del quantum del daño moral en materia civil, estima apropiada la determinación de su cuantía en el marco fáctico de circunstancias, condiciones de modo, tiempo y lugar de los hechos, situación o posición de la víctima y de los perjudicados, intensidad de la lesión a los sentimientos, dolor, aflicción o pesadumbre y demás factores incidentes conforme al arbitrio judicial ponderado del fallador"* (Cas. Civ., sentencia del 18 de septiembre de 2009, expediente No. 20001-3103-005-2005-00406-01), es evidente que la tasación de la reparación del perjuicio moral está ligado a la ponderación equitativa que de las circunstancias fácticas del caso haya efectuado el sentenciador de instancia y que hayan guiado su juicio al respecto.

Pues bien, revisado el caso de marras, pertinente es ultimar, que no se probó plenamente el nexo causal, lo cual configura en injusto la condena de la cual fue sujeto mi representada. En tal sentido, los perjuicios aludidos se denotan improcedentes, pues no hay motivos para atribuirlos.

Por su parte, se efectuó una tasación indebida y desproporcionada de los perjuicios morales, toda vez que en ningún momento se tuvo en cuenta el estado de salud del paciente previo al fallecimiento, esto es, que padecía de múltiples comorbilidades y adicionalmente era tributario de alto riesgo de muerte súbita. Es decir, este sufrimiento tarde o temprano lo iban a experimentar como consecuencia de las enfermedad propias del paciente.

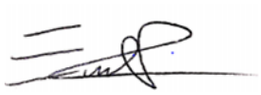
III. PETICION

Por todo lo anterior, se solicita respetuosamente Honorable Magistrado, tener en cuenta los argumentos aquí expuestos, y **REVOCAR** la sentencia de primera instancia de fecha 10 de marzo de 2022, proferida por el Juez 49 Civil del Circuito de Bogotá, y en consecuencia se nieguen las pretensiones de los demandantes y se proceda a absolver de responsabilidad civil extracontractual al **HOSPITAL UNIVERSITARIO CLINICA SAN RAFAEL.**

IV. NOTIFICACIÓN:

En la carrera 8 No.- 17-44 sur de Bogotá**; correo: ecorredor@ordenhospitalaria.org.**

Del señor Juez,



EDWAR ANDREY CORREDOR RODRIGUEZ
C.C. No. 1.013.661.852 de Bogotá D.C
T. P. No. 330.254 del Consejo Superior de la Judicatura

MEMORIAL PARA REGISTRAR DR. IVAN DARIO ZULUAGA CARDONA RV: 11001310303420120064102 SUSTENTACION RECURSO DE APELACION SENTENCIA PRIMERA INSTANCIA

Secretario 02 Sala Civil Tribunal Superior - Seccional Bogota
<secsctribsupbta2@cendoj.ramajudicial.gov.co>
Vie 3/02/2023 2:37 PM

Para: **2 GRUPO CIVIL <2grupocivil@cendoj.ramajudicial.gov.co>**

MEMORIAL PARA REGISTRAR DR. IVAN DARIO ZULUAGA CARDONA

Cordial Saludo,

OSCAR FERNANDO CELIS FERREIRA
Secretario Sala Civil
Tribunal Superior de Distrito Judicial de Bogotá
Avenida Calle 24 N° 53-28 Torre C Oficina 305
Teléfono 423 33 90 Extensión 8349
Email: secsctribsupbta2@cendoj.ramajudicial.gov.co

De: Maria Consuelo Gonzalez Pinto <Mariacgonzalezp@outlook.com>
Enviado: viernes, 3 de febrero de 2023 2:10 p. m.
Para: Secretario 02 Sala Civil Tribunal Superior - Seccional Bogota <secsctribsupbta2@cendoj.ramajudicial.gov.co>
Cc: camargocartagena@gmail.com <camargocartagena@gmail.com>; milciadesnovoa77@gmail.com <milciadesnovoa77@gmail.com>; Diana María Hernandez Diaz <abogado3@diazgranados.co>; OHSJD - Dependiente Juridico - Norbey Mora Mur <nmora@ordenhospitalaria.org>; Liliana Rincon Peña <lrincon@ordenhospitalaria.org>; OHSJD - Abogado Junior - Edwar Andrey Corredor Rodriguez <ecorredor@ordenhospitalaria.org>
Asunto: 11001310303420120064102 SUSTENTACION RECURSO DE APELACION SENTENCIA PRIMERA INSTANCIA

Honorables Magistrados:

De manera atenta remito adjunto memorial que sustenta el recurso de apelación interpuesto contra la Sentencia de Primera Instancia en el proceso judicial 11001310303420120064102.

Sin otro particular.

Atentamente,

María Consuelo González P
Apoderada Nueva Eps

Señores
TRIBUNAL SUPERIOR DE BOGOTA
SALA CIVIL
Atn Dr. IVÁN DARÍO ZULUAGA CARDONA
Magistrado Ponente
E. S. D.

Ref. Medio de Control: Ordinario Responsabilidad Civil Médica
Demandante: MARIA FARID GUERRERO VIVAS Y OTROS
Demandado: NUEVA EPS y otros Expediente: 11001310303420120064100

***** SUSTENTO APELACION CONTRA SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA *****

MARIA CONSUELO GONZALEZ PINTO, identificada con la cedula de ciudadanía Nro. 52.079.928, abogada en ejercicio portadora de la tarjeta profesional Nro. 239.982 del Consejo Superior de la Judicatura, en mi condición de Apoderada reconocida de la entidad NUEVA EPS, por medio del presente escrito y estando dentro del término legal me permito presentar respetuosamente sustento al recurso interpuesto contra SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA, así:

ERRADA VALORACION PROBATORIA – PRUEBA CIENTIFICA

Lo anterior de conformidad con los siguientes argumentos:

ERRADA INTERPRETACIÓN DE LOS MEDIOS PROBATORIOS.
DEFINICIÓN DE RESPONSABILIDAD SIN TENER COMO BASE LOS TESTOMONIOS MÉDICOS IDÓNEOS.
SE CONCLUYE EVOLUCIÓN FATÍDICA DEL PACIENTE SIN TENER EN CONSIDERACIÓN LOS CONCEPTOS MÉDICOS RECOGIDOS DENTRO DEL PROCESO.

Inicialmente debe tenerse en consideración el problema jurídico en el presente proceso, el cual como está descrito en la sentencia apelada manifiesta quedó fijado en audiencia así:

"(i) si la muerte del señor ARISTOBULO RODRIGUEZ ESPINOSA (q.e.p.d.) quien se encontraba afiliado a la NUEVA EPS resulta imputable a las entidades demandadas por haber prestado un servicio médico y hospitalario presuntamente negligente, deficiente o tardío, o por otra causa que les sea atribuible y, en segundo lugar, en caso de no acreditarse lo anterior. (ii) si es posible predicar la existencia de una falla del servicio consistente en un error de diagnóstico que despojó al señor Rodríguez Espinosa (q.e.p.d.) de una oportunidad de sobrevida, por el traslado realizado a cargo de ABC AMBULANCIAS, en la I.P.S. HOSPITAL UNIVERSITARIO CLINICA SAN RAFAEL, no obstante haber sido atendido con antelación en la I.P.S. CORPORACIÓN HOSPITALARIA JUAN CIUDAD."

En ese orden de ideas, en primera instancia se debe determinar si se puede imputar a la Clínica San Rafael y a la Nueva Eps, el supuesto daño que pretende demostrarse, esto es que la muerte del señor Aristóbulo haya sido a causa de una mala atención por parte de la IPS y si existe una falla en el servicio a causa del traslado del paciente a una IPS de mayor complejidad.

Dentro el proceso de la referencia se desarrollaron varias pruebas, que servirán de base para la defensa de la NUEVA EPS como solidaria y del IPS Clinica San Rafael, pues con las mismas NO ES POSIBLE CONCLUIR QUE LA

SUPUESTA OMISION EN LA ATENCION DEL PACIENTE FUERAN LA CAUSA DE DESMEJORIA Y POSTERIOR MUERTE del señor Aristóbulo.

Se expone en la Sentencia del Ad- Quo que el paciente permaneció por espacio de 18 horas sin control médico alguno y que por ese descuido se agravó la salud del paciente, independientemente de las comorbilidades que padecía, dando lugar al episodio de evento cerebrovascular hemorrágico severo, que pudo según el Despacho, haber sido evitado o atenuado, si se hubiese dado una atención médica oportuna.

QUE ESTÁ PROBADO?

Tal como quedó comprobado en el expediente a través de las diferentes audiencias, es claro que el paciente es remitido del Hospital Universitario Mayor Mederi a la Clínica San Rafael, entrado a habitación directamente, como se explicó por parte de los galenos y del servicio de ambulancia, por estar estable el señor Aristóbulo Rodríguez.

También fue bastante clara la exposición frente a las comorbilidades sufridas por el paciente, consideradas del alto riesgo para el paciente, las cuales pese a estar demostradas en el expediente, el señor Juez le resta importancia frente al desenlace fatal del paciente.

Quedó probado también con el interrogatorio de parte a la Representante Legal de la Nueva EPS, que el señor Aristóbulo Rodríguez, que se presentaba poca adherencia por parte del paciente al tratamiento médico, que no había continuidad ni regularidad en el manejo de sus medicamentos y que en varias oportunidades se había recomendado al señor Rodríguez por parte de los médicos la toma de sus medicamentos para evitar posteriores eventos que como sucedió podrían ser fatales.

Debe tenerse en consideración que muchos de los riesgos que tienen los pacientes y los riesgos a los que se exponen con posterioridad al no acatar las órdenes médicas, tratamientos, procedimientos, medicación; pueden traer graves complicaciones a futuro. Y no necesita llegar en malas condiciones a una IPS por Urgencias, como se pretendía hacer ver el supuesto error de la entrega por parte de la ambulancia, ni tener síntomas inmediatos para que se pueda presentar un desenlace fatal como sucedió con el señor Rodríguez.

Es claro que el procedimiento que se debía realizar al señor Aristóbulo, colocar el resincronizador, no se consideraba una urgencia y por ello se pudo realizar el traslado a la Clínica San Rafael y se pretendía agendar la fecha para su colocación.

Se probó mediante testimonio médico, que el fallecimiento del paciente fue en virtud de un ACV HEMORRÁGICO, conclusión a la que no pudo llegar el Perito por no tratarse de un médico especialista, pero que fue confirmada por el doctor Rómulo Maldonado, manifestando además que este accidente obedece a la hipertensión sufrida por el paciente, como un riesgo de muerte súbita a causa de su comorbilidad, teniendo además claro que sufría otras múltiples enfermedades.

Que el paciente recibió atención en la Clinica San Rafael, conforme testimonio del médico de la Clínica en interrogatorio, manifestó que no era cierto que el paciente no hubiese recibido la atención médica desde su ingreso. El cual no se tuvo en cuenta la momento de fallar.

Conforme a la historia clínica obrante en el plenario, es claro que **NO ES CIERTO QUE EL PACIENTE HAYA DURADO 18 HORAS SIN ATENCION**

Al respecto puede verificarse en la Historia clínica , folios 1618 -2674 del expediente, el paciente ingresó a las 7pm a San Rafael a las 7pm y a las 830pm ya tuvo su primera valoración, y se formuló medicación.

Además se registran atenciones y revisiones de Enfermería.

Debo además anotar que desde el ingreso del paciente era claro que tenía riesgo de muerte súbita y así quedó consignado en la historia clínica.

De la oportuna atención al paciente, no solo OBRA LA HISTORIA CLINICA, debemos hacer énfasis en los testimonios de los médicos RAFAEL OSWALDO VILLABONA LUNA y ROMULO PAIPILLA.

Los médicos fueron coincidentes en que el paciente recibió el tratamiento adecuado, además ratifican el riesgo de muerte súbita del mismo y determinan que los medicamentos dados al paciente eran los adecuados para su situación médica.

Es importante resaltar que los MEDICOS informaron con claridad que el fallecimiento del paciente no tiene relación con el cardiodesfibrador; aclararon como sucede un ACV, y como se trata. Conforme a lo cual el evento isquemico era IMPREVISTO , POSIBLE POR LAS CONDICIONES MEDICAS DEL PACIENTE, y NO RELACIONADO CON LA DESVIRTUADA FALTA DE ATENCION.

Recordemos que el análisis médico que obra en la contestación dada por Nueva EPS se indica:

"CONCLUSIONES DEL CASO.

1. *Lo primero que hay que evidenciar en éste caso es el diagnóstico del paciente. INSUFICIENCIA CARDIACA CONGESTIVA REFRACTARIA A TRATAMIENTO MEDICO. Lo cual ya disminuye la sobrevivencia del paciente a un año en menos del 25% como lo expresa la literatura médica.*

   *"**La reducción de la supervivencia se correlaciona directamente con el grado de deterioro de la función cardíaca. Así, una vez establecido el diagnóstico de IC, la supervivencia a los 5 años es menor del 60%, pero en situación de IC grave refractaria, la supervivencia anual es inferior al 25%.***
   La situación terminal es la circunstancia en la que una enfermedad incurable (bien por ausencia de respuesta al tratamiento, bien porque no hay un tratamiento curativo), amenaza la vida del paciente en un plazo corto, en general inferior a 6 meses, y produce síntomas progresivos que afectan gravemente a su capacidad funcional y al estado emocional del enfermo y su familia.

2. *Los síntomas referidos por el paciente, de hinchazón, dificultad para respirar, evidencian y confirman el diagnóstico de falla cardiaca, y es evidente en la historia clínica que el paciente se le optimiza el manejo médico(medicamentos disponibles para el tratamiento médico de la falla cardiaca), sin presentar mejoría, además de lo anterior se verifica en la historia el compromiso renal(por bajo gasto), lo cual es un argumento más para falla cardiaca refractaria, que CONFIRMA EL ESTUDIO DE ECOCARDIOGRAMA con fracción de eyección del 20% . Por lo*

tanto no hay error diagnóstico ni error terapéutico al momento del ingreso del paciente.

3. *En este punto de la evolución de la enfermedad del paciente, es importante resaltar que se toman las medidas necesarias de acuerdo a la lex artis para la realización de los estudios diagnósticos y terapéuticos referidos en la literatura médica para el abordaje de ésta patología. Se protege la función renal, por lo cual no se lleva de inmediato al paciente a un cateterismo que es un método invasivo para documentar isquemia cardiaca, sino que se realiza una perfusión miocárdica para evaluar la necesidad de dicho cateterismo, no se puede llevar el paciente a cateterismo por el riesgo de dañar la función renal que de base por la elevación de la creatinina ya al ingreso se encuentra deteriorada.*
4. *Se actúa de acuerdo a la lex artis ya que se realiza la perfusión en donde se documenta que es negativa para isquemia, y se evita que el paciente sea llevado a cateterismo (se evidencia con esto que los puentes aortocoronarios que tiene el paciente ya que fue revascularizado previamente, se encuentran permeables), por lo tanto la falla cardiaca no tiene posibilidad de otro tratamiento que igualmente se considera en esta etapa PALIATIVO, que es el implante del cardioresincronizador.*
5. *Por lo tanto no se puede hablar de negligencia, impericia o imprudencia en el abordaje del paciente con una falla cardiaca refractaria y múltiples comorbilidades como la diabetes mellitus.*
6. *En este paciente por el alto riesgo de arritmias se requiere la anticoagulación, y es evidente que el paciente recibe heparinas de bajo peso molecular(enoxaparina, 60 mg s/c dia), que son los medicamentos de menor riesgo para realizar la anticoagulación del paciente, y se presenta una complicación inicial del mismo que es un sangrado nasal(epistaxis), que se atiende de manera oportuna adecuada, y recibe todo el apoyo del otorrino en la cauterización de las várices septales , y mejora su sangrado. Se disminuye la dosis de anticoagulante en éste paciente cuando se presenta el sangrado menor.*
7. *Se puede demostrar en la evolución del paciente y en los registros de historia clínica que el paciente PERMANECE HOSPITALIZADO y se actúa bajo el DEBER DE CUIDADO ya que el paciente PERMANECE BAJO VIGILANCIA ESTRICTA por el alto riesgo que tiene de presentar MUERTE SUBITA por su patología de base(falla cardiaca refractaria).* [i]
8. *Una vez solicitado y definido por el servicio de electrofisiología el implante del dispositivo denominado cardioresincronizador (27 de enero de 2011), se autoriza por parte del asegurador (NUEVA EPS S.A), se aporta el documento del registro de la autorización, fechado el día 31 de enero de 2011, por lo cual NO EXISTE FALLA ADMINSITRATIVA EN EL PROCESO, y se traslada el paciente en ambulancia para el servicio de electrofisiología del Hospital San Rafael para la realización del procedimiento.*
9. ***No existe nexo causal entre la necesidad de diferir el procedimiento de implante de resincronizador por los motivos anotados anteriormente, y el fallecimiento del paciente, ya que la causa directa de la muerte es el accidente cerebrovascular de carácter hemorrágico y no isquémico, que se debe a un sangrado cerebral por los factores de riesgo que presenta el paciente como se anota en la revisión de la literatura médica(Hipertensión arterial, diabetes, con ateromatosis generalizada de los vasos que hacen que sea más susceptible a cambios de presión y puede haber ruptura de la microvasculatura a nivel cerebral). Si fuese de origen embólico se podría atribuir a las arritmias, pero aún así para evitar estos***

eventos se toma la decisión adecuada que es la anticoagulación. Existen muchas causas probables para la presentación del evento cerebrovascular hemorrágico: Hipertensión, diabetes, ateroesclerosis generalizada, y anticoagulación, la conjugación de factores hacen que el talllo cerebral de éste paciente sea un territorio propenso a ruptura microvascular, y el desarrollo del accidente cerebrovascular y no a la demora en la implantación del cardioresincronizador.

10. *Por la presencia de la hemorragia a nivel del tallo cerebral, el paciente requiere traslado a unidad de cuidado intensivo, e intubación orotraqueal (las funciones del tallo cerebral son funciones autonómicas, como la respiración). En condiciones inestables, como lo mencionan los especialistas en la historia clínica NO SE PUEDE COLOCAR EL TRATAMIENTO DE SOPORTE CARDIACO que es la implantación del resincronizador, por lo tanto lo primordial es la estabilización clínica del paciente. El pronóstico de un accidente cerebrovascular de tallo cerebral, es malo, porque se afectan todas las funciones neurovegetativas, por lo cual como lo menciona el servicio de neurología y la evolución del paciente entra en un estado vegetativo con mínimas posibilidades de sobrevida.*
11. *En todas las evoluciones de la historia clínica se evidencia que el pronóstico del paciente en todas sus etapas fue ampliamente explicado a la familia del paciente, por lo tanto NO SE PUEDE HABLAR DE OMISION DE INFORMACION.*

Llamo especial atención delo indicado en la conclusión No. 9 pues allí claramente se excluye la situación del implante de resincronizador como causa de fallecimiento del paciente, dado que la causa de la muerte es un accidente cerebrovascular de carácter hemorrágico y no isquémico, que si pudiera tener relación con el resincronizador.

Por lo anterior no existe un daño antijurídico sobre el cual edificar la pretensión indemnizatoria.

QUE NO ESTÁ PROBADO?

Contrario a lo que se afirma en la Sentencia apelada, NO ESTA DEMOSTRADA la relación directa entre la supuesta falta de atención médica al paciente y el accidente Cerebro Vascular sufrido por el señor Rodríguez.

El Ad-Quo concluye que por falta de atención médica no se evitó el ACV, sin ningún sustento médico o científico que así lo permita concluir.

Debemos hacer énfasis en la importancia de la carga de la prueba, no es posible endilgar una supuesta responsabilidad por un daño que se predica y sobre el cual no se logra demostrar el nexo causal con el desenlace fatal del paciente y sólo con los interrogatorios de la parte demandante concluir que si existió error por una culpa endilgada al personal médico y por ello condenar a un pago de una indemnización, dejando de lado lo manifestado por médicos expertos.

No se demostró que el ACV sufrido por el paciente fuera el resultado de la supuesta falta de atención médica.

No se demostraron los supuestos daños causados en virtud de la muerte del paciente.

No está demostrado que la falta de atención médica alegada y DESVIRTUADA diera como resultado la muerte dl paciente pues el deceso se

da por Evento cerebro vascular secundario a hipertensión arterial, riesgo inherente a la enfermedad y que puede ocurrir, como ocurrió para el caso del señor Aristóbulo Rodríguez, sin previo aviso.

DICTAMEN PERICIAL:

En el dictamen pericial rendido para determinar la posible responsabilidad de la NUEVA EPS y la IPS tratante, es claro que fue emitido por médico no especializado, sólo con los folios de la historia clínica aportada por la familia del paciente, que no pudo concluir la causa de muerte del señor Rodríguez.

Sea lo primero pedir que se tenga en consideración que para tener en cuenta un peritaje y sobre el determinar una posible responsabilidad, el mismo debe ser IDÓNEO, entiéndase entonces que el mismo debe ser Adecuado y apropiado para demostrar la falla en el servicio que espera la parte actora se indilgue a los demandados.

Por ello, el experto que se pretenda designar para sustentar o fundamentar las pretensiones, deberá ser "adecuado y apropiado"; esto es, debe tratarse de una persona que domine con precisión, agilidad y profesionalidad el campo donde se pretende demostrar algo, siendo claro que, para el caso concreto, el mismo perito determina que se debe consultar a un médico especialista en retina para que desarrolle un cuestionario que se allega en el mismo peritaje.

De igual manera, es claro que con el peritaje no es posible concluir un error por parte de los galenos o un actuar con impericia o con negligencia, que de lugar a una CULPA por faltar a la Lex Artis, que conlleve a una posible indemnización.

Por lo expuesto, no es posible dar un valor concluyente al peritaje que pudiese determinar una responsabilidad médica que deba ser indemnizada.

ANTECEDENTES MÉDICOS:

Es claro dentro de las documentales, interrogatorios y testimonios que el paciente contaba con antecedentes médicos importantes que afectaban el buen desarrollo de recuperación y que finalmente ocasionan el accidente que lleva a la muerte al señor Rodríguez

Considero deberá aplicarse por el Despacho al momento de fallo el Principio de no maledicencia, que se encuentra entre otras sentencias explicado en la sentencia SC3847-2020 Radicación: 05001-31-03-012-2013-00092-01 de fecha trece (13) de octubre de dos mil veinte (2020) Magistrado Ponente LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA, así:

> *"Lo dicho presupone, en general, que el actuar médico se realiza con diligencia y cuidado. Por esto, los menoscabos o las lesiones causadas a la salud, también en línea de principio, se entienden que son excusables. Las excepciones se refieren a las faltas injustificadas (groseras, culposas, negligentes o descuidadas), eventos en los cuales deben ser reparadas íntegramente in natura» o por equivalencia.*
>
> *Para el efecto, precisamente, corresponde a quien demanda la declaración de responsabilidad y la correspondiente condena:*
> *1. Desvirtuar los principios de benevolencia o no maledicencia.*
> *2. Según la naturaleza de la responsabilidad en que se incurra (subjetiva u objetiva), o de la modalidad de las obligaciones adquiridas (de medio o de resultado), mediante la prueba de sus requisitos axiológicos. En*

particular, probar la conducta antijurídica, el daño y la relación de causalidad entre éste y aquélla, así como la culpabilidad.
(…)
El manejo de la prueba para obtener la exoneración de responsabilidad médica, por lo mismo, es distinta. En las obligaciones de medio, al demandado le basta demostrar diligencia y cuidado (artículo 1604-3 del Código Civil).
(…)
En las obligaciones de medio, por supuesto, al actuar galénico no le es exigible la infalibilidad. En palabras de la Corte, porque el «azar o el acaso es parte constitutiva de su contenido, y el resultado no depende directa y necesariamente de la actuación diligente del deudons.

En reciente jurisprudencia, la CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, reafirma con claridad que la culpa médica debe analizarse con cargo a la LEX ARTIS AD HOC y solo surgirá de la comparación entre la conducta médica y la regla de diligencia exigible.

Al respecto se cita la siguiente sentencia: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA – SALA DE CASACION CIVIL LUIS ALONSO RICO PUERTA Magistrado ponente SC4425-2021 Radicación n.º 08001-31- 03-010-2017-00267-01 Bogotá, D.C., cinco (5) de octubre de dos mil veintiuno.

"En juicios similares al que ahora ocupa la atención de la Corte, establecer la existencia y extensión de los daños corporales del paciente no suele ser una tarea excesivamente compleja o dispendiosa. De ahí que, ordinariamente, el debate procesal termine centrándose en la demostración de los otros dos puntales de la responsabilidad civil médica, esto es, el actuar culposo del galeno demandado -entendido como la inobservancia de la lex artis ad hoc- y su vínculo de causalidad con el menoscabo anunciado en la demanda. En cuanto a lo primero, conviene insistir en que el fundamento de la responsabilidad civil del médico es la culpa, conforme la regla general que impera en el sistema jurídico de derecho privado colombiano.

Por consiguiente, salvo supuestos excepcionales -como la existencia de pacto expreso en contrario-, la procedencia de un reclamo judicial indemnizatorio relacionado con un tratamiento o intervención médica no puede establecerse a partir de la simple obtención de un resultado indeseado -v.gr. el agravamiento o la falta de curación del paciente-, sino de la comprobación de que tal contingencia vino precedida causalmente de un actuar contrario al estándar de diligencia exigible a los profesionales de la salud. Ese estándar, cabe precisarlo, no puede asimilarse completamente a ninguno de los que consagra el precepto 63 del Código Civil para los distintos tipos de culpa (como el parámetro del "buen padre de familia"), ni tampoco al criterio genérico de "persona razonable", pues debe tener en cuenta las especiales características de la labor del personal médico. Lo anterior explica la necesidad de acudir a una pauta diferenciada, denominada lex artis ad hoc, esto es, Lo anotado equivale a decir que la imputación subjetiva de los galenos debe construirse comparando su proceder con el que habría desplegado un colega de su especialidad, con un nivel promedio de diligencia, conocimientos, habilidades, experiencia, etc., en caso de haberse enfrentado, hipotéticamente, al cuadro clínico del paciente afectado. Esto explica la referencia a una lex artis ad hoc, que no es otra cosa que evaluar la adecuación de las actividades del personal de salud de cara a la problemática específica de cada persona sometida a tratamiento, observando variables como su edad, comorbilidades, diagnóstico, entre otras que puedan identificarse para cada evento concreto. En los juicios de responsabilidad médica, entonces, se torna necesario determinar la conducta (abstracta} que habría adoptado el consabido profesional medio de la especialidad, enfrentado al cuadro del paciente, y atendiendo las normas de la

> ciencia médica, para luego compararlo con el proceder del galeno enjuiciado, parangón que ha de permitir establecer si este último actuó, o no, de acuerdo con el estándar de conducta que le era exigible. Si lo primero, no podrá concretarse la responsabilidad civil; si lo segundo, será necesario entroncar su "culpa", en el sentido explicado, con el resultado dañoso alegado en la demanda

SOLICITUD:

Toda vez que se probó la diligencia en la atención médica, no se probó que existiera violación a la lex artis y no se demuestra el nexo causal entre las pretendidos errores no probados y el fallecimiento del paciente, estimamos que debe absolverse a las demandadas

Por lo anterior ratifico que solicito al honorable Tribunal revoque los artículos PRIMERO, SEGUNDO, TERCERO, CUARTO, SEXTO OCTAVO, NOVENO Y DECIMO de la Sentencia de primera instancia en los cuales se condena a mi representada, al Hospital San Rafael y a la Compañía de Seguros La Previsora SA, en virtud de lo ya expuesto frente a la falta de prueba por parte de la parte demandante para demostrar el nexo causal entre el daño y la posible culpa del cuerpo médico en el desenlace fatal constituido en la jerte del señor Aristóbulo y el ACV hemorrágico sufrido en el tiempo de hospitalización y en su lugar niegue las pretensiones de la demanda y condene en costas a la parte demandante.

Atentamente,



MARIA CONSUELO GONZALEZ PINTO
Cc 52.079.928,
239.982 del Consejo Superior de la Judicatura
Apoderada Nueva EPS

MEMORIAL PARA REGISTRAR DR. CHAVARRO MAHECHA RV: sustentación recurso de apelación 2019-00137

Secretario 02 Sala Civil Tribunal Superior - Seccional Bogota
<secsctribsupbta2@cendoj.ramajudicial.gov.co>
Jue 02/02/2023 14:12

Para: **2 GRUPO CIVIL <2grupocivil@cendoj.ramajudicial.gov.co>**

MEMORIAL PARA REGISTRAR DR. CHAVARRO MAHECHA

Cordial Saludo,

OSCAR FERNANDO CELIS FERREIRA
Secretario Sala Civil
Tribunal Superior de Distrito Judicial de Bogotá
Avenida Calle 24 N° 53-28 Torre C Oficina 305
Teléfono 423 33 90 Extensión 8349
Email: secsctribsupbta2@cendoj.ramajudicial.gov.co

De: Ximena Paola Murte Infante <xmurte@confianza.com.co>
Enviado: jueves, 2 de febrero de 2023 1:12 p. m.
Para: Secretario 02 Sala Civil Tribunal Superior - Seccional Bogota
<secsctribsupbta2@cendoj.ramajudicial.gov.co>

Cc: contador@clinicachia.com <contador@clinicachia.com>; ljsanchez@velezguerrez.com <ljsanchez@velezguerrez.com>; noficaciones@velezguerrez.com <noficaciones@velezguerrez.com>; Aacosta@velezguerrez.com <Aacosta@velezguerrez.com>; medasocia@yahoo.com <medasocia@yahoo.com>; franciscojmorenor.abogado@gmail.com <franciscojmorenor.abogado@gmail.com>; Gerencia General hospital ortopedico <gerencia.general@hortopedico.com>
Asunto: sustentación recurso de apelación 2019-00137

Señores
TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE BOGOTÁ SALA DE DECISIÓN CIVIL
Antes **JUZGADO 35 CIVIL DEL CIRCUITO DE BOGOTÁ**
E. S. D.

Proceso: Verbal de Responsabilidad Civil Extracontractual
Referencia: **2019-00137**
Demandante: Kevin Andrey León Ávila
Demandados: Clínica Chía SA, Clínica Médicos Asociados SA y Hospital Ortopédicos SAS
Llamadas en garantía: Seguros Confianza SA y otros

XIMENA PAOLA MURTE INFANTE, mayor de edad, domiciliada en la ciudad de Bogotá D.C., identificado con la cédula de ciudadanía número 1.026.567.707, abogada en ejercicio, portadora de la tarjeta profesional No. 245.836 expedida por el Consejo Superior de la Judicatura, en doble calidad de representante legal y apoderada judicial de la Compañía Aseguradora de Fianzas S.A. Confianza, de acuerdo con certificado de existencia y representación judicial expedido por el certificado de la superintendencia financiera que se adjunta, me dirijo a su Honorable Despacho por medio del presente escrito, con el objeto de **sustentar el RECURSO DE APELACION propuesto el día 24 de noviembre de 2022 en contra de la sentencia de primera instancia**

Ximena Paola Murte Infante | Abogada Procesos Judiciales
Calle 82 No. 11 – 37, piso 7 | Bogotá, Colombia
Teléfono: +57 601 644 4690 Ext. 2138 | **Celular:** 313 376 31 23

CONFIANZA
Swiss Re Corporate Solutions

confianza.com.co

En Seguros Confianza trabajamos de manera flexible, por lo tanto, si necesito enviar un correo ahora, no espero una respuesta o acción fuera de tu propio horario laboral; a menos que existan razones de extremada gravedad o urgencia

La información contenida en este mensaje es confidencial y para uso exclusivo de la persona u organización a la cual está dirigida. Si no es el receptor autorizado, cualquier retención, difusión, distribución o copia de este mensaje es prohibida y sancionada por la ley. Si por error recibe este mensaje, por favor reenvíelo al remitente y borre el mensaje recibido inmediatamente. Los archivos anexos han sido escaneados y se cree que están libres de virus. Sin embargo, es responsabilidad del receptor asegurarse de ello. Seguros Confianza S.A no se hace responsable por pérdidas o daños causados por su uso.

Señores
TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE BOGOTÁ SALA DE DECISIÓN CIVIL
Antes JUZGADO 35 CIVIL DEL CIRCUITO DE BOGOTÁ
E. S. D.

Proceso: Verbal de Responsabilidad Civil Extracontractual
Referencia: 2019-00137
Demandante: Kevin Andrey León Ávila
Demandados: Clínica Chía SA, Clínica Médicos Asociados SA y Hospital Ortopédicos SAS
Llamadas en garantía: Seguros Confianza SA y otros

XIMENA PAOLA MURTE INFANTE, mayor de edad, domiciliada en la ciudad de Bogotá D.C., identificado con la cédula de ciudadanía número 1.026.567.707, abogada en ejercicio, portadora de la tarjeta profesional No. 245.836 expedida por el Consejo Superior de la Judicatura, en doble calidad de representante legal y apoderada judicial de la Compañía Aseguradora de Fianzas S.A. Confianza, de acuerdo con certificado de existencia y representación judicial expedido por el certificado de la superintendencia financiera que se adjunta, me dirijo a su Honorable Despacho por medio del presente escrito, con el objeto de **sustentar el RECURSO DE APELACION propuesto el día 24 de noviembre de 2022 en contra de la sentencia de primera instancia proferida así:**

AUSENCIA DE RESPONSABILIDAD IMPUTABLE A CLÍNICA CHÍA SA / CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES A CARGO DE LA CLÍNICA CHÍA SA

A partir de los hechos de la demanda, y las pruebas aportadas por los demandados en sus respectivas contestaciones, es posible advertir que la actuación desplegada por el personal médico de Clínica Chía SA fue acertada, oportuna y adecuada con el fin de tratar la atención inicial del demandante y su posterior remisión.

Al revisar las actuaciones de la Clínica Chía se puede observar claramente que el paciente fue tratado en debida forma acorde con la gravedad de las lesiones que presentaba, solicitando la remisión a un centro de atención en salud que contara con el nivel y los especialistas que requería, dentro de los tiempos que la norma exige para este tipo de situaciones. El paciente no duró más de 4 horas en las instalaciones de la Clínica Chía, y durante su estancia no se presentó novedad o inconformidad alguna con la atención recibida.

Es claro que posteriormente a la remisión del paciente al Hospital Ortopédicos SAS, se presentaron unas situaciones que obligaron a la remisión del paciente a otro centro de salud donde finalmente recibió las atenciones y procedimientos médico quirúrgicos que requería el mismo de acuerdo a su grave patología y diagnósticos por causa del accidente de tránsito sufrido el día 28/12/2017. Todas las situaciones ocurridas a partir de la salida del paciente de las instalaciones de la Clínica Chía SA son ajenas a su esfera de responsabilidad y por lo tanto no podría imputársele alguna conducta que derive en una responsabilidad civil n su contra.

Tal como lo indico el testigo en la etapa probatoria para Clínica Chía era imposible tener conocimiento acerca de la sanción administrativa que se le iba a imponer a Clínica Ortopédicos al día siguiente, es decir el servicio prestado por Clínica Chía fue el que se debía prestar. En este orden, Clínica Chía no debe ser condensada a ningún monto de reparación en ninguna cuantía

IMPROCEDENCIA DE RECONOCIMIENTO Y PAGO DE PERJUICIOS POR LUCRO CESANTE POR AUSENCIA DE PRUEBA

Se hace necesario advertir al despacho que ésta pretensión carece de pruebas encaminadas a demostrar elementos básicos para el estudio de la viabilidad de las mismas, pues no se

acredita la existencia de una pérdida de capacidad laboral emitida por autoridad competente sobre la cual se pueda tomar como base para el posible análisis de una indemnización.

La jurisprudencia ha establecido la improcedencia de reclamar éste tipo de perjuicios cuando la víctima directa ha sido un menor de edad, pues no existe certeza de lo que a futuro devengaría ni las circunstancias que permitirían al menor llegar a una edad productiva.

Así se ha manifestado la Corte Suprema de Justicia frente a la procedencia del reclamo por éste tipo de perjuicios:

> *"Para la Corte "…no es realmente el vínculo de parentesco o conyugal el factor determinante de la legitimación activa para reclamar la indemnización. Lo que viene en verdad a conferir el derecho es la existencia de los supuestos necesarios que configuran dicho derecho, que se concretan en esto: 1.* **La dependencia económica que tenía el reclamante de quien** *murió o* **quedó en situación física o mental que imposibiliten prestar la ayuda o socorro que venía otorgando***. 2. El daño cierto que la muerte o la situación de quien daba la ayuda al dependiente,* **esto es que haya certeza de que dadas las circunstancias, la ayuda o socorro habría continuado***. Con otras palabras que esa dependencia no se deriva de una relación ilícita y, por tanto, la pretensión venga a conformar una aspiración que repugne al derecho. 3***. Que la pretensión indemnizatoria no signifique obtener una ventaja o un provecho contrario a la moral o al derecho***. Los anteriores supuestos debidamente demostrados estructuran el fundamento para aceptar que el damnificado tiene derecho a reclamar del responsable la respectiva indemnización" (CCXXXI, Vol. II, 867).*
>
> *Por lo tanto, se denegará el lucro cesante pretendido por los padres y hermanas."* (Exp. No.11001-3103-018-1999-00533-01)

Para concluir, es claro que el lucro cesante está constituido por ganancias concretas que el damnificado se vio privado de recibir, no incluye utilidades eventuales que aquel podría haber ganado con posterioridad al daño, en caso de no haberse producido.

El lucro cesante no se presume, quien reclama debe probar fehacientemente su existencia.
Para su cuantificación, se deberá hacer enmarcada dentro del principio de la razonabilidad – aquello que razonablemente se dejó de percibir. Es decir, que no caben pretensiones desmedidas producto de especulación de ganancias remotas.

Debe existir una probabilidad cierta, objetiva, resultante del decurso normal de las cosas y de las circunstancias del caso concreto.

Así se ha referido el Consejo de Estado frente al lucro cesante:

> *8.6.- Perjuicios materiales en la modalidad de lucro cesante.*
>
> *8.6.1.- Es el artículo 1614 del Código Civil el que establece la disposición normativa respecto de la indemnización de perjuicios materiales a título de lucro cesante, ubicado dentro del Libro IV del Código relativo a las obligaciones y los contratos. En dicho artículo el Código define el lucro cesante como "la ganancia o provecho que deja de reportarse a consecuencia de no haberse cumplido la obligación, o cumpliéndola imperfectamente, o retardado su cumplimiento.". A partir de allí, queda claro que la indemnización de perjuicios abarca el aumento patrimonial que fundadamente podía esperar una persona de no ser por haber tenido lugar, en el caso de la responsabilidad extracontractual, el hecho dañoso***, por lo tanto este perjuicio se corresponde con la idea de ganancia frustrada.** *Al respecto esta Corporación ha sostenido:*
>
> *"En cuanto al lucro cesante esta Corporación ha sostenido reiteradamente, que se trata de la ganancia frustrada o el provecho económico que deja de reportarse y que, de no producirse el daño, habría ingresado ya o en el futuro al patrimonio de la víctima. Pero que como todo perjuicio, para que proceda su indemnización,* **debe ser cierto, como quiera que el perjuicio eventual no otorga derecho a reparación alguna.** *Así las cosas, este perjuicio, como cualquier otro, si se prueba, debe indemnizarse en lo causado."*
>
> *8.6.2.- En cualquier caso, la indemnización por concepto de lucro cesante no constituye sanción alguna, ya que su vocación es el restablecimiento del equilibrio económico*

derivado del daño antijurídico producido e imputado al responsable, cuya causación se cuantifica desde la fecha de los hechos"[1] (Negrillas y subrayas propias)

En el presente caso es claro que el Juzgado de conocimiento de primera instancia erro en la interpretación y la causación de perjuicios en la modalidad de lucro cesante, teniendo en cuenta que no se aportó material probatorio que demostrara la afectación del demandante en este sentido pues nunca se probo la perdida de capacidad laboral del demandante y por ello era absolutamente imposible definir un monto indemnizatorio

De manera que es claro que el patrimonio del señor LEON AVILA no experimentó mengua alguna, derivada de la no obtención de ganancias o ingresos durante el período referido en la estimación de perjuicios realizada por la parte actora, e incluso así quedó acreditado en los interrogatorios practicados al extremo activo, quienes coincidieron en afirmar que, para ese momento, la EPS había pagado las incapacidades y adicionalmente, se encontraba con contrato laboral vigente

En consecuencia, el presente rubro del perjuicio material no reúne los requisitos contemplados en los artículos 1613, 1614 del Código Civil, ni mucho menos encuentra asidero en los parámetros Jurisprudenciales establecidos por las Altas Cortes, en materia de valoración y cuantificación de perjuicios en juicios de responsabilidad civil.

NOTIFICACIONES

Se señala como dirección de notificaciones a mi representada la siguiente: Calle 82 No. 11-37 Piso 7, Bogotá D.C.

Correo electrónico: xmurte@confianza.com.co

Teléfono: (1) 6444690

Del señor Juez,



XIMENA PAOLA MURTE INFANTE
C.C. No. 1.026.567.707
T.P. No. 245.836 del C. S. de la J.

[1] Consejo de Estado. Expediente 68001-23-31-000-2007-00358-01 (50154).

La validez de este documento puede verificarse en la página www.superfinanciera.gov.co con el número de PIN

Certificado Generado con el Pin No: 7827878774775720

Generado el 16 de mayo de 2022 a las 18:01:37

ESTE CERTIFICADO REFLEJA LA SITUACIÓN ACTUAL DE LA ENTIDAD HASTA LA FECHA Y HORA DE SU EXPEDICIÓN

EL SECRETARIO GENERAL

En ejercicio de las facultades y, en especial, de la prevista en el artículo 11.2.1.4.59 numeral 10 del decreto 2555 de 2010, modificado por el artículo 3 del decreto 1848 de 2016.

CERTIFICA

RAZÓN SOCIAL: COMPAÑÍA ASEGURADORA DE FIANZAS S.A. CONFIANZA, pudiendo utilizar la sigla SEGUROS CONFIANZA S.A.

NIT: 860070374-9

NATURALEZA JURÍDICA: Sociedad Comercial Anónima De Carácter Privado. Entidad sometida al control y vigilancia por parte de la Superintendencia Financiera de Colombia.

CONSTITUCIÓN Y REFORMAS: Escritura Pública No 1363 del 04 de junio de 1979 de la Notaría 18 de BOGOTÁ D.C. (COLOMBIA). Bajo la denominación de COMPAÑIA ASEGURADORA DE FIANZAS S. A. CONFIANZA

Escritura Pública No 2504 del 27 de junio de 1995 de la Notaría 36 de BOGOTÁ D.C. (COLOMBIA). Cambió su razón social por COMPAÑIA ASEGURADORA DE FIANZAS S.A. CONFIANZA, sigla CONFIANZA S.A.

Escritura Pública No 2534 del 30 de junio de 2000 de la Notaría 31 de BOGOTÁ D.C. (COLOMBIA). la sociedad tendrá su domicilio principal en la ciudad de Santafé de Bogotá D.C.

Escritura Pública No 598 del 21 de abril de 2016 de la Notaría 35 de BOGOTÁ D.C. (COLOMBIA). Cambió su razón social de COMPAÑIA ASEGURADORA DE FIANZAS S.A. CONFIANZA, por COMPAÑÍA ASEGURADORA DE FIANZAS S.A. CONFIANZA, pudiendo utilizar la sigla SEGUROS CONFIANZA S.A.

AUTORIZACIÓN DE FUNCIONAMIENTO: Resolución S.B. 7220 del 23 de diciembre de 1981

REPRESENTACIÓN LEGAL: El Presidente será designado por la Junta Directiva, El Presidente será el representante legal principal de la Sociedad. La Sociedad tendrá dos (2) representantes legales suplente designados por la Junta Directiva de entre aquellos empleados que ocupen cargos de vice-presidente o superiores o secretario general, de acuerdo con lo estipulado por la ley. Los representantes legales suplentes actuarán como sustitutos del Presidente en caso de ausencia temporal o absoluta del mismo y cuando actúen como tal, los representantes legales suplentes tendrán todas las atribuciones del Presidente y estarán sujetos a todas las restricciones del mismo. La Junta Directiva podrá, en cualquier momento, remover al Presidente y los representantes legales suplentes, en sus respectivas funciones bajo tales calidades. Todos los demás ejecutivos de la Sociedad serán escogidos por el Presidente e incluirán un Secretario General, uno o más Vice-Presidentes, Gerente, Directores (a diferencia de los miembros de la Junta Directiva) y demás funcionarios y empleados, Cualquier número de cargos podrá ser ejercido por la misma persona a menos que se establezca lo contrario en la ley o en estos Estatutos. Los Ejecutivos de la sociedad no tienen que ser Accionistas. La Sociedad tendrá representantes legales exclusivamente para atender asuntos judiciales, administrativos y juicios fiscales, específicamente para asistir, a juicio del Presidente, a las audiencias y diligencias judiciales, administrativas y de juicios fiscales a las cuales sea citada la Sociedad, con las limitaciones establecidas en este artículo. Serán representantes legales para asuntos judiciales, administrativos y juicios fiscales en los las personas que designe la Junta Directiva que sean necesarias y los mismos tendrán facultades de hasta mil

CERTIFICADO VALIDO EMITIDO POR LA SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Certificado Generado con el Pin No: 7827878774775720

Generado el 16 de mayo de 2022 a las 18:01:37

ESTE CERTIFICADO REFLEJA LA SITUACIÓN ACTUAL DE LA ENTIDAD HASTA LA FECHA Y HORA DE SU EXPEDICIÓN

(1000) salarios mínimos mensuales vigentes. Sujeto a los términos, condiciones y limitaciones impuestas por estos Estatutos y cualquier otro término, condición o limitación que pueda ser establecida por la ley, la Asamblea General de Accionistas y la Junta Directiva, las atribuciones del Presidente serán: a) Ejecutar, manejar y supervisar los negocios de la Sociedad. b) Representar a la Sociedad ante los Accionistas, terceras partes y cualquier autoridad administrativa o gubernamental. c) Asegurar que la Sociedad ejecute y cumpla con sus obligaciones contractuales, de acuerdo con la ley aplicable; estos Estatutos y las resoluciones de la Junta Directiva y de la Asamblea General de Accionistas. d) Ejecutar en nombre de la Sociedad actos, acuerdos y operaciones por montos que no sobrepasen COP $10.000.000.000 (entendiéndose que para cualquier acto, acuerdo y operación que sobrepase este límite deberá solicitar la autorización de la Junta Directiva según lo estipulado en la Sección 8.15). e) Ejecutar, sujeto a las limitaciones de atribuciones aquí establecidas, todas las pólizas, hipotecas, contratos y demás instrumentos de la Sociedad, excepto cuando se requiera que estos sean firmados y ejecutados por otros según la ley y excepto cuando otros ejecutivos de la Sociedad puedan firmar y ejecutar documentos cuando así los autoricen estos Estatutos, la Junta Directiva o el Presidente. f) Designar uno o más Vice-Presidentes. g) Aceptar las renuncias de los empleados y decidir sobre su remoción cuando estos hayan incumplido con el Reglamento Interno de Trabajo, los Manuales de Procedimientos o las instrucciones establecidas por las directivas de la Sociedad, de acuerdo con los procedimientos establecidos en el Régimen Laboral Colombiano. h) Presentar para aprobación de la Junta Directiva las cuentas, estados financieros, presupuesto de gastos, inventarios y cualquier otro asunto cuya responsabilidad deba ser compartida con la Junta Directiva. i) Presentar un informe escrito explicativo para que sea entregado por la Junta Directiva a la Asamblea General de Accionistas. j) Presentar el Reglamento Interno de Trabajo de la Sociedad para aprobación de la Junta Directiva. k) Apoderar y delegar autoridad específica a apoderados judiciales y extra-judiciales de la Sociedad. l) Convocar a la Junta Directiva cuando quiera que lo considere conveniente o necesario, manteniendo a la misma informada sobre el desempeño de la Sociedad. m) Informar sobre actividades comprobadas de su desempeño cuando esto sea requerido por la Asamblea General de Accionistas o la Junta Directiva y al final de cada año fiscal de la Sociedad y cuando él o ella presente su renuncia. n) Contratar o despedir a los empleados de la Sociedad. o) Desempeñar las demás funciones y ejercer las demás atribuciones que ocasionalmente le puedan ser asignadas por estos Estatutos o la Junta Directiva(Escritura Pública No. 1614 del 19/09/2014 Notaría 35 de Bogotá D.C.)

Que figuran posesionados y en consecuencia, ejercen la representación legal de la entidad, las siguientes personas:

NOMBRE	IDENTIFICACIÓN	CARGO
Esmeralda Malagón Meola Fecha de inicio del cargo: 28/04/2022	CC - 32755752	Presidente Encargado
Maria Juana Herrera Rodriguez Fecha de inicio del cargo: 28/10/2021	CC - 52420596	Primer Suplente del Presidente
Samuel Rueda Gómez Fecha de inicio del cargo: 30/08/2002	CC - 5552706	Segundo suplente del Presidente
Natalia Alejandra Moncayo Rodriguez Fecha de inicio del cargo: 16/07/2019	CC - 1020729468	Representante Legal para Asuntos Judiciales
Ximena Paola Murte Infante Fecha de inicio del cargo: 02/05/2022	CC - 1026567707	Representante Legal para Asuntos Judiciales
Christian David Martínez Caballero Fecha de inicio del cargo: 02/05/2022	CC - 1019063113	Represenante Legal para Asuntos Judiciales
Paula Estefanía García Santos Fecha de inicio del cargo: 02/05/2022	CC - 1018437442	Representante Legal para Asuntos Judiciales
José Nicolas Sandoval Guerrero Fecha de inicio del cargo: 02/05/2022	CC - 1136884966	Representante Legal para Asuntos Judiciales
John Jairo González Herrera Fecha de inicio del cargo: 16/07/2019	CC - 80065558	Representante Legal para Asuntos Judiciales

CERTIFICADO IVADOC EMITIDO POR LA SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Certificado Generado con el Pin No: 7827878774775720

Generado el 16 de mayo de 2022 a las 18:01:37

ESTE CERTIFICADO REFLEJA LA SITUACIÓN ACTUAL DE LA ENTIDAD HASTA LA FECHA Y HORA DE SU EXPEDICIÓN

NOMBRE	IDENTIFICACIÓN	CARGO
Gloria Esperanza Navas González Fecha de inicio del cargo: 17/09/2020	CC - 35408565	Represetante Legal para Asuntos Judiciales
Nicolas Urriago Fritz Fecha de inicio del cargo: 02/05/2022	CC - 1014206985	Representante Legal para Asuntos Judiciales
Jessika González Moreno Fecha de inicio del cargo: 28/01/2008	CC - 52220613	Representante Legal Fines Judiciales
Claudia García Echeverri Fecha de inicio del cargo: 28/01/2008	CC - 52283101	Representación Legal Fines Judiciales
Ivonne Gissel Cardona Ardila Fecha de inicio del cargo: 25/06/2012	CC - 52903237	Representante Legal para Fines Judiciales
Mónica Liliana Osorio Gualteros Fecha de inicio del cargo: 25/06/2012	CC - 52811666	Representante Legal Fines Judiciales

RAMOS: Resolución S.B. No 5148 del 31 de diciembre de 1991 Cumplimiento, Responsabilidad civil, Todo riesgo para contratistas.

Resolución S.B. No 2786 del 14 de diciembre de 1994 Vida Grupo.

Resolución S.B. No 839 del 25 de agosto de 1997 Accidentes personales.

Resolución S.F.C. No 1035 del 29 de junio de 2011 revoca la autorización concedida a la Compañía Aseguradora de Fianzas S.A. Confianza para operar los ramos de Seguros de Vida Grupo y Accidentes Personales, confirmada con resolución 1954 del 01 de noviembre de 2011.

Resolución S.F.C. No 0385 del 08 de abril de 2016 Autoriza para operar los ramos de incendio, terremoto, sustracción, corriente débil, lucro cesante y montaje y rotura de maquinaria.

Resolución S.F.C. No 0043 del 18 de enero de 2019 Autoriza para operar el ramo de seguro de transporte.

Resolución S.F.C. No 0866 del 03 de julio de 2019 Autoriza para operar el ramo de seguro de vida grupo.

CERTIFICADO VÁLIDO EMITIDO POR LA SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

JOSUÉ OSWALDO BERNAL CAVIEDES
SECRETARIO GENERAL

"De conformidad con el artículo 12 del Decreto 2150 de 1995, la firma mecánica que aparece en este texto tiene plena validez para todos los efectos legales."

Consejo Superior de la Judicatura

REPUBLICA DE COLOMBIA

RAMA JUDICIAL

CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
TARJETA PROFESIONAL DE ABOGADO



NOMBRES:
XIMENA PAOLA

APELLIDOS:
MURTE INFANTE

Ximena Paola Murte

PRESIDENTE CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
FRANCISCO JAVIER RICAURTE GÓMEZ

UNIVERSIDAD
CATOLICA DE COLOMBIA

FECHA DE GRADO
20 jun 2014

CONSEJO SECCIONAL
BOGOTA

CEDULA
1.026.567.707

FECHA DE EXPEDICION
11 ago 2014

TARJETA N°
245836

Escaneado con CamScanner

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 1.026.567.707
MURTE INFANTE
APELLIDOS
XIMENA PAOLA
NOMBRES



Ximena Paola Murte
FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 22-MAY-1991
BOGOTA D.C.
(CUNDINAMARCA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.60 ESTATURA | O+ G.S. RH | F SEXO

03-JUL-2009 BOGOTA D.C.
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

P-1500150-00170394-F-1026567707-20090818 0015080676A 1 29149178

Escaneado con CamScanner

MEMORIAL PARA REGISTRAR DR. CHAVARRO MAHECHA RV: MEMORIAL SUSTENTACION RECURSO APELACION RADICADO 110013103 035 2019 00137 01

Secretario 02 Sala Civil Tribunal Superior - Seccional Bogota
<secsctribsupbta2@cendoj.ramajudicial.gov.co>
Mar 31/01/2023 3:01 PM

Para: **2 GRUPO CIVIL <2grupocivil@cendoj.ramajudicial.gov.co>**

MEMORIAL PARA REGISTRAR DR. CHAVARRO MAHECHA

Cordial Saludo,

OSCAR FERNANDO CELIS FERREIRA
Secretario Sala Civil
Tribunal Superior de Distrito Judicial de Bogotá
Avenida Calle 24 N° 53-28 Torre C Oficina 305
Teléfono 423 33 90 Extensión 8349
Email: secsctribsupbta2@cendoj.ramajudicial.gov.co

De: Gerencia General hospital ortopedico <gerencia.general@hortopedico.com>
Enviado: martes, 31 de enero de 2023 1:41 p. m.
Para: Secretario 02 Sala Civil Tribunal Superior - Seccional Bogota <secsctribsupbta2@cendoj.ramajudicial.gov.co>; jscrue@hotmail.com <jscrue@hotmail.com>; contador@clinicachia.com <contador@clinicachia.com>; ljsanchez@velezguerrez.com <ljsanchez@velezguerrez.com>; noficaciones@velezguerrez.com <noficaciones@velezguerrez.com>; Aacosta@velezguerrez.com <Aacosta@velezguerrez.com>; medasocia@yahoo.com <medasocia@yahoo.com>; franciscojmorenor.abogado@gmail.com <franciscojmorenor.abogado@gmail.com>; Ximena Paola Murte Infante <xmurte@confianza.com.co>; John Jairo Gonzalez Herrera <jjgonzalez@confianza.com.co>
Asunto: MEMORIAL SUSTENTACION RECURSO APELACION RADICADO 110013103 035 2019 00137 01

Doctor:
JAIME CHAVARRO MAHECHA
MAGISTRADO SAL CIVIL TRIBUNAL SUPERIOR DE BOGOTÁ
secsctribsupbta2@cendoj.ramajudicial.gov.co

PROCESO:	RESPONSABILIDAD MÉDICA
DEMANDANTE:	KEVIN ANDREY LEON AVILA
DEMANDADO:	HOSPITAL ORTOPEDICO S.A.S Y OTROS
RADICADO	110013103 035 2019 00137 01
ASUNTO	SUSTENTACIÓN RECURSO DE APELACIÓN SENTENCIA

JULIETH JOHANNA CORTÉS LOPEZ, abogado en ejercicio, portador de la tarjeta profesional de abogado No. 236.082 del Consejo Superior de la Judicatura, actuando en calidad de apoderado judicial de **HOSPITAL ORTOPÉDICO SAS**, por medio del presente escrito, dentro del término legal, procedo a SUSTENTAR el recurso de apelación interpuesto contra la sentencia proferida por el juzgado 35 civil del circuito el 24 de

noviembre de 2022, y pongo en conocimiento a las partes intervinientes dentro del presente proceso el mismo.

Cordialmente,

--
JULIETH JOHANNA CORTÉS LOPEZ
Abogado
Carrera 32 No. 25 A - 60 Bogotá.
319-3104124

Doctor
JAIME CHAVARRO MAHECHA
Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá
Sala de Decisión Civil
Ciudad

PROCESO	VERBAL
DEMANDANTE	KEVIN ANDREY LEÓN ÁVILA
DEMANDADA	HOSPITAL ORTOPEDICO SAS Y OTROS
RADICADO	**110013103 035 2019 00137 01**
INSTANCIA	SEGUNDA – APELACION SENTENCIA
ASUNTO	SUSTENTACIÓN RECURSO APELACIÓN

JULIETH JOHANNA CORTES LOPEZ, Identificada con la cedula de ciudadanía No. 1015400733 y T.P. 236.082 C.S.J, actuando en calidad de apoderada judicial de la sociedad demandada **HOSPITAL ORTOPEDICO SAS** de manera respetuosa, me permito presentar recurso de apelación ante este Honorable Tribunal de conformidad con el **Art. 322 del C.G.P** con miras a impugnar la decisión adoptada mediante sentencia proferida el 24 de noviembre de 2022 por el Juzgado Treinta y Cinco Civil del Circuito de Bogotá, con fundamento en las siguientes consideraciones:

MOTIVOS DE INCONFORMIDAD

La parte actora no logro acreditar la culpa o la falla incurrida por parte de **HOSPITAL ORTOPEDICO SAS,** y que esta sociedad fue la causante del daño sufrido al señor **KEVIN ANDREY LEON AVILA**, nótese con la HC tanto de la **CLINICA CHIA** y **HOSPITAL ORTOPEDICO SAS** que el diagnóstico del paciente fue el de **SUBLUXACION DE ARTICULACION DE RODILLA IZQUIERDA** hecho probado con las HC de **CLÍNICA CHÍA** y **HOSPITAL ORTOPÉDICO SAS,** documentos que obran dentro del expediente, por lo que desde el primer momento requería únicamente el servicio de **ORTOPEDIA Y TRAUMARTOLOGIA**., servicio por el cual fue remitido a **HOSPITAL ORTOPÉDICO SAS,** hecho que quedo probado y no fue tenido en cuenta por el despacho al momento de fallar, pues no se logró probar una lesión vascular al ingreso en esta institución ni en su estancia, como se probó con las siguientes anotaciones que obran en HC de esta institución: **Anotación**: **1.** HC de fecha **28 de diciembre de 2017 HORA: 07:28 pm** donde al examen físico realizado al paciente se anota: "*adecuado llenado capilar*" lo mismo se anotó el día de egreso de esta institución **2.** HC de fecha **30 de diciembre de 2017; Hora: 09:05 am** en HC de **HOSPITAL ORTOPEDICO SAS** se anota: "*Al examen físico rodilla izquierda con gran edema, equimosis en región poplítea, dolor intenso, excoriación en región poplítea, adecuado llenado capilar, pulsos distales presentes.*" Circunstancias de tiempo, modo y lugar que se probaron con la HC de esta entidad donde se prueba que en la estancia en esta institución no se evidencio algún tipo de sintomatología que pensara algún tipo de lesión vascular, y además que desde su ingreso a la **CLINICA**

CHIA el no presentaba algún signo que requiriera esa especialidad, por eso fue remitido para la especialidad de **ORTOPEDIA y TRAUMATOGIA.**

De igual forma se probó y no fue tenido en cuenta por el despacho que en la HC de esta entidad el paciente si fue valorado por especialistas en esta institución, tanto así que ordenaron su remisión a sala de cirugías para la realización de la cirugía de fijación ligamentaria **(HC 29/12/2019 HORA:08:00 HORAS** "*Paciente es valorado por médico tratante y especialistas quienes ordenaron subir a sala de cirugías.*", no se probó pues no obra una sola prueba en el expediente que durante la estancia del paciente en esta institución y a la salida por remisión, presentara algún signo de lesión vascular pues los exámenes físicos realizados al paciente en esta institución no se anotó alguna sintomatología por este asunto.

Ahora bien el elemento objeto de la responsabilidad civil, es entendido como "*Todo detrimento o lesión que una persona causa a otra en el orden patrimonial, físico, moral, intelectual o afectivo.*" Sin el daño no se concibe el deber de indemnizar aun cuando se produzca la culpa, de ahí la necesidad procesal de su plena demostración, que corresponde al actor.

De igual forma el mismo perito traído al proceso el Dr. Saldarriaga no pudo dilucidar a CIENCIA CIERTA donde se produjo dicha lesión vascular en **KEVIN ANDREY LEON AVILA**, pues para él, en lo manifestado en informe rendido en audiencia de instrucción y juzgamiento acoto que es difícil determinar o especificar donde se generó esa lesión vascular ya que el musculo tiene 8 horas de vida aproximadamente para que se presente la isquemia, de haber sido así al momento de ingresar el paciente a esta institución se hubiera evidenciado el pie caído izquierdo, hipoestesia plantar, frialdad distal del pie izquierdo, retardo en el llenado capilar, hecho que no ocurrió sino hasta después de la cirugía realizada de fijador externo transarticular de rodilla izquierda como quedó demostrado en la HC de Fundadores de fecha **01/01/2018 HORA: 12:38:20** REITERO de ser así cuando el paciente ingreso a esta entidad ya se hubiera podido percibir algún daño de una lesión vascular o algún síntoma determinante para este tipo de lesión.

De igual forma es importante que se tenga en cuenta que en las consideraciones del fallo de primera instancia el Juez de instancia manifestó: "*El daño vascular fue advertido en su valoración de ingreso por el ortopedista Dr. Héctor Manuel Orjuela Pérez de la última clínica donde este llegó CLINICA FUNDADORES, el cual insistió en la valoración urgente por cirugía vascular.*"

Lo anterior resulta no ser cierto ya que el paciente ingreso a CLINICA FUNDADORES el 30 de diciembre de 2017; Hora: 13:03: y fue atendido por el médico general Dr. Fernando Iván Fernández Corredor quien en su análisis anota: "*DIAGNOSTICOS PRINCIPAL "Luxación de rodilla*" solo hasta 30 de diciembre de 2017 Hora: 20:04:25 es valorado por el especialista Dr. Héctor Manuel Orjuela Pérez quien anota: "*Paciente sexo masculino 23 años quien hace 2 días en accidente de tránsito sufrió luxación posterior de rodilla izquierda, actualmente inmovilizado con férula inguinopedica refiere leve dolor y parestesias en dorso de pie izquierdo aceptable*

perfusión distal." Y en su análisis anota: "*Paciente requiere reducción de la luxación y estabilización con tutor transarticular de rodilla izquierda, previa valoración urgente por cirugía vascular…*" En ese momento el paciente tenia perfusión distal, la pregunta es si la valoración por vascular ya se hacía urgente porque solo la **CLINICA FUNDADORES** lo valoro hasta el **01 de enero de 2018 HORA 14:04:12** tal como se prueba con la HC de esa entidad y la Juez de instancia concluyo que la atención de esa entidad se ajustaba al historial clínico del paciente, argumentado que el perito Dr. Saldarriaga Médico especialista en daño corporal así lo constato en el dictamen rendido cuando este manifestó: "*Al ingresar a la CLINICA FUNDADORES el señor KEVIN ANDREY LEON AVILA presentaba un gran edema y más dolor y los médicos ya no detectaban pulsos distales en dicha extremidad.*" Afirmación que no fue probada en este proceso teniendo en cuenta las anotaciones realizadas en la HC de esta entidad (CLINICA FUNDADORES)

Por lo que a este extremo procesal no le resulta claro las consideraciones del Juez de instancia al asegurar lo siguiente: "*Puede decirse que en la CLINICA FUNDADORES se brindó por fin atención medica pertinente al paciente pero en todo caso tardía debido al lapso transcurrido desde el momento de la lesión en este punto la amputación de la pierna del paciente era inevitable*."

Conforme a lo anterior dentro del presente proceso no se pudo probar donde se originó el daño que causo la perdida de la extremidad del demandante.

Nótese Honorable Magistrado que la parte demandante no realiza ningún análisis científico en este proceso, pues al mismo es traído el Dr. Jonathan Saldarriaga medico especialista en daño corporal y la Juez de instancia concluyo su idoneidad al manifestar lo siguiente: "*Aunque si bien el perito no es ortopedista es un especialista en daño corporal como lo muestran sus credenciales académicas y según el ins "Las secuelas que producto de un accidente laboral de transito afecten anatómicamente o funcionalmente al paciente produciendo una disminución a su capacidad el medico evaluador determina el porcentaje de daño corporal con base a las lesiones descritas, los diagnósticos o la evolución clínica.*" Es decir estudia secuelas que determinan el porcentaje del daño, hecho que no demostró, pues no hizo relación al tema de su especialidad al momento de rendir su peritaje judicial, cosa distinta sus pronunciamiento fueron sobre la especialidad de ortopedia y cirugía vascular conocimientos que no se lograron probar ya que no cuenta con dichos conocimiento.

El perito en esta oportunidad solo hizo manifestaciones y apreciaciones que no determinaron donde se produjo el daño que ocasiono la perdida de la extremidad izquierda del demandante, de acuerdo con sus declaraciones referente al tema en audiencia de instrucción y juzgamiento, el juez al valorar el peritaje no observo que el mismo no fue rendido por un experto en ortopedia y/o traumatología y cirugía vascular, pues sobre esta última especialidad no hizo ningún pronunciamiento, es decir no contaba con los conocimientos médicos especiales de ortopedia y traumatología ni tampoco y no menos importante en cirugía

vascular, además no fue claro, preciso y detallado, es decir, no conto con los exámenes, experimentos e investigaciones efectuadas, los mismos que observaran fundamentos técnicos, científicos o artísticos, de donde se infiere que lo manifestado daba certeza y veracidad sobre los hechos, motivos y circunstancias para determinar responsabilidad alguna a mi representado, más bien generan duda que debe resolverse a favor de **HOSPITAL ORTOPEDICO SAS**, De otra parte las circunstancias de tiempo, modo y lugar presentadas en la entidad que represento no fueron objeto de estudio, análisis y valoración por el despacho, de haberse observado tales circunstancias se hubiese determinado el daño que produjo la perdida de la extremidad del demandante.

El juzgador de primera instancia no se pronunció sobre el hecho de no encontrar demostrada la culpa ni el nexo causal, frente a mi representado tampoco se pronunció sobre el hecho de que no fueron demostrados los perjuicios reclamados en la demanda, quedando en evidencia que incurre el despacho en un error de hecho y de derecho, al decidir condenar a **HOSPITAL ORTOPEDICO SAS**, cuando en el curso del proceso no hay pruebas que conduzcan a tal determinación.

Suficientemente es conocido, en el campo contractual, la responsabilidad médica descansa en el principio general de la culpa probada, salvo cuando en virtud de las "*estipulaciones especiales de las partes*" (artículo 1604, *in fine*, del Código Civil), se asumen, por ejemplo, obligaciones de resultado, ahora mucho más, cuando en el ordenamiento patrio, el artículo 104 de la Ley 1438 de 2011, ubica la relación obligatoria médico-paciente como de medios.

Es de advertir que el error de derecho, se constituye sobre la base de aceptar la prueba, la cual según la Corte Suprema de Justicia PRECISA: La prueba debe ser "*.. exacta y objetivamente apreciada pero que, al valorarla, el juzgador infringió las normas legales que reglamentan tanto su producción como su eficacia*".

Así mismo en Sentencia *SC15746 de 2014 de la H. Corte Suprema de Justicia, MP: FERNANDO GIRALDO GUTIÉRREZ* expresa sobre el tema: "*La prueba pericial, como lo advierte el precepto probatorio que invoca el opugnador, «es procedente para verificar hechos que interesen al proceso y requieran especiales conocimientos científicos, técnicos o artísticos», que, en principio, requiere de solicitud del interviniente interesado en demostrarlos*" en este caso el perito no tenía conocimientos médicos especializados en las especialidades de ortopedia y/o traumatología como tampoco era especialista vascular, razón indispensable para la práctica de este dictamen pericial, en conclusión el dictamen pericial aportado al proceso fue rendido por un especialista en valoración del daño corporal y no por un experto en las especialidades de ortopedia y/o traumatología y cirugía vascular lo que resulta importante para determinar donde se ocasionó el daño al paciente sustentado desde sus conocimientos técnicos y científicos en esas especialidades lo cual no ocurrió en este proceso y el cual fue determinante para falla en contra de esta entidad.

En la doctrina, según **Jairo Parra Quijano**, se expresa que es necesario el uso de este medio de prueba dentro de un proceso; "*(…) cuando en sentido general, en el proceso se requieren conocimientos especializados, es decir de aquellos que escapan a las culturas de las gentes, pueden y deben recurrirse a quienes por sus estudios, experiencia, etcétera, los posean (…)*" **(Parra, 2006**) en este caso el perito Dr. Saldarriaga no era idóneo para dilucidar y dar claridad a este proceso pues no tenía los conocimientos específicos sobre el tema lo que era necesario de un médico vascular para dilucidar y dar claridad a la lesión sufrida por el paciente.

Para el presente caso este extremo judicial no entiende por qué el operador judicial profiere una sentencia declarando una responsabilidad por mala práctica médica sin la presencia de un dictamen pericial: en documento **TITULADO LA PRUEBA PERICIAL Y SU IMPORTANCIA DENTRO DE LOS PROCESOS POR MALA PRÁCTICA MÉDICA SOLÓRZANO, 2011 EXPRESA**: "*La importancia de este medio probatorio en los temas de responsabilidad médica es fundamental, ya que para que la conducta de un médico pueda ser valorada, y establecer si este actuó conforme a lo que establece la ley de ética médica, o la lex artis, necesariamente se requiere de un experto que en la calidad de perito determine si el médico actuó o no conforme a lo que ordena la ciencia médica, de allí que necesariamente se debe señalar que en procesos en donde se juzgue a un profesional médico, sin que exista perito médico, difícilmente se podrá concluir si éste es o no responsable*." Por lo que no es posible una sentencia condenatoria si con el proceso no se cuenta con un buen dictamen pericial idóneo que permita determinar la mala praxis o que esta entidad contribuyo en el desafortunado desenlace del señor Kevin león.

Es importante dejar claro que el juez de instancia tomo como indicios para su fallo el acta de fecha **29 de diciembre de 2017** en la cual se impone una medida preventiva a esta entidad, es de aclarar y quedo probado que para el 28 de diciembre hora: 07:28 pm fecha y hora de ingreso del paciente a esta institución nos encontrábamos habilitados para prestar los servicios de salud solo hasta el **29 de diciembre de 2017** se nos fue impuesta una medida de seguridad de suspensión temporal y preventiva de algunos servicios lo que hace que tengamos que remitir al paciente a otra institución de salud, esto no quiere decir que no estuviéramos cumpliendo con los estándares de calidad ya que no se probó dentro del proceso algún tipo de sanción por parte de la Secretaria de Salud de Bogotá por los hechos anotados en el acta aportada en la contestación de la demanda, por el hecho de ser sujetos de Vigilancia y Control, no se puede endilgar ningún tipo de responsabilidad a esta entidad que solo dio cumplimiento a una orden impartida por un ente de control **REITERO** en el plenario no se observa algún tipo de sanción por los hechos consignados en el acta, por lo que no se aprueba por este extremo procesal, que los argumentos dados por el juez de instancia, se tuviera en cuenta lo anotado en el acta, cuando no se probó alguna sanción por estos hechos pues los tomo por ciertos para determinar responsabilidad a esta entidad vulnerando así el debido proceso.

En cuanto al dictamen pericial aportado correspondiente a la pérdida de capacidad laboral del demandante, el Juez de instancia determino que este no era idóneo para determinar la pérdida de capacidad laboral, por lo que no tuvo en cuenta dicha prueba, pero no habiendo prueba suficiente que determinara dicha perdida y además que el apoderado de la parte demandante desistió de la prueba de la junta médica ya oficiada en audiencia de instrucción y juzgamiento, el Juez de instancia resuelve por analogía darle una pérdida de capacidad laboral del 50% al demandante el señor **KEVIN ANDREY LEON AVILA** (*Dictamen Junta Regional que se aportó al proceso el 16 de diciembre de 2022 y en la cual se da una calificación por debajo de lo apreciado por el Juez.)*de conformidad con el decreto 1507 de 2014, lo que no resulta lógico teniendo en cuenta que las juntas de calificación de invalidez: "*son organismos de creación legal, autónomos, con personeria jurídica, sin ánimo de lucro, adscritas al ministerio del trabajo, cuyas decisiones son de carácter obligatorio. Sobre el tema los dictámenes de calificación de invalidez incluyen una decisión sobre el origen, la fecha de estructuración y la calificación porcentual de la perdida de la capacidad laboral. Además, es indispensable que se fundamenten todos los elementos probatorios disponibles, tales como la historia clínica, exámenes médicos, etc, no son actos administrativos pero deben estar debidamente motivados, mediante fundamentos de hecho y de derecho.*"

Los Artículos 38 a 43 de la Ley 100 de 1993 establecen el procedimiento que se debe seguir para obtener la calificación de la pérdida de capacidad laboral.

"*La calificación debe realizarse de conformidad con los parámetros establecidos en el manual único para la calificación de invalidez vigente para la fecha de la calificación.*"

El Art. 41 de la Ley 100 de 1993 establece la competencia en la Entidades Promotoras de Salud, los fondo de pensión, las administradoras de riesgo laborales y las aseguradoras que asuman el riesgo de la invalidez a calificar, en primer lugar la pérdida de capacidad laboral."

Para este caso y contrario a lo sustentado por el Juez de instancia que su arbitrio y sin prueba que obre dentro del expediente decidió otorgar una pérdida de capacidad laboral del 50% al demandante más aun cuando en este tipo de procesos la pérdida de capacidad laboral es una prueba fundamental para quien pretenda reclamar perjuicios derivados de lesiones corporales permanentes.

Así las cosas en cuanto al nexo causal como elemento esencial de la Responsabilidad Civil, es bien sabido que se trata de aquella conexión que debe existir entre el hecho que se reprocha y el daño que se reclama. Ahora bien, dentro del campo de Responsabilidad Civil por el acto médico, esa conexión debe predicarse y demostrarse, entre la atención de los profesionales de salud y la falta de recuperación o deterioro de paciente.

En otras palabras debe demostrase en el proceso no solo que el actuar del médico fue equivocado, sino además que esta actuación fue determinante para la no

recuperación del paciente o su tórpida evolución, pues de lo contrario, no nacerá a la vida jurídica esa obligación indemnizatoria a cargo del personal médico o instituciones de salud.

En cuanto a la tasación de perjuicios inmateriales reclamados, el Juez de instancia no tuvo en cuenta que las pruebas aportadas por la parte demandante que pretendían acreditar dichos perjuicios fueron negadas por este despacho judicial y nuevamente por analogía el despacho determino los mismos, pues no se tuvo en cuenta que para el reconocimiento de cualquier perjuicio, sea patrimonial o extrapatrimonial, no basta con la mera afirmación de la parte demandante, pues esta debe demostrar no solo su certeza, sino también su cuantía y extensión, de lo contrario no será perjuicio susceptible de ser indemnizado.

Específicamente, tratándose de los perjuicios morales y de daño a la salud, dichos perjuicios no se presumen y por ende corresponde a la parte actora demostrar la existencia, actualidad y cuantía de los perjuicios inmateriales que reclama, hecho que no ocurrió en el presente proceso teniendo en cuenta que las pruebas aportadas por la parte demandante que tenían como objeto acreditar dichos perjuicios no fueron tenidas en cuenta por el despacho judicial por no reunir los requisitos que exige la ley para su aplicación.

En cuanto los perjuicios materiales reclamados este extremo judicial se encuentra inconforme teniendo en cuenta que el señor **KEVIN ANDREY LEON AVILA**, estaba vinculado laboralmente a una empresa, pertenece al régimen contributivo de salud, por lo que si existió alguna incapacidad médica, es su empleador, la empresa y/o el fondo de pensiones los encargados de pagar lo correspondiente y esa no debió haber sido atribuida a esta entidad.

En cuanto a los perjuicios morales estos no fueron sustentados y fundados en debida forma, en consecuencia no debieron ser reconocidos teniendo en cuenta que en el interrogatorio de parte de los demandantes no se tuvo en cuenta aspectos importantes entre ellos el círculo familiar: "*La Corte considera probados los perjuicios morales para una persona que sufre lesiones corporales que traen consigo secuelas permanentes. Además señala que estos perjuicios se presumen también para los padres y hermanos, cuando estos forman una familia y conviven bajo el mismo techo*.", en este caso no se investigó menos se probaron tales circunstancias. Así lo expreso la corte en reciente pronunciamiento: "*Ese sufrimiento y dolor se presume también lo padecen los padres y hermanos por tratarse de una familia con fuertes lazos afectivos, pues para el momento de presentación del libelo, tres años después de sucedido el accidente, aun convivan bajo un mismo techo, amén de que esta presunción no fue desvirtuada.*"

Por otro lado en oposición se encuentra la tesis de la necesidad de la prueba del daño moral, la cual sostiene que el agravio moral ha de ser probado en los procesos judiciales de responsabilidad. Según esta postura, el daño moral es una especie de daño que, al ser el daño un elemento estructural de la responsabilidad, debe ser acreditado por quien lo invoca, so pena de rechazo en su pretensión, en

el caso que nos ocupa no se probó el daño moral de los demandantes más aun cuando al proceso no se llevaron testimonios que acreditaran esas afectaciones morales de los demandantes y menos documental médico que acreditara dichas afectaciones.

De lo expuesto se concluye que dentro del presente no se probó que el daño causado al señor **KEVIN ANDREY LEON AVILA** se produjera en esta institución médica, reitero el ingreso sin problemas vasculares y salió de **HOSPITAL ORTOPEDICO SAS** sin presentar tal situación, que es la que realmente lleva a la pérdida de su extremidad izquierda, por consiguiente no es razonable y tampoco aceptable la prosperidad de las pretensiones en este tipo de procesos, es necesario probar el daño causado a la víctima luego de la conducta negligente y en este caso no se evidencio menos se probó que la entidad que represento fue la causante del daño.

Por todos los motivos y fundamentos expuestos solicito se exima de responsabilidad a mi mandante y en consecuencia se **REVOQUE** la sentencia proferida en primera instancia, teniendo en cuenta que no hay prueba que dé certeza y permita atribuir responsabilidad alguna a **HOSPITAL ORTOPEDICO SAS**., como pretende hacerlo ver el demandante sin haber cumplido cabalmente con la CARGA DE LA PRUEBA.

Es pertinente reiterar que **HOSPITAL ORTOPEDICO SAS** atendió al demandante **KEVIN ANDREY LEON AVILA**, y le presto los servicios de salud conforme a los protocolos y diagnósticos de ingreso y egreso que exige la Lex artis en esa materia. En materia de responsabilidad médica, las reclamaciones requieren ser demostradas por quienes las plantean.

REITERO la parte actora no logro demostrar el daño ni tampoco la culpa de los accionados por lo que no se logró demostrar el nexo de causalidad entre el actuar de esta institución y la enfermedad que reclama la parte demandante.

SOLICITUD

Respetuosamente solicito al H. Tribunal Superior, revocar la sentencia de primera instancia en los puntos que fueron objeto de apelación por parte de **HOSPITAL ORTOPEDICO SAS**, para que **REVOQUE** dicha providencia y exonere de toda responsabilidad a esta entidad.

NOTIFICACIONES

Recibo notificaciones en la Cra. 32 No. 25 A – 60 de la ciudad de Bogotá, correo electrónico: gerencia.general@hortopedico.com y celular 315-4639522

Cordialmente

JULIETH JOHANNA CORTES LOPEZ
C.C. 1015400733
T.P. 236.082 C.S. de J.

MEMORIAL PARA REGISTRAR DR. MUNERA VILLEGAS RV: RECURSO APELACION RADICADO 11001310300920200004101

Secretario 02 Sala Civil Tribunal Superior - Seccional Bogota
<secsctribsupbta2@cendoj.ramajudicial.gov.co>

Mié 01/02/2023 15:03

Para: **2 GRUPO CIVIL <2grupocivil@cendoj.ramajudicial.gov.co>**

1 archivos adjuntos (86 KB)

2020-0004101 APELA.SENTEN CIVIL BLANCA BAEZ.pdf;

MEMORIAL PARA REGISTRAR DR. MUNERA VILLEGAS

Cordial Saludo,

OSCAR FERNANDO CELIS FERREIRA
Secretario Sala Civil
Tribunal Superior de Distrito Judicial de Bogotá
Avenida Calle 24 N° 53-28 Torre C Oficina 305
Teléfono 423 33 90 Extensión 8349
Email: secsctribsupbta2@cendoj.ramajudicial.gov.co

De: Secretaria Sala Civil Tribunal Superior -Seccional Bogota <secsctribsupbta@cendoj.ramajudicial.gov.co>
Enviado: miércoles, 1 de febrero de 2023 2:54 p. m.
Para: Secretario 02 Sala Civil Tribunal Superior - Seccional Bogota <secsctribsupbta2@cendoj.ramajudicial.gov.co>
Cc: yesidgongora@hotmail.com <yesidgongora@hotmail.com>
Asunto: RV: RECURSO APELACION RADICADO 11001310300920200004101

Cordial saludo,

Se remite por competencia a OSCAR CELIS FERREIRA - SECRETARIO JUDICIAL DE LA SALA CIVIL, cualquier inquietud sobre su proceso debe dirigirla al correo secsctribsupbta2@cendoj.ramajudicial.gov.co

Margarita Mendoza Palacio
Secretaria Administrativa de la Sala Civil
Tribunal Superior de Bogotá
(571) 423 33 90 Ext. 8352
Fax Ext.: 8350 – 8351
secsctribsupbta@cendoj.ramajudicial.gov.co
Avenida Calle 24A No. 53-28, Of. 305 C
Bogotá D.C.

De: Yesid Gongora <yesidgongora@hotmail.com>
Enviado: miércoles, 1 de febrero de 2023 14:51
Para: Secretaria Sala Civil Tribunal Superior -Seccional Bogota <secsctribsupbta@cendoj.ramajudicial.gov.co>
Asunto: RECURSO APELACION RADICADO 11001310300920200004101

Señores muy buenas tardes en calidad de apoderado de la demandante BLANCA LILIA BAEZ DE NUÑEZ dentro del proceso de la referencia estando del término de ley con todo comedimiento me permito adjuntar memorial en 3 folios con sustentación recurso de apelación interpuesto contra la sentencia proferida por el juzgado 9 civil del circuito de Bogotá, magistrado ponente Dr. JESUS EMILIO MUNERA VILLEGAS.

favor acusar recibo

cordialmente
JOSE YESID GONGORA G
C.C. 93116016
TP. 79936 CSJ
Apoderado parte actora

Señores
HONORABLES MAGISTRADOS
DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE BOGOTA SALA CIVIL
MAGISTRADO PONENTE: Dr. JESUS EMILIO MUNERA VILLEGAS

REF. AMPLIACION ARGUMENTOS A LA SUSTENTACION DEL RECURSO DE APELACIÓN CONTRA SENTENCIA DEL 28-11-22 PROFERIDA JUZGADO 9 CIVIL CTO BOGOTA PROCESO EJECUTIVO DE MAYOR CUANTIA DEMANDANTE BLANCA LILIA BAEZ DE NUÑEZ Vs. VICTOR LEON STERIMBERG KOROMBLUM y KARIN VONDER WALDE LEWINKI. RAD: 11001310300920200004100

JOSE YESID GONGORA GÓNGORA, mayor de edad, con domicilio y residencia en esta ciudad, identificado con la C.C. 93116016 y T.P. 79936 del C.S. de la J., abogado en ejercicio, obrando en calidad de apoderado de la demandante **BLANCA LILIA BAEZ DE NUÑEZ**, también mayor de edad, estando dentro del término de ley, me permito ampliar los argumentos de la sustentación realizada oralmente en audiencia realizada el 28-11-22 contra la sentencia de primera instancia proferida dentro del proceso de la referencia.

Son fundamentos de ampliación al recurso de apelación interpuesto y sustentados oralmente en su momento, los siguientes:

Considera el despacho del juzgado 9º civil del circuito de esta ciudad en sentencia del 28-11-22 seguir adelante con la ejecución prosperando parcialmente las excepciones de cobro de lo no debido y pago parcial presentadas por la parte demandada, ordenando pagar el arrendamiento del mes de enero de 2020 en $7.497.000.00, la cláusula penal en un salario, ordena el remate de los bienes embargados, ordena enviar el proceso a los juzgados de ejecuciones de sentencias civiles condena en costas a la demandante. No obstante, en criterio del suscrito de los medios de prueba que sustentan el fallo, debo manifestar mi inconformidad con la condena impuesta basado en lo siguiente:

Nótese honorables magistrados que en el fallo materia de lazada de todo el análisis realizado por el juez fallador a las pruebas allegadas al proceso se tiene que, para él, constituyen elementos de juicio con los cuales establece sin dubitación alguna que las facturas de venta expedidas mes a mes por la demandante ya están canceladas, sin tener en cuenta que como se ha venido pregonando estas solo eran facturas de cobro mas no fueron canceladas.

Pese a lo anterior la demandante en su intervención reconoce las facturas numeradas y remitidas por ella a fin de que pagaran el canon de arrendamiento en 2 abonos uno por $6.300.000.00 más el Iva (19%) $1.197.000.00 que lo consignaban y el otro abono de $5.700.000.00 en efectivo, que por lo general era cancelado por el administrador PARMENIO CABALLERO lo que hacía en forma regular hasta diciembre de 2018, lo que demuestra la parte demandada al anexar recibos, a partir de enero de 2019, se empezaron a atrasar en la obligación se le enviaban las facturas de cobro mensual y no pagaban los 2 abonos que correspondía, la demandante afirma que le toco pagar el Iva de su propio peculio.

La demandante en respuestas dadas en audiencia anterior ha dicho que los dineros recibidos y de los cuales hay algunos recibos no hacen parte de abonos a los arriendos que aquí se pretenden cobrar sino a saldos de cánones de arrendamientos anteriores que no están indicados en este litigio.

Ahora bien, el fallo sujeto de alzada se centró en darle exclusiva credibilidad a lo argumentado por la parte demandante sin ahondar en la veracidad de las facturas expedidas para el cobro más no que hayan sido canceladas.

El suscrito apoderado de la demandante discrepa la declaración del señor Caballero por cuanto se ve que es acomodada, inducida, mal intencionada, que falta a la verdad, nótese que es el mismo declarante quien en su intervención manifiesta que venía a declarar lo que el señor León le había pedido, así mismo es falso de toda falsedad al indicar que le había cancelado parte del arriendo a la demandante hasta diciembre de 2019 cuando las documentales indican que se canceló hasta diciembre de 2018, lo que no es materia de discusión, en cuanto a la entrega del

inmueble a la demandante por parte de la demandada no existe constancia de este hecho mucho menos que el inmueble se le hubiera colocado aviso de arriendo sin haberlo recibido.

Los recibos y consignaciones allegadas y que reposan en el expediente datan de los años 2017 y 2018 lo que no desmerita para nada los cobros de cánones de arrendamiento que se indican en demanda inicial pues esto son a partir de enero del 2019

Vuelvo y repito las facturas de venta que expidió la demandante no corroboran el pago de ningún arriendo solo son facturas de venta es decir de cobro y por ende para que se tengan como pagadas debe de tener un soporte adicional de cancelada lo que en este caso no sucede

Por ende, se tienen que los demandados aún están debiendo a mi poderdante sumas de dineros correspondientes a varios meses de arrendamiento causados por el uso y goce del local comercial de la carrera 18 17-60 sur 1º piso Bogotá D.C. desde el mes de enero de 2019 al mes de enero de 2020 más lo ordenado en auto del 6 de febrero de 2020 donde el juzgado de conocimiento libró mandamiento de pago por estos ítems.

Por lo brevemente expuesto que amplia lo sustentado en forma oral de la apelación realizada en audiencia realizada el 28-11-22 en forma respetuosa me permito solicitar a los Honorables Magistrados del Tribunal Superior de Bogotá D.C. Sala Civil **REVOCAR LA DECISION RECURRIDA** y en su lugar acoger las pretensiones solicitadas en demanda inicial y para las cuales el juzgado de primera instancia libro mandamiento de pago.

Cordialmente,

JOSÉ YESID GÓNGORA G.-

C.C. No.93.116.016
T.P. No. 79.936 C.S.J.

Carrera 89A Bis No. 8A-65 T-1-1103 Salamanca Castilla Reservado Bogotá D.C.
Tel. 6014600562 y 3174205019 Email: yesidgongora@hotmail.com

MEMORIAL PARA REGISTRAR DRA. MARQUEZ BULLA RV:

Secretario 02 Sala Civil Tribunal Superior - Seccional Bogota
<secsctribsupbta2@cendoj.ramajudicial.gov.co>
Mié 8/02/2023 3:30 PM

Para: **2 GRUPO CIVIL <2grupocivil@cendoj.ramajudicial.gov.co>**

MEMORIAL PARA REGISTRAR DRA. MARQUEZ BULLA

Cordial Saludo,

OSCAR FERNANDO CELIS FERREIRA
Secretario Sala Civil
Tribunal Superior de Distrito Judicial de Bogotá
Avenida Calle 24 N° 53-28 Torre C Oficina 305
Teléfono 423 33 90 Extensión 8349
Email: secsctribsupbta2@cendoj.ramajudicial.gov.co

De: GOMEZ MORAD ASOCIADOS <notificacionesgomezmorad@outlook.com>
Enviado: miércoles, 8 de febrero de 2023 3:28 p. m.
Para: Secretario 02 Sala Civil Tribunal Superior - Seccional Bogota <secsctribsupbta2@cendoj.ramajudicial.gov.co>
Cc: Pedro Sánchez Castillo <pedro.sanchez.castillo@juristas-asociados.com>; gerencia@clinicademarly.com.co <gerencia@clinicademarly.com.co>; gerencia@clinicademarly.com.co <gerencia@clinicademarly.com.co>
Asunto:

Bogotá D.C., 08 de febrero de 2023.

Doctora:
M. P. Clara Inés Márquez Bulla
MAGISTRADA SALA 003 CIVIL
TRIBUNAL SUPERIOR DE BOGOTÁ D.C.
E. S. D.

REFERENCIA: Proceso verbal de responsabilidad civil.
DEMANDANTES: Diana Gladys Valenzuela Zamora y otros.
DEMANDADO: Clínica Marly S.A.
RADICADO: 110013103013 2017 00590 02

Asunto: Sustentación de recurso de apelación y desistimiento de recurso de apelación respecto a unos demandantes.

JEIMI JACQUELINE MAHECHA ARDILA, mayor de edad, identificado con la C.C. No. 1.018.403.918 de Bogotá, abogada en ejercicio, portadora de la T.P. No. 181.105 del Consejo Superior de la Judicatura, actuando en mi calidad de apoderada de la parte demandante dentro del proceso de la referencia, presento memorial que sustenta recurso de apelación contra sentencia de primera instancia y

memorial que solicita se decrete el desistimiento del recurso de apelación respecto a unos demandantes.

Atentamente,

JEIMI JACQUELINE MAHECHA ARDILA
C.C. No. 1.018.403.918 de Bogotá.
T.P. No 181.105 del C.S. de la J.

Bogotá D.C., 08 de febrero de 2023.

Doctora:
M. P. Clara Inés Márquez Bulla
MAGISTRADA SALA 003 CIVIL
TRIBUNAL SUPERIOR DE BOGOTÁ D.C.
E. S. D.

REFERENCIA: Proceso verbal de responsabilidad civil.
DEMANDANTES: Diana Gladys Valenzuela Zamora y otros.
DEMANDADO: Clínica Marly S.A.
RADICADO: 11001310301320170059002

Asunto: Desistimiento de recurso de apelación respecto a unos demandantes.

JEIMI JACQUELINE MAHECHA ARDILA, mayor de edad, identificado con la C.C. No. 1.018.403.918 de Bogotá, abogada en ejercicio, portadora de la T.P. No. 181.105 del Consejo Superior de la Judicatura, actuando en mi calidad de apoderada en sustitución de la parte demandante dentro del proceso de la referencia, conforme al artículo 316 del Código General del Proceso, desisto del recurso de apelación respecto a los siguientes demandantes (quienes me manifestaron de forma expresa en reunión virtual su intención de no apelar la sentencia): Diana Gladys Valenzuela Zamora, Carlos Hernando Valenzuela Zamora y Xiomara Teresa Del Mar González Valenzuela.

Así las cosas se solicita tener en cuenta que se continúa el trámite del recurso de apelación de la sentencia de primera instancia de fecha 15 de noviembre de 2022, notificada por estado el 17 de noviembre de 2022, proferida por el Juzgado 13 Civil Circuito de Bogotá, solo respecto a la demandante Sra. Martha Beatriz Amparo Valenzuela Zamora.

Se solicita al señor Juez tener en cuenta la presente solicitud para los efectos procesales pertinentes y en consecuencia decretar el desistimiento del recurso de apelación conforme a la solitud planteada.

Atentamente,



JEIMI JACQUELINE MAHECHA ARDILA
C.C. No. 1.018.403.918 de Bogotá.
T.P. No 181.105 del C.S. de la J.

GÓMEZ MORAD
Derecho Corporativo • Riesgos Laborales
Responsabilidad Médica

Bogotá D.C., 08 de febrero de 2023.

Doctora:
M. P. Clara Inés Márquez Bulla
MAGISTRADA SALA 003 CIVIL
TRIBUNAL SUPERIOR DE BOGOTÁ D.C.
E. S. D.

REFERENCIA: Proceso verbal de responsabilidad civil.
DEMANDANTES: Diana Gladys Valenzuela Zamora y otros.
DEMANDADO: Clínica Marly S.A.
RADICADO: 11001310301320170059002

Asunto: Sustentación de recurso de apelación.

JEIMI JACQUELINE MAHECHA ARDILA, mayor de edad, identificado con la C.C. No. 1.018.403.918 de Bogotá, abogada en ejercicio, portadora de la T.P. No. 181.105 del Consejo Superior de la Judicatura, actuando en mi calidad de apoderada en sustitución de la parte demandante dentro del proceso de la referencia, en el término de ley, me permito sustentar el **RECURSO DE APELACIÓN** contra la sentencia de primera instancia de fecha 15 de noviembre de 2022, notificada por estado el 17 de noviembre de 2022, proferida por el Juzgado 13 Civil Circuito de Bogotá. No obstante, se aclara que la sustentación al recurso se radicó el 22 de noviembre de 2022 ate el Juzgado 13 Civil del Circuito de Bogotá.

Atentamente,



JEIMI JACQUELINE MAHECHA ARDILA
C.C. No. 1.018.403.918 de Bogotá.
T.P. No 181.105 del C.S. de la J.

Anexo: Sustentación de Recurso de apelación en 15 folios.

Bogotá D.C., 08 de febrero de 2023.

Doctora:

Clara Ines Marquez Bulla

MAGISTRADA SALA 003 CIVIL – TRIBUNAL SUPERIOR DE BOGOTÁ D.C.

M. P.

REFERENCIA: Proceso Verbal de Responsabilidad Civil.

DEMANDANTES: Diana Gladys Valenzuela Zamora y otrosDEMANDADO: Clínica de Marly S.A.

RADICADO: 11001310301320170059002.

Asunto: Sustentación de recurso de apelación.

JEIMI JACQUELINE MAHECHA ARDILA, mayor de edad, identificado con la C.C. No. 1.018.403.918 de Bogotá, abogada en ejercicio, portadora de la T.P. No. 181.105 del Consejo Superior de la Judicatura, actuando en mi calidad de apoderada en sustitución de la parte demandante dentro del proceso de la referencia, en el término de ley, me permito sustentar el RECURSO DE APELACIÓN contra la sentencia de primera instancia de fecha 15 de noviembre de 2022, notificada por estado el 17 denoviembre de 2022, proferida por el Juzgado 13 Civil Circuito de Bogotá, en los términos que adelante se exponen.

PETICIÓN: Respetuosamente solicito se revoque y modifique la decisión contenida en la sentencia de primera instancia proferida por el Juzgado 13 Civil Circuito de Bogotá dentro del proceso de la referencia, que a su tenor determina:

"PRIMERO; DECLARAR infundadas las pretensiones invocadas por los demandantes contra la Clínica de Marly, por las razones expuestas en la providencia.

SEGUNDO: en razón de los anterior, ABSTENERSE de pronunciarse sobre las excepciones de mérito formuladas.

TERCERO IMPONER condena en costas a favor de la demandada y a cargo de la demandante. Inclúyase la suma de $1.000.000 M/Cte., como agencias en derecho. Liquídense.

La anterior petición se fundamenta en los siguientes ARGUMENTOS:

I. DEFECTO FÁCTICO POR INDEBIDA VALORACIÓN PROBATORIA:

A. El Juez de primera instancia, manifestó abiertamente desconocer el dictamen pericial aportado y decretado al proceso por la parte demandante (página 7 del fallo de primera instancia):

> 5.2. Ahora en cuanto al dictamen pericial de Daniel Orlando Alvarado Lizarazo, allegado como prueba del error en cuanto a la demora en tomar la resonancia magnética, no resulta apropiado para tenerse en cuenta en este asunto, pues como fue interrogado en estas diligencias, no tiene la calidad exigida para estimar si la cirugía no cumplió con efectos favorables por haber pasado un término de 24 horas, en obtener el resultado de la misma que muestra con mayor detalle la presencia de la hemorragia compresiva.

En el caso en concreto desconoce el dictamen aduciendo que el perito "no tiene la calidad exigida para estimar si la cirugía cumplió con efectos favorables por haber pasado un término de 24 horas (…)", situación que deja ver de manera clara que desconoce el medio probatorio por una supuesta falta de idoneidad del perito (situación que no fue siquiera debatida dentro de la audiencia en la que se interrogó al perito por la parte demandada).

A esta altura del proceso, se pregunta esta parte, si el Juez puede descalificar la idoneidad profesional de un médico (médico cirujano, especialista en administración en salud, auditor), si su conocimiento, formación y experticia como profesional en Derecho, le basta para poder hacer estas afirmaciones en un par profesional de su calidad, no podría esta parte desconocer la idoneidad de un profesional diferente a mi conocimiento y experiencia, ya que esta afirmación resultaría no solo irrespetuosa sino falta de toda objetividad.

Ahora bien, las conclusiones del peritaje se basaron en determinar una demora en la práctica de un examen diagnóstico (RESONANCIA MAGNETICA NUCLEAR), que hubiera permitido conocer el estado real de salud de la paciente y en consecuencia generado que se le prestará el tratamiento consistente en la intervención quirúrgica de forma oportuna.

B. En el fallo, desconoció los testimonio técnicos, con los cuales y a pesar de ser médicos de la misma IPS demandada, manifestaron que:

- Internista Dr. Francisco Boyacá: El sangrado era una posibilidad y por ello no debía ser descartado como un posible evento que debía ser valorado. Así mismo manifestó que la Resonancia Magnética era indispensable y afirmó que no se realizó (el mismo día que se ordenó) por problemas logísticos.

- Internista Dra. Sandra Jaramillo: Que ordenó el TAC a pesar que el examen indicado era la Resonancia Magnética, que no se había realizado por dificultades administrativas y de logística (por la hora).

- Neurocirujano Dr. José Luis Buritica: Manifiesta que los resultados de la Resonancia Magnética evidencia hematoma intrarraquídeo que comprimía la médula causando mielopatia aguda (secundaria al hematoma intraraquideo), momento en el cual se solicita procedimiento quirúrgico urgente a fin de liberar la medula –laminectomía-, en forma posterior se determinó que la paraplejia continuó establecida (es decir no hubo mejoría). Situación que permite inferir conforme a lo establecido en la lex artis (artículos científicos apostados y decretados como prueba documental) que los tiempos para realizar el examen diagnóstico es fundamental para brindar un tratamiento oportuno, ya que al existir infarto medular (muerte de tejido nervioso, el daño es irreversible). El Juez desconoce lo manifestado por el testigo técnico al afirmar en el minuto 16:23 de la audiencia: "Entre más rápido se intervenga al paciente, y más rápido se descomprima la medula puede haber más chance de que reperfunda y no haya un infarto agudo"

El Juez de primera instancia, resume en dos páginas la valoración probatoria y conclusiones de la tesis del caso, basándose en gran medida en las respuestas del interrogatorio de parte de la demandada, situación que para esta parte resulta ser insuficiente en la medida que los interrogatorios de parte son una versión de los hechos de una parte, por ello argumentar un fallo en un interrogatorio, existiendo los demás medios de prueba en el proceso y sin que se llegue a generar una contraposición y valoración integral probatoria, puede resultar ser una decisión parcializada y algo subjetiva, que va en contravía de la jurisprudencia y de la sana lógica.

II. DESCONOCIMIENTO DE LA TESIS DE LOS ELEMENTOS DE LA RESPONSABILIDAD CIVIL PLANTEADA EN LA DEMANDA Y DE LA TEIS DE PERDIDA DE OPORTUNIDAD, ACEPTADA POR LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA (OPORTUNIDAD DE SOBREVIVIR)

Dentro de la argumentación para desestimar las pretensiones y para fallar, el Juez de Primera Instancia, afirma (página 7 del fallo) afirma que: existió un "mal manejo de paciente de su condición que la llevaron a presentar escaras e infecciones que al cabo de un año le produjeron la muerte"

> 5.3. De otra parte, si bien la paraplejia redujo la capacidad de locomoción de la paciente como los demandantes al absolver el interrogatorio de parte y los testigos de cargos, el resultado de su muerte no fue dado en razón de la paraplejia sino en el mal manejo de paciente de su condición que la llevaron a presentar escaras e infecciones que al cabo de un año le produjeron la muerte
>
> 5.4. De las actuaciones se extracto el hecho notorio con respecto de la Paciente, cuando fue retirada de la Clínica y desde dicha fecha ,al momento de su fallecimiento, el Centro Clínico ni los Galenos actuantes, quienes tuvieron ingerencia en el tratamiento inicial, volvieron a tratar a la Paciente en lo más mínimo, no hubo interacción Médica alguna por parte de estos en el cuidado posterior de la salud de la Paciente. Toda la sintomatologia presentada en este lapso de tiempo fue tratada sin la dirección de los endilgados, como consta en las pruebas documentales allegadas, como de igual forma en las manifestaciones que se recogieron de los diferentes Interrogados.

Sin embargo se confunde al indicar en el fallo como daño la muerte de la paciente, cuando si bien es una realidad que se materializada en un daño, el daño inicial (planteado en la demanda y comprobado con los medios de prueba) es la: PERDIDA DE FUNCIÓN DE LOS MIEMBROS INFERIORES DESDE EL 11 DE AGOSTO DE 2015, SITUACIÓN QUE CONLLEVO A QUE LA SRA. ANA BEATRIZ QUEDARÁ POSTRADA EN CAMA HASTA EL MOMENTO DE SU FALLECIMIENTO, SUFRIENDO POR ELLO COMPLICACIONES DERIVADAS DE SU ESTADO DE POSTRACIÓN.

No es siquiera aceptable que se determine que "si bien la paraplejia redujo la capacidad de locomoción de la paciente", el "resultado de su muerte no fue dado en razón a la paraplejia sino al mal manejo de paciente de su condición que la llevaron a presentar escaras e infecciones que al cabo de un año le produjeron su muerte", afirmando que en todo caso a la paraplejia (hecho comprobado) y que resulta ser un daño evidente y sin discusión, no sea valorada esta situación como una pérdida de oportunidad y un elemento claro de la mala condición de vida que padeció la paciente durante su estado de postración (derivadas de la lesión medular por compresión no diagnosticada a tiempo).

La tesis para el fallo se resumiría en que no es importante si hay errores, salvo que el error produzca de manera inmediata la muerte del paciente, lo cual no guarda relación con una seria y justa valoración probatoria en el caso en concreto, en el cual se demostró con los mismos testigos técnicos que se retaron fallas logísticas de la IPS, que impidieron que el diagnósticos se realizará a tiempo y se le brindara un servicio de salud efectivo a la Sra. Ana Beatriz Zamora, lo cual conllevo a empeorar su condición médica y su posterior diagnóstico de compresión medular tardío.

Así las cosas, se exponen a continuación en forma detallada los argumentos de la parte demandante para recurrir en apelación el fallo de primera instancia:

I. DEFECTO FÁCTICO POR INDEBIDA VALORACIÓN PROBATORIA.

La Honorable Corte Suprema de Justicia ha sido enfática en señalar que los establecimientos hospitalarios no son ajenos a la responsabilidad civil que se derive de la prestación de su servicio. Al respecto ha señalado que:

> "La responsabilidad médica describe un escenario en donde campean los mismos elementos de toda acción resarcitoria y, por supuesto, cuando se ha infligido daño a una persona, surge el deber de indemnizar. *Los agentes de la salud o establecimientos hospitarios no están exentos, entonces, de ser llamados a responsabilizarse del detrimento generado.* Desde luego, igual que acontece en los otros eventos donde se dan las circunstancias para reconocer perjuicios, *cuando en desarrollo de actividades vinculadas a la sanidad de los pacientes, ya sea por negligencia o impericia, se les afecta negativamente en su salud, surge, de manera simultánea, el compromiso del agente dañino de enmendar el daño ocasionado*, siempre y cuando se acrediten los restantes elementos de la responsabilidad."[1]

Ahora bien, es la misma corporación la que ha desentrañado las exigencias que debe tener el juez al momento de valorar el material probatorio que se allegue al proceso. Al respecto ha señalado que:

> "Por expreso mandato del artículo 176 del Código General del Proceso, las pruebas "deberán ser apreciadas en conjunto, de acuerdo con *las reglas de la sana crítica*, sin perjuicio de las solemnidades prescritas en la ley sustancial para la existencia o validez de ciertos actos"
>
> Ese criterio de ponderación -la sana crítica- traduce para el juez la *obligación de valorar los medios de convicción con sujeción a las reglas, en primer lugar, de la lógica,* integrada básicamente por los principios de identidad, conforme el cual una cosa solo puede ser

[1] Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación Civil. Sentencia SC 12947-2016. M.P. Margarita Cabello Blanco. 15 de septiembre de 2016.

igual a sí misma; de contradicción, con el que se significa que una cosa no puede ser y no ser al mismo tiempo y en el mismo sentido; de razón suficiente, que informa que los hechos tienen que estar sustentados en un supuesto que los explique suficientemente; y del tercero excluido, alusivo a que, frente a dos proposiciones contradictorias, sólo una puede ser cierta.

Y, *en segundo término, de la experiencia,* que corresponden, según lo tiene señalado esta Corporación, a "postulados obtenidos de la regularidad de los acontecimientos cotidianos, es decir que se inducen a partir de lo que generalmente ocurre en un contexto social específico", dentro de las cuales puede ubicarse el "conocimiento científico", esto es, "las teorías, hipótesis o explicaciones formuladas por la comunidad científica o ilustrada, respaldadas por la evidencia de sus investigaciones o experimentos", que por lo general "se encuentran publicadas en textos académicos, revistas indexadas, artículos especializados, memorias de conferencias o simposios, etc." (CSJ, SC 9193 del 28 de junio de 2017, Rad. N° 2011-00108-01).

Por lo tanto, unas son las pruebas y otras las reglas de la sana crítica, esto es, *los referentes que sirven al juez para desentrañar el verdadero significado de aquellas, esto es, para determinar si son o no representativas de hechos admisibles, en procura de la reconstrucción de lo ocurrido."*[2]

Es claro entonces que el juez no puede simplemente valerse de lo que crea saber sobre el caso que entre a decidir, sino que debe valerse de todas las herramientas que le sean necesarias para encontrar el entendimiento que lo lleve a la convicción de su decisión. Dichas herramientas son la lógica y la experiencia.

Ahora bien, frente a actividades profesionales, la misma providencia señala que:

Ahora bien, en casos donde se evalúan actividades profesionales o técnicas, *la apreciación probatoria exige del juez, en la mayoría de las veces, confrontar el contenido de los elementos de juicio con el conocimiento científico relacionado con el arte u oficio sobre el que versa el proceso, en procura de comprender su genuino sentido,* toda vez que

[2] Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación Civil. Sentencia SC042-2022. M.P. Álvaro Fernando García Restrepo. 7 de febrero de 2022.

> "el conocimiento científico afianzado, como parte de la reglas de la sana crítica, tiene la misma implicación que consultar una enciclopedia, un libro de texto especializado, o un diccionario con el fin de desentrañar el significado de los conceptos generales que permiten comprender y valorar la información suministrada por los medios de prueba", puesto que *"si la técnica probatoria permite y exige valorar las pruebas de acuerdo con las máximas de la experiencia común, con mucha más razón es posible analizar las probanzas según los dictados del conocimiento científico afianzado*, sin el cual muchas veces no será posible saber si el órgano de prueba brinda o no una información que corresponde a la realidad"
>
> De ahí que, como se expresó en la analizada providencia, "[l]a suficiencia o plenitud de la prueba es siempre relativa al tema probandum, por un lado, y al contexto de referencia, por el otro, *pues no existe una prueba completa en sí misma* (a menos que la ley lo disponga expresamente), *sino unos medios que proveen conocimiento con la aptitud o eficacia para explicar las circunstancias en que se basa la controversia, a la luz de un análisis contextual de la realidad social, profesional o técnica en que se dan los hechos que se investigan"*[3]

Cobra vital importancia la valoración de las pruebas en casos donde se evalúa la conducta profesional como la de los médicos, pues el juez no puede basarse solamente en las pruebas, sino que debe confrontarlas frente a lo que la doctrina y profesionales de campo señalen.

Tal y como se establece en la parte inicial de este documento, el Juez de primera instancia desconoce lo afirmado por los testigos técnicos escuchados en audiencia de instrucción Parte 1 y parte 2 (de fechas 07 de octubre de 2021 y 08 de febrero de 2022 a cuaderno uno de expediente digital):

- Internista Dr. Francisco Javier Boyacá Estrada (audiencia de fecha 07 de octubre de 2021 a cuaderno uno de expediente digital): El médico especialista determina que el sangrado era una posibilidad y por ello no debía ser descartado como un posible evento que debía ser valorado. Así mismo manifestó que la Resonancia Magnética era indispensable y afirmó que no se realizó (el mismo día que se ordenó) por problemas logísticos. El Juez desconoce lo manifestado por el testigo técnico al afirmar en el minuto 1:16:02 de la audiencia, a la pregunta de cuál fue el tiempo

[3] Ibidem.

que tardaron en tomar las imágenes diagnosticas (refiriéndose a la Resonancia Magnética):

"lo que se generó fue la imposibilidad de lograr el traslado de la paciente a la unidad de resonancia que queda contiguo a la clínica pero no dentro de ella, que hay que subirla a una ambulancia y adicionalmente pues allí los pacientes están de forma programada acudiendo a que le hagan imágenes y en ese contexto cerrando la unidad a las 5 de la tarde no hubo posibilidad de hacerla ese mismo día, la imagen se hizo al otro día a primera hora "

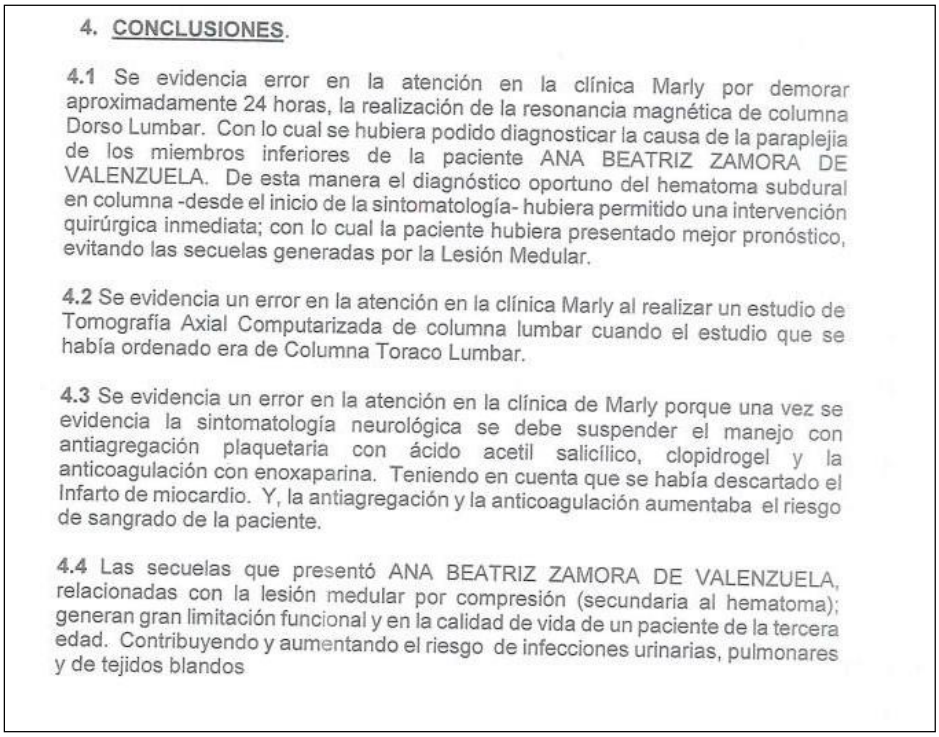
Así mismo desconoció lo manifestado por el testigo técnico en minuto 1:25:10: "si se sospecha de un sangrado se debe suspender la anticoagulación".

- Internista Dra. Sandra Jaramillo (audiencia de fecha 07 de octubre de 2021 a cuaderno uno de expediente digital a minuto 03:29:05): Que ordenó el TAC a pesar que el examen indicado era la Resonancia Magnética, que no se había realizado por dificultades administrativas y de logística (por la hora).

- Neurocirujano Dr. José Luis Buritica (audiencia de fecha 08 de febrero de 2022 a cuaderno uno de expediente digital): Manifiesta que los resultados de la Resonancia Magnética evidencia hematoma intrarraquídeo que comprimía la médula causando mielopatia aguda (secundaria al hematoma intraraquideo), momento en el cual se solicita procedimiento quirúrgico urgente a fin de liberar la medula –laminectomía, en forma posterior se determinó que la paraplejia continuó establecida (es decir no hubo mejoría). Situación que permite inferir conforme a lo establecido en la lex artis (artículos científicos apostados y decretados como prueba documental) que los tiempos para realizar el examen diagnóstico es fundamental para brindar un tratamiento oportuno, ya que al existir infarto medular (muerte de tejido nervioso, el daño es irreversible). El Juez desconoce lo manifestado por el testigo técnico al afirmar en el minuto 16:23 de la audiencia:

  "Entre más rápido se intervenga al paciente, y más rápido se descomprima la medula puede haber más chance de que reperfunda y no haya un infarto agudo"

Ahora bien respecto al dictamen pericial de fecha 07 de septiembre de 2018, rendido por el Dr. Daniel Orlando Alvarado Lizarazo (Medico Cirujano Especialista en Administración en Salud, quien se desempeña como médico auditor), el Despacho de Primera Instancia, desconoce, las conclusiones del mismo:



4. **CONCLUSIONES**.

4.1 Se evidencia error en la atención en la clínica Marly por demorar aproximadamente 24 horas, la realización de la resonancia magnética de columna Dorso Lumbar. Con lo cual se hubiera podido diagnosticar la causa de la paraplejia de los miembros inferiores de la paciente ANA BEATRIZ ZAMORA DE VALENZUELA. De esta manera el diagnóstico oportuno del hematoma subdural en columna -desde el inicio de la sintomatología- hubiera permitido una intervención quirúrgica inmediata; con lo cual la paciente hubiera presentado mejor pronóstico, evitando las secuelas generadas por la Lesión Medular.

4.2 Se evidencia un error en la atención en la clínica Marly al realizar un estudio de Tomografía Axial Computarizada de columna lumbar cuando el estudio que se había ordenado era de Columna Toraco Lumbar.

4.3 Se evidencia un error en la atención en la clínica de Marly porque una vez se evidencia la sintomatología neurológica se debe suspender el manejo con antiagregación plaquetaria con ácido acetil salicílico, clopidrogel y la anticoagulación con enoxaparina. Teniendo en cuenta que se había descartado el Infarto de miocardio. Y, la antiagregación y la anticoagulación aumentaba el riesgo de sangrado de la paciente.

4.4 Las secuelas que presentó ANA BEATRIZ ZAMORA DE VALENZUELA, relacionadas con la lesión medular por compresión (secundaria al hematoma); generan gran limitación funcional y en la calidad de vida de un paciente de la tercera edad. Contribuyendo y aumentando el riesgo de infecciones urinarias, pulmonares y de tejidos blandos

Es claro, no solo en las conclusiones del dictamen pericial sino en lo que se prueba a lo largo del proceso que el mayor error de atención de la demandada, es la demora en la realización de la resonancia magnética, situación que impidió se realizará un diagnóstico oportuno y por ende el tratamiento quirúrgico que requería de manera inmediata y urgente la paciente Sra. Ana Beatriz Zamora. En el sentido de desestimar la calidad e idoneidad del perito, en audiencia de fecha 07 de febrero de 2022 (minuto 2:08:00), se deja claro que el perito emite dictamen en su condición de medico auditor, frente a lo cual no existe discusión que permita descalificar el dictamen pericial, más aun cuando las conclusiones del mismo, se encaminan a determinar la FALTA DE OPORTUNIDAD EN EL TRATAMIENTO DE LA PACIENTE, AL TARDARSE MÁS DE 24 HORAS EN LA REALIZACIÓN DE UN EXÁMEN DIAGNÓSTICO QUE PERMITIERA TENER CLARIDAD DEL ESTADO DE SALUD DE LA PACIENTE Y TOMAR DECISIONES OPORTUNAS DE TRATAMIENTO, como en el caso en concreto, que una vez se determinó el resultado de la Resonancia magnética (evidenciando comprensión medular por hemorragia), se ordenó cirugía inmediata y de urgencia.

No se realizó una valoración probatoria en el sentido de realizar un estudio juicioso de cada uno de los medios de prueba, es por ello que se puede afirmar de la lectura del fallo (en dos páginas

se resume el caso y se realiza la conclusión del mismo) que existe una ausencia de la determinación de las conclusiones de cada uno de los medios de prueba y del proceso lógico de comparación entre cada uno de ellos.

II. DESCONOCIMIENTO DE LA TESIS DE LOS ELEMENTOS DE LA RESPONSABILIDAD CIVIL PLANTEADA EN LA DEMANDA Y DE LA TEIS DE PERDIDA DE OPORTUNIDAD, ACEPTADA POR LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA (OPORTUNIDAD DE SOBREVIVIR)

Ahora bien, frente a la pérdida de oportunidad, la honorable Corte Suprema de Justicia la ha definido como la transgresión que genera el actuar negligente por parte del galeno, dicha transgresión implica una violación a los principios que rigen el sistema de salud nacional y que privan al paciente de la posibilidad de mejora en su estado de salud. Propiamente se ha dicho que:

> La Ley 23 de 1981, había realizado una declaración de principios vistos como normas fundamentales para el ejercicio de la actividad médica, en pos de cuidar la salud humana, prevenir la enfermedad y mejorar los patrones vitales individuales y colectivos. Las Leyes 1164 de 2007, 1438 de 2011 y Estatutaria 1751 de 2015, ampliaron en número y catálogo *los elementos generales que guían el ejercicio galénico para la formación y el desempeño del talento humano, el Sistema General de Seguridad Social en Salud, la atención al paciente o enfermo, y por supuesto, el derecho fundamental a la salud.*
>
> En ese conjunto normativo, destacan: *Dignidad humana,* humanidad, justicia, universalidad, *oportunidad,* igualdad, prevalencia de derechos, autonomía, *no maledicencia,* cooperación, equidad, solidaridad, *calidad,* integralidad, efectividad, *responsabilidad,* enfoque diferencial, progresividad, libre escogencia, sostenibilidad fiscal, transparencia, corresponsabilidad, irrenunciabilidad a la salud, prevención, continuidad, disponibilidad, aceptabilidad, idoneidad profesional e interpretación *prohomine* y *prosalud*, entre otros.
>
> Para solo referir algunos de los principios nodales en el Estado Constitucional, se advierte el hondo contenido humano y social de la dignidad humana, por cuanto *es la vida de las personas lo que se trata de proteger.* Otro, el de benevolencia, *obliga a los galenos actuar promoviendo el mejor interés o beneficio de los pacientes*. La determinación reposa en la

convicción de que el médico posee una formación y conocimientos de los que el usuario carece, por lo cual está facultado para decidir lo más conveniente para este, pudiendo prescindir de su opinión.

La asimilación teórica, la práctica rigurosa y la actualización permanente, garantizan que el médico *adopta decisiones en beneficio del enfermo y evita perjuicios innecesarios en la integridad física y moral de los destinatarios del servicio*. Así, el *principio de no maleficencia*, *conmina a optar siempre por intervenciones, tratamientos y alternativas terapéuticas aceptados por la ciencia, de eficacia comprobada y que no redunden en un mayor daño para la salud.*[4]

Frente al caso en concreto, como principio, ha de referirse esta parte sobre el dictamen pericial de Daniel Orlando Alvarado Lizarazo, pues el honorable juez señala en su providencia que no fue tenido en cuenta para el asunto en discusión. Determina el *a quo* que el médico que profirió el dictamen no tiene las calidades exigidas para asegurar que la cirugía no cumplió con resultados favorables por la demora en la práctica de la resonancia magnética.

Al respecto esta parte señala que dicho dictamen pericial en ningún momento se centra en los resultados de la cirugía, sino en el servicio prestado por la Clínica Marly S.A., y que incluso misma afirmación señalan los médicos tratantes al afirmar la necesidad de la resonancia magnética y su demora por temas logísticos. Es entonces necesario recalcar la importancia de la valoración del honorable juez conforme a la sana crítica y principios lógicos, y que su valoración frente a las pruebas sea en conjunto y no basados en un solo interrogatorio, como pasó en este caso.

Considera esta parte que el honorable juez de primera instancia se aleja de toda realidad al señalar que no se probó la culpa, por acción u omisión, al desplegar la atención médica de la Clínica Marly S.A. Es por lo anterior que se considera necesario referirse a cada uno de los pronunciamientos del *a quo* en la referida providencia.

Como principio, el *a quo* señala que la formulación de anticoagulantes y antiagregantes que se hizo a la paciente, que provocaron el hematoma compresivo en la paciente, no fue inapropiado. Sin embargo, como señaló el perito Daniel Orlando Alvarado, el suministro de los mismos

[4] Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación Civil. Sentencia SC917-2020. M.P. Luis Armando Tolosa Villabona. 14 de septiembre de 2020.

medicamentos debió ser suspendido una vez la paciente tuvo los síntomas coronarios, y no cuando se obtuvo los resultados de la resonancia.

En el mismo sentido, el médico tratante Francisco Boyacá en su testimonio señaló que la posibilidad de un sangrado, si bien es de raro ocurrir, no era descartable en la paciente. Es por lo anterior que se considera que, ante la sintomatología neurológica que presentó la paciente, debió suspenderse el suministro de tales medicamentos. De no hacerlo se asumió un riesgo que vino a verse concretado una vez se tuvo resultados de la resonancia magnética ordenada.

Todo lo anterior deja entrever que el honorable juez de primera instancia restó valor a lo antes mencionado y probado en juicio.

Por otro lado, la providencia señala que, si bien no se practicó la resonancia una vez se tuvo los indicios del evento coronario, no existió una pérdida de oportunidad hacia la paciente. Al respecto se quiere señalar que la resonancia cubría una vital importancia pues, como lo señaló el dictamen pericial aportado por esta parte, esta demora en la realización de la resonancia magnética de columna dorso lumbar hubiese permitido un diagnóstico oportuno del hematoma subdural en columna, lo que podía abrir la posibilidad a la intervención quirúrgica inmediata, permitiendo a la paciente un mejor pronóstico.

Es claro que existió la pérdida de oportunidad de la señora Ana Beatriz Zamora, y esta se debió a que la demora de la práctica de la resonancia no permitió un mejor diagnostico en el tiempo ideal, lo que generó unas lesiones permanentes que posteriormente le causaron la muerte.

De igual forma, señala la providencia recurrida que la práctica de la tomografía axial computarizada (TAC) no fue innecesaria o inadecuada, pero extraña a esta parte que seguido a ello acepta que el ideal era la práctica de la resonancia magnética, pues con ella se podían identificar anomalías con mayor certeza que con el TAC.

De hecho, la médico Sandra Jaramillo en su testimonio señala que ordenó la realización del TAC al percatarse de que existía la orden para realizar la resonancia magnética a la paciente, pero no se había realizado por razones logísticas. Es el mismo personal de la salud el que durante todo el proceso estuvo señalando que no debe someterse al paciente a tratamientos innecesarios, sinoque debe procurar garantizar el mejor tratamiento posible. En consonancia con lo anterior, esta

parte considera que el juez valoró de forma inadecuada y alejada de toda regla de la experiencia el material probatorio aportado y practicado.

Es también establecido por el honorable juez que no se probó que la paraplejia haya causado la muerte de la paciente, sino su mal cuidado posterior al tratamiento practicado en la Clínica Marly S.A.

Al respecto, es necesario mencionar que, conforme señala el dictamen pericial, la lesión medular por comprensión genera en el paciente una limitación funcional y una pérdida en la calidad de vida, mucho más si es una paciente de la tercera edad como en el caso en concreto. Además, aumenta el riesgo de padecimiento de infecciones urinarias, pulmonares y de tejidos blandos.

Dicha pérdida funcional y de calidad de vida se vio probada en cada uno de los testimonios de los familiares de la señora Ana Beatriz Zamora, quienes señalaron sus cambios de ánimo posterior a la cirugía. Incluso los mismos médicos tratantes, como lo son el médico intensivista y el médico fisiatra que atendieron a la señora Ana Beatriz, señalan lo trascendente del evento de paraplejia en un paciente.

Lo anteriormente esbozado demuestra una clara falta y negligencia en la atención prestada a la señora Ana Beatriz Zamora de Valenzuela por parte de la Clínica Marly S.A., y reclama su responsabilidad frente a los perjuicios causados a la paciente y sus familiares.

Ahora bien, respecto a los elementos propios de la responsabilidad civil, en el caso en concreto, se encuentra demostrado en el proceso:

1. DAÑO: La existencia real del daño, materializado en la lesión presentada, consistente en lesión medular por compresión, ocasionada por la hemorragia. Dicha lesión ocasiona una paraplejia en la paciente, que posteriormente ocasiona su muerte.

2. NEXO CAUSAL: El nexo causal: la lesión física y funcional de la paciente fue causada debido al tratamiento realizado por los profesionales de la Clínica Marly S.A., y que de hecho, dicho nexo causal es aceptado por el honorable juez en primera instancia al asegurar que la hemorragia compresiva se generó por los anticoagulantes y antiagregantes suministrados.

3. ERRORES DE CONDUCTA: Los errores de conducta, evidenciados:

   - La resonancia magnética no fue practicada en el tiempo ideal, aun cuando la Clínica Marly si contaba con el servicio a escasos metros de donde se encontraba la señora Ana Beatriz Zamora.

   - No se suspendió el suministro de anticoagulantes y antiagregantes a la paciente una vez se presentó la sintomatología del evento coronario, sino cuando se obtuvo los resultados de la resonancia magnética y se evidenció la hemorragia compresiva.

   - No se actuó conforme a la lex artis al presentarse el riesgo previsible de sangrado en la paciente y continuar con el tratamiento a base de anticoagulantes y antiagregantes

Es así, como esta parte no encuentra que los argumentos por los cuales se desestimaron las pretensiones de la demanda en el fallo de primera instancia, sean la inexistencia de culpa, cuando se hace evidente conforme a los medios de prueba decretados y practicados en el proceso: documentales (historia clínica) y pericial (dictamen aportado por la parte demandante, suscrito por el Dr. Daniel Orlando Alvarado Lizarazo) se logró evidenciar que:

1. Existió un error en la atención por parte de la Clínica Marly S.A. al presentarse una demora a la hora de practicar la resonancia magnética necesaria para obtener un dictamen detallado del cuadro que presentaba la paciente.

2. Existió un error en la atención por parte de la Clínica Marly S.A. al practicar una Tomografía Axial Computarizada de columna lumbar, cuando ya existía una orden de resonancia magnética que. como señaló el juzgado en su providencia, es más eficaz para detectar anomalías en el paciente.

3. Existió un error en la atención por parte de la Clínica Marly S.A. al no suspender el suministro de anticoagulantes y antiagregantes una vez se presentó la sintomatología coronaria.

4. La pérdida funcional que sufrió Ana Beatriz Zamora significó una perdida en su calidad de vida y salud, lo cual le ocasionó la muerte posteriormente.

Conforme a lo anterior, encuentra esta parte la configuración de la culpa probada, consagrada y aceptada por la jurisprudencia nacional como la teoría vigente para atribuir la responsabilidad médica en casos de errores de conducta por parte de los agentes de salud y centros hospitalarios.

Esbozado lo anterior, se solicita respetuosamente al Honorable Tribunal, revocar en su totalidad la decisión impugnada, atribuir la responsabilidad civil a Clínica Marly S.A., acceder a las pretensiones planteadas en la demanda y en consecuencia de una declaración de responsabilidad se condenar al pago de los debidos perjuicios materiales e inmateriales solicitados y debidamente probados.

Se sustenta el recurso de apelación presentado en audiencia, en los términos de ley, para los efectos procesales pertinente, solicitando se revoque en su totalidad el fallo de primera instancia y se condene a la parte demandada conforme a las pretensiones de la demanda.

Cordialmente,



JEIMI JACQUELINE MAHECHA ARDILA
C.C. No. 1.018.403.918 de Bogotá D.C.
T.P. No. 181.105 del C.S de la Judicatura.

MEMORIAL PARA REGISTRAR DR. CHAVARRO MAHECHA RV: Alegatos para sustentar apelación - Proceso Ordinario Verbal de Responsabilidad Medica No. 110013103 035 2019 00137 01 de KEVIN ANDREY LEON AVILA y OTROS contra CLÍNICA CHIA S.A. y OTROS

Secretario 02 Sala Civil Tribunal Superior - Seccional Bogota
<secsctribsupbta2@cendoj.ramajudicial.gov.co>
Vie 3/02/2023 8:51 AM

Para: **2 GRUPO CIVIL <2grupocivil@cendoj.ramajudicial.gov.co>**

MEMORIAL PARA REGISTRAR DR. CHAVARRO MAHECHA

Cordial Saludo,

OSCAR FERNANDO CELIS FERREIRA
Secretario Sala Civil
Tribunal Superior de Distrito Judicial de Bogotá
Avenida Calle 24 N° 53-28 Torre C Oficina 305
Teléfono 423 33 90 Extensión 8349
Email: secsctribsupbta2@cendoj.ramajudicial.gov.co

De: Notificaciones <notificaciones@velezgutierrez.com>
Enviado: viernes, 3 de febrero de 2023 8:46 a. m.
Para: Secretario 02 Sala Civil Tribunal Superior - Seccional Bogota <secsctribsupbta2@cendoj.ramajudicial.gov.co>
Cc: Lina Sanchez <ljsanchez@velezgutierrez.com>; Marialejandra Rojas Beltrán <mrojas@velezgutierrez.com>; Katerine Serrano Ramírez <kserrano@velezgutierrez.com>; Gerencia General hospital ortopedico <gerencia.general@hortopedico.com>; Katerine Serrano Ramírez <kserrano@velezgutierrez.com>; jscrue@hotmail.com <jscrue@hotmail.com>; medasocia@yahoo.com <medasocia@yahoo.com>; franciscojmorenor.abogado@gmail.com <franciscojmorenor.abogado@gmail.com>; John Jairo Gonzalez Herrera <jjgonzalez@confianza.com.co>; Ximena Paola Murte Infante <xmurte@confianza.com.co>; erojass26@yahoo.es <erojass26@yahoo.es>; jonasaldarriaga@gmail.com <jonasaldarriaga@gmail.com>; LINA MARÍA BRICEÑO LEÓN <notificaciones@padillacastro.com>; susana.zarta <susana.zarta@padillacastro.com>; judy.castro@padillacastro.com <judy.castro@padillacastro.com>
Asunto: Alegatos para sustentar apelación - Proceso Ordinario Verbal de Responsabilidad Medica No. 110013103 035 2019 00137 01 de KEVIN ANDREY LEON AVILA y OTROS contra CLÍNICA CHIA S.A. y OTROS

Señores
TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE BOGOTÁ
SALA DE DECISIÓN CIVIL
M.P. DR. JAIME CHAVARRO MAHECHA
E. S. D.

Referencia: Proceso Ordinario Verbal de Responsabilidad Medica **No. 110013103 035 2019 00137 01** de **KEVIN ANDREY LEON AVILA y OTROS** contra **CLÍNICA CHIA S.A. y OTROS.**

En mi condición de apoderado judicial de la **CLÍNICA CHÍA S.A**., de conformidad con el poder que obra en el expediente, dentro del término legal, procedo a ampliar **SUSTENTAR EL RECURSO DE APELACIÓN** formulado oportunamente y en debida forma por mi representada, contra la sentencia de primera instancia, proferida el 24 de noviembre de 2022, conforme a los puntos que expongo en el memorial adjunto (18 folios).

En cumplimiento de lo ordenado por el artículo 3 de la ley 2213 de 2022 y el numeral 14 del artículo 78 del Código General del proceso, envío el presente mensaje de datos a todas las partes procesales del litigio en curso que indicaron su correo

electrónico dentro del proceso.

NOTIFICACIONES:

Me permito informar que el suscrito apoderado recibirá notificaciones en todos y cada uno de los siguientes correos electrónicos:

- notificaciones@velezgutierrez.com
- ljsanchez@velezgutierrez.com
- kserrano@velezgutierrez.com

Así las cosas, quedo atento a la confirmación sobre la radicación del presente memorial, así como a las informaciones que se remitan sobre los avances del proceso, a través de cada una de las direcciones de correo electrónico indicadas.

Respetuosamente,

Ricardo Vélez Ochoa

notificaciones@velezgutierrez.com velezgutierrez.com

RANKED IN Chambers LATIN AMERICA 2020 · TOP RANKED Chambers Latin America 2021 · TOP RANKED Chambers Latin America 2022

VÉLEZ GUTIÉRREZ
ABOGADOS

CRA. 7 # 74 B -56 Piso 14 Bogotá - Colombia
Tel.(601)317 15 13

VÉLEZ GUTIÉRREZ
ABOGADOS

Señores
TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE BOGOTÁ
SALA DE DECISIÓN CIVIL
M.P. DR. JAIME CHAVARRO MAHECHA
secsctribsupbta2@cendoj.ramajudicial.gov.co
E. S. D.

Referencia: Proceso Ordinario Verbal de Responsabilidad Medica **No. 110013103 035 2019 00137 01** de **KEVIN ANDREY LEON AVILA y OTROS** contra **CLÍNICA CHIA S.A. y OTROS.**

- ALEGATOS DE CONCLUSIÓN PARA SUSTENTAR APELACIÓN-

Quien suscribe, **RICARDO VÉLEZ OCHOA,** mayor de edad, domiciliado en Bogotá D.C., identificado con la Cédula de Ciudadanía número 79.470.042 de Bogotá, abogado en ejercicio, portador de la Tarjeta Profesional No 67.706 del C.S. de la J., actuando en mi condición de apoderado judicial de la **CLÍNICA CHÍA S.A**., de conformidad con el poder que obra en el expediente y que reasumo por medio de la presente actuación, a través del presente escrito, dentro del término legal, procedo a ampliar **SUSTENTAR EL RECURSO DE APELACIÓN** formulado oportunamente y en debida forma por mi representada, contra la sentencia de primera instancia, proferida el 24 de noviembre de 2022, conforme a los puntos que expongo a continuación:

I. LA DECISIÓN IMPUGANADA

Mediante sentencia de primera instancia, proferida el 24 de noviembre de 2022 por el Juzgado Treinta y Cinco Civil del Circuito de Bogotá, el *A quo* reconoció parcialmente las pretensiones de la demanda, en el siguiente sentido:

"PRIMERO: Declarar probada la excepción denominada inexistencia de responsabilidad civil, inexistencia del daño y ruptura del nexo causal que propuso MEDICOS ASOCIADOS CLINICA FUNDADORES

SEGUNDO: Declarar parcialmente probadas las excepciones que propuso CLINICA CHIA, HOSPITAL ORTOPEDICOS y CONFIANZA y por lo mismo, negar el pretenso daño emergente y se reduce el daño extrapatrimonial. En lo demás, las excepciones propuestas se declaran imprósperas.

TERCERO: Declarar civilmente responsables a CLINICA CHIA y HOSPITAL ORTOPEDICOS por los daños y perjuicios irrogados a los demandantes debido a la falla medica indicada en las consideraciones antecedentes

CUARTO: A consecuencia, ordenar a la CLINICA CHIA y HOSPITAL ORTOPEDICOS reconocer y pagad dentro de los 8 días siguientes a la ejecutoria de la presente decisión las siguientes sumas de dinero a los demandantes:

4.1 a KEVIN ANDREI LEON AVILA

a. Moral subjetivo: 15.000.000

b. Daño a la vida en relación y a la salud: $70.000.000

c. Lucro cesante pasado y futuro $ 68.577.342

4.2 A MARGARITA AVILA por daño moral subjetivo $7.500.000

4.3 A ELIECER LEON AVILA por daño moral subjetivo $7.500.000

4.4 A EMERSON LEON AVILA por daño moral subjetivo $7.500.000

QUINTO: De las anteriores condenas, la CLINICA CHIA pagará la suma de $52.823.202.60 equivalentes al 30% y el HOSPITAL ORTOPEDICOS pagará la suma de $ 123.254.139.40 equivalente al 70%

SEXTO: Declarar que CONFIANZA, llamada en garantía de la CLINICA CHIA concurrirá en la indemnización que le corresponde asumir a su llamante en garantía hasta el límite del valor asegurado y en todo caso, atendiendo al pacto de un deducible de 7.000.000. es decir, pagara en nombre de la IPS asegurada la suma de $45.823.202.60 a los aquí demandantes

SEPTIMO: Condenar en costas a CLINICA CHIA y HOSPITAL ORTOPEDICOS. Secretaria liquídelas teniendo en cuenta como agencias en derecho común y proindiviso para los demandantes, la suma de $6.000.000"

II. ACLARACIÓN PRELIMINAR

No habiendo sido objeto de impugnación lo que respecta al porcentaje de responsabilidad asignado a mi representada, no podrá ser modificada tal situación en esta instancia, pues tal y como se encuentra previsto en el artículo 328 del Código General del Proceso "el *juez de segunda*

instancia deberá pronunciarse solamente sobre los argumentos expuestos por el apelante", pues en efecto, la interpretación de la jurisprudencia constitucional ha entendido que:

> "Al Juez de segunda instancia le está prohibido pronunciarse sobre las situaciones que no hayan sido planteadas en el recurso, salvo contadas excepciones. Pero, particularmente, tiene prohibido desmejorar la situación del apelante único, ya que de permitirse lo contrario, la consecuencia perversa sería que nadie se atrevería a cuestionar los fallos de primera instancia y, en esa medida, se violarían principios constitucionales propios de una democracia tales como el derecho a la defensa y la doble instancia, garantías propias del debido proceso"[1].

Por lo tanto, como quiera que el extremo activo no impugnó la decisión objeto de apelación, la situación de mi representada no podrá hacerse más gravosa en razón al principio de congruencia.

III. EL RECURSO DE APELACIÓN

De manera respetuosa, me permito presentar la ampliación del recurso de apelación ante este Honorable Tribunal con miras a impugnar la decisión adoptada mediante sentencia proferida el 24 de noviembre de 2022 por el Juzgado Treinta y Cinco Civil del Circuito de Bogotá, con fundamento en las siguientes consideraciones:

1. INEXISTENCIA DE CULPA O FALLA A CARGO DE LA CLÍNICA CHÍA S.A.

Es preciso destacar sobre el particular que, el régimen de responsabilidad médica establecido en nuestro ordenamiento descansa sobre la base del sistema de culpa o falla probada, de manera que para endilgar responsabilidad patrimonial a partir de la prestación del servicio médico u hospitalario era necesario que el extremo activo demostrara, fehacientemente, la falta cometida por mi representada, a fin de acreditar que los daños derivados causalmente de dicha falta probada le fueran realmente imputables.

[1] Corte Constitucional. Sentencia T-455-16

Lo anterior, en virtud del principio general probatorio consagrado en el artículo 167[2] del Código General del Proceso, y además, en la consideración que las obligaciones de los agentes prestadores de los servicios médicos y hospitalarios, salvo muy específicas excepciones, son de medio y no de resultado, por cuanto se dirigen al empleo de todos los instrumentos disponibles que estén al alcance para intentar salvaguardar la vida e integridad de los pacientes.

En ese sentido, es claro que mi representada, tenía frente al paciente la obligación de medio de proveer todos los medios técnicos y humanos a su alcance para propender por su sanación, lo cual efectivamente se acreditó en el trámite del proceso, pero claramente su obligación no implica lograr el resultado esperado, pues la propia condición médica del paciente, los actos recibidos con posterioridad a su atención por mi representada, entre otros, generó que lamentablemente no se alcanzara la totalidad del resultado esperado, pero ello no implica de ninguna manera que la no producción del resultado esperado, se pueda endilgar a mi representada, máxime cuando aquella puso a disposición del paciente todos los medios y herramientas a su alcance para tal fin, y de allí precisamente, que la jurisprudencia y doctrina han sido unánimes en establecer que de la no consecución del resultado pretendido, no puede presumirse la culpa de la institución hospitalaria correspondiente.

En este orden de ideas, es evidente que la alegada responsabilidad médica que se dice le asiste a mi representada es inexistente, como quiera que la CLINICA CHIA empleo todos los medios disponibles e inmediatos que estaban a su alcance para salvaguardar la vida e integridad del paciente, de acuerdo con el cuadro clínico presentado, la sintomatología y el diagnostico que fue determinado para el momento en que fue atendido en las instalaciones de mi representada.

1. Es oportuno poner de presente que en cuanto al **estado de la extremidad inferior izquierda** del paciente para el momento en el que fue atendido por mi representada, éste

[2] "Incumbe a las partes probar el supuesto de hecho de las normas que consagran el efecto jurídico que ellas persiguen. Los hechos notorios y las afirmaciones o negaciones indefinidas no requieren prueba".

tenía perfusión distal de 2 segundos sin dificultad para la movilización de dedos, lo cual quiere decir que el flujo sanguíneo era adecuado y no se había suspendido.

• EXTREMIDADES. simetricas, no se evidencian edemas, pulsos presentes y simetricas, sin cambios de coloracion en la piel, movilidad activa y pasiva conservada. presencia de deformidad a nivel de articulacion de la rodilla izquierda con dolor intenso a la movilizacion perfusion distal de 2 segundos sin dificultad para la movilizacion de dedos excoriacion superficial a nivel de tercio medio de aproximadamente 10 cm de diametro.

2. En aras de determinar el **diagnóstico** del paciente, se ordenó radiografía en la que se evidenció subluxación de rodilla con inestabilidad ligamentaria, razón por la cual, el ortopedista de turno recomienda remisión a centro de mayor complejidad "**dada la necesidad de fijación ligamentaria**".

EVOLUCION - EVOLUCION

1.TENSION ARTERIAL - 130/70

3.FRECUENCIA CARDIACA - 80

FRECUENCIA RESPIRATORIA - 20

1.TEMPERATURA - 36.5

SUBJETIVO - PACIENTE MASCULINO DE 23 AÑOS CON DIAGNOSTICO DE:

1. SUBLUXACION DE RODILLA IZQUIERDA

SUBJETIVO PACINETE REFIERE DISMINUCION DEL DOLOR
1.EXAMEN FISICO - SIN CAMBIOS RESPECTO AL PREVIO

3.PARACLINICOS - RADIOGRAFIA DE RODILLA IZQUIERDA: SE EVIDENCIA SUBLUXACION DE RODILLA

PIE IZUQIERDO, SE TOMA RADIOGRAFIA DE RODILLA EN LA CUAL SE EVIDENCIA SUBLUXACION DE LA ARTICULACION, SE COMENTA CON EL DR ROJAS ORTOPEDISTA DE TURNO QUIEN RECOMIENDA REMISION A CENTRO DE MAYOR COMPLEJIDAD DADA LA NECESIDAD DE FIJACION LIGAMENTARIA POR

Nótese que lo que generó la necesidad a un centro de mayor complejidad fue la necesidad de fijación ligamentaria, que en línea con el estado de la extremidad inferior izquierda no arrojaban necesidad de cirugía vascular. De hecho, tal y como se evidencia en el acta de conciliación No. 001 de 2018, del 08 de noviembre del mismo año, mi representada dejó constancia que la necesidad de tal remisión obedecía a necesidades de orden técnico que no tenía mi representada para ese momento, documento que si bien tuvo en cuenta el *A*

quo, no le dio el alcance y la interpretación pertinente, pues al tenor literal de dicho documento se indica que la necesidad de remisión radica en:

> Dicha decisión médica es tomada dada la necesidad de emplear equipos biomédicos especializados –intensificador de imagen- para realizar la fijación ligamentaria.

3. Por lo anterior, procurando su sanación, mi representada procedió en la mayor brevedad posible, a un hospital especializado en el tipo de lesión que presentaba para ese momento el señor LEON AVILA, esto es, una subluxación de rodilla.

4. Por lo tanto, se inició tramite de referencia y contra referencia, siguiendo los protocolos existentes para este tipo de eventos, remitiéndose finalmente el paciente al HOSPITAL ORTOPEDICO S.A.S., después de haber contactado a 8 instituciones distintas[3] que contaban con la especialidad de ortopedia para fijación ligamentaria por subluxación de rodilla, requerida por el señor KEVIN ANDREY LEON AVILA.

5. La entidad a la cual fue remitido el paciente se encontraba en plenas condiciones y facultades para atender y valorar al paciente por medio de sus especialistas en ortopedia para las necesidades del paciente en dicho momento.

6. Si bien, un día después de la remisión y ya estando el señor LEON AVILA en el HOSPITAL ORTOPÉDICOS S.A.S., esto es, el 29 de diciembre de 2017, se presentó una circunstancia extraordinaria para esta última, relacionada con la suspensión temporal y preventiva de los servicios quirúrgicos de ortopedia, entre otros, que impidió continuar la prestación del servicio, lo cierto es que, se reitera, tal institución era apta para atender

[3] Mi representada se encargó de contactar a las siguientes instituciones:
1. CLÍNICA PATERNO.
2. MEDICAL PROINFO
3. CLÍNICA EUSALUD
4. MEDERI
5. JUAN H CORPAS
6. HOSPITAL SAN RAFAEL
7. HOSPITAL ORTOPÉDICO CAMPIN
8. SAN JOSE INFANTIL

> el diagnostico de ingreso, esto es, la subluxación de la rodilla izquierda para el momento de la remisión.

Ahora bien, es preciso destacar que el Decreto 4747 de 2007, define en su artículo 3, literal e, el trámite de referencia y contrarreferencia como:

> Conjunto de procesos, procedimientos y actividades técnicos y administrativos que permiten prestar adecuadamente los servicios de salud a los pacientes, garantizando la calidad, accesibilidad, oportunidad, continuidad e integralidad de los servicios, en función de la organización de la red de prestación de servicios definida por la entidad responsable del pago.
> La referencia es el envío de pacientes o elementos de ayuda diagnóstica por parte de un prestador de servicios de salud, a otro prestador para atención o complementación diagnóstica que, de acuerdo con el nivel de resolución, **de respuesta a las necesidades de salud.**
> La contrarreferencia es la respuesta que el prestador de servicios de salud receptor de la referencia, da al prestador que remitió. La respuesta puede ser la contrarremisión del paciente con las debidas indicaciones a seguir o simplemente la información sobre la atención prestada al paciente en la institución receptora, o el resultado de las solicitudes de ayuda diagnóstica.

De manera que, se reitera, la institución médica a la cual fue remitido el paciente, daba respuesta a las necesidades de salud que para ese momento aquel presentaba, esto es, atención por ortopedia para la fijación ligamentaria y, en ese sentido, en cumplimiento de lo dispuesto en el parágrafo 3 del artículo 2.6.1.4.2.1 del Decreto 780 de 2016, como quiera que mi representada no tenía los medios técnicos para brindar el servicio requerido por el paciente, se remitió a través del tramite de referencia y contrarreferencia a la IPS habilitada, al menos para ese entonces, para prestar el servicio requerido.

Así las cosas, se puede evidenciar con claridad que todas y cada una de las actuaciones realizadas por el personal adscrito a la CLÍNICA CHÍA S.A. fueron desplegadas con diligencia oportunidad y calidad en consideración al diagnóstico de base que tenía el señor LEON AVILA, esto es, una

subluxación de rodilla con necesidad de fijación ligamentaria.

2. AUSENCIA DE NEXO CAUSAL ENTRE LA CONDUCTA DESPLEGADA POR LA CLÍNICA CHÍA S.A. Y LOS DAÑOS QUE ADUCE SUFRIR LA PARTE DEMANDANTE.

Sobre este aspecto, resulta necesario indicar que correspondía igualmente al extremo activo acreditar que la supuesta conducta indebida desplegada por mi representada fue la generadora del daño aquí reclamado, como quiera que sólo los daños directamente generados a partir de la falta o culpa cometida por la institución médica correspondiente le son imputables.

No obstante, como quiera que el daño alegado no se derivó a partir de la conducta desplegada por mi representada, no era posible endilgar responsabilidad civil, a partir de la generación del referido perjuicio. En efecto, la conducta desplegada por mi representada no tuvo jurídicamente la aptitud para producir el resultado dañoso.

En el caso concreto, el *A Quo* definió el litigio, bajo el siguiente raciocinio: "*atendiendo las anteriores consideraciones, debe pensarse en torno a la* ***causalidad natural*** *y para responder una de las excepciones comunes de los demandados, si la CLINICA CHIA hubiese hecho un debido proceso de referencia y remitir al paciente a una IPS de nivel de complejidad alto III o IV hubiese sido posible la valoración por ortopedia que no se prodigo en el HOSPITAL ORTOPÉDICOS*"

Así pues, el juez de primera instancia consideró que todos los antecedentes tenían ontológicamente el efecto de producir el resultado dañoso, y que, si bien se asignó porcentajes de responsabilidad distintos para las condenadas, lo cierto es que se utilizó un criterio naturalístico como el de la teoría de la equivalencia de las condiciones, teoría hoy, suficientemente abandonada en esta materia, pues el criterio actual adoptado por la jurisprudencia ya de manera unánime, propende por analizar y determinar como causa, la más idónea para producir el resultado, excluyendo para tales efectos, aquellos antecedentes que solo

coadyuvaron al resultado pero que no son idóneos per se para producirlos, y se detecte aquél o aquellos que efectivamente tienen esa aptitud.

Así las cosas, conviene señalar que el presunto daño que alega haber sufrido el extremo activo no encuentra su origen en un evento imputable a alguna acción u omisión alguna atribuible a la CLÍNICA CHÍA S.A., en la medida en que:

1. El cuadro clínico y los eventos adversos que se presentaron sobre la salud del demandante LEON AVILA, son el resultado de la agravación de un cuadro de un accidente previo y las atenciones clínicas presentadas con posterioridad al egreso de las instalaciones de mi representada.

2. El diagnostico de ingreso y egreso fue el de subluxación de articulación de rodilla izquierda, tal y como se evidencia en la página 4 de 11 de la historia clínica.

3.DIAGNOSTICO - 1. SUBLUXACION DE RODILLA IZQUIERDA

3. Dada la necesidad de fijación ligamentaria y la imposibilidad de su realización en las instalaciones de mi representada, se remitió a otra institución en la que si contaran con la capacidad para realizar tal procedimiento. Así lo ratificó el representante legal de la CLINICA CHIA que en su interrogatorio afirmó que la remisión se dio por la necesidad de requerir unos aparatos especializados que no tenía la institución y, en ese sentido, no tenía las condiciones y la infraestructura para llevar a cabo el procedimiento.

4. Como bien lo señaló el Despacho y así lo dispone la Ley[4], el nivel III hace referencia a que la institución tenga médico especialista con la participación del médico general y/o

[4] La denominación de Niveles de Complejidad y Niveles de Atención viene siendo desarrollada desde antes de la Ley 100/93, con un antecedente inicial en la Ley 10 de 1990 y en el Decreto 1760 de 1990. Estas definiciones se ajustan luego

profesional paramédico, y en efecto, el Hospital Ortopédico S.A.S., entidad especializada en el tipo de lesión presentada por el señor LEON AVILA, es decir, la subluxación de rodilla con necesidad de fijación ligamentaria, contaba para el momento de la remisión (28 de diciembre de 2017) con la especialidad de ortopedia, servicios quirúrgicos por dicha especialidad y con todos los recursos humanos, técnicos y científicos para brindar la atención oportuna e inmediata al paciente.

Las atenciones brindadas en la entidad a la que se remitió el paciente no son imputables a mi representada, especialmente, lo que atañe a la suspensión de los servicios quirúrgicos de ortopedia por decisión del ente regulador el 29 de diciembre de 2017, al igual que la atención por la especialidad requerida; es decir, de ninguna manera puede ser imputable a mi representada, la disponibilidad o no del servicio que en todo caso **existía y estaba habilitado para el momento de la remisión,** pues es totalmente un hecho externo a la CLINICA CHÍA y por tanto no le es atribuible.

5. Mi representada no podía prever un hecho futuro, como lo es la medida de seguridad impuesta al HOSPITAL ORTOPEDICO S.A.S. el 29 de diciembre por la Secretaría de Salud, que impidió la continuidad de la prestación del servicio y la consecuente necesidad de remitirlo a la Clínica Fundadores.

6. Ahora bien, si el HOSPITAL ORTOPEDICO S.A.S. recibió al señor LEON AVILA conociendo su diagnóstico y por su propia especialidad, esta conducta hace que sea esta institución y no la CLÍNICA CHÍA S.A. la que deba asumir exclusivamente la responsabilidad de recibirlo, de lo contrario habría podido negarse a la remisión o exponer las razones por las cuales no contaba con los recursos o la infraestructura necesaria para su atención. Sin embargo, recibió al paciente LEON AVILA, y en esa

---

del año 1993 y la Resolución 5261 de 1994 hace la precisión sobre los Niveles de Complejidad, estableciendo los siguientes:
NIVEL I: Médico general y/o personal auxiliar y/o paramédico y/o de otros profesionales de la salud no especializados.
NIVEL II: Médico general y/o profesional paramédico con interconsulta, remisión y/o asesoría de personal o recursos especializados.
NIVEL III y IV: Médico especialista con la participación del médico general y/o profesional paramédico.

medida debe asumir las consecuencias de su tratamiento desde el momento en que ingresó a sus instalaciones y hasta su efectivo egreso

7. El servicio quirúrgico vascular, no se requirió durante la estadía del señor LEON AVILA en la CLINICA CHIA, el paciente tenía perfusión distal, es decir que tenía circulación sanguínea en el extremo inferior izquierdo y de hecho, la cianosis, es decir, la falta de oxígeno, solo vino a presentarse con posterioridad al egreso del paciente de las instalaciones de mi representada.

Historia Clínica de la Clínica Chía del 28 de diciembre de 2017:

• EXTREMIDADES. simetricas, no se evidencian edemas, pulsos presentes y simetricas, sin cambios de coloracion en la piel, movilidad activa y pasiva conservada. presencia de deformidad a nivel de articulacion de la rodilla izquierda con dolor intenso a la movilizacion perfusion distal de 2 segundos sin dificultad para la movilizacion de dedos excoriacion superficial a nivel de tercio medio de aproximadamente 10 cm de diametro.

8. Incluso, durante los días 29 y 30 de diciembre de 2017, según se evidencia en la Historia Clínica del Hospital Ortopédico S.A.S. el paciente tenía buena perfusión distal y adecuado llenado capilar.

9. La **causa efectiva del daño** que llevó a la pérdida de la extremidad inferior izquierda del paciente fue la **lesión vascular**, lesión que era **inexistente** para el momento de la atención brindada por mi representada y que se dio como consecuencia a que el paciente no fue tratado debidamente en los días posteriores al egreso de las instalaciones de mi representada, por causas ajenas a la CLINICA CHIA.

10. Así las cosas, el evento que generó la lesión vascular no tiene relación alguna con las conductas desplegadas por mi representada. Es más, para el momento de su atención ni siquiera había sospecha de lesión vascular y tan era inexistente en ese momento que, tal y como lo indicó el perito en la diligencia de contradicción al dictamen, el reconocimiento tardío de una lesión vascular más allá de las 8 horas es probable que resulte en una amputación, de manera que ese lapso desde que se empezó a presentar la lesión, hasta

que se consolidó con todos sus efectos, por razones de orden lógico, no se pudo generar durante el tiempo de atención en la CLINICA CHIA, ni en las 8 horas subsiguientes a su egreso.

Así, aun cuando no se tenga certeza de cuándo se presentó exactamente la lesión vascular que generó la pérdida de la extremidad, conforme lo indicó el perito y el apoderado del extremo activo en sus alegatos de conclusión, lo cierto es que la lesión, no se dio de manera directa o indirecta con ocasión a la atención brindada por mi representada, la cual fue acorde a la lex artis, al diagnóstico y a la sintomatología presentada por el paciente.

Se reitera, que la diligencia o no de las atenciones medicas prestadas con posterioridad al egreso del paciente de las instalaciones de la CLINICA CHIA no pueden ser endilgadas a ella, como quiera que su actuación se ajusto a la ciencia médica y a los protocolos establecidos. El análisis de responsabilidad frente a ella debe ceñirse a sus actuaciones y no sometida a las conductas de otras entidades que, de haber obrado de otra manera o en otros tiempos, habrían producido otro resultado.

De conformidad con lo expuesto, es claro que erró el Despacho al considerar que le asistía responsabilidad a mi representada por los hechos aquí debatidos, como quiera que tuvo en consideración apreciaciones que no se ajustan a la realidad. Claramente, hacer un análisis retrospectivo de las circunstancias permite ver el panorama con mayor claridad, pero deja de lado el juzgador que lo cierto y así se encuentra demostrado con la historia clínica, es que, el paciente, para el momento de su remisión:

(i) No tenía lesión vascular.
(ii) Su diagnóstico fue subluxación de rodilla
(iii) Dicho diagnostico requería una fijación ligamentaria

(iv) Mi representada no tenía los equipos biomédicos especializados, como el intensificador de imagen para realizar dicha fijación.

(v) En aras de que al paciente le fuera practicada la fijación ligamentaria con los equipos especializados, se remitió a un centro hospitalario que tuviera la especialidad de ortopedia y dichos equipos.

Por lo tanto, haber endilgado responsabilidad a mi representada so pretexto de no haber remitido al paciente a un hospital que tuviera la especialidad de cirugía vascular, que se reitera no requería el paciente para el momento de la atención por parte de la CLINICA CHIA, es llegar al absurdo de considerar que mi representada debía prever circunstancias futuras e hipotéticas, so pretexto de salvaguardar la integridad del paciente, aun para aquellos eventos que eran impredecibles.

Queda visto como el *A quo* realizó el análisis y aplicación de las normas, con fundamento en supuestos de hecho que no correspondían al caso concreto, pues de haberse hecho el análisis correctamente, esto es, si se hubiera estudiado el proceso de referencia efectuado por mi representada con fundamento en el estado y las necesidades del paciente para cuando fue atendido en la CLINICA CHIA, la decisión no habría podido ser otra que la exoneración de responsabilidad de mi representada, toda vez que se reitera, el proceso de referencia se hizo con fundamento en la subluxación de rodilla del paciente, para la realización de la fijación ligamentaria, sin que pudiera preveer mi representada factores posteriores ajenos e imprevisibles para ella, como fue la atención en las clínicas posteriores.

Así las cosas, es claro que la atención que brindó mi representada y su interferencia en la condición posterior del paciente fue en términos prácticos nula o virtualmente insignificante, máxime cuando no es posible imputar responsabilidad alguna a mi representada por las atenciones que el señor LEON AVILA recibió en otras instituciones, pues no existe una sola prueba o indicio que permita atar la conducta desplegada por los profesionales adscritos a la CLÍNICA CHIA S.A., con el lamentable desenlace de la condición médica del paciente que finalizó un poco mas de 10 días después de dicha atención.

Así las cosas, mi representada de ninguna manera puede verse inmersa en una relación causal con los padecimientos posteriores sufridos por el señor KEVIN ANDREY LEON, dado que simplemente no tuvo ninguna injerencia ni en la causa de los daños sufridos que estuvo dada por el desafortunado accidente de tránsito que sufrió, ni tampoco en el tratamiento que se efectuó para su manejo.

3. IMPROCEDENCIA DE LA SOLIDARIDAD.

El presupuesto indispensable para que proceda la mentada solidaridad esta dado por que el delito o la culpa sea cometido por dos o mas personas, razón por la cual la solidaridad requiere para su procedencia la efectiva comisión de una conducta ya sea por acción o por omisión, cuando menos culposa que justifique la atribución de responsabilidad.

Así las cosas, es evidente que la CLÍNICA CHÍA S.A. no cometió culpa o falla alguna en la prestación del servicio que le correspondió, razón por la cual tampoco podía declararse solidariamente responsable.

4. LOS PERJUICIOS RECONOCIDOS SON INEXISTENTES O FUERON AMPLIAMENTE SOBREESTIMADOS.

Estando de acuerdo en lo que atañe al rechazo del daño emergente, me permito realizar los siguientes reparos en relación con los perjuicios reconocidos:

En relación con los perjuicios morales: Sobre el particular, quisiera resaltar que las pretensiones formuladas por cuenta de la madre, el padre y el hermano del demandante no fueron objeto de evaluación, pues no quedó demostrada (i) la afectación psicológica de aquellos, máxime cuando estos manifestaron en la diligencia de interrogatorio no haber requerido atención por la especialidad de psicología y (ii) ni siquiera quedo acreditado con suficiencia el vínculo entre aquellos y el señor KEVIN ANDREI LEON, quienes no hacían parte del círculo primario

de aquel, por cuanto este había formado para entonces, su propio hogar con la señora Karen Tamayo. En ese sentido, el daño quedó acreditado con los propios dichos de los demandantes, sin que entrara a evaluar el Despacho las condiciones que efectivamente daban lugar a declarar su existencia.

En lo que concierne al *"daño vida de relación o daño a la salud"*: Para que pueda hablarse en estricto sentido de daño a la vida en relación, es menester la presencia de elementos de juicio palpables que permitan inferirlo, los cuales debían ser allegados por la parte demandante. Sin embargo, ningún elemento material probatorio se allegó al Despacho, que permitiera establecer la indemnización en los montos efectuados por el *A quo*, se tomo en consideración un caso que no resulta aplicable por analogía, toda vez que el disfrute de la vida y la relación con el entorno, ante la pérdida de la visión y la perdida de una extremidad no son asimilables. El perjuicio se encuentra sobreestimado, como quiera que, se reitera, no se tomaron en cuenta elementos objetivos, como dictámenes médicos, historias clínicas, conceptos psico-fiscos o al menos, no se hizo alusión a ellos en la parte motiva de la sentencia, que permitieran fundamentar objetivamente el daño tasado por el Despacho.

Respecto del lucro cesante: En lo que atañe al lucro cesante pasado, no puede perderse de vista que los conceptos relacionados con los ingresos dejados de percibir durante el período de incapacidad son asumidos por el Sistema de Seguridad en salud, en virtud de la realización de la contingencia de enfermedad o accidente común, a cargo de la Entidad Prestadora de Servicios de Salud –EPS- del régimen contributivo o subsidiado a que se encuentre afiliado el demandante, a la luz de lo preceptuado por la Ley 100 de 1993. De manera que es claro que el patrimonio del señor LEON AVILA no experimentó mengua alguna, derivada de la no obtención de ganancias o ingresos durante el período referido en la estimación de perjuicios realizada por la parte actora, e incluso así quedó acreditado en los interrogatorios practicados al extremo activo, quienes coincidieron en afirmar que para ese momento, la EPS había pagado las incapacidades y adicionalmente, se encontraba con contrato laboral vigente.

Por otra parte, debe tenerse en cuenta que el presupuesto esencial y elemental básico para el reconocimiento del lucro cesante futuro está dado sobre le efectiva incapacidad sufrida por el señor LEON AVILA, y su eventual declaratoria o no de invalidez con los efectos que esto conlleva. Por lo anterior, en el régimen legal colombiano la pérdida de capacidad laboral es un elemento que se califica por parte de entidades especializadas y de acuerdo con le manual único de calificación de invalidez. Para ello el Sistema General de Seguridad Social en Colombia tiene las juntas regionales de calificación de invalidez cuyo superior jerárquico es la Junta nacional de calificación de invalidez que se encarga de resolver una eventual controversia que surja en el trámite de calificación de un afiliado. Así mismo, la ley le permite a las EPS, las ARL, y en algunos casos las compañías de seguros que hayan expedido el seguro previsional, la posibilidad de calificar la pérdida de capacidad laboral de sus afiliados distinguiendo que será la EPS, cuando la causa de la pérdida de capacidad laboral sea de origen común y la ARL, cuando la misma sea laboral, la llamada a asumir los pagos de las prestaciones que sean requeridas.

Así pues, en el régimen legal colombiano esta circunstancia (la pérdida de capacidad laboral) tiene prueba tarifada conforme un manual único de calificación de invalidez y que solo pueden calificar los entes especializados para estos efectos, con base en varios criterios específicos dentro de los cuales se destaca la calificación por parte de un equipo multidisciplinario, y plural.

Por lo tanto, en el caso que nos ocupa, es claro que no se demostró la pérdida de capacidad laboral, pues en lo que respecta al dictamen aportado por la parte demandante para tales efectos, el mismo no puede tenerse en cuenta como quiera que presenta varias deficiencias, conforme lo reconoció acertadamente el *A quo*. Sin embargo, no es admisible que por analogía se acuda al Decreto 1507 de 2014 y su anexo técnico para que con fundamento en la amputación padecida por el demandante, el Despacho determinara la deficiencia por él padecida, pues naturalmente, para determinar la pérdida de capacidad laboral, se reitera, se requiere de un estudio juicioso de múltiples elementos que deben ser valorados por especialistas en distintas disciplinas, con criterios científicos y técnicos que no tiene el Despacho, de manera que no es admisible que se

tome sin fundamento alguno la pérdida de capacidad laboral del 50% que fue determinada por el Despacho para así establecer el lucro cesante futuro que pretende el demandante.

En consecuencia, el presente rubro del perjuicio material no reúne los requisitos contemplados en los artículos 1613, 1614 del Código Civil, ni mucho menos encuentra asidero en los parámetros Jurisprudenciales establecidos por las Altas Cortes, en materia de valoración y cuantificación de perjuicios en juicios de responsabilidad civil.

5. FRENTE A LA RESPONSABILIDAD CIVIL CONTRACTUAL QUE LE ASISTE A LA COMPAÑÍA ASEGURADORA DE FIANZAS S.A. -CONFIANZA S.A.-

Finalmente, de manera subsidiaria, en el remoto evento en el que el Honorable Tribunal decida confirmar la condena en contra de mi representada, solicito que, igualmente, se confirme la decisión respecto de la responsabilidad civil contractual que le asiste a la **COMPAÑÍA ASEGURADORA DE FIANZAS S.A. -CONFIANZA S.A.-,** y en ese sentido se ordene que aquella debe concurrir en la indemnización que le correspondería asumir a mi representada, pagando para tales efectos, "*en nombre de la IPS asegurada la suma de $45.823.202.60 a los aquí demandantes"*

IV. SOLICITUD

En mérito de lo expuesto, respetuosamente solicito al H. Tribunal Superior, se sirva revocar la sentencia de primera instancia en los puntos que fueron objeto de apelación por parte de la CLINICA CHIA S.A. para que, en su lugar, se revoque dicha providencia y se exonere de toda responsabilidad a mi representada.

V. **NOTIFICACIONES**

Por último, me permito manifestar que recibiré notificaciones en la Carrera 7 No. 74B-56 Piso 14 de la ciudad de Bogotá D.C., en la secretaría de su Despacho y en los correos electrónicos ljsanchez@velezgutierrez.com, kserrano@velezgutierrez.com y notificaciones@velezgutierrez.com

De los Honorables Magistrados, respetuosamente,



RICARDO VÉLEZ OCHOA
C.C. 79.470.042 de Bogotá
T. P. 67.706 del C.S. de la J.

MEMORIAL PARA REGISTRAR DRA. LOZANO RICO RV: SUSTENTACION RECURSO DE APELACION TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE BOGOTA SALA DE DECISION CIVIL H. Mag. P. Doctora AIDA VICTORIA LOZANO RICO Bogotá D. C. REFERE

Secretario 02 Sala Civil Tribunal Superior - Seccional Bogota
<secsctribsupbta2@cendoj.ramajudicial.gov.co>
Mié 8/02/2023 4:57 PM

Para: **2 GRUPO CIVIL <2grupocivil@cendoj.ramajudicial.gov.co>**

MEMORIAL PARA REGISTRAR DRA. LOZANO RICO

Cordial Saludo,

OSCAR FERNANDO CELIS FERREIRA
Secretario Sala Civil
Tribunal Superior de Distrito Judicial de Bogotá
Avenida Calle 24 N° 53-28 Torre C Oficina 305
Teléfono 423 33 90 Extensión 8349
Email: secsctribsupbta2@cendoj.ramajudicial.gov.co

De: A. ESLAVA R. <eslavaruiza@hotmail.com>
Enviado: miércoles, 8 de febrero de 2023 4:54 p. m.
Para: Secretario 02 Sala Civil Tribunal Superior - Seccional Bogota <secsctribsupbta2@cendoj.ramajudicial.gov.co>
Asunto: RV: SUSTENTACION RECURSO DE APELACION TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE BOGOTA SALA DE DECISION CIVIL H. Mag. P. Doctora AIDA VICTORIA LOZANO RICO Bogotá D. C. REFERENCIA VERBAL DE MAYOR CUANTIA De UNIMAQ S. A. Contra BANCO AGRARIO S

CORDIAL SALUDO
A. ESLAVA R.

De: A. ESLAVA R.
Enviado: miércoles, 8 de febrero de 2023 4:39 p. m.
Para: info@cendoj.ramajudicial.gov.co <info@cendoj.ramajudicial.gov.co>
Asunto: SUSTENTACION RECURSO DE APELACION SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE BOGOTA SALA DE DECISION CIVIL H. Mag. P. Doctora AIDA VICTORIA LOZANO RICO Bogotá D. C. REFERENCIA VERBAL DE MAYOR CUANTIA De UNIMAQ S. A. Contra BANCO AGRARIO S

En mi calidad de mandatario judicial de la actora, conforme a su ultimo auto, allego escrito sustentatorio del recurso de apelación interpuesto.

Att. ALFONSO ESLAVA RUIZ TP 87.751 del C. S. de la J

Señores:
TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE BOGOTA
SALA DE DECISION CIVIL
H. Mag. P. Doctora AIDA VICTORIA LOZANO RICO
Bogotá D. C.

REFERENCIA VERBAL DE MAYOR CUANTIA
De UNIMAQ S. A.
Contra BANCO AGRARIO S. A.
RADICADO 2021 027301

En mi calidad de mandatario judicial de la actora conforme a su proferimiento último pasado sustento la apelación contra la sentencia de primera instancia.

Solicito, naturalmente, revocar el fallo materia de impugnación y acceder a las pretensiones elevadas en la demanda, condenando a la demandada pagar a la actora las sumas de dinero allí especificadas.

El fundamento fáctico expresado como soporte de las pretensiones se puede reducir al siguiente:

El Banco agrario promovió acción ejecutiva singular de mayor cuantía contra Unimaq de la cual conoció el Juzgado 18 Civil del Circuito de Bogotá, cuyo radicado fue el 2014 - 585.

En el capital mutuado, según el texto del pagaré aportado como base de recaudo, quedó consignado dentro de las garantías de pago el FAG, Fondo Agropecuario de Garantías, por el 80% del valor consolidado, por cuyo concepto los deudores debían pagar los dineros liquidados e incluidos en la cuota periódica correspondiente.

En el curso de la dicha acción judicial fueron cautelados bienes de la demandada, incluyendo dineros.

Tramitada la instancia el Juzgado 18 decretó la terminación del proceso, por pago, al establecer que los dineros embargados, retenidos y puestos a su disposición eran suficientes para pagar el crédito cobrado y las costas.

Consecuencialmente ordenó entonces la entrega del dinero a la actora hasta la satisfacción de la liquidación del crédito y costas y la devolución de los excedentes a la ejecutada.

Preciso e importante es resaltar que aun antes de producirse la terminación dicha ya había devuelto el Juzgado algunos dineros excesivamente retenidos.

Posteriormente UNIMAQ, otrora ejecutada, tuvo conocimiento de que la obligación perseguida judicialmente, a través de la acción ejecutiva mencionada, había sido pagada por FINAGRO al Banco Agrario, desde el mes de julio del año 2010.

Se realizaron por parte de UNIMAQ las diligencias y/o gestiones tendientes a documentar la veracidad del pago.

En efecto, en respuesta al derecho de petición elevado FINAGRO dio cuenta de la realización del pago al Banco Agrario, incluso, con antelación a la fecha de iniciación del proceso del Juzgado 18 Civil del Circuito a que se hizo referencia.

ARGUMENTACION SENTENCIA:

En audiencia celebrada el pasado 23 de agosto el señor Juez de Primera Instancia profirió sentencia desestimatoria de las pretensiones formuladas en la demanda, con las consecuencias jurídica correspondientes.

El principal soporte o argumento central expuesto en la sentencia apelada se refiere al hecho de que no se hizo uso del recurso extraordinario de revisión citando, para robustecer la conclusión, sentencias de la H. Corte Suprema de Justicia, donde fueron tratados temas semejantes.

RAZONES Y CONFIGURACION DE LA RESPONSABILIDAD

Considero preciso reiterar que las pretensiones de la demanda, entre otras, se refieren al total o ciento por ciento de los dineros recaudados en el curso del proceso del Juzgado 18 Civil Circuito muchas veces mencionado en estas diligencias y no a un excedente, saldo o parte de los mismos, como se predica a lo largo del fallo impugnado.

Lo anterior por razón de que al pagar $1.964.220.140.00 FINAGRO al BANCO AGRARIO cubrió con sobrades el total de la obligación demandada judicialmente que fue por valor de $1.245.612.720.00 y $467.104.770.00, esto es, cantidad inferior a la primera mencionada, es decir, el valor de la garantía pagada es o fue superior a la que fue materia de ejecución posterior.

También es preciso aclarar que en parte alguna de la demanda se hace mención o referencia a que la obligación objeto de proceso ejecutivo singular fuera ejecutada doble vez.

Para desvirtuar la argumentación de la sentencia impugnada en cuanto a la viabilidad del recurso extraordinario de revisión se debe preciar que jamás se ha pretendido refutar, quebrar, desconocer u obtener la revocatoria o anulación de la sentencia emitida en el Proceso ejecutivo del Juzgado Dieciocho Civile del Circuito, eventualidad en la que serían, de pronto completamente válidas las disquisiciones hechas en este sentido.

Por el contrario, las sentencias las considero ajustadas al ordenamiento legal, fenómeno diferente consiste en no haber visualizado o advertido el señor Juez de Primera Instancia que, precisamente, el éxito de la acción ejecutiva le abrió paso al abuso del derecho cuya condena se reclama, en otros términos, de no haber sido exitosa la acción ejecutiva, sencillamente, no tendría lugar o camino el abuso del derecho solicitado.

No obstante, del recurso de revisión, ha de replicarse, no tiene cabida, no aplica en el presente asunto y menos puede ser base idónea para negar el pedido demandatorio, pues se hace referencia al numeral 1º del artículo 355 del C. G. del P., que dice; "Haberse encontrado después de pronunciada la sentencia documentos que habrían variado la decisión contenida en ella, y que el recurrente no

pudo aportarlos al proceso por fuerza mayor o caso fortuito o por obra de la parte contraria."

Premisa obligada del texto procedimental pretranscrito es haberse encontrado documentos luego de emitida la sentencia.

El legislador es claro al enunciar documentos. El artículo 243 del C. G. del P. dice que son documentos los escritos, planos, dibujos, cuadros, mensajes de datos, fotografías, cintas cinematográficas, discos, grabaciones magnetofónicas, videograbaciones, radiografías, talones, contraseñas, cupones, etiquetas, sellos y, en general, todo objeto mueble que tenga carácter representativo o declarativo, y las inscripciones en lápidas, monumentos, edificios o similares.

Acorde con lo cual considero necesario indagar por el documento encontrado, que ya existiera, luego de la sentencia y, en verdad, a las pruebas obtenidas a través del derecho de petición elevado, considero no se les puede dar el atributo o alcance que previó el legislador, o no gozan de dicha categoría pues el hecho del pago no es documento, es la realización de un acto que generó efectos jurídicos por un tercero ajeno a las partes cartularmente comprometidas.

En torno a la revisión por la causa dicha, la H. Corte Suprema de Justicia, en su Sala de Casación Civil, del 21 de julio de 1994, con ponencia del Dr. Héctor Marín Naranjo, plenamente vigente, consideró:

"Siguiendo de cerca las pautas trazadas en forma reiterada y constante por la jurisprudencia de la Corte, debe precisarse que los elementos que configuran la causal primera de revisión son: a) Que la nueva prueba que se aporta sea de índole documental; b) Que esos documentos por preexistir hubieran podido allegarse al proceso; c) Que no se pudieron aportar por fuerza mayor o caso fortuito o por obra (dolo) de la parte contraria; d)El hallazgo de los mismos después de haberse proferido el fallo; e) Que los nuevos documentos hubieren determinado una decisión distinta a la contenida en la sentencia recurrida."

En el caso objeto de estudio es evidente, que el recurso echado de menos no era de recibo y es ajeno al asunto porque el hecho del pago, fue un acto unilateral de FINAGRO del que no conocieron los deudores cambiarios, caso distinto que para comprobarlo se acudió al derecho de petición e instrumentalizar el mismo, el o los documentos por obvias razones no preexistían o no existían para la época o fechas en que se tramitó el proceso, menos para cuando se tuvo la oportunidad de formular excepciones: el pago se había realizado pero no se contaba con su prueba, razones suficientes para rectificar el argumento expuesto y con tanta más razón al considerar que si se elevara nuevo derecho de petición a FINAGRO para obtener la prueba del pago, necesariamente, su fecha de expedición seria la actual, dando cuenta de un hecho pretérito.

Adicionalmente la sentencia citada por el operador judicial de primera instancia consagra un ingrediente exótico al que aquí se ventila, acto bilateral: novación, que existía para cuando se tramitó el proceso que se juzgó, pacto o acto jurídico que necesariamente por su carácter de bilateralidad debían conocer los contratantes y, por ende, era apenas elemental exigir su aducción oportuna.

Pero aún más, la ausencia de la tramitación relacionada con el recurso de revisión que en sentir del juez frustra la acción indemnizatoria, tampoco es afortunada en razón de que legalmente la acción de perjuicios no está condicionada a ninguna eventualidad; no se trata de acción de tutela, donde la coexistencia de medios de defensa judicial apareje resultados adversos o negativos al formulante.

Sobre el exceso de las medidas cautelares, se acota en la sentencia, se debió controvertir y alegar en el curso del proceso lo cual considero desatinado en razón a que procedimentalmente no hay norma que lo permita, ni providencia de condena que permitiera u ordenara la cuantificación de los daños, en otros términos, no se disponía del espacio u oportunidad procesal para discutir el agravio por ese concepto.

Se dice en la sentencia que el Banco actuó correctamente y no con fines contrarios a la norma, contra lo cual, reitero, es un verdadero abuso del derecho promover con las consecuencias jurídicas

conocidas una acción cuya titularidad había desaparecido del actor por haber sido desplazado por el pago del tercero, eso constituye comportamiento contrario a la ley o, por lo menos, eminentemente culposo, negligente desconocedor de las normas sustanciales que regulan los efectos del pago hecho, es más en las postrimerías de la sentencia acepta el señor Juez que el pago de la obligación se hizo a quien no se debía.

No es cierto que FINAGRO autorizara o facultara al BANCO AGRARIO para que cobrara en su nombre. En el fallo no se precisa la facultad en comento, simplemente se hacen referencias vagas, livianas e inexactas; por el contrario, se considera tímidamente con el calificativo de exigua prueba. Probanza que, en todo caso, a la actora no competía ya que siguiendo los derroteros que en materia probatoria prescribe la obra adjetiva civil (artículo 167) el Banco demandado debió probar que estaba debidamente facultado por FINAGRO para el recobro de la obligación. Reitero: no hay probanza de ninguna naturaleza en virtud de la cual el demandado pudiera actuar válidamente a nombre del tercero.

Tan débil es el anterior aserto que de haber sido suficiente la intuición, la sospecha o la deducción de la calidad de administrador o autorizado por el Banco respecto de FINAGRO, entonces, el proceso de ejecución que primeramente se tramitó ante el Juzgado Cuarto Civil del Circuito, cuyas copias obran en el expediente, no hubiera sido contrario a la entidad bancaria como aconteció, hubiera bastado con hacer mención a la exigua prueba y hubiera salido airoso, hubiera quedado superada la ausencia de legitimación en la causa por activa que en ese entonces fue exitosa.

Se endilga a la actora no haber realizado actividad probatoria que desvirtuara la autorización del Banco para cobrar contra lo cual reitero, siguiendo elementales normas sobre la carga de la prueba: en el proceso no obra ningún elemento de juicio o probanza de ninguna naturaleza que diere cuenta de que el Banco representaba o actuaba a nombre de FINAGRO al ser su subrogatario, en todo caso, quien debió probar fue la demandada; para la actora era y es imposible demostrar un hecho negativo, con lo cual resulta más desacertado modificar el supuesto de que al demandado competía tal labor probatoria, incluso se hace mención a unas disposiciones

legales que no son certeras sobre el particular y no dan fe de la ausente representación o autorización

Adicionalmente, se dice en el fallo, que la autorización por parte del banco surge a partir de las manifestaciones de la demandada y de FINAGRO pero las mismas son inferencias del señor Juez, lo cual no es suficiente, reitero, para los fines del presente asunto, por el contrario certeramente no hay en el expediente elemento probatorio del que se pueda establecer la representación, reitero.

Que la obligación está calificada en estado de recuperada no tiene nada que ver con la causa petendi; que el crédito o deuda a cargo de los deudores existiera no limpia ni purifica o minimiza el comportamiento abusivo del Banco, su actuar culposo desmedido, cobrando un crédito del que había sido desplazado es suficiente para dar por sentado el requisito echado de menos en la sentencia impugnada.

Es ajeno al debate y por ende carece de toda connotación las funciones o carácter legal de FINAGRO, FONDO AGROPOECUARIO DE GARANTIAS Y BANCO AGRARIO DE COLOMBIA pues lo claro para los efectos tratados, es que ninguno por disposición legal o contractual representa o representaba al otro; el hecho de que en sus fines u objeto social no se incluya o mencione expresamente el compromiso u obligación de cobrar o recaudar dineros no significa que a la omisión, o al silencio, o a la deficiencia se le deba atribuir connotaciones o efectos como las de representante, autorizado, diputado o mandatario efectos jurídicos o contractuales, vale decir, la deficiencia no equivale a decir que se estructura una especie de poder o mandato, y con mayor razón si se tiene en claro que esta ausencia no imposibilita la facultad de constituir legalmente apoderado o mandatario para los actos que se requieran, es elemental que si se confiere la administración a un tercero sus funciones, facultades y limitantes deben aparecer diáfanas.

Además, se aduce en la sentencia, que la Comisión Nacional de Crédito Agropecuario podrá, vocablo este que de tajo descarta su existencia presente para el momento de los hechos materia de debate, por el contrario, es una prerrogativa futura: reglamentar lo relacionado con el cobro de ciertas obligaciones, lo que a las claras

deja en evidencia la ausencia de autorización o poder para la realización de actos como el que aquí se cuestiona. El señor Juez acepta que la reglamentación del tópico de cobranza estaba sujeto a reglamentación, insisto.

Así mismo es pertinente tener en cuenta que la calidad de administrador o de representante de FINAGRO del Fondo Agropecuario de Garantías, FAG, o la reglamentación contenida en el manual de servicios de FINAGRO no son suficientes para arruinar la acción promovida puesto que no hay prueba de la representación.

Además la condición anotada no lo releva del cumplimiento de las cargas establecidas en las normas legales imperativas contenidas en la legislación nacional; las disposiciones del reglamento, precisamente, regulan la relación entre los entes o personas allí mencionadas, ostentando la calidad de tercero ajeno al reglamento la demandante, UNIMAQ.

Esclarecido lo anterior corresponde tratar el ítem relacionado con la condena solicitada en la demanda y recordar que tiene su fundamento en la responsabilidad civil extracontractual por el ejercicio abusivo del derecho.

"En tal evento, el afectado, si aspira a ser desagraviado a través de la condigna indemnización de perjuicios, debe canalizar su reclamo a través de una acción de responsabilidad civil extracontractual y probar los siguientes elementos: a).- La existencia de una conducta antijurídica (dolo, culpa, temeridad o mala fe) del sujeto respecto de quien se dirige la acción; b).- El perjuicio sufrido y, desde luego, c).- La relación de causalidad entre el actuar de aquél a quien se imputa el daño sufrido por éste.

"Con todo, es el juez, en cada caso, el llamado a constatar si las pruebas regular y oportunamente recaudadas demuestran la ocurrencia de los axiomas constitutivos del abuso del derecho a litigar, porque si no logran tal cometido, la acción naufragará por incumplirse la regla del onus probandi prevista en el artículo 167 del Código General del Proceso, que fija en cada contendor el debe r de demostrar el sustento de sus aspiración es, porque de ello depende el resultado del litigio."(SC1066-2021 Corte Suprema de Justicia)

El artículo 2341 del C. C. prescribe que el que ha cometido un delito o culpa, que ha inferido daño a otro, es obligado a la indemnización.

Por su parte el artículo 830 del C. de Co. prescribe que, el que abuse de sus derechos estará obligado a indemnizar los perjuicios que cause.

Doctrinaria y jurisprudencialmente se han establecido los elementos o las condiciones requeridas para que se estructure la responsabilidad civil extracontractual: acción u omisión del sujeto agente; culpa o dolo; nexo de causalidad entre uno y otro y perjuicio.

"El ejercicio del derecho consiste en la conducta del titular conforme a su contenido, limitado internamente por la propia estructura de sus fines para satisfacer las necesidades a que está destinado, y externamente por los derechos ajenos.

"De ahí por qué es abusivo todo acto que, por sus móviles y por su fin, va en contra de un destino, de la función del derecho ejercido; el criterio puramente intencional tiende a sustituirse por un criterio funcional, desprendido del espíritu del derecho, de la función que le atañe."

"Al mismo tiempo se anota que la teoría del abuso de los derechos tiene a la vez un aspecto objetivo y otro subjetivo, correspondiendo el primero a la estructura y a la finalidad que se le tiene atribuida en el medio en que ha de actuar, y el segundo en cuanto deben tenerse en cuenta las condiciones en que se encontraba el agente al poner en movimiento su derecho." Gabriel Escobar Sanín, Negocios Civiles y Comerciales, Tomo II

En sentencia del 1º de abril del 2003, expediente 6499, la H. Corte Suprema de Justicia entre otros, consideró¸"…Así se ha señalado que tanto el dolo o deseo de causar daño, como la culpa, son los limites objetivos del derecho del que se pregona su abuso.

"En suma, se le ha dejado al recto y sano criterio del fallador, la configuración de un determinado caso de conductas que puedan ser calificadas de abusivas. …"

El actuar culposo del BANCO AGRARIO demandado al promover una acción judicial ejecutiva con el propósito de recaudar una obligación ya cancelada por un tercero FINAGRO se edifica como el primer elemento de la responsabilidad.

Los daños se traducen en los montos de dinero entregados al Banco a consecuencia de la acción dicha y los gastos de defensa judicial de una parte y, de la otra, los intereses de los dineros retenidos transitoriamente, durante los meses de inmovilización, en otros términos, a expensas del Banco fueron cautelados bienes, incluyendo dineros, al ser desmedida o exagerada la suma retenida durante la tramitación del proceso fueron devueltos $311.290.756.40 de manera que los frutos de los dineros en exceso embargados y retenidos a título de daño emergente y los intereses generados sobre los primeros conceptos desde las cautelas hasta el momento del pago a título de lucro cesante.

El nexo causal entre uno y otro es cristalino ya que la consecuencia del proceso ejecutivo fue la entrega del dinero al Banco, perjuicio.

En efecto, legalmente el pago es la prestación de lo que se debe así lo establece el artículo 1609 del C. C. y su principal efecto natural y obvio es extinguir la obligación, es decir, liberar al deudor de su compromiso contractual o cambiario.

La regla anterior no es absoluta, pues acontece que en ocasiones el deudor no queda liberado, se trata del pago con subrogación, que a voces del artículo 1666 del mismo Código Civil, es la transmisión de los derechos del acreedor a un tercero que le paga; el artículo 1669 ibidem añade que, se subroga un tercero en los derechos del acreedor en virtud de la ley o de un acuerdo.

Con el radicado 2018002732 de fecha 2018/04/09 FINAGRO en respuesta a la petición elevada, entre otros, dijo:" ….En relación con el primer punto, es preciso señalar que revisados los registros de la entidad el sistema reporta una garantía con numero de certificado 593907, expedida para respaldar un crédito que UNIMAQ AGRICOLA S. A. obtuvo con el Banco Agrario de Colombia S. A. por la obligación con numero 031926100000300, por valor de $2.595.026.500, obligación que obtuvo reconocimiento de garantía el 14 de julio de

2010 por valor de $1.964.220.140. correspondiente al 80% de la cobertura FAG.”

Luego el mismo FINAGRO dando alcance a la anterior respuesta, con numero 2018004897 y fecha 18/06/2018, manifestó: “…Una vez reconocida la garantía al intermediario financiero, como se presentó en este caso, la obligación no puede darse por saldada, como quiera que el FAG se subroga en los derechos que se deriven de la obligación reclamada, hasta la concurrencia de las sumas pagadas.”

Ratifica el pago el escrito de contestación de demanda en el cual se acepta, reitero, el pago de la garantía relacionada con la obligación materia de cobro judicial, incluso se califica a FINAGRO, en representación del FONDO AGROPECUARIO, como subrogatorio de la obligación reclamada hasta la concurrencia del valor pagado, hecho por demás reiterado por el Banco en el informe juramentado presentado al Juzgado, aspecto sobre el cual es importante resaltar que las respuestas dadas por FINAGRO tanto en el derecho de petición previo a este proceso como en el trámite de la acción de tutela son al extremo certeras en cuanto la fecha de ocurrencia del pago hecho, esto es el 14 de julio de 2010, documentos contra los cuales la demandada no hizo reparo alguno.

En Banco demandado en sus intervenciones recaba en la calidad que ostenta como entidad de segundo nivel mientras que FINAGRO es representante del FONDO AGROPECUARIO DE GARANTIAS y que cuando aquel paga no exonera al deudor de la deuda.

Jurídicamente es cierto que cuando el garante paga la garantía no extingue la obligación por cuanto el deudor continúa vinculado con su compromiso, lo que acontece es que, por ministerio de la ley, tal hecho, genera una obligada mutación, cambio o desplazamiento de sujeto, por encima de todo querer o compromiso del tercero que paga con el deudor o con el Banco, esto es, sale del escenario obligacional el acreedor original asumiendo su lugar el tercero que pagó, subrogatrario, tan cierto y veraz es lo dicho que el FINAGRO en respuesta al derecho de petición mencionado: Con el radicado 2018002732 de fecha 2018/04/09 dijo:” ….En relación con el primer punto, es preciso señalar que revisados los registros de la entidad el sistema reporta una garantía con numero de certificado 593907,

expedida para respaldar un crédito que UNIMAQ AGRICOLA S. A. obtuvo con el Banco Agrario de Colombia S. A. por la obligación con numero 031926100000300, por valor de $2.595.026.500, obligación que obtuvo reconocimiento de garantía el 14 de julio de 2010 por valor de $1.964.220.140. correspondiente al 80% de la cobertura FAG."

Además, FINAGRO dando alcance a la anterior respuesta, con numero 2018004897 y fecha 18/06/2018, manifestó: "…Una vez reconocida la garantía al intermediario financiero, como se presentó en este caso, la obligación no puede darse por saldada, como quiera que el FAG se subroga en los derechos que se deriven de la obligación reclamada, hasta la concurrencia de las sumas pagadas."

Lo cual a las claras significa que para el 18 de junio de 2018 UNIMAQ era deudora de FINAGRO de las sumas pagadas al Banco.

Los manuales de crédito o normas jurídicas que alude la parte demandada con el propósito de atemperar los efectos propios del pago hecho carecen de la virtualidad o el alcance de desconocer la regla contenida en el artículo 1666 del C. C., citado varias veces.

Con más razón si se considera que no hay impedimento legal o contractual que le vede tacita o expresamente la facultad a FINAGRO para recobrar el dinero pagado a consecuencia de la garantía extendida, ya que efectivamente, reitero, se convirtió en titular del derecho de crédito contenido en el instrumento negociable, más aún siendo administrador del FONDO AGROPECUARIO DE GARANTIAS. Además, el certificado de existencia de representación de la cámara de comercio del Banco demandado aportado con la demanda y los documentos aportados con la contestación dejan ver que se trata de personas jurídicas diferentes con capacidad propia, obviamente.

La calidad dicha, la de administrador, mandatario del banco o autorizado no se intuye, no se deduce o no opera automáticamente, debe aparecer palpable, nítido, cristalino en la litis.

Del reglamento de crédito o normas internas que se ocupan del tema, ni la ley en sentido general no le dan la condición de

mandatario al Banco Agrario para actuar a nombre de FINAGRO per se.

El destino dado al dinero recaudado judicialmente por el Banco es tema extraño a la responsabilidad endilgada, eventualmente, si se tratara de asuntos penales bien podría tener relievancia jurídica el proceder posterior, pero lo cierto es, como se anotó, que para cuando se respondió el derecho de petición elevado UNIMAQ era deudora de FINAGRO.

La calidad de mandatario del BANCO AGRARIO o administrador, una vez se efectuó el pago por FINAGRO, no apareció ni se mencionó en el proceso ejecutivo.

Conforme al principio de la relatividad de los contratos, los convenios o pactos existentes entre las entidades financieras no pueden afectar a los terceros ajenos a los mismos y menos vincularlos.

En efecto, la autonomía de la voluntad solo tiene alcance para regular intereses propios y solo por excepción puede vincular o perjudicar a quienes no sean parte del contracto o acto jurídico, lo que se conoce como el principio de la relatividad, por lo que debe entenderse que el contrato es un simple hecho frente a terceros.

El anterior enunciado tiene total apego legal, tanto en la ley comercial como en la civil, ejemplo el artículo 1608 del C. C., según el cual todo contrato legalmente celebrado es una ley para los contratantes y no puede ser invalidado sino por su consentimiento mutuo o por causa legales, norma esta aplicable al caso tratado por remisión expresa del Código de Comercio artículo 822.

Se sigue de lo dicho que el Banco Agrario al momento de promover la demanda ejecutiva del Juzgado 18 Civil del Circuito de Bogotá no tenia la potestad legal para hacerlo en razón de que su derecho, por el hecho del pago realizado por FINAGRO, se había desplazado a éste, acontecer plenamente conocido.

El pago, como se manifestó en el escrito base de la presente actuación, no fue conocido por los entonces deudores cambiarios,

certeza que se materializó solo a partir del derecho de petición elevado a FINAGRO a comienzos del año 2018.

Por el desconocimiento del hecho del pago por FINAGRO al banco AGRARIO UNIMAQ, en el curso del proceso del Juzgado Dieciocho Civil del Circuito, no tuvo la oportunidad de aducir la defensa que generaba este suceso.

Existe un principio universal, lógico y jurídico consistente en que no se esta obligado a lo imposible, lo cual en buen romance significa que si UNIMAQ desconocía el pago a que se viene haciendo referencia obvio era concluir que no podía alegar medio exceptivo en dicho sentido en el Juzgado 18 pluricitado.

Contrario a lo expuesto los actos realizados por UNIMAQ para dar con la prueba del pago son verificables en el expediente: con la actuación relacionada con la acción de tutela promovida contra FINAGRO cuyo conocimiento correspondió, inicialmente, al Juzgado 39 Civil del Circuito de esta ciudad, radicado 2018 – 336, luego en segunda instancia al H. Tribunal Superior, radicado 2018 336-01; el derecho de petición hecho a FINAGRO el 4 de abril de 2018, la respuesta dada por este órgano con radicado 2018004924 y respuesta dada a Rafael Guillermo Carvajal Roldan quien fuera representante legal de UNIMAQ AGRICOLA, deudora cambiaria en el titulo materia de ejecución, cuyo radicado es 2019011222, del 03/12/2019 documentos unos y otros aportados con el escrito de demanda, sobre los cuales la demandada al descorrer el traslado no hizo reparo o manifestación alguna.

Considero pertinente referirme a la COSA JUZGADA que se menciona en el escrito de contestación. Sobre ella el artículo 303 del C. G. del P. prescribe que, la sentencia ejecutoriada proferida en proceso contencioso tiene fuerza de cosa juzgada siempre que el nuevo proceso verse sobre el mismo objeto, se funde en la misma causa que el anterior y entre ambos procesos haya identidad jurídica de partes.

El objeto, según jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de Justicia son las prestaciones o declaraciones que se reclaman a la justicia y el profesor López Blanco en su conocida obra de derecho

procesal añade que, el objeto no solo se encuentra en las pretensiones sino en los hechos base y lo decidido en la sentencia. Respecto de la causa, el mismo profesor acota que es la razón por la cual se demanda o los motivos que se tienen para pedir al estado determinada sentencia.

En este proceso no se identifica sino la presencia de identidad de partes, ya que se trata de los mismos extremos procesales. No acontece lo mismo con las restantes condiciones como quiera que en el proceso ejecutivo la causa fue el no pago de las obligaciones a cargo de los deudores cambiarios y el objeto el pago coercitivo de las mismas, al paso que el objeto y la causa de este litigio lo constituyen la sentencia de condena por responsabilidad extracontractual por la realización de los hechos que se consideran como abuso del derecho. Argumentaciones suficientes para entender que no puede hablarse de cosa juzgada.

En el caso presente careciendo de la potestad legal por el hecho de pago realizado por FINAGRO el Banco Agrario enderezó acción ejecutiva contra UNIAMQ cautelando, como se dijo anteladamente, bienes de la deudora.

Es cierto que la entonces accionada, por ser avalista de la obligación cambiaria judicializada, era deudora del Banco Agrario, pero también es cierto que, al producirse el pago por cuenta de un tercero, FINAGRO, la titularidad de la acción se transfirió por ministerio de la ley a éste, quien entonces quedó total y plenamente investido para el recobro, repito, como lo aceptó en la respuesta dada al derecho de petición relvado y ya referido..

No se trata de revivir con esta causa procesos anteriores entre las mismas partes pues, como dice el escrito de contestación, tienen el sello de cosa Juzgada. Se trata, por el contrario, de establecer la responsabilidad y consiguiente condena por el hecho de adelantar una causa judicial sin ser el titular de la acción y carecer de la representación del subrogatario, entiéndase FINAGRO.

Como así no aconteció debe seguirse que el ejercicio de la acción cambiaria por parte del Banco ante el Juzgado 18 fue abusiva, hecho culpable generador de su responsabilidad.

La consecuencia de tal proceder es la de indemnizar los perjuicios causados a la actora, ellos son:

Pago total de los dineros recaudados en el curso de proceso del Juzgado 18 civil del circuito,

Intereses moratorios establecidos en el artículo 884 del C. de Co., sobre la anterior cantidad, desde el decreto de la cautela;

Así mismo el valor de los honorarios pagados al defensor de la causa del proceso ejecutivo del juzgado 18,

Intereses moratorios desde su pago e,

Intereses causados desde la fecha de cautela de los dineros hasta cuando en el curso del proceso se ordeno devolver lo excesivamente cautelado.

Al respecto es pertinente hacer mención que dado el carácter de sociedades comerciales que tanto demandante como demandada ostentan, según los certificados de existencia y representación aportados con la demanda, que el objeto social de UNIMAQ es claro en cuanto al lucro que busca en desarrollo de su objeto social y que el verse privado de gran parte de su capital de trabajo obligadamente se debe concluir que los perjuicios fueron enormes, que en este caso se traducen en los intereses, a título de lucro cesante, frutos que debe resarcir el banco demandado, según las liquidaciones que aparecen detalladas y especificadas en la demanda, sin ser válido pretender exigir dictamen pericial pues se trata simplemente de intereses sobre unas sumas de dinero, de entender de forma diferente el tema tendría que exigirse, entonces, prueba técnica en todos los procesos de ejecución en los que se prediquen interés.

OBJECION AL JURAMENTO ESTIMATORIO

En las sumas indemnizatorias solicitadas en la demanda con estrictez se cumplió el mandato contenido en el artículo 206 del C, G, del P., pues se indicó en cada concepto su valor y los intereses calculados

durante el lapso reclamado. También en la demanda se especifica si los valores corresponden a daño emergente o lucro cesante.

Entender que para calcular intereses se requiera de un dictamen pericial o prueba técnica seria tanto así como exigirlo en todos los procesos de ejecución en los que se demandan intereses, lo cual no considero valido.

Por el contrario, la pretendida objeción no satisface las exigencias del legislador establecidas en el texto procesal precitado en cuanto que, se debe precisar razonadamente las inexactitudes.

EXCEPCIONES:

1. **Falta de jurisdicción** no puede remitirse a dudas la misma pues ya la H. Corte Suprema de Justica en sentencia del 25 de abril de 2018, SC1230-2018, donde también fue demandado el Banco Agrario, en su aspecto medular consideró…iv. El punto puesto a la consideración de la jurisdicción ordinaria, en ultimas obedece a la naturaleza y materia de la obligación indemnizatoria y no al carácter orgánico de la entidad. V controversias como la presente están expresamente excluidas del ámbito de la jurisdicción de lo contencioso administrativo al tenor de lo previsto por el numeral 1 del artículo 105 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.”.

2. **EXISTENCIA DE LAS OBLIGACIONES DIRECTAS A CARGO DE UNIMAQ S. A, Y A FAVOR DEL BANCO AGRARIO**, **EXISTENCIA DE TÍTULOS VALORES PARA GARANTIZAR EL CREDITO COMO TAL Y NO POR OBLIGACIONES DE HACER.** Contra lo cual es suficiente con afirmar que no se cuestiona o se discute en el presente la calidad de deudora de la demandante o la suscripción de los títulos valores otrora empleados como fuente de recaudo.

3. **DEBIDO OTORGAMIENTO DE LA GARANTIA FAG** La argumentación expuesta bajo este enunciado constituye tema ajeno al debate probatorio y por ende carece de toda

relievancia ya que el apego legal con el que se extendieron las garantías no es materia de discusión.

4. **COBRO DE LO DEBIDO A UNIMAQ S. A. POR EL BANCO AGRARIO.** Lo dicho en este acápite, en cuanto que con el pago que hizo FINAGRO al Banco Agrario lo subrogó en la obligación es precisamente el fundamento de la presente causa: los efectos del pago con subrogación.

5. **INEXISTENCIA DE LA OBLIGACION DE INDEMNIZAR POR PARTE DEL BANCO AGBRARIO A LA DEMANDANTE**. La obligación indemnizatoria es, justamente, la que se reclama de la jurisdicción y sus presupuestos los debe determinar el señor Juez.

6. **BUENA FE DE LA DEMANDADA.** En el caso tratado no se reclama la condena por la intención del demandado, el fundamento de la demanda estriba en la realización del hecho culposo de demandar a UNIMAQ sin que importara que el pago lo subrogó, lo desplazó.

7. **COBRO DE LO NO DEBIDO POR LADEMANDANTE**. Es cierto que el Banco demandado no adeuda suma alguna a la demandante, lo cual es diverso a la condena que se solicita imponer.

8. **NO CONFIGURACION DE LOS ELEMENTOS DE LA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL**. Vía inadecuada. Contra lo cual es pertinente advertir que el fundamento fáctico de la demanda no se refiere a las obligaciones surgidas del contrato de mutuo entonces celebrado entre el Banco demandado y la demandante, el origen y causa de esta litis es bien diverso.

9. **INEXISTENCIA DEL DAÑO PADECIDO POR LA ACTORA.** Es precisar recordar que la determinación del daño y su magnitud compete valorarlo al señor Juez, no obstante el perjuicio a que se refiere el artículo 1616 invocada aplica para los casos de responsabilidad contractual.

10. **INEXISTENCIA DEL NEXO CAUSAL ENTRE EL DAÑO DEMANDADO Y LA CONDUCTA DEL BANCO.** Argumentos sobre los cuales puntualizo que al accionar el Banco cambiariamente ante el juzgado 18 cobrando un crédito de que no era titular por el pago infinitamente mencionado no puede menos que causar los perjuicios objeto de la demanda presente cuya condena se reclama hoy a la jurisdicción.

La obligación cambiaria pudo estar vigente y el compromiso cartular de los deudores también, son argumentaciones legalmente ciertas cual lo entroniza el demandado, pero FINAGRO debió facultar al Banco para demandar ejecutivamente lo cual no aconteció.

11. **ABUSO DEL DERECHO**. Es defensa ajena a la litis.

12. **GENERICA.** Al señor Juez compete la verificación plena de lo aquí discutido.

PRUEBAS:

La prueba documental allegada con la demanda: copias integras del proceso de ejecución del Juzgado 18, copias íntegras de la acción de tutela mencionada en los hechos de esta demanda y derechos de petición, sobre la cual la parte demandada no hizo reparto alguno dan perfecta cuenta de todos y cada uno de los hechos fundamento de las pretensiones, con lo cual se cumple la carga procesal de probar el supuesto de hecho pretendido, con mayor razón cuando el mismo FINAGRO aceptó en respuesta mencionada muchas veces en este escrito que el pago hecho al banco no liberaba a UNIMAQ y que la obligación continuaba activa.

De no ser acogidos los anteriores planteamientos considero por los menos viables las indemnizaciones relacionadas con el exceso de las cautelas, frutos sobre los dineros devueltos, deben ser reconocidas puesto que en ellos concurren los ingredientes normativos, doctrinarios y jurisprudenciales requeridos para su pago, sobre los cuales en la sentencia no se hizo particular mención, no se abordó el tema de forma particular o concreta como lo imponía la situación. Recuérdese que en la causa petendi y en las pretensiones

claramente están individualizados los conceptos y valores reclamados.

Por lo acotado comedidamente solicito revocar la sentencia objeto de este recurso de apelación y acceder a las pretensiones elevadas en la demanda.

Cordialmente,

ALFONSO ESLAVA RUIZ
C. C.19.451.411 de Bogotá
T. P. No.87.751 C. S. de la J.
Calle 12 No.5-32 apto. 211
Email eslavaruiza@hotmail.com

MEMORIAL PARA REGISTRAR DR. MUNERA VILLEGAS RV: Rad. 11001319900120195356205 - Sustentación Apelación - GLOBALNEWS GROUP COLOMBIA S.A.S.

Secretario 02 Sala Civil Tribunal Superior - Seccional Bogota <secsctribsupbta2@cendoj.ramajudicial.gov.co>
Mié 8/02/2023 4:42 PM

Para: **2 GRUPO CIVIL <2grupocivil@cendoj.ramajudicial.gov.co>**

1 archivos adjuntos (811 KB)
Rad. 11001319900120195356205 - Sustentación Apelación - GLOBALNEWS GROUP COLOMBIA S.A.S..pdf;

MEMORIAL PARA REGISTRAR DR. MUNERA VILLEGAS

Cordial Saludo,

OSCAR FERNANDO CELIS FERREIRA
Secretario Sala Civil
Tribunal Superior de Distrito Judicial de Bogotá
Avenida Calle 24 N° 53-28 Torre C Oficina 305
Teléfono 423 33 90 Extensión 8349
Email: secsctribsupbta2@cendoj.ramajudicial.gov.co

De: Germán Darío Hernández Moreno <g.d.hernandez99@gmail.com>
Enviado: miércoles, 8 de febrero de 2023 4:33 p. m.
Para: Secretario 02 Sala Civil Tribunal Superior - Seccional Bogota <secsctribsupbta2@cendoj.ramajudicial.gov.co>
Cc: Bernardo Andrés Carvajal <bcnotificaciones2021@gmail.com>; bc@bcasociados.com.co <bc@bcasociados.com.co>; Fernando Pinzon <fernando.pinzon@globalnews.com.co>
Asunto: Rad. 11001319900120195356205 - Sustentación Apelación - GLOBALNEWS GROUP COLOMBIA S.A.S.

Honorables Magistrados del

TRIBUNAL SUPERIOR DE DISTRITO JUDICIAL DE BOGOTÁ.
SALA CIVIL.
Magistrado Ponente: Doctor JESÚS EMILIO MÚNERA VILLEGAS.
E. S. D.

REF. Acción de Competencia Desleal. Art. 20 Ley 256 de 1996 de GLOBALNEWS GROUP COLOMBIA S.A.S., (antes, COMPETENCIA PLUS S.A.S.) contra MEDIA TECHNOLOGY WORLD S.A.S., y otros.

Exp. 11001319900120195356205.

Asunto: Sustentación del Recurso de Apelación en contra de la Sentencia de Primera Instancia.

Germán Darío Hernández Moreno, actuando en mi condición de apoderado judicial de GLOBALNEWS GROUP COLOMBIA S.A.S., (antes, COMPETENCIA PLUS S.A.S.), de manera atenta y respetuosa, y encontrándome dentro de la oportunidad legal correspondiente remito -en archivo adjunto- el escrito de SUSTENTACIÓN DEL RECURSO DE APELACIÓN en contra de la sentencia de primera instancia proferida por la Delegatura para Asuntos Jurisdiccionales de la Superintendencia de Industria y Comercio.

Cordialmente,

Germán Darío Hernández Moreno
HERNÁNDEZ & HERNÁNDEZ – ABOGADOS ASOCIADOS S.A.S.
Carrera 13 No. 75-20, Oficina 305
Cel . +57 310 3225277
Bogotá - Colombia

No imprimas si no es necesario. Protejamos el medio ambiente

NOTA CONFIDENCIAL: La información contenida en este E-mail es confidencial y sólo puede ser utilizada por el individuo o la compañía a la cual está dirigido. Si no es el receptor autorizado, cualquier retención, difusión, distribución o copia de este mensaje es prohibida y será sancionada por la ley. Si por error recibe este mensaje, favor reenviarlo y borrar el mensaje recibido inmediatamente.

CONFIDENTIAL NOTE: The information in this E-mail is intended to be confidential and only for use of the individual or entity to whom it is addressed. If you are not the intended recipient, any retention, dissemination, distribution or copying of this message is strictly prohibited and sanctioned by law. If you receive this message in error, please immediately send it back and delete the message received.

Honorables Magistrados del

TRIBUNAL SUPERIOR DE DISTRITO JUDICIAL DE BOGOTÁ.

SALA CIVIL.

Magistrado Ponente: Doctor JESÚS EMILIO MÚNERA VILLEGAS.

E. S. D.

REF. Acción de Competencia Desleal. Art. 20 Ley 256 de 1996 de **GLOBALNEWS GROUP COLOMBIA S.A.S., (antes, COMPETENCIA PLUS S.A.S.)** contra **MEDIA TECHNOLOGY WORLD S.A.S., y otros.**

Exp. 11001319900120195356205.

Asunto: Sustentación del Recurso de Apelación en contra de la Sentencia de Primera Instancia.

Germán Darío Hernández Moreno, identificado con la cédula de ciudadanía No. 79.837.177 de Bogotá, y con la tarjeta profesional No. 121.580 del C.S de la J., actuando en mi condición de apoderado judicial de **GLOBALNEWS GROUP COLOMBIA S.A.S., (antes, COMPETENCIA PLUS S.A.S.),** de manera atenta y respetuosa, y encontrándome dentro de la oportunidad legal correspondiente presento el escrito de **SUSTENTACIÓN DEL RECURSO DE APELACIÓN** en contra de la sentencia de primera instancia proferida por la Delegatura para Asuntos Jurisdiccionales de la Superintendencia de Industria y Comercio el pasado 24 de noviembre de 2022, en los siguientes términos:

ANTECEDENTES FÁCTICOS FUNDAMENTALES DEL LITIGIO.

Los hechos que dieron origen a este litigio están debidamente enumerados en la demanda, y por lo tanto, me remito a ellos con el fin de no hacer extenso este escrito.

CARRERA 13 NO. 75-20 OFICINA 305. TELÉFONO (57-1) 5415793
BOGOTÁ D.C. - COLOMBIA

No obstante, para efectos de marco introductorio, sí resulta pertinente mencionar, de manera concreta, los siguientes antecedentes fácticos:

1. Los actos de competencia desleal en los que incurrieron los demandados y que dieron origen a la demanda ocurrieron entre marzo y octubre de 2019.

   En ese marco temporal:

   - Desde la IP 181.48.58.188 los demandados ingresaron por lo menos en 43.306 ocasiones al servidor de **COMPETENCIA PLUS S.A.S.**, y desde la IP 181.48.58.187 ingresaron por lo menos 16.067 ocasiones, y sustrajeron información de la demandante.
   - **MEDIA TECHNOLOGY WORLD S.A.S.,** prestó servicios suministrando la información que era sustraída de **COMPETENCIA PLUS S.A.S.**
   - Los demandados utilizaron la información comercial confidencial de **COMPETENCIA PLUS S.A.S.,** para presentar ofertas de servicios a los clientes de **COMPETENCIA PLUS S.A.S.,** y desviarlos hacia **MEDIA TECHNOLOGY WORLD S.A.S.**
   - Los demandados ofrecieron precios artificiosos, que no reflejan la inversión que se requiere para prestar el servicio de monitoreo de medios, y ofrecieron esos precios artificiosos porque no estaban incurriendo en los gastos en que sí incurría **COMPETENCIA PLUS S.A.S.**, pues ellos sustraían la información de **COMPETENCIA PLUS S.A.S.**
   - Los demandados actuaron de manera desleal, de manera contraria a las buenas costumbres mercantiles.
   - Los demandados desviaron efectivamente la clientela de **COMPETENCIA PLUS S.A.S.**
   - Los demandados actuaron desconociendo el mandato previsto en el artículo 83 de la Constitución Nacional.

2. La sustracción de la información de **COMPETENCIA PLUS S.A.S.**, desde las IPs 181.48.58.188 y 181.48.58.187, que para el momento de

los hechos (marzo – octubre de 2019) COMCEL S.A., había asignado a **MEDIA TECHNOLOGY WORLD S.A.S.,** está siendo objeto de investigación penal por la Fiscalía General de la Nación.

3. Durante la elaboración del dictamen pericial que se practicó a los equipos de **COMPETENCIA PLUS S.A.S.**, y en el cual se pudo concluir que desde las IPs 181.48.58.188 y 181.48.58.187 -asignadas a **MEDIA TECHNOLOGY WORLD S.A.S.**- se estaba sustrayendo información de la demandante, se tomó la respectiva imagen forense digital y con el fin de salvaguardar la prueba y evitar su alteración se le impusieron los respectivos sellos y se le entregó en custodia al señor Fernando Pinzón, representante legal de la demandante, para posteriormente entregarla a la Fiscalía General de la Nación.

   Actualmente la imagen forense digital permanece intacta, bajo la custodia del señor Fernando Pinzón, con los respectivos sellos, y solo puede ser verificada o analizada en una diligencia judicial en la cual se levanten las actas y se dejen las constancias respectivas con el fin de mantener la cadena de custodia, pues de lo contrario perderá todo el valor probatorio cuando se aporte a la investigación que se adelanta en la Fiscalía.

LAS PRETENSIONES DE LA DEMANDA.

En términos generales son las siguientes:

1. Que se declare que los demandados actuaron de manera ilegal, en perjuicio **COMPETENCIA PLUS S.A.S.**, al ejecutar los siguientes actos de competencia desleal:

   - De desviación de la clientela (artículo 8 de la Ley 256 de 1996)
   - Actos de desorganización (artículo 9 de la Ley 256 de 1996)
   - Violación de secretos (artículo 16 de la Ley 256 de 1996)
   - Inducción a la ruptura contractual (artículo 17 de la Ley 256 de 1996)
   - Violación de normas (artículo 18 de la Ley 256 de 1996)

- Desconocieron la prohibición general de ejecutar actos de competencia desleal prevista en el artículo 7 de la Ley 256 de 1996.

2. Que se condene a los demandados a pagar los perjuicios causados.
3. Que se le condene a pagar los intereses de mora sobre los perjuicios causados.

HECHOS RELEVANTES PARA RESOLVER ESTE LITIGIO Y QUE FUERON PROBADOS EN EL PROCESO.

1. Está probado, documentalmente y por declaración de parte que, **COMPETENCIA PLUS S.A.S.,** se constituyó en 1998 y su objeto social, de manera general, es monitoreo, cobertura y análisis permanente de medios de comunicación.

2. Está probado, documentalmente y por declaración de parte que, para el momento en que los demandados incurrieron en los actos de competencia desleal **COMPETENCIA PLUS S.A.S.,** tenía 21 años de experiencia en este mercado.

3. Está probado, documentalmente y por declaración de parte que, para el desarrollo de su objeto social, en el año 2019, cuando los demandados ejecutaron los actos de competencia desleal, **COMPETENCIA PLUS S.A.S.,** tenía que incurrir en costos mensuales de $300.891.352 (nómina, suscripciones, arriendos, equipos, infraestructura, procesamiento, etc.)

   Los solos gastos de nómina ascendían a 170 millones aproximadamente, pues se requieren entre 90 y 100 trabajadores para desarrollar el objeto social.

   Con una menor cantidad de dinero, de personal, de infraestructura era imposible cumplir con el objeto social, por lo menos no de manera legal, y por supuesto, ese costo se ve reflejado en el valor que se cobra a los clientes.

   La minucia de los costos e inversiones indispensables para ejecutar legalmente el objeto social están detallados en los hechos de la demanda y por lo tanto me remito a ellos.

Los costos e inversiones mencionados están probados documentalmente en el expediente, y ninguna de esas pruebas documentales fue tachada de falsa.

4. Está probado, documentalmente y por confesión que, **MEDIA TECHNOLOGY WORLD S.A.S.**, se constituyó en octubre de 2018, ni siquiera un año antes de haberse radicado la demanda con la que se dio origen a este proceso.

5. Está probado por confesión que, su el objeto social de **MEDIA TECHNOLOGY WORLD S.A.S.**, es el mismo de **COMPETENCIA PLUS S.A.S.**, que es el monitoreo de medios.

6. Está probado por confesión que, **MEDIA TECHNOLOGY WORLD S.A.S.**, desarrolla el mismo objeto social de la demandantecon solo 8 empleados.

7. Está probado por confesión y declaración de parte que esos 8 empleados, todos, fueron trabajadores de **COMPETENCIA PLUS S.A.S.**

8. Está probado, por confesión y mediante certificación de la empresa COMCEL S.A., que desde el 18 de diciembre de 2018 y hasta el 01 de octubre de 2020 COMCEL S.A., le prestó el servicio de internet a **MEDIA TECHNOLOGY WORLD S.A.S.,** y que para ello le asignó, entre otras, las IPs 181.48.58.188 y 181.48.58.187.

9. Está probado mediante dictamen pericial que desde el mes de marzo de 2019 y hasta el mes de septiembre de 2019, desde las IPs 181.48.58.188 y 181.48.58.187, que COMCEL S.A., le había asignado a **MEDIA TECHNOLOGY WORLD S.A.S.**, se accedía al servidor de **COMPETENCIA PLUS S.A.S.,** para sustraer -ilegalmente- los PDFs que **COMPETENCIA PLUS S.A.S.,** tenía y recibía de los medios de comunicación escritos.

   Desde la IP 181.48.58.188 los demandados ingresaron por lo menos en 43.306 ocasiones al servidor de **COMPETENCIA PLUS S.A.S.**, y por lo menos 16.067 ocasiones desde la IP 181.48.58.187.

   - El dictamen pericial elaborado por el perito Raúl Pulido Tellez es

absolutamente claro, y la exposición que el perito hizo en audiencia de contradicción fue absolutamente contundente. En dicha audiencia el perito informó:

- Cómo se laboró el dictamen.
- Cómo se verificó el acceso ilegal a los servidores de **COMPETENCIA PLUS S.A.S.,** desde las IPs de **MEDIA TECHNOLOGY WORLD S.A.S.**
- Cuáles fueron las pruebas y exámenes que realizó.
- Cómo salvaguardó prueba.
  - Cómo aseguró la imagen forense digital (Disco duro).
  - Cómo entregó en cadena de custodia la imagen forense al representante legal de la demandante.
- Expuso que no hay margen de error en el dictamen, que cualquier dictamen pericial en el mismo sentido tienen que arrojar los mismos resultados.
- Expuso que cuenta con el soporte documental y tecnológico con base en el cual elaboró su dictamen pericial.

10. Está probado, por confesión y mediante el dictamen pericial, que el 2 de mayo de 2019 la demandada, DIANA XIOMARA GIL, empleada de **MEDIA TECHNOLOGY WORLD S.A.S.,** y extrabajadora de **COMPETENCIA PLUS S.A.S.,**, desde la dirección de correo electrónico "xiomara.gil@ipnoticias.com.co" remitió un email a la dirección electrónica "constanzatriana@veraikona.com.co", con el asunto "Propuesta Inteligencia Informativa Universidad de la Salle".

11. Está probado, mediante dictamen pericial, que dicho email se remitió desde la IP 181.48.58.188 de **MEDIA TECHNOLOGY WORLD S.A.S.**

12. Está probado, mediante confesión y mediante dictamen pericial, que dicho email DIANA XIOMARA GIL adjuntó tres archivos: uno denominado "Propuesta IP -139 – VERA IKONA CONSULTORES", otro denominado "PRESENTACION IP NOTICIAS COLOMBIA ABRIL", y otro denominado "COBERTURA".

13. Está probado, documentalmente y mediante confesión, que el archivo denominado "COBERTURA" es un documento en excel con nombre "COBERTURA IP NOTICIAS COLOMBIA FINAL" y contiene el listado de la cobertura de medios, franjas, programas y horarios que ofrecía **MEDIA TECHNOLOGY WORLD S.A.S.**

14. Está probado, mediante dictamen pericial, que el archivo excel denominado "COBERTURA IP NOTICIAS COLOMBIA FINAL" **es el mismo** archivo denominado "Cobertura-Clipping_Nacional_11_10-2018" que es propiedad de **COMPETENCIA PLUS S.A.S.,**, que fue elaborado por **COMPETENCIA PLUS S.A.S.,** y contiene el listado de la cobertura de medios, franjas, programas y horarios que ofrece la demandante.

    - En el dictamen pericial se analizaron detenidamente los metadatos, que son los datos del archivo que dan cuenta de toda la información de dicho archivo, tales como: creador, fecha de creación, tamaño, contenido, etc., de los dos archivos Excel: el de **MEDIA TECHNOLOGY WORLD S.A.S.**, denominado "COBERTURA IP NOTICIAS COLOMBIA FINAL", y el de **COMPETENCIA PLUS S.A.S.**, denominado "Cobertura-Clipping_Nacional_11_10-2018", y se determinó que en realidad se trata de un mismo archivo que fue creado por "CESAR", que es el nombre de usuario de un equipo de **COMPETENCIA PLUS** en el que se generó el archivo en mención, y que la fecha de creación del archivo es el 14 de junio de 2018 (2018:06:14 20:39:56Z).

    - En relación con la fecha de creación del archivo "COBERTURA IP NOTICIAS COLOMBIA FINAL", que es el 14 de junio de 2018, se debe destacar que para esa fecha ni siquiera se había constituido **MEDIA TECHNOLOGY WORLD S.A.S.**, la cual solo vino a ser constituida el 29 de octubre de 2018, lo cual, es una prueba más de que la sociedad demandada viene promocionándose en el mercado con el material e información ilícitamente sustraído(a) a la demandante.

    - El dictamen pericial rendido por el perito Raúl Pulido Tellez es

absolutamente claro, y la exposición que hizo en audiencia de contradicción fue absolutamente contundente. En ella expuso:

- Cómo se laboró el dictamen.
- Que asistió a la empresa VERAIKONA y le permitieron el acceso al equipo que recibió el email.
- Cómo se verificó el origen del documento "COBERTURA IP NOTICIAS COLOMBIA FINAL".
- Cuáles fueron las pruebas y exámenes que realizó.
- Cómo salvaguardó la prueba.
  - Cómo aseguró el correo electrónico.
- Sobre la imposibilidad de alterar los metadatos del archivo.

Expuso que no hay margen de error, que cualquier dictamen pericial en el mismo sentido tienen que arrojar los mismos resultados.

15. Está probado, por testimonios y confesión, que en el negocio del monitoreo de medios escritos es de **fundamental importancia el acceso a la información escrita lo más temprano posible**,

16. Está probado, por testimonios y documentalmente, que **COMPETENCIA PLUS S.A.S.,** tenía acceso a los PDFs de esos medios de comunicación escritos a las primeras horas de la madrugada, o tan pronto se publicara la noticia, en virtud de los convenios que tenía con las principales editoriales de periódicos del país.

17. Está probado, por testimonios y documentalmente, que solamente tenían acceso esos PDFs, de manera legal, COMPETENCIA PLUS S.A.S., y otra empresa de monitoreo de medios que no es MEDIA TECHNOLOGY WORLD S.A.S.

    Ninguna otra persona jurídica, y mucho menos persona natural podía tener acceso a eso PDFs, por lo menos no de manera legal, así lo manifestaron los testigos.

    Además esos PDFs no eran objeto de comercialización, en ese

momento, por las casas editoriales.

18. Está probado, por testimonios y declaración de parte, que el listado de medios objeto de monitoreo y las franjas en las que se realiza el monitoreo lo construyó **COMPETENCIA PLUS S.A.S.,** durante todo su trayectoria empresarial, y sobre todo, teniendo en cuenta las necesidades de cada cliente.

19. Está probado, por testimonios y declaración de parte y confesión que las necesidades de los clientes no son las mismas, cada cliente tiene necesidades particulares y **COMPETENCIA PLUS S.A.S.,** y los demandados MAGDA ROCÍO SÁNCHEZ CABRA, DIANA XIOMARA GIL y CARLOS ALBERTO VIDAL PARRA sabían cuáles eran esas particulares necesidades de los clientes de **COMPETENCIA PLUS S.A.S.**

    No se trata de un listado genérico como lo pretenden hacer creer los demandados, se trata de un listado hecho a la medida de cada cliente.

    En este mismo sentido, también está probado que MAGDA ROCÍO SÁNCHEZ CABRA, DIANA XIOMARA GIL y CARLOS ALBERTO VIDAL PARRA no solo tenían en su poder el listado de clientes de **COMPETENCIA PLUS S.A.S.**, sino que sabían las necesidades de esos clientes, los medios y las franjas que requerían esos clientes, también sabían los precios que **COMPETENCIA PLUS S.A.S.,** cobraba por esos servicios.

    Realmente conocían la información confidencial de **COMPETENCIA PLUS S.A.S.,**, no solo los clientes, no solo un listado genérico de medios y franjas, sino que conocían las necesidades particulares de cada uno de esos clientes y el costo de esos servicios muy particulares de cada cliente, y se aprovecharon de esa información para desviar los clientes de **COMPETENCIA PLUS S.A.S.**, hacia **MEDIA TECHNOLOGY WORLD S.A.S.,** , para inducir a los clientes de **COMPETENCIA PLUS S.A.S.,** para que rompieran las relaciones comerciales con **COMPETENCIA PLUS S.A.S.,** y en su lugar contratar con **MEDIA TECHNOLOGY WORLD S.A.S.**, a unos precios que no eran el reflejo de un funcionamiento legal y debida forma de la empresa.

20. También está probado, por testimonios, que **MEDIA TECHNOLOGY WORLD S.A.S.**, por medio de su trabajador **JHON EFRAÍN SUAREZ GÓMEZ** montó una estrategia tecnológica para sustraer los PDFs que **COMPETENCIA PLUS S.A.S.,** almacenaba en su servidor.

21. Está probado, por testimonios, que el demandado **JHON EFRAÍN SUAREZ GÓMEZ**, ya siendo empleado de **MEDIA TECHNOLOGY WORLD S.A.S.,** engañó a Javier Andrés Cortes (Coordinador tecnológico de **COMPETENCIA PLUS S.A.S.**) diciéndole que las IPs desde las cuales **MEDIA TECHNOLOGY WORLD S.A.S.,** sustraía la información de los servidores de **COMPETENCIA PLUS S.A.S.**, correspondía a un usuario creado para el periódico El Tiempo, y que no debían modificarlo, siendo que en realidad ese usuario no correspondía a El Tiempo sino que correspondía a uno que él demandado había credo para sustraer los PDFs adquiridos por **COMPETENCIA PLUS S.A.S.**

    Sin lugar a duda alguna, este actuar de **MEDIA TECHNOLOGY WORLD S.A.S.**, por medio de su trabajador **JHON EFRAIN SUÁREZ** fue un actuar premeditado, no fue producto del acaso, sino fue un actuar totalmente intencional para sustraer la información de **COMPETENCIA PLUS S.A.S.**

22. Está probado que como consecuencia de las actuaciones **MEDIA TECHNOLOGY WORLD S.A.S.,** que llevaron a la ruptura de negociaciones comerciales con la COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO DE COMUNICADORES SOCIALES DE LA COSTA ATLÁNTICA de la ciudad de Barranquilla se desorganizó gravemente a **COMPETENCIA PLUS S.A.S.**, pues la dejaron sin el principal cliente en la zona del Atlántico colombiano, se quedó sin posibilidad de funcionamiento.

LAS PRUEBAS DOCUMENTALES APORTADAS POR LA SOCIEDAD DEMANDADA.

En la diligencia de interrogatorio de parte el *a quo* requirió a la representante legal de **MEDIA TECHNOLOGY WORLD S.A.S.**, para que

aportara al expediente los recibos o facturas de suscripción a medios de comunicación escritos en el año 2019.

De la documentación aportada por la demanda se destaca lo siguiente:

- Aportó un contrato de prestación de servicios técnicos entre **MEDIA TECHNOLOGY WORLD S.A.S.**, y DP COMUNICACIONES SAC, que al parecer es una sociedad que pertenece al mismo grupo empresarial de la sociedad demandada.

  De ese contrato se destaca lo siguiente:

  - Dice que su vigencia es del 1º de mayo de 2019 al 31 de diciembre de 2020.
  - Dice que fue firmado el 30 de abril de 2019, pero tiene sello del Notario Alfonso Benavides de la Puente del 19 de mayo de 2021, es decir, 2 años después de su supuesta firma.

    El sello notarial dice: *"Certifico: que la firma que antecede pertenece a Don Miguel Antonio Salerno Muro, identificado con documento nacional de identidad DNI 07257950 quien firma en su calidad de gerente general de DP Comunicaciones SAC* (…)"

    También tiene sello de la Notaria 69 del Círculo de Bogotá de reconocimiento de firma de fecha 24 de junio de 2021.

    Ciertamente se trata de un documento que fue elaborado y presentado ante notaría algunos días antes de ser aportado al expediente judicial.

- Aportó un contrato de prestación de servicios técnicos entre **MEDIA TECHNOLOGY WORLD S.A.S.**, y DP COMUNICACIONES SAC.
  - Doce que su vigencia es del 1º de enero de 2021 al 31 de diciembre de 2021, pero fue firmado el 1º de enero de 2021 (día festivo), y tiene sello del Notario Alfonso Benavides de la Puente del 19 de mayo de 2021 con el siguiente texto: *"Certifico: que la firma que antecede pertenece a Don Miguel Antonio Salerno Muro, identificado con documento nacional de identidad DNI 07257950 quien firma en su calidad de gerente general de DP Comunicaciones SAC (…)".*

- También tiene sello de la Notaria 69 del Círculo de Bogotá de reconocimiento de firma del 24 de junio de 2021.

  Sin duda, se trata de un documento que fue elaborado y presentado ante notaría algunos días antes de ser aportado al expediente judicial.

- Apenas aportó una mínima parte de los recibos o facturas de la suscripción a los medios de comunicación escritos sobre los que decía realizaba el servicio de monitoreo y que relacionaba en el documento "COBERTURA IP NOTICIAS COLOMBIA FINAL".

- Aportó unas cuentas de Johana Andrea Suárez Gómez, que al parecer es hermana del demandado **JHON EFRAÍN SUÁREZ GÓMEZ**.

  El objeto de las cuentas era el pago del suministro de PDFs de medios escritos de comunicación.

  Como ya se dijo, los medios escritos de comunicación solo entregaban sus PDFs a la sociedad demandante, y por lo tanto, la señora Johana Andrea Suárez Gómez no tenía porque tener acceso a esos PDFs.

LA SENTECIA IMPUGNADA.

De manera concreta, el Juez de primera instancia negó las pretensiones de la demanda porque consideró que:

1. No se probó que, entre marzo y septiembre de 2019, las IPs 181.48.58.188 y 181.48.58.187 hubiesen sido asignadas por COMCEL S.A., a **MEDIA TECHNOLOGY WORLD S.A.S.**, para tener acceso al servicio de internet.

2. No se probó que desde la IP 181.48.58.188 los demandados ingresaron por lo menos en 43.306 ocasiones al servidor de **COMPETENCIA PLUS S.A.S.**, y desde la IP 181.48.58.187 ingresaron por lo menos 16.067 ocasiones, y sustrajeron información de la demandante.

3. No se probó el carácter secreto de la información de la demandante que fue sustraída de su servidor, entre marzo y septiembre de 2019, desde las IPs 181.48.58.188 y 181.48.58.187.

4. El mandato de actuar de buena fe previsto en el artículo 83 de la Constitución es diferente al mandato de actuar de buena fe que regula la Ley 256 de 1996.

Con base en las anteriores y equivocadas consideraciones del *a quo*, él concluyó que los demandados no incurrieron en los actos de competencia desleal demandados.

ERRORES DE LA SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA.

A. INDEBIDA VALORACIÓN PROBATORIA DE LA CONFESIÓN HECHA EN LA CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA DE MEDIA TECHNOLOGY WORLD S.A.S.

- El hecho 23 de la demanda es del siguiente tenor: *"23. A **MEDIA TECHNOLOGY WORLD S.A.S.,** la compañía TELMEX COLOMBIA S.A. o COMCEL S.A., le asignó las IPs 181.48.58.188 y 181.48.58.187, para tener acceso al servicio de internet".*
- La demandada **MEDIA TECHNOLOGY WORLD S.A.S.,** contestó el hecho 23 de la demanda así: *"VIGÉSIMO TERCERO. Es cierto para la época de los hechos de la demanda".*
- El artículo 77 del C.G.P., es claro al determinar que los abogados tienen la facultad de confesar.
- No obstante la confesión hecha en la contestación de la demanda, en la sentencia de primera instancia se consideró que no se probó que, entre marzo y septiembre de 2019, las IPs 181.48.58.188 y 181.48.58.187 hubiesen sido asignadas por COMCEL S.A., a **MEDIA TECHNOLOGY WORLD S.A.S.**, para tener acceso al servicio de internet.

Sin lugar a la menor duda, la conclusión probatoria del *a quo* desconoció la confesión que se hizo en la contestación de la demanda.

B. INDEBIDA VALORACIÓN PROBATORIA DE LA COMUNICACIÓN DE COMCEL S.A., OBRANTE EN EL CONSECUTIVO 156 DEL

EXPEDIENTE ELECTRÓNICO.

- Mediante oficio judicial No. 1002-248 de 2022 el Juez de Primera Instancia solicitó a COMCEL S.A., que informara *"Los números de las IP asignadas a MEDIA TECHNOLOGY WORLD SAS NIT. 901.226.769-4 en virtud del servició de internet prestado a dicha empresa entre los meses de enero a octubre de 2019"*.

- Mediante comunicación de fecha 2 de mayo de 2022 COMCEL S.A., contestó el oficio judicial en los siguientes términos:

  "Una vez realizadas las validaciones internas pertinentes, procedemos a indicar que para la sociedad MEDIA TECHNOLOGY WORLD SAS identificada con NIT. 901.226.769-4 entre los meses de enero a octubre de 2019 fueron asignadas las siguientes IP en virtud del servicio de internet:

  - *"NJPY002 - Internet Dedicado 100M - CANCELADO*

    "Fecha de Activación: 18/12/2018
    "Fecha de Desactivación: 01/10/2020
    "Direccionamiento IP: 181.48.58.184/29"

- En la respuesta de COMCEL S.A., se certificó que entre marzo y octubre de 2019 a **MEDIA TECHNOLOGY WORLD S.A.S.,** se le asignaron las IPS 181.48.58.184/29.

- Desde el punto de vista técnico se debe entender que la IP es la 181.48.58.184 con máscara 29, que quiere decir qué, además de la IP 181.48.58.184 se le asignaron las 6 IPs adicionales a la numeración terminada en 184, es decir, las IPs 181.48.58.185, 181.48.58.186, 181.48.58.187, 181.48.58.188, 181.48.58.189 y 181.48.58.190.

  Lo anterior fue corroborado por el perito en la audiencia de contradicción del dictamen pericial (Primera parte de la grabación, minuto 31).

- El *a quo* consideró que las IPs 181.48.58.187 y 181.48.58.188, no coincidían, o eran diferentes, a las IPs reportadas en la respuesta de

CLARO S.A.

El *a quo* no supo valorar la respuesta de COMCEL S.A., pues lo cierto es que, según dicha certificación, entre marzo y octubre de 2019 a **MEDIA TECHNOLOGY WORLD S.A.S.,** sí se le asignaron las IPS 181.48.58.184/29, dentro de las cuales, como ya se dijo, sí estaba incluida la IP 181.48.58.187 y la IP 181.48.58.188.

C. <u>INDEBIDA VALORACIÓN PROBATORIA DEL DICTAMEN PERICIAL.</u>

- El *a quo* no valoró debidamente el dictamen pericial presentado por la actora pues consideró que el mismo no estaba soportado con pruebas documentales.

  En otras palabras, desestimó una prueba porque no estaba probada por otros medios de prueba.

  ¿Desde cuándo las pruebas son objeto de prueba? ¡Ciertamente, son los hechos de la demanda los que deben ser objeto de prueba!

- El dictamen pericial presentado y las respuestas del perito en la audiencia de contradicción de la prueba, fueron absolutamente claras y contundentes sobre:

  - la manera cómo se practicó la prueba.
  - En qué lugares se practicó la prueba.
  - Quiénes lo atendieron para la práctica de la prueba.
  - Qué equipos fueron los que examinó.
  - Cómo salvaguardó la información objeto de la pericia.
  - Cómo elaboró las imágenes digitales para salva guardar la prueba.
  - A quién entregó el disco duro con las imágenes forenses digitales del servidor examinado para mantenerlas en cadena de custodia y evitar su alteración.
  - También fue claro el perito al manifestar que contaba en su poder con todos los soportes técnicos y documentales que el

Despacho requiriera relacionados con el trabajo pericial realizado.

- No obstante lo anterior, el *a quo* consideró que el dictamen pericial no contaba con los soportes documentales, especialmente en lo que respecta a la toma y aseguramiento de la información recolectada, por lo que no podía determinar la trazabilidad de la toma de la información ni las conclusiones del dictamen.

  El *a quo* hizo su afirmación teniendo conocimiento de que en el dictamen pericial se anunciaron como anexos los documentos que él echó de menos, y que, involuntariamente, no fueron anexados por el perito al dictamen.

- Ciertamente el *a quo* pasó por alto el principio del derecho procesal según el cual "el objeto de los procedimientos es la efectividad de los derechos reconocidos en la ley sustancial".

- Igualmente paso por alto el mandato previsto en el artículo 170 del C.G.P.:

  "ARTÍCULO 170. DECRETO Y PRÁCTICA DE PRUEBA DE OFICIO. El juez deberá decretar pruebas de oficio, en las oportunidades probatorias del proceso y de los incidentes y antes de fallar, cuando sean necesarias para esclarecer los hechos objeto de la controversia". (Subrayas fuera de texto).

  Sin duda, el Juez tenía el deber, si lo consideraba pertinente para fallar el fondo del litigio, antes de proferir su sentencia, de ordenar oficiosamente la complementación del dictamen pericial, por supuesto, garantizando el derecho de defensa y de contradicción de la prueba.

- El señor Juez de Primera Instancia no podía pasar por alto su deber de esclarecer los hechos objeto de litigio, y mucho menos en un caso de competencia desleal en el que se cometieron graves irregularidades que están siendo objeto de investigación por las autoridades penales.

- Sobre el deber que tienen los Jueces para solicitar aclaraciones o complementaciones al dictamen pericial vale la pena traer a colación la jurisprudencia de la Corte Constitucional, quien en su Sentencia T-638/11 manifestó:

"Precisamente, el artículo 240 del Código de Procedimiento Civil, establece que por su propia iniciativa el juez puede ordenar a los peritos que aclaren, complementen o amplíen el dictamen pericial, al igual que el artículo 241 del mismo Código le impone el deber de apreciar el dictamen teniendo en cuenta la firmeza, precisión y calidad de sus fundamentos, la competencia de los peritos y los demás elementos probatorios que obren en el proceso. Quiere ello decir que las anteriores funciones no quedan relevadas por la sola circunstancia de que las partes no soliciten complementación o aclaración del dictamen pericial, o porque el mismo no sea materia de objeción. Por el contrario, el argumento de la inactividad procesal de la parte interesada, no es óbice para que el juez cuestione una prueba pericial que no desentraña la verdad de los hechos y que presenta ciertas dudas respecto de las pruebas documentales que obran en el expediente. Allí es donde juega un papel preponderante la valoración conjunta de los medios de prueba (artículo 187 del C.P.C.). Por consiguiente, si las partes guardaron silencio dentro del término de traslado de la probanza, ello no es óbice para que el operador judicial realice una evaluación seria de ésta[51], máxime cuando se compromete el patrimonio público." (Subrayas fuera del texto original.)

En el mismo sentido , la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia, manifestó: *"[e]n efecto, avista la Sala que conforme lo prevé el numeral 4° del artículo 37 del Código de Procedimiento Civil, era obligación del juez en la fase de la pericia hacer actuar el artículo 241 ibídem, así lo sujetos procesales no hubieren hecho uso del derecho de contradicción; empero ese deber fue omitido debido a que en el pronunciamiento cuestionado ningún análisis ni concreción se hizo respecto del porqué se apreciaba o acogía el avalúo rendido, pues sólo se limitó a advertir que 'las partes no objetaron el dictamen pericial', cuando motu proprio tenía el imperativo de estudiar que la indemnización 'se fijara consultando los intereses de la comunidad', así como su firmeza, precisión y la claridad de sus argumentos, sobre todo cuando se estaba de cara a una valuación de tan altas proporciones (…) ".* (Subrayas fuera del texto original).

CARRERA 13 NO. 75-20 OFICINA 305. TELÉFONO (57-1) 5415793
BOGOTÁ D.C. - COLOMBIA

"Entonces, la Sala concluye que en este especial caso no es requisito indispensable el que la empresa actora hubiese agotado los recursos ordinarios que tenía a su disposición para cuestionar el dictamen pericial, pues como se expuso, a pesar del silencio de las partes en contienda, es deber del juez analizar la firmeza, precisión y calidad de los fundamentos del dictamen pericial, así como la competencia de los peritos y los demás elementos probatorios que obren en el proceso. Si el juez no hizo un control y una apreciación adecuada de la probanza, se habilita la tutela contra la providencia judicial que aprobó o tuvo en cuenta el dictamen pericial, más aún, se repite, cuando la decisión compromete en últimas el patrimonio público.

"El silencio de las partes frente a la probanza no es óbice para que el juez de la causa evalúe con rigor el dictamen pericial, ni tampoco bloquea la procedencia del amparo constitucional, más aún cuando las sumas ordenadas por concepto de avalúos finales arrojaban diferencias significativas no soportadas desde el punto de vista técnico, razón suficiente para estudiar el fondo del asunto en pos de desentrañar la posible configuración de un defecto fáctico".[1] (Subrayas fuera del texto original).

Teniendo en cuenta los antecedentes jurisprudenciales, no cabe la menor duda de que en el presente asunto el *a quo* faltó a sus deberes, y si en su opinión, a pesar de la contundencia del dictamen pericial hacía falta un soporte documental técnico, pues ha debido requerir al perito para que lo aportara al expediente, más cuando en la audiencia de contradicción el perito informó al Despacho que contaba en su poder con todos los soportes con base en los cuales elaboró el dictamen pericial.

Ciertamente, un Juez de la República no puede faltar a su deber de hacer prevalecer el derecho sustancial con el fácil argumento de que no se aportaron con el dictamen pericial algunos de sus anexos, que, además, tienen el carácter de ser documentos técnicos.

[1] Expediente 2008-01407-01. Sentencia de tutela del 13 de noviembre de 2008. M.P. César julio Valencia Copete

Adicionalmente se debe decir que, la imagen forense digital que echó de menos el Juez, y cuya ausencia le sirvió de base para menospreciar el dictamen pericial, en realidad se encuentra en cadena de custodia en poder del señor Fernando Pinzón, representante legal de la demandante.

Si el Juez requería estudiar y analizar esa imagen forense digital para proferir su sentencia úes ha debido convocar a una diligencia judicial, con intervención de peritos, con el fin de levantar las actas y dejar las constancias judiciales respectivas de tal manera que no se rompa o afecte la cadena de custodia de dicha imagen forense digital, que como ya se dijo, tiene como destinataria final la jurisdicción penal, que será la encargada de determinar si los demandados con las conductas adelantadas incurrieron en algún tipo de conducta delictiva.

D. INCUMPLIMIENTO DEL JUEZ A SU DEBER DE SER EL DIRECTOR DEL PROCESO, DECRETAR PRUEBAS DE OFICIO, Y HACER PREVALECER EL DERECHO SUSTANCIAL.

Es abundante la jurisprudencia que existe sobre el deber que tienen los jueces de decretar pruebas de oficio con el fin de evitar injusticias y hacer valer el derecho sustancial vulnerado.

Este deber cobra mayor fuerza cuando se trata, no de una prueba totalmente novedosa o ajena al proceso, sino de unos anexos técnicos, que fueron anunciados como tales en un dictamen pericial.

Incluso se podría decir que no se trata de decretar una prueba de oficio, sino de requerir al perito para que aporte los anexos que anunció en su dictamen y que por error no fueron aportados.

No resulta entendible, desde ningún punto de vista, que el *a quo* haya faltado a su deber y haya omitido, intencionalmente, requerir al perito para que aportara los anexos técnicos que anunció en su dictamen, y que involuntariamente no adjuntó al mismo.

Vale la pena destacar que la omisión del Juez fue intencional porque en la diligencia de contradicción del dictamen pericial quedó en claro que los anexos anunciados en el dictamen no fueron adjuntados, y antes que

requerir al perito para que los aportara, lo que hizo el *a quo* fue negar, de manera categórica, la posibilidad de que el perito aportara esos archivos técnicos.

Sobre el deber de los Jueces de decretar pruebas de oficio, solo para la muestra, vale la pena traer a colación las siguientes sentencias:

- *"En suma se reprocha al Tribunal por no haber usado de la mejor manera la facultad discrecional de decretar pruebas de oficio, para ratificar la versión de los testimonios traídos al proceso. A este respecto, la jurisprudencia constitucional reciente de esta Sección, enseña que los jueces y Tribunales deben hacer el mejor uso de su poder discrecional en materia de pruebas y no omitirlo, como si nuestro sistema fuera puramente dispositivo, pues las particularidades del ordenamiento procesal patrio hacen esperar que el juez adopte las medidas que considere necesarias para lograr el esclarecimiento de los hechos, y superar los obstáculos que le impidan llegar a decisiones de fondo fundadas en la verdad, ello sin afectar la autonomía que les es propia. En esa tarea deberá hacer uso de la facultad discrecional de decretar las pruebas de oficio en cualquiera de las instancias para evitar la injusticia y realizar el valor verdad como soporte de la legitimidad de la jurisdicción."* (Subrayas fuera de texto). (Consejo de Estado, Sección Segunda. Sentencia de 3 de febrero de 2011, expediente radicado número 11001-03-15-000-2010-00951-01(AC), Ponente Victor Hernando Alvarado Ardila)

- *"(…) con esta facultad el fallador adquiere la potestad para solucionar los conflictos que se plantean con el objeto de lograr una correcta administración de justicia, realizar la equidad y cumplir la finalidad del derecho".* (Consejo de Estado, Sección Segunda. Sentencia de 7 de abril de 2005, expediente radicado número: 76001-23-31-000-2001-00598-02 (1710-03))

- *"(…) el juez no desplaza a las partes ni asume la defensa de sus intereses privados. Desde el punto de vista de la Constitución Política, la facultad de decretar pruebas de oficio implica un compromiso del juez con la verdad, ergo con el derecho sustancial, y no con las partes del proceso.*

Por ello, el decreto de pruebas no afecta la imparcialidad del juez, ya que el funcionario puede decretar pruebas que favorezcan a cualquiera de las partes siempre que le ofrezca a la otra la posibilidad de ejercer el derecho de defensa y contradicción". (Subrayas fuera de texto). (Corte Constitucional, Sentencia C-159 de 2007, Referencia: expediente D-6501, Magistrado Ponente: Dr. HUMBERTO ANTONIO SIERRA PORTO).

- *"El artículo 213 de la Ley 1437 de 2011, consagra la facultad del juez contencioso administrativo, como director del proceso, para decretar las pruebas de oficio que estime necesarias a fin de esclarecer el thema probandum, entendido como los hechos objeto de controversia, en cuanto se refieren a los supuestos de las normas jurídicas que se alegan como vulneradas. (…). Esta iniciativa en cabeza del funcionario judicial complementa el principio de onus probandi o carga de la prueba, según el cual por regla general es responsabilidad del demandante y demandado demostrar los enunciados fácticos que sirven de fundamento a sus pretensiones y excepciones, respectivamente, según su propio interés litigioso, postulado que admite excepciones como en el caso de la carga dinámica, que opera cuando las partes no se encuentran en igualdad de condiciones para aportar los medios de convicción al proceso, o las pruebas de oficio que proceden cuando el juez no ha alcanzado el grado de certeza necesario para adoptar una decisión de fondo. (…). En este sentido, es acertado afirmar que se trata más que de una atribución, de un verdadero deber jurídico establecido en virtud del interés público que reviste al proceso en su propósito de alcanzar la verdad para proteger los derechos subjetivos de las partes, con prevalencia del derecho sustancial sobre el procedimental (…)".* (Subrayas fuera de texto). (Consejo de Estado, Sección Quinta, Sentencia de 26 de agosto de 2021, expediente radicado número 11001-03-28-000-2019-00048-00, Consejero Ponente Luis Alberto Alvarez Parra).

- *"Desde el punto de vista de la Constitución Política, la facultad de decretar pruebas de oficio implica un compromiso del juez con la verdad, ergo con el derecho sustancial, y no con las partes del proceso. Por ello, el decreto de pruebas no afecta la imparcialidad del juez, ya que el funcionario*

puede decretar pruebas que favorezcan a cualquiera de las partes siempre que le ofrezca a la otra la posibilidad de ejercer el derecho de defensa y contradicción. (Subrayas fuera de texto). (Corte Constitucional. Sentencia C-264 del 3 de abril de 2009, M.P. Luis Ernesto Vargas Silva).

- "*De acuerdo con la jurisprudencia de esta Corporación, el funcionario deberá decretar pruebas oficiosamente: (i) cuando a partir de los hechos narrados por las partes y de los medios de prueba que estas pretendan hacer valer, surja en el funcionario la necesidad de esclarecer asuntos indefinidos de la controversia; (ii) cuando la ley le marque un claro derrotero a seguir; o (iii) cuando existan fundadas razones para considerar que su inactividad puede apartar su decisión del sendero de la justicia material.*

  (…)

  "(…) los jueces son los primeros llamados a ejercer una función directiva en la conducción de los procesos a su cargo, para lo cual el Legislador les ha otorgado la potestad de asegurar, por todos los medios legítimos a su alcance, que las diferentes actuaciones se lleven a cabo"[42]*. En efecto, en el marco del Estado Social de Derecho existe un mayor dinamismo del juez, que se proyecta más allá de las formas jurídicas, para así atender a la realidad subyacente y asumir su responsabilidad como garante de los derechos materiales*[43]*.*

  (…)

  En cuanto a las pruebas de oficio y la distribución de la carga de la prueba, la jurisprudencia constitucional ha respaldado su legitimidad, partiendo de la idea de que la búsqueda de la verdad es un imperativo para el juez y un presupuesto para la obtención de decisiones justas[46]*. En particular, la Corte ha establecido que el principio del onus probando como exigencia general de conducta prevista por el Legislador no se refleja como irrazonable ni desproporcionada, pues responde a fines constitucionalmente legítimos, como son ejercer los derechos con responsabilidad y colaborar con el buen funcionamiento de la administración de justicia, contribuir al esclarecimiento de la verdad en el*

marco de un proceso judicial, asegurar la prevalencia del derecho sustancial y velar por la vigencia de un orden justo[47].

"Sin embargo, el juez, como director del proceso, debe estar atento a dar cumplimiento a su misión en el marco del Estado Social y Democrático de Derecho, ya sea al acudir a sus atribuciones oficiosas en el decreto y práctica de pruebas, o para distribuir de forma razonable la carga probatoria, según la posición en la que se encuentren las partes en cada caso. Sobre el particular, en la sentencia C-086 de 2016, en la que se estudió la constitucionalidad del artículo 167 del Código General del Proceso, la Corte estableció que en algunos casos el decreto oficioso de pruebas o la distribución de su carga probatoria dejan de ser una potestad del juez y se erigen en un verdadero deber funcional[48]. No obstante, ello debe ser examinado de acuerdo con las particularidades de cada caso, sin invertir la lógica probatoria prevista por el Legislador, ni alterar las reglas generales en lo concerniente a la distribución de la carga de la prueba[49].

"Así pues, de acuerdo con la jurisprudencia de esta Corporación[50], el funcionario deberá decretar pruebas oficiosamente: (i) cuando a partir de los hechos narrados por las partes y de los medios de prueba que estas pretendan hacer valer, surja en el funcionario la necesidad de esclarecer asuntos indefinidos de la controversia; (ii) cuando la ley le marque un claro derrotero a seguir; o (iii) cuando existan fundadas razones para considerar que su inactividad puede apartar su decisión del sendero de la justicia material[51].

(…)

"En conclusión, las facultades oficiosas del juez materializan el mandato contenido en el artículo 228 de la Constitución, de conformidad con el cual en las actuaciones de la administración de justicia prevalecerá el derecho sustancial. En efecto, al ejercer un papel activo en el proceso, el funcionario judicial puede dirigirlo de forma activa para llegar a la verdad y así adoptar decisiones justas que garanticen los derechos constitucionales de las personas." (Subrayas fuera de texto). (Corte Constitucional Sentencia T-113/2019 del 14 de marzo de 2019,

Referencia: Expediente T-7.033.234, Magistrada sustanciadora: GLORIA STELLA ORTIZ DELGADO)

E. <u>INDEBIDA VALORACIÓN PROBATORIA DE LOS TESTIMONIOS Y DECLARACIONES DE PARTE RESPECTO AL CARÁCTER SECRETO DE LA INFORMACIÓN OBJETO DE MONITOREO Y QUE FUE SUSTRAÍDA.</u>

- Consideró el *a quo* que la información que fue sustraída del servidor de la demandante no tenía el carácter de secreta porque era la información que se publicaba en medios de comunicación y solamente gozaba de carácter reservado por pocas horas.

- El *a quo* pasó por alto que en los testimonios y declaraciones de parte se probó lo siguiente:

  a. Que la demandante y la sociedad demandada tienen por objeto social realizar el monitoreo de medios de comunicación.

  b. Que los clientes de estas empresas las contratan para que monitoreen, les informen, y sobre todo, les suministren el soporte documental de la información monitoreada.

  c. Que en el mercado de monitoreo de medios de comunicación tiene una ventaja competitiva la empresa que primero puede suministrar el soporte documental de la información monitoreada a sus clientes.

  d. Que, para el año 2019, normalmente, las publicaciones de las casas editoriales de periódicos <u>de Bogotá</u> estaban a disposición de las empresas de monitoreo a las cinco de la mañana (5:00 a.m.), que el procesamiento de esa información se demoraba aproximadamente de 3 a 4 horas, y por lo tanto, la información procesada se podía remitir a los clientes hacia las 8 o 9 de la mañana.

  e. Que, para el año 2019, normalmente, las publicaciones de las casas editoriales de periódicos <u>regionales</u> estaban a disposición de las empresas de monitoreo a las diez de la mañana (10:00 a.m.), pues se tenía que esperar a que los diarios llegaran al aeropuerto de Bogotá y fueran repartidos, que el procesamiento de esa información se

demoraba aproximadamente de 3 a 4 horas, y por lo tanto, la información procesada se podía remitir a los clientes hacia las 2 o 3 de la tarde.

f. Que gracias a los convenios y contratos que la demandante tenía suscritos con las principales casas editoriales de periódicos del país, ella tenía acceso a los PDFs de las publicaciones, es decir, a la información ya procesada, antes de las tres de la mañana (3:00 a.m.) y la podía repartir entre sus clientes antes de las cinco de la mañana (5:00 a.m.).

g. Que la demandante tenía una ventaja competitiva pues estaba en la capacidad de entregar la información procesada a sus clientes antes de las 5 de la mañana, y no hacia las diez de la mañana (diarios de Bogotá) o 2 de la tarde (diarios regionales), como lo tenía que haber hecho sociedad demandada, que no tenía suscritos convenios de suministro de PDFs con las casas editoriales.

h. Ese lapso de 5 a 9 horas en el que los PDFs de los medios de comunicación tenían carácter reservado o secreto, se insiste, constituía una verdadera ventaja competitiva en el mercado.

F. EL MANDATO CONSTITUCIONAL DE ACTUAR DE BUENA FE (ART. 83) DEBE ACATARSE EN TODO TIPO DE COMPORTAMIENTO O ACTUACIÓN.

- Al analizar si los demandados incurrieron en el acto de competencia desleal de violación de normas (artículo 18 de la Ley 256 de 1996) consideró el *a quo* que el deber de actuar de buena fe que impone el artículo 83 de la Constitución es diferente al deber de actuar de buena fe que impone la Ley 256 de 2016.

- El *a quo* llegó a su extraña conclusión citando una sentencia del Tribunal Superior de Bogotá en la que se diferencia entre la buena fe contractual y la buena fe que deben observar los competidores en el mercado. Diferencia que, por demás, es absolutamente cierta.

- Sin embargo, desde ningún punto de vista en la citada sentencia se

señala que la buena fe que nos impone la Constitución sea diferente a la buena fe que deben observar los competidores en el mercado, y es que ello no puede ser así, porque la buena fe constitucional cobija absolutamente todos los comportamientos que las personas naturales y jurídicas debemos observar en el día a día.

- Sin lugar a la menor duda, si los demandados sustrajeron información de los servidores de la demandante, ellos obraron de mala fe, ellos infringieron el mandato constitucional, ellos infringieron la norma de normas.

SOLICITUD DE PRUEBAS DE OFICIO.

Teniendo en cuenta que la sentencia de primera instancia se desestimaron las pretensiones de la demanda porque se consideró que con el dictamen pericial no se aportó la imagen forense digital del atentamente solicito que el Honorable Tribunal decrete de oficio las siguientes pruebas:

DICTAMEN PERICIAL.

De conformidad con las previsiones del artículo 226 y siguientes del C.G.P., se adjunta el dictamen pericial elaborado por el ingeniero de sistemas Raúl Pulido Téllez, en el que se da cuenta, entre otros, i) de los accesos que ilícitos desde las IP de **MEDIA TECHNOLOGY WORLD SAS**, se hicieron al servidor de **COMPETENCIA PLUS S.A.S.**; ii) de la sustracción de información que hicieron los demandados del servidor de la demandante; iii) del origen, veracidad, autenticidad y contenido del archivo de Excel que contiene la cobertura de medios cuyo monitoreo ofrece **MEDIA TECHNOLOGY WORLD SAS** en el mercado.

El dictamen pericial, junto con sus anexos, se puede descargar desde el siguiente vínculo:

https://1drv.ms/f/s!Al-c-Dsl-okvgdI-hkKSy-1EIHPxDA

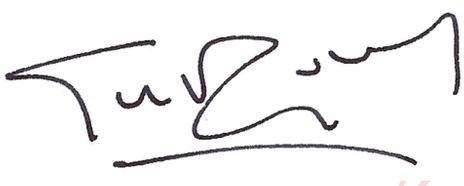
INSPECCIÓN JUDICIAL CON INTERVENCIÓN DE PERITO EXPERTO EN SISTEMAS.

Atentamente solicito que se decrete la práctica de una inspección judicial, con intervención de un perito en sistemas informáticos, a la imagen forense digital sobre la cual se elaboró el dictamen pericial. Lo anterior habida cuenta de que, (i) el *a quo* desestimó el dictamen pericial aportado con la demanda porque no aportó la imagen forense digital del servidor de **COMPETENCIA PLUS S.A.S.**; (ii) dicha imagen forense digital se encuentra en cadena de custodia en poder del señor Fernando Pinzón, representante legal de la demandante; (iii) el destino final de la imagen forense digital es el proceso penal que cursa en contra de los demandados; (iv) el análisis y revisión de dicha imagen forense digital solo se puede hacer en una diligencia judicial en la cual se respeten todos los protocolos necesarios para salvaguardar la cadena de custodia.

*****

Habida cuenta de las anteriores consideraciones, atentamente solicito revocar la sentencia de primera instancia y en su lugar proferir una en la que se acceda a las pretensiones de la demanda.

De los señores Magistrados, con toda atención,



Firmado digitalmente por Germán Darío Hernández Moreno
Fecha: 2023.02.08 16:25:48 -05'00'

Germán Darío Hernández Moreno
C.C. No 79.837.177 de Bogotá
T.P. No. 121.580 del C.S. de la J.

MEMORIAL PARA REGISTRAR DR. ACOSTA BUITRAGO RV: SUSTENTACION RECURSO DE APELACION, RADICADO 110013199003-2022-0138001

Secretario 02 Sala Civil Tribunal Superior - Seccional Bogota
<secsctribsupbta2@cendoj.ramajudicial.gov.co>
Vie 03/02/2023 9:43

Para: **2 GRUPO CIVIL <2grupocivil@cendoj.ramajudicial.gov.co>**

1 archivos adjuntos (7 MB)
RECURSO DE APELACION TRIBUNAL SUP DE BOGOTA.pdf;

MEMORIAL PARA REGISTRAR DR. ACOSTA BUITRAGO

Cordial Saludo,

OSCAR FERNANDO CELIS FERREIRA
Secretario Sala Civil
Tribunal Superior de Distrito Judicial de Bogotá
Avenida Calle 24 N° 53-28 Torre C Oficina 305
Teléfono 423 33 90 Extensión 8349
Email: secsctribsupbta2@cendoj.ramajudicial.gov.co

De: Reparto Procesos Civiles Sala Civil Tribunal Superior De Bogota <rprocesosctsbta@cendoj.ramajudicial.gov.co>
Enviado: viernes, 3 de febrero de 2023 9:26 a. m.
Para: Secretario 02 Sala Civil Tribunal Superior - Seccional Bogota <secsctribsupbta2@cendoj.ramajudicial.gov.co>
Cc: angel gonzalez <gonzalez.angel189@gmail.com>
Asunto: RV: SUSTENTACION RECURSO DE APELACION, RADICADO 110013199003-2022-0138001

De: angel gonzalez <gonzalez.angel189@gmail.com>
Enviado: viernes, 3 de febrero de 2023 9:24
Para: Reparto Procesos Civiles Sala Civil Tribunal Superior De Bogota <rprocesosctsbta@cendoj.ramajudicial.gov.co>; Despacho 15 Sala Civil Tribunal Superior - Bogotá - Bogotá D.C. <des15ctsbta@cendoj.ramajudicial.gov.co>; Luisa Velasquez <luisa.velasquez@luisavelasquezabogados.com.co>; Carlos González <abogado.civiles@luisavelasquezabogados.com.co>; alconf250@outlook.com <alconf250@outlook.com>
Asunto: SUSTENTACION RECURSO DE APELACION, RADICADO 110013199003-2022-0138001

ANGEL GONZALEZ RIVEROS, persona natural, mayor de edad, con domicilio principal la Ciudad de Bogotá D. C., identificado con la cedula de ciudadanía No. 17.345.497 de Villavicencio (Meta) y Tarjeta Profesional No. 223.393 del Consejo Superior de la Judicatura, actuando como apoderado del señor **JUAN LEOPOLDO VARON SIERRA,** identificado con la cedula de ciudadanía No. 93.388.833 de

Ibagué (Tolima), me permito presentar en adjunto el escrito de sustentación al recurso de apelación presentado contra la sentencia de fecha 29 de noviembre de 2022, hora 19:57, emitida por la Honorable Delegatura para Funciones Jurisdiccionales de la Superintendencia Financiera de Colombia, sustentación que hago en los siguientes términos:

Doctor
RICARDO ACOSTA BUITRAGO
MAGISTRADO TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE BOGOTÁ - SALA CIVIL – DESPACHO 15
rprocesosctsbta@cendoj.ramajudicial.gov.co
des15ctsbta@cendoj.ramajudicial.gov.co
luisa.velasquez@luisavelasquezabogados.com.co
abogado.civiles@luisavelasquezabogados.com.co
alconf250@outlook.com
Bogotá DC

DEMANDANTE JUAN LEOPOLDO VARON SIERRA

DEMANDADO BBVA SEGUROS DE VIDA COLOMBIA S. A. BANCO BBVA COLOMBIA S. A.

RADICADO 110013199003-**2022-0138001**

SUSTENTACION RECURSO DE APELACION

ANGEL GONZALEZ RIVEROS, persona natural, mayor de edad, con domicilio principal la Ciudad de Bogotá D. C., identificado con la cedula de ciudadanía No. 17.345.497 de Villavicencio (Meta) y Tarjeta Profesional No. 223.393 del Consejo Superior de la Judicatura, actuando como apoderado del señor **JUAN LEOPOLDO VARON SIERRA,** identificado con la cedula de ciudadanía No. 93.388.833 de Ibagué (Tolima), me permito presentar en adjunto el escrito de sustentación al recurso de apelación presentado contra la sentencia de fecha 29 de noviembre de 2022, hora 19:57, emitida por la Honorable Delegatura para Funciones Jurisdiccionales de la Superintendencia Financiera de Colombia, sustentación que hago en los siguientes términos:

1. RAZONES DE INCOFORMIDAD CON LA PROVIDENCIA APELADA

De conformidad con lo establecido en el artículo 322 numeral 1 inciso 2° y numeral 3° del Código General del Proceso, me permito presentar las inconformidades que le asisten a mi poderdante respecto al fallo fecha 29 de noviembre de 2022, emitido por la Honorable Delegatura para Funciones Jurisdiccionales de la Superintendencia Financiera de Colombia.

Las inconformidades básicamente se encuentran sustentadas en la interpretación restringida que le otorgo el a quo a las pruebas documentales aportadas y las recaudadas en audiencia, pruebas por medio de las cuales se demuestra que BBVA SEGUROS DE VIDA COLOMBIA S. A. Y BANCO BBVA COLOMBIA S. A., son responsables del deber de información al demandante y su indebida diligencia en el seguro, que aseguro el crédito No. ****8801.

GS.ABOGADOS: Kra. 15 # 78 – 02 Oficina 402 de Bogotá D. C., correo gonzalez.angel189@gmail.com Cel. 3138999117.

El a quo con fundamento en lo siguiente: "*Precisado este procedimiento y particularmente en el caso del señor JUAN LEOPOLDO VARÓN SIERRA, en el dictamen pericial presentado por BBVA SEGUROS DE VIDA COLOMBIA S.A. se demostró que el asegurado con antelación a la contratación de la póliza que es base de este proceso presentaba una condición especial en su estado de salud, determinante para el consentimiento de la aseguradora, puntualmente por la presencia de las patologías de trastorno de ansiedad y lumbalgia*". "*En este análisis tampoco puede soslayarse la declaración del testigo, JOHN JAIRO MARTÍNEZ PEÑA, de la cual se obtuvo que el asegurado no puso en conocimiento los padecimientos que lo aquejaban*". Las anteriores premisas fueron los argumentos centrales del a quo y con los cuales DECLARO probada la excepción de mérito denominada "*NULIDAD RELATIVA DEL CONTRATO DE SEGUROS POR VICIOS EN EL CONSENTIMIENTO DE BBVA SEGUROS DE VIDA COLOMBIA S. A.*" formulada por BBVA SEGUROS DE VIDA S. A:

Las siguientes pruebas evidencian que el a quo dedujo de forma errónea

1. El BANCO BBVA COLOMBIA S. A., vía telefónica se comunica con el señor JUAN LEOPOLDO VARON SIERRA, y le ofrece un crédito pre-aprobado a una tasa preferencial, lo que fue aceptado y posterior se dirigió a la oficina de la entidad financiera, ya en la entidad nuevamente le hablan del valor del crédito, la tasa de interés, el plazo del crédito y la forma como se debían cancelar las cuotas del crédito. "*así fue manifestado por el demandante en declaración bajo juramento*"

2. En el momento que el señor JUAN LEOPOLDO VARON SIERRA, acepta las anteriores condiciones del crédito, el funcionario que le está tramitando el crédito, le hace entrega de varios formularios y le señala el sitio donde debe firmar y colocar sus datos personales como; firma. "*así fue manifestado por el demandante en declaración bajo juramento*"

3. El funcionario de la entidad financiera le manifestó que después que llenaran los formularios con las condiciones del crédito que se habían pactado y estos fueran firmados le hacía llegar copia de todos los formularios que había firmado. "*así fue manifestado por el demandante en declaración bajo juramento*". (formularios que solo fueron aportados con la contestación de la demanda)

4. Varios meses posteriores a la firma de los formularios el señor JUAN LEOPOLDO VARON SIERRA, se entera que dentro de los formularios que firmo se encuentra un seguro de vida e incapacidad total y permanente (ITP), del seguro incorporado en el crédito No. ****8801, ni BBVA SEGUROS DE VIDA COLOMBIA S. A. ni el BANCO BBVA COLOMBIA S. A., le suministraron ninguna información al consumidor financiero. "*así fue manifestado por el demandante en declaración bajo juramento*".

5. En el momento que el señor JUAN LEOPOLDO VARON SIERRA, firmo los documentos para acceder al crédito No. ****8801, no se hizo

GS.ABOGADOS: Kra. 15 # 78 – 02 Oficina 402 de Bogotá D. C., correo gonzalez.angel189@gmail.com Cel. 3138999117.

presente ningún funcionario de BBVA SEGUROS DE VIDA COLOMBIA S. A., para que hiciera alguna salvedad propia de su cargo, tampoco fue llamado ni le fue enviado ningún documento, la primera aparición de la entidad aseguradora fue 24 meses después de adquirido el crédito, dando respuesta a la reclamación directa, la entidad aseguradora solo extiende copia de las condiciones generales del seguro con la contestación de la demanda, esto quiere decir 38 meses después de haber firmado los documentos para el crédito No. ****8801.

6. BBVA SEGUROS DE VIDA COLOMBIA S. A. y el BANCO BBVA COLOMBIA S. A., se sustrajeron de la obligación de suministrarle al consumidor financiero una información comprensible, cierta, trasparente, clara, veraz, oportuna y suficiente con relación al seguro de vida grupo deudores que aseguraba el crédito No. ****8801, medidas establecidas en el ámbito contractual por virtud de lo establecido en el artículo 38 de la Ley 153 de 1887 y la Ley 1328 de 2009. El usuario debe recibir productos y servicios con estándares de seguridad y calidad (literal a del artículo 5° y b del artículo 7° de la Ley 1328 de 2009), incorporando el artículo 5° de la Ley 1328 citada, un conjunto de derechos que integra el núcleo mínimo de protección vigente "*durante todos los momentos de su relación con la entidad vigilada*". La entidad aseguradora intenta trasladar esta responsabilidad a la entidad financiera quien también omite el deber de información.

7. En declaración bajo la gravedad de juramento la representante legal de BBVA SEGUROS DE VIDA COLOMBIA S. A., manifestó lo siguiente:

i. Que la información del seguro, que aseguro el crédito No. ****8801, al señor JUAN LEOPOLDO VARON SIERRA, le fue suministrada a través del BANCO BBVA.

ii. Al preguntarle en que documento consta que el BANCO BBVA, es quien debe entregar la declaración de asegurabilidad, al señor JUAN LEOPOLDO VARON SIERRA, para asegurar el crédito No. ****8801, manifestó: que en la licitación dice quien hace la colocación. (revisada la licitación pública No. 01 de 2018, aportada por la entidad aseguradora, en ninguna parte se corrobora lo manifestado por la representante legal). (la licitación pública No. 01 de 2018, aportada por la entidad aseguradora, es una invitación que hace el BANCO BBVA, a todas las aseguradoras que operan en el mercado Colombiano y que están autorizadas por la Superintendencia Financiera de Colombia, para que las entidades aseguradoras le hagan las posturas a la entidad financiera, en la licitación No. 01 de 2018, aportada por la entidad aseguradora, en ninguna parte se manifiesta que esta fue adjudicada BBVA SEGUROS DE VIDA COLOMBIA S. A. Dentro de los documentos aportados por BBVA SEGUROS DE VIDA COLOMBIA S. A. y el BANCO BBVA COLOMBIA S. A., que reposan en el expediente en ninguno está la constancia, que la licitación pública No. 01 de 2018, le fue

GS.ABOGADOS: Kra. 15 # 78 – 02 Oficina 402 de Bogotá D. C., correo gonzalez.angel189@gmail.com Cel. 3138999117.

adjudicada a BBVA SEGUROS DE VIDA COLOMBIA S. A., hecho que hace presumir que la representante legal de la entidad aseguradora mintió en declaración)

La Delegatura Para Funciones Jurisdiccionales, dio por sentado que la licitación pública No. 01 de 2018, le fue adjudicada a BBVA SEGUROS DE VIDA COLOMBIA S. A., sin existir en el expediente ni siquiera una prueba sumaria que así lo evidenciara, siendo engañada por la representante legal de BBVA SEGUROS DE VIDA COLOMBIA S. A., ya que la Delegatura manifiesto lo siguiente: (…) *en el presente caso, no puede soslayarse que la póliza materia de esta acción fue ofrecida y comercializada por la fuerza de ventas del Banco a través de una licitación pública y no a través de un contrato de uso de red como lo alegó la parte demandante.* (…)

8. Al expediente fue aportado por parte del BANCO BBVA COLOMBIA S. A., el contrato de uso de red, de fecha 19 de octubre de 2022, el cual fue suscrito entre BBVA SEGUROS DE VIDA COLOMBIA S. A. y el BANCO BBVA COLOMBIA S. A., al cual la Delegatura Para Funciones Jurisdiccionales, se negó en tres ocasiones aceptarlo como prueba, a pesar de reposar en el expediente y establecerlo la ley:

En el contrato de uso de red, de fecha 19 de octubre de 2018, suscrito entre el BANCO BBVA Y SEGUROS BBVA, con una vigencia de 10 años, el cual se encuentra regulado en la ley 389 de 1997, en sus artículos 5 y 6. La ley 510 de 1999, el Decreto 2555 de 2010, el Decreto 2673 de 2012, y la Circular Básica Jurídica Expedida por la Superintendencia Financiera de Colombia, en la cual establece su marco reglamentario.

La Superintendencia Financiera de Colombia, mediante radicado No. 2022171962 de fecha 26 de octubre de 2022, al consultarle sobre el contrato de uso de red, suscrito entre el BANCO BBVA Y SEGUROS BBVA, respondió lo siguiente:

"Damos respuesta a su comunicación radicada bajo el número arriba indicado, mediante el cual solicita lo siguiente:

"(…)

1. Que sea certificado si el contrato de uso de red de fecha 19 de octubre de 2018, suscrito entre el BANCO BBVA COLOMBIA S. A. Y BBVA SEGUROS DE VIDA S. A., a la fecha se encuentra vigente.

2. Si la respuesta anterior que el contrato de uso de red de fecha 19 de octubre de 2018, suscrito entre el BANCO BBVA COLOMBIA S. A. Y BBVA SEGUROS DE VIDA S. A., a la fecha no se encuentra vigente, que sea certificado; hasta que fecha estuvo vigente, mediante que instrumento fue revocado o que

GS.ABOGADOS: Kra. 15 # 78 – 02 Oficina 402 de Bogotá D. C., correo gonzalez.angel189@gmail.com Cel. 3138999117.

instrumento lo remplazo, solicitando copia del instrumento que lo revoco y/o reemplazo."

Sobre el particular y conforme a su petición, nos permitimos informarle que consultados nuestros registros se pudo establecer que a la fecha se encuentra vigente el contrato de uso de red suscrito entre ***BBVA SEGUROS COLOMBIA S.A., BBVA SEGUROS DE VIDA COLOMBIA S.A.*** *y* ***BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A.,*** *cuya actividad se centra en "la comercialización de seguros" a través de la red del banco*".

El contrato de uso de red, aportado al expediente se advierte lo siguiente:

i. Que la entidad aseguradora puede promocionar y gestionar sus productos en la entidad financiera, bajo la responsabilidad de la aseguradora.

ii. Que los seguros sean de libre contratación de los clientes del BANCO, quienes ostentaran la calidad de tomadores y/o asegurados

iii. Que bajo ninguna circunstancia el BANCO, asumirá obligación, ni responsabilidad alguna frente a los clientes, en relación con los contratos de seguro que se comercialicen. "*el representante legal del BANCO BBVA, manifiesto que esa obligación está a cargo de la aseguradora*"

iv. Que el BANCO, no asume ninguna obligación frente al cliente relacionada con la ejecución del contrato de seguros.

v. SEGUROS BBVA, expedirá y remitirá las pólizas al tomador, asegurado o beneficiario en las que consten las condiciones generales de cada una de ellas.

vi. Que el BANCO, se limita al cumplimiento de las instrucciones indicadas por SEGUROS BBVA, para los contratos de seguros. "*el representante legal del BANCO BBVA, manifiesto que no había ninguna instrucción escrita de parte de SEGUROS BBVA*"

vii. El BANCO BBVA Y SEGUROS BVBVA, suscribirán un manual operativo para cada producto que se comercialice en virtud del contrato de uso de red.

9. La declaración de asegurabilidad, fue aportada por primera vez con la contestación de la demanda, que hiciera BBVA SEGUROS DE VIDA S. A., esto es 38 meses después de haber sido firmado los documentos del seguro, que aseguro el crédito No. ****8801:

En la declaración de asegurabilidad aportada con la contestación de la demanda, se evidencian las siguientes irregularidades:

GS.ABOGADOS: Kra. 15 # 78 – 02 Oficina 402 de Bogotá D. C., correo gonzalez.angel189@gmail.com Cel. 3138999117.

a. En la casilla que dice valor asegurado, esta información aparece en blanco.

b. En la casilla que dice prima mensual, esta información aparece en blanco.

c. En la casilla que dice periodicidad, esta información aparece en blanco.

d. En la casilla que dice valor prima total, esta información aparece en blanco.

Irregularidades que no fueron advertidas por la Delegatura para Funciones Jurisdiccionales.

10. El BANCO BBVA COLOMBIA S. A., manifestó que la persona que ofreció y diligencio el crédito No. ****8801, fue el señor JHON JAIRO MARTINEZ, hecho que no es cierto, el señor JHON JAIRO MARTINEZ, fue la persona que ofreció y diligencio el crédito No. ****1752, el 03 de marzo de 2020, al demandante, por tal ya lo conocía:

i. Al señor JHON JAIRO MARTINEZ, bajo la gravedad de juramento se le indago si él fue la persona que entrevisto al demandante y diligencio los documentos del crédito No. ****8801, a lo que respondió, sí señor.

ii. En el formato de vicuculacion del crédito No. ****8801, que fue aportado por el BANCO BBVA COLOMBIA S. A., por requerimiento que le hiciera la Delegatura para Funciones Jurisdiccionales, se advierte que la persona que le realizo la entrevista en la ciudad de Ibagué (Tol.), al señor JUAN LEOPOLDO VARON SIERRA, fue la señora NATALIA NAICIPE, quien para ese entonces fungía como coordinadora comercial.

iii. Al señor JHON JAIRO MARTINEZ, se le manifestó que estaba mintiendo en la declaración, ya que en el formato de vinculación aportado por la entidad financiera, se registra que la entrevista fue realizada por la señora NATALIA NAICIPE, a lo que dio unas explicaciones poco convincentes.

11. En el expediente no reposa constancia que al señor JUAN LEOPOLDO VARON SIERRA, le fue entregado copias de los documentos que aseguraban el crédito como son; la declaración de asegurabilidad, contrato de seguros, caratula de la póliza, póliza del seguro y clausulado del seguro.

El a quo con fundamento en lo siguiente: "*Además de lo expuesto se mencionó que el diligenciamiento de la parte introductoria del documento relacionado con la declaración de asegurabilidad se había llevado a cabo por el asesor, a solicitud del demandante, y posteriormente el señor JUAN LEOPOLDO VARÓN SIERRA firmó doblemente el documento dando su aceptación a lo ahí plasmado. Es importante precisar que, el Despacho al*

GS.ABOGADOS: Kra. 15 # 78 – 02 Oficina 402 de Bogotá D. C., correo gonzalez.angel189@gmail.com Cel. 3138999117.

verificar la autenticidad de los datos consignados en la parte introductoria de la declaración de asegurabilidad, indagó al demandante en el interrogatorio sobre la veracidad de la información personal contenida en dicho documento, concretamente sobre los datos de identificación y lugar de dirección de residencia, frente a lo cual, el señor VARON SIERRA respondió afirmativamente, lo que permite inferir que dicha información fue otorgada por el mismo actor al asesor comercial del banco BBVA COLOMBIA S.A. para el diligenciamiento de la declaración de asegurabilidad". Las anteriores premisas fueron los argumentos centrales del a quo y con los cuales DECLARO probada de oficio la excepción denominada mérito denominada INEXISTENCIA DE LOS ELEMENTOS DE LA RESPONSABILIDAD CIVIL CONTRACTUAL FRENTE A BANCO BBVA.

De la totalidad de pruebas aportadas se evidencia que el a quo dedujo de forma errónea su decisión:

1. En declaración bajo la gravedad de juramento la representante legal de BANCO BBVA COLOMBIA S. A., manifestó lo siguiente:

i. La Delegatura para Funciones Jurisdiccionales le pregunto, que quien da paso a la vinculación de la póliza son funcionarios del BANCO. Quien respondió lo siguiente: "*que los funcionarios del Banco sirven de agentes mandatarios de la compañía de seguros para efectos de la vinculación del cliente al seguro de vida deudores. Que es una relación de mando. Que el asesor comercial para efectos del seguro obra en nombre del de la Compañía de Seguros como mandatario. Que el funcionario que ofreció el crédito es un funcionario directo del Banco*".

"*Según el artículo 2142 del código civil define el contrato de mandato de la siguiente forma: «El mandato es un contrato en que una persona confía la gestión de uno o más negocios a otra, que se hace cargo de ellos por cuenta y riesgo de la primera. La persona que concede el encargo se llama comitente o mandante, y la que lo acepta apoderado, procurador, y en general, mandatario*.»"

Revisado las documentales que reposan en el expediente, no se advierte que entre el BANCO BBVA COLOMBIA S. A. Y BBVA SEGUROS DE VIDA S. A., y el funcionario que diligencio el seguro, que aseguro el crédito No. ****8801, hayan suscrito un contrato de mandato para el ofrecimiento y comercialización del seguro de vida grupo deudores.

2. En el expediente no reposa constancia que al señor JUAN LEOPOLDO VARON SIERRA, le fue entregado copias de los documentos del crédito No. ****8801, estos solo fueron aportados con la contestación de la demanda.

3. La responsabilidad solidaria del BANCO BBVA COLOMBIA S. A., se circunscribe que dentro de los documentos del crédito No. ****8801,

GS.ABOGADOS: Kra. 15 # 78 – 02 Oficina 402 de Bogotá D. C., correo gonzalez.angel189@gmail.com Cel. 3138999117.

incorporo los documentos del contrato de seguros y sobre el seguro no le suministro ninguna información al consumidor financiero.

Sobre la responsabilidad solidaria el Código Civil hace la siguiente manifestación; Cuando el delito o la culpa implican a más de una persona, cada uno de los causantes tendrá una responsabilidad por el perjuicio ocasionado por el mismo delito. Así lo establece el artículo 2344 del código civil. Pero también debe considerarse las excepciones a este caso, establecidas en el artículo 2350 y 2355 del mismo código. Todo fraude o dolo cometido por dos o más personas producen la acción solidaria del precedente inciso.

El BANCO BBVA COLOMBIA S. A. Y BBVA SEGUROS DE VIDA S. A., tenían la responsabilidad como partes de la relación contractual, de cumplir con los deberes de información y debida diligencia exigibles durante todos los momentos de la relación contractual a través de su labor comercial y profesional de la actividad, elementos ausentes, ninguna de las dos entidades vigiladas cumplió con esta obligación establecida en el estatuto del consumidor financiero, ya que esta responsabilidad cada una se la traslado a la otra, BBVA SEGUROS DE VIDA S. A., manifestó que la información del seguro, que aseguraba el crédito No. ****8801, la debía dar la entidad financiera, ya que así lo establecía la licitación, revisada la licitación aportada esto no es cierto, además teniendo en cuenta que no se aportó prueba que demostrara que la licitación aportada por la entidad aseguradora, a esta le haya sido adjudicada, por su parte BANCO BBVA COLOMBIA S. A., que la entidad financiera no puede asumir obligaciones ni responsabilidades frente a los clientes con relación a los seguros, ya que esta es una obligación de la aseguradora, que la aseguradora no le dio ninguna instrucción escrita para el seguro, que aseguro el crédito No. ****8801.

El a quo manifiesta que pudo verificar con el señor JUAN LEOPOLDO VARON SIERRA, que la información de la declaración de asegurabilidad, la cual le resulto cierta, el a quo desconoce que el señor con el BANCO BBVA COLOMBIA S. A., ha tenido varios créditos y productos, después que firmo los documentos del crédito fue llamado en varias ocasiones y en estas le preguntaron datos personales

El diligenciamiento de los formularios por parte de funcionarios de la aseguradora o de la entidad crediticia, sin que la tomadora los conozca, al parecer se volvió tan común que fue declarado práctica abusiva por la Superintendencia Financiera de Colombia en la Circular Básica Jurídica 029 de 2014 (Parte 1, Título III, Capítulo I, art. 6.2.3).

Las altas cortes, han comenzado a hacer más hincapié en la carga de autoinformación de las aseguradoras que en el deber de información de las tomadoras. Consecuentemente, se han negado a declarar la nulidad del contrato de seguros cuando las compañías no han llevado a cabo labores para confirmar la veracidad de la información declarada por la tomadora durante la etapa precontractual.

GS.ABOGADOS: Kra. 15 # 78 – 02 Oficina 402 de Bogotá D. C., correo gonzalez.angel189@gmail.com Cel. 3138999117.

Las altas cortes, han comenzado a considerar que la nulidad del contrato solamente procede cuando se incumplió el deber de información con mala fe, esto es, con la intención de engañar a la aseguradora, confirmando la validez del contrato en los casos en que el incumplimiento del deber fue por culpa y obligando a las aseguradoras a demostrar, no solo que de haber conocido la información no declarada no hubieran suscrito el negocio o lo habrían hecho en condiciones diferentes, sino también la mala fe de la tomadora.

En razón de todo lo mencionado en los párrafos anteriores, se puede evidenciar que el *a quo* incurrió en varios yerros procesal durante el trámite del proceso, esto en lo relativo a la valoración del material probatorio recepcionados durante el trámite del proceso, configurándose con este actuar el llamado *"Defecto Fáctico por Omisión y Valoración Defectuosa del Material Probatorio"*[1], concepto desarrollado jurisprudencialmente por parte de la Corte Constitucional de Colombia en diferentes providencias entre las que se encuentra la Sentencia T -006 de 2018, la cual a su vez cita la Sentencia C- 1270 de 2000, providencias por medio de las cuales se esboza que *"El defecto fáctico, ha sido entendido por esta Corte como una anomalía protuberante y excepcional que puede presentarse en cualquier proceso judicial y se configura cuando "el apoyo probatorio en que se basó el juez para aplicar una determinada norma es absolutamente inadecuado"*[2].

Además de lo antes mencionado, también se debe tener en cuenta que defecto factico se puede presentar en dos dimensiones, una positiva y una negativa, dimensiones que se establecen de la siguiente manera:

> La ***primera*** se presenta cuando el juez efectúa una valoración por *"completo equivocada"*, o fundamenta su decisión en una prueba no apta para ello. Esta dimensión implica la evaluación de errores en la apreciación del hecho o de la prueba que se presentan cuando el juzgador se equivoca: i) al fijar el contenido de la misma, porque la distorsiona, cercena o adiciona en su expresión fáctica y hace que produzca efectos que objetivamente no se establecen de ella; o ii) porque al momento de otorgarle mérito persuasivo a una prueba, el juez se aparta de los criterios técnico-científicos o los postulados de la lógica, las leyes de la ciencia o las reglas de la experiencia, es decir, no aplica los principios de la sana crítica[3], como método de valoración probatoria[4].

En cuanto a la **segunda** dimensión del defecto factico:

---

[1] Corte Constitucional de Colombia. Sentencia T-241 de 2016 (MP. Jorge Ignacio Pretelt Chajuljub). Mayo 16 de 2016.

[2] Corte Constitucional de Colombia. Sentencia T-006 de 2018 (MP. Alberto Rojas Ríos). Enero 26 de 2018.

[3] Corte Constitucional de Colombia. Sentencia C – 622 de 1998. (M.P. Fabio Morón Díaz) noviembre 4 de 1998. Véase "Las *reglas de la sana crítica* son, ante todo, las reglas del correcto entendimiento humano. En ellas interfieren las reglas de la lógica, con las reglas de la experiencia del juez. Unas y otras contribuyen de igual manera a que el magistrado y/o juez puedan analizar la prueba (ya sea de testigos, peritos, de inspección judicial) con arreglo a la sana razón y a un conocimiento experimental de las cosas."

[4] Corte Constitucional de Colombia. Sentencia T-041 de 2018 (MP. Gloria Stella Ortiz Delgado). Febrero 16 de 2018.

GS.ABOGADOS: Kra. 15 # 78 – 02 Oficina 402 de Bogotá D. C., correo gonzalez.angel189@gmail.com Cel. 3138999117.

> La negativa, se produce cuando el juez omite o ignora la valoración de una prueba determinante o no decreta su práctica sin justificación alguna. Esta dimensión comprende las omisiones en la apreciación de pruebas determinantes para identificar la veracidad de los hechos analizados por el juez[5].

Con fundamento en lo esbozado anteriormente, podemos evidenciar que el *a quo*, claramente incurrió en el llamado defecto factico por la dimensión positiva, esto debido a que valoró de forma errónea el material probatorio allegado al proceso, dándole a las pruebas un alcance probatorio superior al que efectivamente demostraban, tal es el caso, que la Delegatura Para Funciones Jurisdiccionales, dio por sentado que la licitación pública No. 01 de 2018, le fue adjudicada a BBVA SEGUROS DE VIDA COLOMBIA S. A., sin existir en el expediente ni siquiera una prueba sumaria que así lo evidenciara, siendo engañada por la representante legal de BBVA SEGUROS DE VIDA COLOMBIA S. A., ya que la Delegatura manifiesto lo siguiente: (…) *en el presente caso, no puede soslayarse que la póliza materia de esta acción fue ofrecida y comercializada por la fuerza de ventas del Banco a través de una licitación pública y no a través de un contrato de uso de red como lo alegó la parte demandante.* (…)

Con fundamento en lo esbozado anteriormente, podemos evidenciar que el *a quo*, claramente incurrió en el llamado defecto factico por la dimensión negativa, la Delegatura Para Funciones Jurisdiccionales, omitió valorar la declaración de asegurabilidad del crédito No. ****8801, sobre las siguientes irregularidades; En la casilla que dice valor asegurado, esta información aparece en blanco; En la casilla que dice prima mensual, esta información aparece en blanco; En la casilla que dice periodicidad, esta información aparece en blanco, En la casilla que dice valor prima total, esta información aparece en blanco. No valoro el contrato de uso de red, de fecha 19 de octubre de 2018, suscrito entre el BANCO BBVA Y SEGUROS BBVA. No valoro que en el En el expediente no reposa constancia que al señor JUAN LEOPOLDO VARON SIERRA, le fue entregado copias de los documentos que aseguraban el crédito como son; la declaración de asegurabilidad, contrato de seguros, caratula de la póliza, póliza del seguro, clausulado del seguro, ni los documentos de suscripción del crédito No. ****8801. No valoro que la entrevista al demandante en el crédito No. ****8801, le fue realizada por la señora NATALIA NAICIPE, y no por el señor JHON JAIRO MARTINEZ.

2. PETICION

En razón de lo antes mencionado, me permito solicitar al a quem lo siguiente:

2.1. Se REVOQUE la decisión del a quo y en su defecto se acojan las pretensiones de la demanda.

[5] Corte Constitucional de Colombia. Sentencia T-464 de 2001 (MP. Marco Gerardo Monroy Cabra). Mayo 03 de 2001.

GS.ABOGADOS: Kra. 15 # 78 – 02 Oficina 402 de Bogotá D. C., correo gonzalez.angel189@gmail.com Cel. 3138999117.

2.2. Solicito al despacho, en caso de no acoger los argumentos de la apelación, no se condene en costas siempre que no se compruebe uso indebido o arbitrario de los instrumentos procesales[6], y como quiera que estas en el expediente no están demostradas que se causaron según el artículo 365 numeral 8 del Código General del Proceso.

Del señor Superintendente,



Anexo documentos que ya reposan en el expediente:

1. **Contrato de uso de red**
2. **Declaracion de asegurabilidad**
3. **Formato de vinculacion credito No. ****8801.**
4. **Oficio Superfinanciera**
5. **Licitacion No. 01 de 2018**

[6] Sentencia del 25 de mayo de 2006. Subsección B, Jesús María Lemus. Rad. 2001-04955-01(2427-2004) " (..) sólo cuando el Juez, después de valorar la conducta de las partes, compruebe que hubo uso abusivo de los medios procesales es del caso condenar en costas lo que, contario sensu, significa que si la conducta procesal fue correcta no es posible acceder a la condena en costas"

GS.ABOGADOS: Kra. 15 # 78 – 02 Oficina 402 de Bogotá D. C., correo gonzalez.angel189@gmail.com Cel. 3138999117.

CONTRATO DE USO DE RED CELEBRADO ENTRE BBVA COLOMBIA CON BBVA SEGUROS COLOMBIA S.A. Y BBVA SEGUROS DE VIDA COLOMBIA S.A.

De una parte, **PEDRO BUITRAGO MARTÍNEZ** domiciliado en Bogotá D.C., mayor de edad e identificado con la cédula de ciudadanía número 79.283.501 de Bogotá, obrando en calidad de Representante Legal de **BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A.**, en adelante **"BBVA COLOMBIA** o **BANCO"**, establecimiento bancario legalmente constituido y con domicilio en Bogotá D.C., según consta en el certificado de existencia y representación legal expedido por la Superintendencia Financiera de Colombia que se adjunta al presente Contrato; y por la otra, **MILTON DAVID MICÁN BELTRÁN,** domiciliado en Bogotá D.C., mayor de edad e identificado con la cédula de ciudadanía número 79.323.621 de Bogotá D.C., obrando en calidad de Representante Legal de **BBVA SEGUROS COLOMBIA S.A.** y **BBVA SEGUROS DE VIDA COLOMBIA S.A.**, quienes en adelante de manera conjunta se denominarán como "**BBVA SEGUROS" y/o LA USUARIA** sociedades legalmente constituidas y con domicilio en Bogotá D.C., según consta en los certificado de existencia y representación legal expedido por la Superintendencia Financiera de Colombia que se adjuntan al presente documento, y en conjunto "las Partes" han celebrado el presente Contrato de Uso de Red (en adelante, "el Contrato"), el cual se regirá por las siguientes cláusulas, previas las siguientes:

CONSIDERACIONES

PRIMERA: Que de conformidad con el artículo 5º de la Ley 389 de 1.997, los establecimientos de crédito pueden permitir, mediante contrato remunerado, el uso de su red por parte de entidades aseguradoras para la promoción y gestión de las operaciones autorizadas a la entidad usuaria y bajo la responsabilidad de esta última.

SEGUNDA: Que mediante el Decreto Reglamentario 034 de 2015 incorporado en el Decreto 2555 de 2010, se determinó las características, los productos y los ramos de seguros idóneos para su comercialización a través de los contratos de uso de red, previa autorización de la Superintendencia Financiera de Colombia.

TERCERA: Que mediante la Circular 49 de 2015, expedida por la Superintendencia Financiera de Colombia, se imparten las instrucciones que deben atender las entidades vigiladas, en desarrollo de las modalidades de Uso de Red, establecidas en el Articulo 93 del EOSF y el art. 5 de la Ley 389 de 1997, así como en el Capítulo 2, Titulo 2, Libro 31 y el Titulo 1, Libro 34, de la Parte II del Decreto 2555 de 2010.

CUARTA: Que es voluntad de las Partes firmar el presente Contrato, dejando sin efecto el contrato celebrado entre las Partes el 29 de noviembre de 2016 u otro acuerdo previo, con el fin de atender las recomendaciones de la Superintendencia Financiera de Colombia mediante oficios con número de radicado 2016043660.

QUINTA: Entiéndase por operaciones autorizadas de la aseguradora (en adelante **OPERACIONES AUTORIZADAS**) la promoción y comercialización masiva de seguros individuales emitidos por **BBVA SEGUROS** de los ramos que sean acordados por las partes mediante documento anexo conforme a la regulación local vigente para el momento del acuerdo y que sean de libre contratación por parte de los clientes del **BANCO**, quienes ostentarán la calidad de tomadores y/o asegurados.

BBVA Seguros

SEXTA: Entiéndase que forman parte de la red del **BANCO** (en adelante la **RED**), los canales presenciales y no presenciales, los empleados y los sistemas de información del **BANCO.**

SÉPTIMA: En cumplimiento de las gestiones previstas en esta convención, las Partes se abstendrán de desarrollar actividades para cuya realización no se hallen legalmente autorizadas.

CLAUSULAS:

PRIMERA. OBJETO.- El objeto del presente contrato consiste en que **BBVA SEGUROS** utilizará, la red del **BANCO**, para la promoción y gestión de las operaciones autorizadas a **BBVA SEGUROS** como **ASEGURADORA** y bajo la responsabilidad de ésta última, ciñéndose para el efecto a lo dispuesto en la Ley 389 de 1997 y el Decreto reglamentario 034 de 2015 incorporado en el Decreto 2555 de 2010 y las demás normas que los adicionen o modifiquen y las disposiciones legales o reglamentarias pertinentes, a cambio de la remuneración establecida a favor del **BANCO** en el presente contrato.

Sin perjuicio que con posterioridad puedan comercializarse otros productos, en virtud del presente contrato se promocionarán y gestionarán los siguientes:

- Seguro Familia Vital
- Seguro de Vida Individual 18
- Seguro de Vida Integral Premium
- Seguro Oncológico
- Seguro Hogar Individual
- Seguro Multiriesgo Hogar
- Seguros API Salud
- Seguro de Desempleo
- Seguro Hurto Tarjeta Protegida
- Seguro de Vida Individual Pago Único

SEGUNDA. ACTIVIDADES Y SERVICIOS PRESTADOS.- En cumplimiento del presente contrato, el **BANCO** permitirá a **LA USUARIA** utilizar su **RED** para la comercialización de seguros individuales de los productos de seguros que se definan conjuntamente conforme a lo establecido en la consideración cuarta del presente contrato. A su vez, **EL BANCO** podrá desarrollar todas aquellas operaciones de recaudo, recepción, pago, transferencia y entrega de dinero a **LA USUARIA**, documentos, informes, extractos, boletines, certificados, reportes y en general toda aquella información relacionada directamente con los seguros cuya promoción y gestión se realice bajo este contrato. La **RED** del **BANCO** podrá usarse en especial, para el desarrollo de las siguientes operaciones:

1. Comercialización de productos de seguros de los ramos previamente establecidos y autorizados por la ley, a través de la vinculación de clientes actuales, potenciales o futuros del **BANCO** que cumplan con las políticas e instrucciones de suscripción previamente establecidas y descritas por **BBVA SEGUROS**. Los productos que podrán vincularse a los servicios objeto del presente contrato, de acuerdo con la ley y en atención a las condiciones de universalidad, sencillez, estandarización y comercialización masiva, serán acordados entre las partes en Anexos de Manual Operativo para cada producto que se incorporen a este contrato. Dichos ramos corresponderán a los establecidos en el Artículo 2 del Decreto 034 del 14 de enero de 2015, o las normas que lo modifiquen, adicionen o sustituyan.

BBVA Seguros

CONTRATO DE USO DE RED CELEBRADO ENTRE BBVA COLOMBIA CON BBVA SEGUROS COLOMBIA S.A. Y BBVA SEGUROS DE VIDA COLOMBIA S.A.

Dando cumplimiento a lo establecido en el artículo 4 del Decreto 1367 de 1998, en concordancia con el artículo 184 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero, las pólizas de seguros objeto de comercialización serán exclusivamente aquellas que se hayan remitido previamente a la Superintendencia Financiera de Colombia. Cuando las pólizas ya hayan sido remitidas a la Superintendencia Financiera de Colombia de manera previa al presente contrato, se procederá a dar aviso de su comercialización, a la citada entidad de control.

2. Recaudo por parte del **BANCO** del dinero producto del pago de primas por parte del tomador de las pólizas, lo cual se llevará a cabo mediante la instrucción que para el efecto haga el cliente.

3. Transferencia diaria a **BBVA SEGUROS** de los recaudos de primas a las cuentas corrientes y/o de ahorros de BBVA COLOMBIA definidas y avisadas por **BBVA SEGUROS,** dentro de los plazos y condiciones establecidos en el Manual Operativo del Contrato de Uso de Red que establezca las condiciones de prestación de los servicios objeto del presente contrato, para cada producto comercializado.

4. **BBVA SEGUROS** podrá realizar transferencias de recursos para el pago de indemnizaciones, mediante abono en la cuenta de los beneficiarios, cheque o cualquier otro medio que se convenga con el beneficiario.

5. Realización de las actividades previstas en el presente contrato de acuerdo con la capacitación, información, instrucciones y material que para tal efecto hayan sido entregados por **BBVA SEGUROS** al **BANCO**.

6. Canalización de documentos, correspondencia e información entre **BBVA SEGUROS** y los tomadores, asegurados o beneficiarios.

PARAGRAFO. USO DE RED.- Para los efectos del presente contrato, se entenderán como red del **BANCO** los canales presenciales y no presenciales, los empleados y los sistemas de información del mismo.

CANALES PRESENCIALES: Son las oficinas del **BANCO** ubicadas en el territorio nacional Colombiano, así como aquellas cuya apertura se realice con posterioridad a la firma del presente contrato, los cajeros automáticos, los receptores de cheques, los receptores de dinero en efectivo y los datáfonos (POS, incluye PIN Pad).

CANALES NO PRESENCIALES: Son todos los canales por medio de los cuales **EL BANCO** atiende a los consumidores financieros de manera remota a través de internet, banca móvil, sistemas de audio respuesta (IVR), centros de atención telefónica y sistemas de acceso remoto para clientes, dentro de los que se encuentra y sin limitarse a: la página Web www.bbva.com.co, BBVA net, BBVA Net cash, BBVA móvil y Línea BBVA.

TERCERA. AUTONOMIA Y RESPONSABILIDAD.- Las obligaciones del **BANCO** se limitan al correcto cumplimiento de las instrucciones debidamente impartidas por **BBVA SEGUROS** de manera previa y por escrito, en consecuencia se acuerda entre **LAS PARTES** que bajo ninguna circunstancia **EL BANCO** asumirá obligación, ni responsabilidad alguna frente a los clientes, en relación con los contratos de

BBVA Seguros

seguro que se comercialicen o desarrollen a través de este acuerdo así como tampoco por las labores de gestión y promoción que realice **BBVA SEGUROS** a través de la **RED**.

Los errores o incidencias no atribuibles al Cliente que se presenten en el procedimiento de recaudo y/o aplicación de las primas recaudadas, no podrán afectar al consumidor financiero y serán responsabilidad de la Parte que originó dicho error.

LAS PARTES se comprometen a adoptar todas las medidas necesarias para que el público identifique claramente que **LA USUARIA** es una persona jurídica autónoma, independiente y diferente del **BANCO,** en especial la identificación precisa en los documentos carteles, canales de comunicación y en general en la publicidad de las marcas y actividades y responsabilidades que asumen **LAS PARTES** bajo el presente contrato. En desarrollo de lo anterior, en todo comprobante de transacción de operaciones las partes deberán indicar que el **BANCO** actúa bajo la exclusiva responsabilidad de **LA USUARIA** y por tanto no asume obligación alguna relacionada con la ejecución de los contratos de seguros comercializados.

Para tal efecto, entre otras, el **BANCO** incluirá una advertencia en toda la documentación que entregue a los clientes en la cual se le informe que "EN LAS OPERACIONES QUE SE REALICEN A TRAVES DE LA RED DE BBVA COLOMBIA, ESTE NO ASUME RESPONSABILIDAD EN LA GESTION ENCOMENDADA POR EL CLIENTE A BBVA SEGUROS COLOMBIA S.A. Y BBVA SEGUROS DE VIDA COLOMBIA S.A., EN SU CALIDAD DE ASEGURADORA. LAS OBLIGACIONES DEL BANCO SE LIMITAN AL CORRECTO CUMPLIMIENTO DE LAS INSTRUCCIONES DEBIDAMENTE IMPARTIDAS POR LA ENTIDAD ASEGURADORA USUARIA DE LA RED PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO. BBVA COLOMBIA ACTUA BAJO EXCLUSIVA RESPONSABILIDAD DE LAS COMPAÑIAS DE SEGUROS USUARIAS DE SU RED Y, POR TANTO, NO ASUME NINGUNA OBLIGACIÓN FRENTE AL CLIENTE RELACIONADA CON LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO DE SEGUROS QUE DA ORIGEN A LAS TRANSACCIONES U OPERACIONES QUE EJECUTE".

Una advertencia similar se incluirá en los protocolos o guiones de servicios de venta telefónica, si los hubiere.

CUARTA. RESPONSABILIDAD ENTRE LAS PARTES.- Las partes acuerdan que la determinación de la responsabilidad a que haya lugar entre ellas se sujetará a las siguientes premisas generales:

a) Las Partes responderán hasta por la culpa leve en la ejecución del presente contrato.

b) A efecto de que se pueda derivar responsabilidad para alguna de las partes en desarrollo de las actividades objeto del presente contrato, se requerirá la existencia de un perjuicio que haya tenido lugar como consecuencia de un acto culposo imputable a la parte infractora.

c) Se entenderá como culposo, salvo prueba en contrario, todo acto ejecutado en contraposición de las instrucciones impartidas entre las partes.

QUINTA. OBLIGACIONES DE BBVA SEGUROS.- En desarrollo del presente contrato **LA USUARIA** adquiere las siguientes obligaciones especiales, sin perjuicio de las demás obligaciones establecidas en el presente u otros documentos:

BBVA Seguros

a) Pagar al **BANCO** el valor que se estipule como remuneración, según lo establecido en el presente contrato y demás documentos que lo complementen.
b) Capacitar a los funcionarios del **BANCO** en los temas relacionados con los servicios objeto del presente contrato, de conformidad con lo establecido en la cláusula Décima Quinta y en los Anexos de Manual Operativo para cada Producto.
c) Asumir de manera exclusiva los compromisos y responsabilidades derivadas de los contratos de seguro cuya operación, celebración o gestión sea desarrollada a través de la **RED** del **BANCO.** Para el efecto, **LA USUARIA** deberá adoptar las medidas necesarias para que el público la identifique claramente como una persona jurídica distinta y autónoma del **BANCO** y cumplir las demás condiciones que señale la Superintendencia Financiera de Colombia con el fin de asegurar el cumplimiento de esta obligación.
d) Expedir y remitir las pólizas al tomador, asegurado o beneficiario en las que consten las condiciones generales de cada una de ellas, junto con los folletos, solicitudes, certificados individuales de seguros y en fin todos los documentos necesarios para el desarrollo de los servicios objeto del presente contrato.
e) Prestar un óptimo servicio a los consumidores vinculados con el presente contrato, así como asesorarlos respecto a las inquietudes de coberturas, exclusiones, derechos y obligaciones frente al contrato de seguro respectivo. La asesoría podrá ser solicitada directamente por el cliente o por intermedio del **BANCO.**
f) Previa comunicación a la Superintendencia Financiera de Colombia, y previa aceptación y aprobación del **BANCO,** ofrecer los productos de seguros definidos en los anexos de este contrato a los clientes actuales, potenciales o futuros del **BANCO**, empleando sistemas de mercadeo masivo y dirigido, tales como el correo directo, telemercadeo, oferta en la red de oficinas o a través de cualquiera de los canales de distribución del **BANCO.**
g) **BBVA SEGUROS** se hará responsable de manera exclusiva de la atención, trámite y manejo de todas las reclamaciones (Siniestros) que resulten de las pólizas, indemnizando dichas reclamaciones de conformidad con las condiciones de los contratos de seguro y la legislación vigente, en especial la referente a la protección al consumidor financiero, sin perjuicio del derecho que tiene **BBVA SEGUROS** de objetar las reclamaciones a que haya lugar, de acuerdo con los contratos de seguro y con la Ley.
h) Atender en los plazos establecidos en los acuerdos de niveles de servicio las solicitudes, reclamos (diferentes a siniestros), requerimientos y quejas recibidos de los clientes o directamente de algún funcionario del **BANCO,** en atención a las normas de protección al consumidor del sistema financiero.
i) El cliente tramitará directamente ante **BBVA SEGUROS**, por los canales definidos las solicitudes de indemnización que se presente(n) en relación con las pólizas objeto de la presente contrato, a través de los canales establecidos por BBVA SEGUROS, acompañando los documentos que acrediten la ocurrencia y cuantía del reclamo. El **BANCO** estará facultado para solicitar la información que considere necesaria con este proceso, para lo cual podrá nombrar los funcionarios o proveedores que considere conveniente. **BBVA SEGUROS** suministrará a dichos funcionarios o proveedores la información que el **BANCO** hubiere solicitado. En todo caso las revisiones se llevarán a cabo en las condiciones que las partes pacten previamente a su realización.
j) Designar el(los) responsable(s) que actuarán como canal de comunicación entre las partes contratantes. En este sentido la(s) persona(s) designada(s) por **BBVA SEGUROS** actuarán para efectos de que sean atendidas de manera oportuna las solicitudes que el **BANCO** formule, con el fin de resolver en el menor tiempo posible las dificultades que se puedan presentar en el desarrollo de las actividades reguladas por el presente documento.

BBVA Seguros

k) Acordar con el **BANCO** los mecanismos para verificar que los tomadores y/o asegurados tengan un interés asegurable que corresponda con la póliza de seguro comercializada a través del el **BANCO.**
l) Las demás señaladas en la legislación comercial a cargo de **LA USUARIA**, o que las partes convengan con posterioridad a la suscripción del presente contrato o en convenios de producto por separados, así como las que se deriven del presente contrato.

SEXTA. OBLIGACIONES DEL BANCO.- En desarrollo del presente contrato el **BANCO** se obliga especialmente a lo siguiente:

a) Prestar los servicios derivados del presente contrato.
b) Sin perjuicio de la obligación que en tal sentido y por este contrato y la ley asume **BBVA SEGUROS**, el **BANCO** debe adoptar todas las medidas necesarias para que el público identifique claramente que **LA USUARIA** es una persona jurídica distinta y autónoma del **BANCO**.
c) Seleccionar la base de datos de sus clientes, para realizar las labores de promoción de los productos de **LA USUARIA** ofrecidos mediante la red del **BANCO.** En caso de que la operatividad implique transferencia de datos personales, los mismos serán remitidos a **LA USUARIA** siempre que el **BANCO** cuente con la respectiva autorización previa de sus Clientes y en cumplimiento de las disposiciones legales sobre protección de datos.
d) El **BANCO** no variará en forma alguna la documentación convenida, no cotizará productos, no negociará ni dirigirá reclamaciones, no hará declaraciones ni dará garantía alguna de cumplimiento sobre los contratos que celebren las personas vinculadas a **LA USUARIA** a través de su RED.
e) Previa autorización del Titular de la Cuenta, realizar el recaudo de los productos, cuando así se haya convenido en los Anexos de Manual Operativo para cada Producto. EL BANCO deberá conservar dicha autorización Los errores o inconvenientes no atribuibles al Cliente que se presenten en este procedimiento, no podrán afectar al consumidor financiero.
f) Permitir la realización de auditorías especializadas a través de entidades de primera categoría, a los procesos y actividades realizadas por el **BANCO** con ocasión de este contrato, con el fin de que **LA USUARIA** pueda realizar una verificación del cumplimiento de los estándares de calidad, eficiencia, oportunidad y seguridad en la prestación de los servicios. Estas auditorías se realizarán previo acuerdo con el **BANCO** en los horarios que no afecten su operatividad.
g) Adoptar razonablemente los mecanismos para mitigar adecuadamente los riesgos asociados a la validación de la identidad de los consumidores financieros, el registro y seguridad en la remisión por web service de la información de las operaciones realizadas, garantizando su independencia frente a la información o bases de datos propios del **BANCO.** Por lo anterior, el Banco realizará la validación de los consumidores financieros, de acuerdo con las políticas internas vigentes, mediante la verificación del documento de identidad, toma de firmas y autenticación biométrica a través de consulta en la Registraduría Nacional del Estado Civil
h) Las demás derivadas del presente contrato o de la ley.

PARAGRAFO PRIMERO.- Las obligaciones del **BANCO** en desarrollo del presente contrato, se limitan al cumplimiento de las instrucciones indicadas expresamente por **BBVA SEGUROS** dentro del texto del mismo, en los términos de la cláusula décima tercera del presente contrato.

SÉPTIMA. REMUNERACION.- Como contraprestación por los servicios que presta el **BANCO** en desarrollo de este contrato, **BBVA SEGUROS** pagará un porcentaje sobre las primas recaudadas, el cual se acordará entre las partes en el Manual Operativo establecido para cada uno de los productos que de

BBVA Seguros

común acuerdo se decidan comercializar a través de la RED, los cuales harán parte integral de este Convenio.

En caso de que **BBVA SEGUROS** deba devolver al Tomador de la Póliza primas no devengadas por concepto de revocaciones de pólizas, anulaciones o cualquier otra causa, el **BANCO** deberá devolver la remuneración correspondiente, si ella ya hubiese sido pagada de acuerdo con el procedimiento establecido en el Anexo Manual Operativo de cada Producto.

OCTAVA. FORMA DE PAGO.- BBVA SEGUROS pagará diariamente a **EL BANCO** la remuneración que se pacte. Esta remuneración será descontada automáticamente por el **BANCO** en el momento de realizar el traslado de primas a la cuenta de **BBVA SEGUROS** en **BBVA COLOMBIA**.

NOVENA. AUTORIZACION PARA EL USO DE MARCAS Y OTROS ELEMENTOS DE PROPIEDAD INDUSTRIAL, DISEÑO DE PUBLICIDAD Y MERCADEO.- Las partes se encontrarán facultadas para usar en su información comercial o publicitaria los nombres, marcas, enseñas, lemas, logos, logo-símbolos y cualquier otro elemento de propiedad industrial que identifique los productos y/o servicios de **BBVA SEGUROS** vinculados con el objeto del presente Contrato o que distingan o identifiquen a cualquiera de las Partes dentro del contexto del presente contrato, en los términos que se acuerden previamente entre ellas. Para el efecto las partes declaran poseer las licencias y/o derechos de propiedad industrial sobre los citados signos. En todo caso se respetará lo establecido en la Cláusula Tercera del presente contrato.

Las partes coordinarán el diseño de la papelería, mercadeo y material publicitario que sea utilizado para la ejecución y desarrollo de los servicios objeto del presente contrato.

DÉCIMA. TÉRMINO DE DURACIÓN.- El presente Contrato tendrá duración de diez (10) años contados a partir de su suscripción y permanecerá vigente mientras subsistan los acuerdos de comercialización en los que la operatividad esté basada en el uso de la red, de acuerdo con la normatividad vigente. Dicha terminación será informada oportunamente a la Superintendencia Financiera de Colombia.

PARÁGRAFO: El presente Contrato se entenderá prorrogado por periodos sucesivos e iguales a un (1) año, contado a partir de la terminación del periodo de duración inicial o de cualquiera de sus prórrogas.

DECIMA PRIMERA. CAUSALES DE TERMINACIÓN.- El presente contrato se entenderá terminado cuando se configure alguna de las siguientes causales:

a) Mutuo Acuerdo entre las partes.
b) Inexistencia de acuerdos de comercialización en los que la operatividad esté basada en el Uso de Red.
c) Incumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato, por cualquiera de las partes.
d)Decisión unilateral de cualquiera de las partes, notificada a la otra por escrito, con una antelación mínima de ciento veinte (120) días calendario, sin que en virtud de la misma se entienda incumplido el contrato o haya lugar a indemnización alguna.

DECIMA SEGUNDA. GASTOS E IMPUESTOS.- Si las autoridades impusieran algún tributo, impuesto o carga adicional generados por el presente contrato, será asumido económicamente y declarado a las

BBVA Seguros

Autoridades Tributarias por **BBVA SEGUROS** o **BBVA COLOMBIA** según corresponda, de acuerdo con las normas tributarias.

En el evento en que **BBVA SEGUROS** o **BBVA COLOMBIA** no se encontraran obligados a pagar o declarar el tributo, tendrán la responsabilidad de presentar la documentación que así lo soporte.

DECIMA TERCERA. AUTONOMIA.- En desarrollo de las actividades previstas en este contrato las partes declaran que **BBVA SEGUROS** es quien actúa directamente a través de la red del **BANCO**. Tanto el **BANCO** como **BBVA SEGUROS** conservan completa autonomía administrativa, técnica y directiva, de manera que la celebración de este contrato no conlleva la delegación de decisiones que corresponda tomar a una u otra entidad de manera exclusiva.

De igual modo, las partes declaran expresamente que no existe vinculación laboral entre ellas o entre ellas y sus dependientes, empleados o subordinados, y que la labor que desarrollarán sus funcionarios en ejecución del programa se efectuará siguiendo las directrices que emanan de la empresa con la cual tienen un vínculo de carácter laboral. De acuerdo con lo anterior, el **BANCO** y **BBVA SEGUROS** no asumirán en ningún caso obligaciones de carácter laboral para con los dependientes de una u otra parte según sea el caso, y si eventualmente alguno de los contratantes se viera obligado a asumir cualquiera de dichas obligaciones, estará facultado para repetir contra la otra parte las sumas que hubiere cancelado en tal virtud.

DECIMA CUARTA. MANUALES OPERATIVOS.- Las partes suscribirán un Manual Operativo para cada Producto que se comercialice en virtud del contrato de uso de red, los cuales formarán parte integral del mismo en Anexos y en los que se establecerán las condiciones de prestación del servicio de uso de red, especialmente en lo relacionado con el ramo de seguros a comercializar, la remuneración, los plazos, trámites, condiciones y niveles de servicios para la prestación del servicio, incluyendo pero sin limitarse a el suministro de papelería, trámite de operaciones, tiempos de respuesta, uso compartido de sistemas informáticos, labores de capacitación, responsabilidades particulares en los flujos de procesos, etc. Todo lo anterior, bajo condiciones y mecanismos que aseguren la prestación del servicio bajo estándares de eficiencia, oportunidad y seguridad, como mínimo equiparables a los ofrecidos por la entidad usuaria de la red a sus consumidores financieros.

DECIMA QUINTA. CAPACITACIONES Y ATENCION AL CONSUMIDOR FINANCIERO. En aplicación de lo dispuesto en el literal b) de la cláusula quinta del presente contrato, a efectos de desarrollar el Programa de Capacitación, se deberán seguir los lineamientos que se relacionan a continuación, bajo los cuales la red comercial de BBVA Colombia ofrecerá los productos de seguros comercializados en virtud del presente acuerdo:

1. **DEBERES Y RESPONSABILIDADES DEL CONSUMIDOR FINANCIERO**

El asesor deberá indicarle al consumidor financiero que sus deberes y responsabilidades son las siguientes:

a) Leer y entender las condiciones del seguro que adquiere, en cuanto a: los amparos o coberturas, valor de la prima y periodicidad de pago, vigencia, valor asegurado, exclusiones, beneficios, condiciones para reclamación en caso de siniestro y canales para que le sean atendidas sus peticiones o reclamaciones.

BBVA Seguros

b) Informar la situación actual, cierta, real y completa del riesgo a asegurar, entendiéndose por éste los antecedentes médicos y el estado de salud actual para el caso de seguros de vida y el estado real de los bienes en el caso de seguros generales.
c) Cumplir con los requisitos de asegurabilidad propios de cada producto.
d) Realizar el pago oportuno y total de las primas del seguro adquirido de acuerdo con la periodicidad escogida.
e) Reportar de manera oportuna y veraz la ocurrencia de un siniestro.

2. ELEMENTOS DE INFORMACIÓN

El asesor deberá ser informado que cuenta con los siguientes elementos de información para una adecuada promoción y gestión de los productos de seguros comercializados:

a) Portal de Negocios Bancarios ubicado en el entorno colaborativo (intranet de la compañía), donde encontrarán detalle de cada uno de los productos comercializados, los condicionados, formatos y tarifas.
b) Fichas TCR, donde se hace un resumen del producto ofrecido resaltando sus condiciones, exclusiones, costos y beneficios
c) Páginas WEB de Banco y Aseguradora:
   i) https://www.bbva.com.co/personas/seguros/
   ii) https://www.bbvaseguros.com.co/seguros

Así mismo, el asesor deberá informarle al cliente que puede consultar en cualquier momento los productos de seguros comercializados a través de las páginas WEB indicadas en el literal c. del presente numeral.

3. INFORMACIÓN SOBRE LOS PRODUCTOS A COMERCIALIZAR

La Aseguradora realizará capacitación a todos los asesores que pertenezcan a los canales de venta del BANCO que efectúan la comercialización de los productos.

Teniendo en cuenta que el concepto se extiende a las oficinas, empleados y los sistemas de información del Banco, las capacitaciones serán realizadas de manera presencial y/o virtual, entregando la información relacionada con el producto que contiene como mínimo las características de los productos, los derechos y obligaciones, los amparos o coberturas, las condiciones, las tarifas y la forma para determinarlos, los requisitos de asegurabilidad, las medidas para el manejo seguro del producto, las consecuencias derivadas del incumplimiento del contrato, la vigencia, el valor asegurado, las exclusiones, condiciones para reclamación en caso de siniestro y los canales para que le sean atendidas sus peticiones o reclamaciones.

Se desarrollarán cronogramas de capacitación para que todos los funcionarios de la red del Banco BBVA tengan los conocimientos suficientes para comercialización de los productos de seguros. De cualquier capacitación y material que sea suministrado, deberá quedar registro o control de la realización de la misma. En el portal de Gestión Normativa y Procedimental (en adelante, "FARO"), se ha dispuesto para todos los funcionarios las guías operativas de los seguros, las cuales contienen el procedimiento para la contratación y comercialización de los productos en la red de oficinas del BANCO.

BBVA Seguros

A los asesores se les instruye para que toda la información y condiciones del producto, antes indicadas en este numeral, sea suministrada al consumidor financiero previo a la contratación del respectivo seguro, atendiendo las dudas o inquietudes que el mismo pueda presentar.

4. EQUIPO DE PROMOTORES

Como apoyo permanente a la gestión comercial, BBVA SEGUROS cuenta con un equipo de promotores de Banca Seguros, conformado por 16 integrantes, cada uno de los cuales está asignado a una zona del BANCO. Cada zona agrupa un promedio de 25 oficinas, las cuales son visitadas de manera periódica, con el fin de hacer refuerzo de producto, de técnicas de venta, de correcto diligenciamiento de formatos, ofrecer soporte en procesos operativos y resolver inquietudes sobre las características de los seguros.

Los promotores se encuentran a disposición permanente de los asesores de la red del BANCO, en aquellos casos en los que no sea posible resolver las inquietudes surgidas durante la visita a la oficina.

Al ser personas con contacto permanente con la red, los asesores comerciales del BANCO cuentan con sus datos de contacto: número celular, correo electrónico y otros medios de contacto para garantizar el acceso oportuno a la información y asesoría.

5. SISTEMA DE ATENCIÓN AL CONSUMIDOR FINANCIERO (SAC)

Adicional a la información indicada en los numerales anteriores, el asesor comercial será capacitado sobre el procedimiento de acceso al Defensor de Consumidor Financiero, con el fin de que se le indique a los clientes cuales son los canales dispuestos en esta instancia, así como las funciones y procedimientos que se aplican en estos casos.

DECIMA SEXTA. CONFIDENCIALIDAD.- Las partes se comprometen a dar tratamiento confidencial a toda la información que se intercambie entre las mismas, de modo que no podrá ser revelada a terceros ni podrá dársele uso distinto al previsto en el presente contrato. La información confidencial incluye la base de datos del **BANCO**, los datos e información que se suministre y cualquier información adquirida por una de las partes en virtud del presente contrato, relacionada con los métodos, clientela, actividades y operaciones del negocio.

LAS PARTES, declaran libremente que han leído, conocen y entienden la responsabilidad que le impone haber recibido el derecho al uso de la información que le sea entregada, ya sea verbal, escrita, en medio magnético o electrónico o cualquier otro medio por parte de la otra parte. Igualmente declaran libremente que conocen y entienden que dicha información es propiedad de la parte que la suministra para los fines del presente contrato y que será de su completa responsabilidad mantener la integridad, idoneidad, custodia y veracidad de la información la cual bajo ninguna circunstancia debe ser alterada ni transferida ni divulgada a personas jurídicas o naturales no autorizadas por la otra parte, facultad que le fue conferida única y exclusivamente para el cumplimiento de las funciones objeto de este contrato. Comprende y acepta el carácter de personal e intransferible que es propio del citado derecho y se compromete a utilizarlo de la manera más adecuada, bajo los parámetros de la otra parte y de las normas legales. Está enterado que no debe utilizar el derecho que le fue concedido, en algo que sea irregular o no autorizado o que vaya en contra de los intereses de la otra parte.

BBVA Seguros

Las obligaciones de no revelar la información suministrada por la otra parte y las restricciones para su utilización no existirán o cesarán cuando:

a) Aquella información que sea o llegue a ser de dominio público;
b) Aquella información requerida por autoridad jurisdiccional o administrativa debidamente facultada.

En caso de pérdida no intencional de la información suministrada por **BBVA SEGUROS**, el **BANCO** deberá informar inmediatamente a **BBVA SEGUROS** de la situación presentada. Si se descubre que este hecho ha generado daños para **BBVA SEGUROS**, se aplicarán las sanciones legales que sean procedentes. De igual manera sucede en caso que la información suministrada por el **BANCO** sea extraviada por **BBVA SEGUROS.**

LAS PARTES declaran que conocen y se comprometen a dar cumplimiento a las normas y políticas de seguridad definidas por la otra parte, tal como se estipula en sus manuales.

El incumplimiento total o parcial de cualquiera de las obligaciones por alguna de las partes, en los términos del presente acuerdo, dará derecho a la parte cumplida, a ejercer las acciones legales que sean procedentes.

De encontrarse evidencia de alteración o manipulación de equipos o información a través del proceso de gestión de incidentes definido por cualquiera de las partes, la parte afectada podrá utilizar dicha evidencia para aplicar las sanciones legales que sean procedentes.

Las partes en la presente relación contractual ejecutan sus obligaciones y deberes en este contrato, en observancia y sujeción estricta de las disposiciones contractuales y las normas vigentes sobre protección de marcas comerciales, enseñas y nombres comerciales, derechos de autor, nombres de dominio, patentes, secretos comerciales e industriales y de lo dispuesto en las normas legales vigentes sobre competencia desleal y derecho de competencia.

En virtud del presente contrato LAS PARTES se obligan a que durante y al finalizar su relación contractual o en cualquier tiempo, reconocerán y respetaran la titularidad e integridad de cualquier derecho de propiedad intelectual o industrial que posea la otra parte, con respecto pero no limitado, a ideas, productos, procesos, secretos comerciales e industriales, know-how, marcas comerciales, nombres y enseñas comerciales, derechos de autor, los programas de computador o software, algoritmos, diseños, ilustraciones y planos técnicos, fórmulas, invenciones - patentables y no patentables-, listas de productos y servicios, planes de negocios, planes financieros, planes y estrategias de mercadeo, políticas de precios, derechos de distribución y licenciamiento.

Queda expresamente convenido que en caso de requerirse transmisión de bases de datos, que contengan datos personales, LAS PARTES suscribirán un acuerdo de transmisión independiente, en cumplimiento de lo dispuesto en la Ley 1581 de 2012, su Decreto Reglamentario 1377 de 2013 y demás normas que los modifiquen o adicionen.

DECIMA SÉPTIMA. CESION.- Ninguna de **LAS PARTES** podrá ceder total o parcialmente el presente contrato, sin consentimiento previo y escrito de la otra.

DECIMA OCTAVA. OBLIGACIONES EN MATERIA DEL SARLAFT.- Teniendo en cuenta que las partes revisten el carácter de Entidades Vigiladas por la Superintendencia Financiera de Colombia, declaran a través del presente documento contar con un Oficial de Cumplimiento posesionado ante la Entidad de

BBVA Seguros

Supervisión, así como dar estricto cumplimiento a las diversas normas y circulares expedidas en relación con la prevención y control de Lavado de Activos y la Financiación del Terrorismo.

Sin perjuicio de las acciones que realice el BANCO en cumplimiento del SARLAFT, BBVA SEGUROS deberá cumplir, en el marco del contrato de uso de red, con todas las obligaciones relativas en la materia, en especial las relacionadas con conocimiento del cliente, cuando de conformidad con Parte I Título IV Capítulo IV de la Circular Básica Jurídica deba recaudarse el formulario del conocimiento del cliente.

DECIMA NOVENA. OBLIGACIONES RELATIVAS AI SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGO OPERACIONAL.- Teniendo en cuenta que las partes revisten el carácter de Entidades Vigiladas por la Superintendencia Financiera de Colombia, declaran a través del presente documento contar con los elementos mínimos de un sistema de Administración del Riesgo Operativo, en cumplimiento con las instrucciones establecidas en el Capítulo XXIII de la Circular Básica Contable y Financiera y normas que lo modifiquen, así como dar estricto cumplimiento a los criterios establecidos en el numeral 2 del Capítulo I, Título II, Parte I de la Circular Básica Jurídica en cuanto a la seguridad y calidad para la realización de operaciones.

Independiente de los procesos que cada entidad deba realizar para el correcto cumplimiento de dichas obligaciones, las partes se comprometen a tener a disposición y suministrar la información necesaria para la verificación y ejecución efectiva de la administración del riesgo operativo.

VIGESIMA. EJECUCIÓN.- De conformidad con lo establecido en el artículo 12.2.1.1.4 del Decreto 2555 de 2010, el presente acuerdo deberá ser remitido a la Superintendencia Financiera de Colombia con una antelación de treinta (30) días hábiles a su celebración.

VIGÉSIMA PRIMERA. NOTIFICACIONES.- Todas las notificaciones o comunicaciones dirigidas a cualquiera de las partes, que se requieran en el desarrollo de este Contrato, deberá hacerse por escrito y dirigirse a direcciones que se relacionan a continuación:

EL BANCO
Nombre: JAIRO ALBERTO MANRIQUE MOYANO
Cargo: Gerente
Dirección: Cra. 9 No. 72 - 21 Piso 8
Teléfono: 3471600 Ext 11718

LA USUARIA
Nombre: MILTON DAVID MICÁN BELTRAN
Cargo: Presidente
Dirección: Cra. 7 No. 71- 52 Torre A Piso 12
Teléfono: 2191100

Las personas aquí indicadas o las que en cualquier tiempo **BBVA SEGUROS** y **EL BANCO** designen mediante comunicación escrita, que se entenderá integrada al presente Contrato, serán las directamente encargadas de tratar los temas a que haya lugar en desarrollo de la ejecución del Contrato, pudiendo proponer fórmulas de solución a los eventuales problemas que se presenten.

BBVA Seguros

VIGÉSIMA SEGUNDA. MODIFICACIONES.- Toda modificación al presente contrato deberá constar por escrito a través de Otrosí firmado por las partes.

VIGÉSIMA TERCERA. SOLUCIÓN DE DIFERENCIAS.- Cualquier diferencia que surja en desarrollo del presente Contrato, se tratará de solucionar entre **BBVA COLOMBIA** y **LA USUARIA**, en un lapso no mayor a quince (15) días hábiles, contados a partir del momento en que se presente el desacuerdo. Vencido este plazo y no llegando a ningún acuerdo, **BBVA COLOMBIA** y **LA USUARIA** quedarán en libertad de acudir a la jurisdicción ordinaria.

VIGÉSIMA CUARTA. SEGURIDAD INFORMÁTICA Y FÍSICA.- En desarrollo del presente Contrato el BANCO prestará los servicios de acuerdo con las políticas de seguridad establecidas para su RED, las cuales LA USUARIA conoce y acepta.

VIGÉSIMA QUINTA. PLAN DE CONTINGENCIA.- El **BANCO** y **LA USUARIA** cuentan con un plan de contingencia respecto de los servicios que presta cada entidad en ejecución del presente contrato asegurando un proceso de recuperación y continuidad en el menor tiempo posible y costo posible

VIGÉSIMA SEXTA.- CONFLICTOS DE INTERÉS.- LAS PARTES adoptarán todas las medidas necesarias para evitar cualquier situación de conflicto de intereses. Esta situación se produce cuando, como consecuencia de intereses económicos, afinidades políticas o nacionales, vínculos familiares o afectivos, o cualesquiera otros intereses compartidos, se ve comprometida la ejecución imparcial y objetiva del Contrato.

Cualquier situación constitutiva de un conflicto de intereses o que pueda conducir a un conflicto de intereses durante la ejecución del Contrato deberá ponerse de inmediato por escrito en conocimiento de la otra Parte, sin perjuicio del desarrollo de los procedimientos internos que cada una de las Partes tiene contemplado en sus Códigos de Conducta y Ética, y el cumplimiento de la regulación vigente que rija sobre la materia.

VIGÉSIMA SÉPTIMA.-PROTECCIÓN DE DATOS: Respecto de la documentación e información de terceros las Partes darán cumplimiento a la protección de datos personales conforme las Leyes 1266 de 2008, 1581 de 2012 y el Decreto 1377 de 2013. Por lo anterior las Partes se obligan a:

1. Obtener los datos personales con autorización previa y expresa del titular salvo cuando se trate de datos públicos.
2. Utilizar o aplicar los Datos de Carácter Personal exclusivamente para la realización de los fines establecidos en el presente Contrato.
3. No comunicarlos, ni siquiera a efectos de su conservación, a otras personas, ni tampoco las elaboraciones, evaluaciones o procesos similares, citados anteriormente, ni duplicar o reproducir toda o parte de la información, resultados o relaciones sobre los mismos.
4. Asegurarse de que los datos sean manejados únicamente por aquellos empleados cuya intervención sea precisa para la finalidad de esta oferta.
5. Una vez finalizada la vigencia del objeto del Contrato, destruir o devolver todos aquellos datos personales recibidos, así como también los soportes o documentos en que consten, sin conservar copia alguna, adicionalmente con los documentos soportes de destrucción de esta información.

BBVA Seguros

VIGÉSIMA OCTAVA.- ANEXOS: Los siguientes anexos forman parte integral del presente contrato:

1. Certificado de Existencia y Representación Legal de LA USUARIA
2. Certificado de Existencia y Representación Legal del BANCO
3. Manual Operativo y Clausulado Seguro Familia Vital Individual
4. Manual Operativo y Clausulado Seguro de Vida Individual 18
5. Manual Operativo y Clausulado Seguro de Vida Integral Premium
6. Manual Operativo y Clausulado Seguro Oncológico
7. Manual Operativo y Clausulado Seguro Hogar Individual 18
8. Manual Operativo y Clausulado Seguro Multiriesgo Hogar
9. Manual Operativo y Clausulado Seguros API Salud
10. Manual Operativo y Clausulado Seguro de Desempleo
11. Manual Operativo y Clausulado Seguro Hurto Tarjeta Protegida
12. Manual Operativo y Clausulado Seguro de Vida Individual Pago Único

En constancia de lo anterior se suscribe por las partes a los Diecinueve (19) días del mes de Oct de dos mil dieciocho (2018).

EL BANCO

PEDRO BUITRAGO MARTÍNEZ
Representante Legal
BBVA Colombia

LA USUARIA

MILTON DAVID MICÁN BELTRAN
Representante Legal
BBVA Seguros

BBVA
ASESORÍA JURÍDICA INSTITUCIONAL
VISTO BUENO

BBVA Seguros

SOLICITUD/CERTIFICADO INDIVIDUAL SEGURO

M026300110236203629602388801

SOLICITUD/CERTIFICADO INDIVIDUAL SEGURO DE VIDA
DEUDORES HIPOTECARIO Y/O LEASING HABITACIONAL PÓLIZA No. 127

	Parque Murillo	Ciudad	Ibague
Tomador/Beneficiario. BBVA COLOMBIA S A.	C C. o NIT. 860.003.020-1	Vigencia desde	Vigencia hasta

Datos del Asegurado

Nombres y Apellidos: Juan Leopoldo Varon Sierra		Identificación: 93.388.833	Edad: 46
Dirección: K. 13 E 21-65 G. 48 A. 506	Teléfonos: 3202683659	Ciudad: Ibague	
Fecha de nacimiento: 26-12-72	Sexo: M	Ocupación/Profesión: Pensionado	

Datos del Seguro

Tasa %	Extra Prima %	Anexo ITP Si ☐ No ☐	Valor Asegurado
Prima Mensual $	Periodicidad		Vr. Prima Total $

Beneficiarios

Nombres y Apellidos	Parentesco	% Participación

Todas las preguntas deben ser contestadas a mano por el asegurado en forma clara sin usar rayas ni comillas

Declaración de Asegurabilidad (Datos Sensibles)

Estatura: 172 cms	Peso: 70 Kg	Fuma: Si ☐	No ☒	Cuántos cigarrillos diarios? —			

Deportes que practica	Si	No
¿Ha sido sometido a alguna intervención quirurgica?		X
¿Sufre alguna incapacidad física o mental?		X
¿Ha sido sometido a tratamiento antialcohólico o por drogadiccion?		X
¿Ha sufrido o sufre alguna enfermedad profesional?		X
¿Ha sufrido o sufre de alguna enfermedad o problema de salud de los siguientes aparatos, sistemas u órganos?	**Si**	**No**
Trastornos mentales o psiquiátricos		X
Parálisis, epilepsia, vértigos, temblor, dolores de cabeza frecuentes o enfermedades del sistema nervioso		X
Bocio, diabetes o enfermedades del sistema endocrino		X
Reumatismo, artritis, gota o enfermedades de los huesos, músculos o columna		X
Enfermedades del bazo anemias, inflamacion de ganglios linfáticos o enfermedades del sistema hemolinfático o enfermedades inmunológicas		X
Dolor en el pecho, tension arterial alta infarto o cualquier enfermedad del corazón		X
Enfermedades renales-cálculos-próstata-testículos		X
Asma, tos crónica, tuberculosis o cualquier enfermedad de los pulmones o del sistema respiratorio		X
Ulcera del estomago o duodeno, enfermedades del recto, esófago, vesícula, hígado, diarreas frecuentes o enfermedades del sistema digestivo		X
Enfermedades en los ojos, oidos, nariz, garganta ronquera o problemas de órganos de los sentidos		X
Cáncer o tumores de cualquier clase		X
Si es mujer, ¿ha tenido enfermedades o tumores en senos, matriz, ovarios?		X
¿Ha sido sometido en alguna ocasión o le han sugerido la práctica de examen para diagnóstico del sida? Caso positivo indique el resultado.		X
¿Sufre o ha sufrido cualquier problema de salud no contemplado anteriormente?		X

Si contesto afirmativamente cualquiera de las anteriores preguntas, detalle la enfermedad y fechas de ocurrencia:

* Soy consciente y he sido informado de que cualquier inconsistencia en la información suministrada anteriormente traerá como consecuencia la nulidad del contrato de seguros y acarreará la posible perdida del derecho a cualquier indemnización.

No firme esta solicitud sin leer este texto

El cliente se obliga a suministrar información veraz y verificable, actualizar la información personal, comercial y financiera, por lo menos una vez al año o cada vez que así lo solicite BBVA Seguros de Vida Colombia S A, entregando los soportes y documentos correspondientes

Se informa que es facultativo que responda preguntas sobre datos sensibles (salud, sexo religión entre otros) o sobre menores de edad. Sus derechos son los previstos en la Constitución y las leyes 1266 de 2008 y 1581 de 2012.

Declaro que mis recursos, no provienen de actividad ilícita alguna contemplada en la legislación Penal Colombiana Vigente; cualquier inconsistencia en la información consagrada en esta solicitud, exime a la compañía de toda responsabilidad. Expresamente declaro que todas las respuestas aquí son exactas completas y verídicas y acepto que cualquier omisión, inexactitud o reticencia de las mismas, sean tratadas de acuerdo con el artículo 1058 del código de comercio

Artículo 1068 del Código de Comercio Terminación automática del Seguro. " La mora en el pago de la prima o de los certificados o anexos que se expidan con fundamento en ella producirá la terminación automática del contrato y dará derecho al asegurador para exigir el pago de la prima devengada y de los gastos causados por ocasión de la expedición del contrato "

En desarrollo al artículo 34 ley 23 de 1981, autorizo a cualquier médico hospital, clinica, compañía de seguros u otra institución para suministrar a los beneficiarios o a BBVA Seguros de Vida Colombia S A. Toda información que posea sobre mi salud y/o epicrisis o historias clínicas. La presente solicitud formará parte del contrato de seguro que aquí se solicita, si éste llegare a celebrarse.

Edad mínima de ingreso 18 años Edad máxima de ingreso 74 años y 364 días y Permanencia hasta la cancelación del crédito.

Para la cobertura de Incapacidad Total y Permanente la máxima de ingreso 69 años y 364 días y Permanencia hasta los 71 años y 364 días.

Firma del Solicitante

El clausulado con las condiciones generales de su póliza están a su disposición, a traves de las páginas www.bbvaseguros.com.co y www.bbva.com.co

Certifico que recibí la información relativa al producto de forma clara y completa, que diligencié personal y libremente la información contenida en ésta solicitud o sus anexos, incluyendo mi estado real de salud. Manifiesto que fui informado sobre las posibles consecuencias (pérdida del derecho a la indemnización) en caso de encontrarse inconsistencias en dicha información. Suscribo el presente documento como constancia de aceptación del presente seguro.

Para constancia se firma en Ibague a los 25 dias del mes de Julio de 2019

Firma Asegurado

Firma Autorizada
BBVA Seguros de Vida Colombia S A NIT 800 240 882 - 0

Direccion para notificaciones: BBVA Seguros Carrera 7 No. 71 - 52 Torre A Piso 12 Teléfono 219 11 00
Linea de Atencion y Servicio al Cliente: Linea Nacional 018000934020 y en Bogotá 307 80 80
Defensor del Consumidor Financiero Carrera 9 No. 72-21 Piso 6 en Bogotá D.C., Teléfono 3438385, e mail defensoria.bbvacolombia@bbva.com.co
Somos Grandes Contribuyentes Res. 076 de 2016 - Retenedores de IVA e ICA No practicar retenciones en la fuente segun el art-culo 21 del Decreto Reglamentario 2126 de 1983.

ORIGINAL asegurado/cliente/tomador
VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

OFIXPRES

5632 4

FORMULARIO BASICO Y/O SOLICITUD DE VINCU

M026300110215803629602388801

BBVA **BBVA** VALORES **BBVA Seguros**

Solicitud de Vinculac... ...ctos Persona Natural

Para contratación de Cuentas de Ahorro, CDT, Fondos de Inversión y Fideicomisos, diligencie solo los espacios sombreados.

Fecha de solicitud	Sucursal	Tipo de solicitud	Tipo de vínculo
Día 13 Mes 05 Año 2019	0362	Vinculación Inicial / Actualización de datos	Titular / Firma Autorizada / Avalista / Representante / Apoderado / Tutor

1. PRODUCTOS A CONTRATAR

Portafolio						
Especifique el tipo de Portafolio	Cuenta Corriente	Fondo de Inversión	Crédito de Vehículo	Tarjeta de Crédito	Cuenta BBVA Valores
	Cuenta de Ahorros X	Crédito de Consumo	Crédito de Vivienda	Leasing	Fideicomisos
	CDT	Crédito de Libranza	Cupo Rotativo	Seguro X	

2. DATOS PERSONALES

Nombres	Primer apellido	Segundo apellido	Sexo	Fecha de nacimiento
JUAN LEOPOLDO	VARON	SIERRA	Femenino / Masculino X	Día 26 Mes 12 Año 1972

Lugar de nacimiento: País	Departamento	Ciudad	Tipo de Identificación	Número de Identificación
COLOMBIA	TOLIMA	IBAGUE	CC X CE TI Pasaporte Otro ¿Cuál?[1]	000000093388833-0

Estado civil	Nivel de estudios	Título profesional	¿Es usted una Persona con discapacidad (PcD)?
Soltero / Casado / Viudo / Divorciado / Separado X / Unión libre	Ninguno / Primaria / Bachillerato / Tecnológico / Universitario X / Especialización	OTRA PROFESION	No X Si ¿Cuál?

Correo electrónico	Dirección residencia	País	Departamento	Ciudad	Estrato
34@HOTMAIL.COM	CRA 4 B NORTE # 37-48 BARRIO NACIONAL	COLOMBIA	TOLIMA	IBAGUE	04

Número de personas a cargo	Antigüedad en la ciudad	Tipo de vivienda y relación con el domicilio	Valor de la vivienda propia
02	2017-01-01	Propia sin hipoteca / Propia con hipoteca X Familiar / Arriendo / Otro ¿Cuál?	$ 150.000.000.00

Dirección oficina	País	Departamento	Ciudad
COMANDO CONJUNTO CARIBE PARA SO	COLOMBIA	ATLANTICO	BARRANQUILLA

¿Dónde desea recibir su correspondencia? Correo electrónico / Residencia / Oficina

¿Por cuál medio le gustaría recibir información comercial del Banco? Correo electrónico / Telefónicamente / Mensaje de texto / Impreso

Reside en Colombia (espacio exclusivo para clientes vinculados a través de BBVA Valores) Sí / No

Teléfono residencia	Teléfono oficina	Teléfono celular	Nacionalidad 1	Nacionalidad 2	Nacionalidad 3	Nacionalidad 4
000000-0000000		000320-2683659	COLOMBIA			

País de Obligación Fiscal (Residencia y/o Ciudadanía)	País 2	País 3	País 4

Número de identificación fiscal 1	Número de identificación fiscal 2	Número de identificación fiscal 3	Número de identificación fiscal 4

3. DATOS DEL CÓNYUGE

Nombres	Primer apellido	Segundo apellido	Tipo de Identificación	Número de Identificación
			CC CE TI Pasaporte Otro ¿Cuál?	

4. DATOS DEL APODERADO - REPRESENTANTE (diligencie solo en caso de requerir un apoderado o representante para su cuenta)

Nombres	Primer apellido	Segundo apellido	Tipo de Identificación	Número de Identificación
			CC CE TI Pasaporte Otro ¿Cuál?	

5. ACTIVIDAD ECONÓMICA DEL SOLICITANTE

Actividad laboral	Nombre de empresa donde trabaja o entidad pensional	¿Es socio de la empresa donde trabaja?
Asalariado contrato término indefinido X / Pensionado / Independiente / Asalariado contrato temporal / Otro ¿Cuál?	MINISTERIO DE DEFENS A NACIONAL	Sí No X

Cargo/Ocupación/Oficio	Fecha de ingreso o inicio de actividad	Actividad económica de la empresa	¿Persona públicamente expuesta?
MILITAR-POL(OF)	18 04 1991	00000000010	Sí No X Nacional Extranjera

Fecha de vinculación al cargo o inicio actividad (Si es PEP)	Fecha desvinculación al cargo (Si es PEP)	¿Es usted familiar de una Persona públicamente expuesta?	¿Los recursos que manejará en sus cuentas corresponden a campaña política?
Día Mes Año	Día Mes Año	Sí No X	Sí No X

6. INFORMACIÓN FINANCIERA

Ingresos mensuales (salario, pensión o prestación de servicios)	$	7,471,282.00		
Otros ingresos (arriendos o utilidad por otras actividades)	$	0.00		
Total ingresos mensuales	$	7,471,282.00	**Total activo** (Valor de sus bienes)	$ 180,000,000.00
Canon de arrendo y/o hipotecarios	$	0.00		
Total egresos mensuales	$	3,749,524.00	**Total pasivo** (Valor de sus deudas)	$ 20,000,000.00

Solo para independientes o propietarios de establecimientos: Valor ventas anuales $ 0.00

Indique a qué corresponden los otros ingresos

Procedencia de los recursos que relaciona: SALARIOS

¿Declara renta? Sí X No

7. OPERACIONES INTERNACIONALES

¿Realiza operaciones en moneda extranjera? Sí No X Indique cuales: Importaciones / Exportaciones / Inversiones / Pagos de servicios / Préstamos / Otras

¿Posee productos en moneda extranjera? Sí / No X	Entidad	Número de producto/contrato	País	Ciudad	Tipo de producto (cuenta, préstamo, inversión)	Moneda	Monto
							0.00

8. REFERENCIAS

FAMILIARES (que no vivan con usted)

Nombres y apellidos	Parentesco	Ciudad	Teléfonos de contacto
a GUSTAVO MONTEALEGRE VARON	PRIMO (A)	CARTAGO	000310-2117285-00320
b			

PERSONALES / COMERCIALES

Nombres y apellidos	Relación	Ciudad	Teléfonos de contacto
a SULBELLE BERMIUDEZ VEGA		CARTAGO	000310-7659377-00321
b CESAR VARON		BOGOTA	000313-2616218-00000

BBVA COLOMBIA ESTABLECIMIENTO BANCARIO

1. Indique en este campo su identificación para la Comunidad Andina de Naciones

OPTIXPRESS

9. CRÉDITOS Y/O LEASING (diligencie solo en caso de solicitar un Crédito y/o Leasing)

Monto solicitado	Plazo	Destino	Compra Vivienda / Leasing Habitacional / Remodelación de Vivienda	Construcción Individual / Compra de Cartera	Libre Inversión / Cupo Rotativo	Compra Vehículo / Leasing de Vehículo	¿Recibe el pago de su nómina a través de BBVA?
$ 212.500.288	240						SI ✓ No

Plan de amortización anual	Crédito y/o Leasing de Vehículo	Marca	Clase	Modelo	Valor comercial
12 cuotas 14 cuotas	Estado vehículo Nuevo Usado				

Crédito Hipotecario	Estado del Inmueble	Tipo de inmueble a hipotecar	Dirección del inmueble	Valor comercial
Pesos UVR	Nuevo Usado	Casa Apartamento Otro		

10. COMPRA DE CARTERA (diligencie solo en caso de solicitar compra de cartera)

Entidad financiera	Tipo de cartera (marque con una X el producto a comprar) Tarjeta Crédito Hipotecario Consumo Vehículo Libranza	No. obligación/Tarjeta	Valor	Plazo

11. DETALLE PARA TARJETA DE CRÉDITO (diligencie solo en caso de solicitar Tarjeta de Crédito) Cupo solicitado Visa $ Cupo solicitado Master $

Diligencie solo en caso de solicitar una Tarjeta de Crédito Amparada

Apellidos	Nombres	Tipo de identificación CC CE TI Pasaporte Otro ¿Cuál?	Número de Identificación
C licitado	Teléfono	Correo electrónico	

12. BBVA VALORES (diligencie solo en caso de solicitar una Cuenta en BBVA Valores)

Impartición de órdenes	Persona autorizaca / Nombres	Primer apellido	Segundo apellido	Tipo de Identificación
Verbal Escrita				CC CE TI Pasaporte Otro ¿Cuál?

Número de Identificación	Firma autorizado	Operaciones autorizadas
		Compra y venta Carruseles SWAP Operaciones a plazo Repo Otras

Cuentas bancarias en Colombia Entidad	No. de cuenta	Ciudad	País	Moneda

13. BBVA FIDUCIARIA (diligencie solo en caso de solicitar un Fideicomiso de BBVA Fiduciaria)

Descripción y origen de los recursos — Tipo de bien que entrega

14. BBVA SEGUROS (diligencie solo en caso de solicitar un Seguro)

Tipo Seguro de Vida Vital Seguro de Vida Exequias Seguro de Vehículo Seguro de Hurto Otro ¿Cuál?

15. AUTORIZACIONES

AUTORIZACIONES EXPRESAS HABEAS DATA En cuanto a datos personales con la firma el cliente autoriza de manera previa e informada a las empresas de BBVA, como responsables del tratamiento de datos, salvo que expresamente se indique lo contrario en la siguiente casilla para:

MANEJO DE INFORMACIÓN PERSONAL: Almacenar, consultar, procesar, obtener, actualizar, compilar, tratar intercambiar, enviar, modificar, emplear, utilizar, eliminar, ofrecer suministrar, grabar, conservar y divulgar la información financiera y personal transferida o transmitida nacional e internacionalmente, incluida la que se derive de las relaciones y operaciones o que se llegare a conocer, con los finalidades de: a) Cumplir obligaciones legales; b) Propósitos comerciales muestreos, encuestas y mercadeo; c) Análisis de riesgos evaluaciones, estadísticos, control y supervisión. No se Autoriza ☐

COMPARTIR INFORMACIÓN: Con las entidades pertenecientes a su conglomerado financiero, su matriz, vinculadas, filiales o subsidiarias en Colombia o en el exterior y los terceros que apoyan sus operaciones de cobranza y de cualquier otra naturaleza, pública o privada, ya sea para establecer relaciones contractuales, prestación de servicios o de otro tipo, procesamiento de transacciones, entrega de mensajes y para la comercialización de productos o servicios derivados de alianzas comerciales. No se Autoriza ☐

REPORTAR Y CONSULTAR INFORMACIÓN: Sobre obligaciones a los operadores de bases o bancos de datos de información, entre otras financiera o crediticia con los requisitos legales en materia de protección de datos con el objeto de verificar la información suministrada. No se Autoriza ☐

CIÓN Y CONTRATACIÓN BIOMETRICA. He sido informado sobre el sistema biometrico como herramienta de identificación, verificacion y el reconocimiento de las huellas dactilares, que autorizo al Banco para capturar, almacenar enviarlas, procesarlas, tratarlas y compartirlas con terceros nacionales o extranjeros que apoyen las operaciones relacionadas con el manejo de datos sensibles con la finalidad de: i) Validar la identidad del titular del dato personal en la Base de Datos de la Registraduría Nacional del Estado Civil, ii) Firmar electrónicamente contratos, títulos de deuda, soportes de transacciones y demás documentos que se requieran para la consolidación y utilización de mis productos y servicios contratados con el Banco. No se Autoriza ☐

Los datos suministrados serán tratados con confidencialidad dando cumplimiento a las garantías legales y de seguridad que impone la ley y serán utilizados exclusivamente para las finalidades anteriormente previstas. El cliente puede ejercer con los derechos que le otorgan las leyes de hábeas data y de protección o tratamiento de datos personales y consultara el aviso de privacidad y las políticas de tratamiento de la información disponibles en www.bbvacem.co. El cliente tiene derecho a conocer, actualizar y rectificar la información y podrá solicitar en cualquier momento que no se utilice la información con fines de mercadeo y/o promoción de productos o servicios. He sido informado que el Responsable del tratamiento de los datos personales y sensibles es BBVA Colombia.

DECLARACIÓN DE ORIGEN DE FONDOS. Declaro que: (a) los fondos y bienes que poseo, así como los recursos que entrego en depósito provienen de actividades lícitas; (b) no efectuaré transacciones destinadas a actividades ilícitas; (c) permitiré que terceras personas utilicen mis productos para tales fines; d) no realizaré transacciones a favor de personas relacionadas con dichas actividades.

DECLARACION PARA OPERAR EN EL MERCADO DE VALORES: Manifiesto que tengo conocimiento de las normas y reglamentos del mercado de valores y no me encuentro impedido para operar. Autorizo expresamente a la Sociedad Comisionista de Valores para que siguiendo los procedimientos establecidos por la Bolsa, venda los valores o títulos adquiridos por mi y otros valores mobiliarios que mantengan en su poder, para aplicar el producto de la venta a las obligaciones a mi cargo sin perjuicio de la información personal o por medios físicos, electrónicos y autorizo grabarla o conservarla por los medios que se determinen, en especial la relacionada con las instrucciones y operaciones realizadas.

MARCACION PARA EXENCIÓN DEL GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS (GMF): Como único titular de la cuenta de ahorro que se apertura en virtud de esta solicitud, autorizo al BANCO para marcarla como exenta del GMF. Así mismo manifiesto que: (i) conozco y acepto que la exención prevista en el numeral 1 del Art. 879 del E.T. solo se puede aplicar a una cuenta de ahorro individual que pertenezca a un mismo y único titular; (ii) la exención se verá afectada si llego a ser beneficiario de esta en ninguna otra cuenta de ahorro en el sector financiero; (iii) autorizo suministrar información relacionada con la cuenta de ahorro seleccionada, a las autoridades correspondientes y demás establecimientos de crédito, para dar cumplimiento al numeral 1 Art. 879 del E.T. de tratarse de una cuenta personal manifiesto que: i) la totalidad de mis mesadas pensionales no exceden de 41 Unidades de Valor Tributario (UVT) ii) que en esta cuenta recibiré la totalidad de mis mesadas pensionales. S. EL CLIENTE tiene otra cuenta marcada para este fin en el sector financiero, deberá marcar con una X en el siguiente recuadro, para que no sea marcada la que se apertura con este formulario ☐

Firma del Solicitante

Identificación 93.388.833

Firma del Representante, Apoderado, Autorizado, Copartícipe

Identificación

Espacio exclusivo para ser diligenciado por la empresa BBVA

Gestión comercial	Gestión Comercial Interna	Nombre del funcionario	Juan Jairo Hoyos	Código 2030404	Identificación 5.824.980
	Fuerza de Ventas Externa	Nombre			Identificación
	Fuerza de Ventas Interna - FAST	Nombre			Identificación
	Coordinador Comercial	Nombre			Identificación

Entrevista personal	Ciudad	Fecha	Hora	Lugar		Resultado	
	IBAGUE	2019-05-13	13:56	X Banco	Sede cliente	X Satisfactorio	No satisfactorio
Realizado por	Nombre					Código	
	NATALIA NAICIPE						CE52323

El suscrito gerente, comisionista o responsable de departamento hace constar que se ha cumplido con la ejecución de todos los procesos establecidos para conocimiento y vinculación del cliente, incluida la entrevista, en virtud de lo cual concluye que se trata de una persona que cumple los requisitos de efectividad establecidos por las Empresas de BBVA en Colombia y en constancia está autorizando su vinculación

Aprobado gerente comisionista o responsable de Depto. (firma)

Nombre Diana Fernney Noguera — Código

BBVA SUC PARQUE MURILLO GERENTE

Señores
DELEGATURA PARA FUNCIONES JURISDICCIONALES
SUPERINTENDENTE FINANCIERO DE COLOMBIA
Calle 7 # 04 – 49 de Bogotá D. C.
jurisdiccionales@superfinanciera.gov.co
E. S. D.

DEMANDANTE JUAN LEOPOLDO VARON SIERRA

DEMANDADO BBVA SEGUROS DE VIDA COLOMBIA S. A. BANCO BBVA COLOMBIA S. A.

RADICADO 2022-068542

SOLICITUD SEA REQUERIDO Y COMPULSA DE COPIAS

ANGEL GONZALEZ RIVEROS, persona natural, mayor de edad, con domicilio principal la Ciudad de Bogotá D. C., identificado con la cedula de ciudadanía No. 17.345.497 de Villavicencio (Meta) y Tarjeta Profesional No. 223.393 del Consejo Superior de la Judicatura, actuando como apoderado del señor **JUAN LEOPOLDO VARON SIERRA,** identificado con la cedula de ciudadanía No. 93.388.833 de Ibagué (Tolima), por medio del presente me permito solicitar lo siguiente:

1. SEGUROS BBVA COLOMBIA S. A., aporta certificación en la cual manifiesta que el crédito No. ****8801, se encuentra asegurado bajo la póliza de seguros vida grupo deudores No. 021050000082211 con fecha de apertura el 22 de agosto de 2019, la cual no fue aportada.

   Como quiera que el despacho en el decreto de pruebas ordeno que la póliza de seguros vida grupo deudores fuera aportada, solicito al despacho que sea requerido SEGUROS BBVA COLOMBIA S. A., para que aporte la póliza de seguros vida grupo deudores No. 021050000082211 con fecha de apertura el 22 de agosto de 2019, que asegura el crédito No. ****8801.

2. En la grabación 4 de 5 en el tiempo 00:55:56 La señora apoderada de SEGUROS BBVA COLOMBIA S. A., bajo la gravedad de juramento manifestó lo siguiente "…*de por medio también dije que había una licitación* ***no hay un contrato de uso de red entre Banco BBVA y BBVA Seguros de Vida, lo que existe es una licitación***…" Se resalta

3. En la grabación 4 de 5 en el tiempo 01:25:11 el apoderado del demandante, pregunta; El Banco BBVA y Seguros BBVA, suscribieron un manual operativo para cada producto que se comercialice en virtud del contrato de uso de red, eso es correcto. la señora apoderada de SEGUROS BBVA COLOMBIA S. A., bajo la gravedad de

GS.ABOGADOS: Kra. 15 # 78 – 02 Oficina 402 de Bogotá D. C., correo gonzalez.angel189@gmail.com Cel. 3138999117.

juramento manifestó lo siguiente "*Dr. Angel Gonzalez, como se lo manifesté al Dr. Eduard Mora,* ***no hay un contrato de uso de red, no hay una relación contractual que se titule o que se denomina contrato de uso de red entre BBVA Colombia S. A., y BBVA Seguros de Vida Colombia S. A****…*" Se resalta

4. En la grabación 4 de 5 en el tiempo 01:26:24 el apoderado del demandante, pregunta; Como quiera que no existe un contrato de usos de red, le fue puesto de presente el contrato de uso de red que fue portado con la contestación de la demanda por parte del BANCO BBVA, la pregunta era que si ese documento se encontraba vigente. El despacho de plano en tres ocasiones negó que la apoderada de SEGUROS BBVA COLOMBIA S. A., respondiera la pregunta.

5. En la grabación 5 de 5 en el tiempo 00:22:22 El despacho de plano negó que fuera aportado el contrato de uso de red.

6. La Superintendencia Financiera de Colombia, mediante radicado No. 2022171962 de fecha 26 de octubre de 2022, al consultarle sobre el contrato de uso de red, suscrito entre el BANCO BBVA Y SEGUROS BBVA, respondió lo siguiente:

   "Damos respuesta a su comunicación radicada bajo el número arriba indicado, mediante el cual solicita lo siguiente:

   > *"(…)*
   >
   > *1. Que sea certificado si el contrato de uso de red de fecha 19 de octubre de 2018, suscrito entre el BANCO BBVA COLOMBIA S. A. Y BBVA SEGUROS DE VIDA S. A., a la fecha se encuentra vigente.*
   >
   > *2. Si la respuesta anterior que el contrato de uso de red de fecha 19 de octubre de 2018, suscrito entre el BANCO BBVA COLOMBIA S. A. Y BBVA SEGUROS DE VIDA S. A., a la fecha no se encuentra vigente, que sea certificado; hasta que fecha estuvo vigente, mediante que instrumento fue revocado o que instrumento lo remplazo, solicitando copia del instrumento que lo revoco y/o reemplazo."*

   Sobre el particular y conforme a su petición, nos permitimos informarle que consultados nuestros registros se pudo establecer que a la fecha se encuentra vigente el contrato de uso de red suscrito entre ***BBVA SEGUROS COLOMBIA S.A., BBVA SEGUROS DE VIDA COLOMBIA S.A.*** *y* ***BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A.,*** *cuya actividad se centra en "la comercialización de seguros" a través de la red del banco*".

Su señoría lo anterior demuestra que el contrato de uso de red suscrito entre el BANCO BBVA COLOMBIA S. A. Y BBVA SEGUROS DE VIDA S. A., si existe y a la fecha se encuentra vigente, en el cual están las condiciones y responsabilidades que asumen las entidades vigiladas para la comercialización de seguros a través de la red del BANCO BBVA.

GS.ABOGADOS: Kra. 15 # 78 – 02 Oficina 402 de Bogotá D. C., correo gonzalez.angel189@gmail.com Cel. 3138999117.

Las reiteradas mentiras de la señora apoderada de BBVA SEGUROS DE VIDA S. A., bajo la gravedad de juramento, hicieron incurrir en error al despacho, hecho que afecta el curso del proceso, ya que el contrato de uso de red es el documento fundamental para la comercialización de seguros y en el cual están plasmadas las responsabilidades que asumen las entidades vigiladas.

Por lo anterior solicito su señoría que sean compulsadas copias a la comisión de disciplina judicial, para que sea investigada la actuación de la señora apoderada de BBVA SEGUROS DE VIDA S. A.

Del señor (a) Superintendente,

Respetuosamente,

ANGEL GONZALEZ RIVEROS
CC. 17.345.497 de Villavicencio (Meta)
T. P. 223.393 del C. S. de la Judicatura
gonzalez.angel189@gmail.com

Anexo lo enunciado

GS.ABOGADOS: Kra. 15 # 78 – 02 Oficina 402 de Bogotá D. C., correo gonzalez.angel189@gmail.com Cel. 3138999117.

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Radicación:2022171962-004-000
Fecha: 2022-10-26 12:26 Sec.día466
Anexos: No

Trámite::490-PETICIÓN
Tipo doc::39-RESPUESTA FINAL E
Remitente: 334000- DIRECCION LEGAL DE SEGUROS
Destinatario::17345497-ANGEL GONZALEZ RIVEROS

Doctor
ANGEL GONZALEZ RIVEROS
gonzalez.angel189@gmail.com
Carrera 15 No. 78 - 02 Oficina 402
Bogotá D.C.

Número de Radicación	: 2022171962-004-000
Trámite	: 490 PETICIÓN
Actividad	: 39 RESPUESTA FINAL E
Expediente	: xxxxxx
Anexos	:

Respetado doctor González:

Damos respuesta a su comunicación radicada bajo el número arriba indicado, mediante el cual solicita lo siguiente:

> "*(…)*
>
> *1. Que sea certificado si el contrato de uso de red de fecha 19 de octubre de 2018, suscrito entre el BANCO BBVA COLOMBIA S. A. Y BBVA SEGUROS DE VIDA S. A., a la fecha se encuentra vigente.*
>
> *2. Si la respuesta anterior que el contrato de uso de red de fecha 19 de octubre de 2018, suscrito entre el BANCO BBVA COLOMBIA S. A. Y BBVA SEGUROS DE VIDA S. A., a la fecha no se encuentra vigente, que sea certificado; hasta que fecha estuvo vigente, mediante que instrumento fue revocado o que instrumento lo remplazo, solicitando copia del instrumento que lo revoco y/o reemplazo."*

Sobre el particular y conforme a su petición, nos permitimos informarle que consultados nuestros registros se pudo establecer que a la fecha se encuentra vigente el contrato de uso de red suscrito entre **BBVA SEGUROS COLOMBIA S.A., BBVA SEGUROS DE VIDA COLOMBIA S.A.** y **BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A.,** cuya actividad se centra en *"la comercialización de seguros"* a través de la red del banco.

En los anteriores términos dejamos atendido el objeto de su petición.

Cordialmente,



LUZ STELLA AGUILERA MORALES
ASESOR
DIRECCION LEGAL DE SEGUROS

Copia a:

Elaboró:
MARIA XIMENA VARGAS MARTINEZ

Revisó y aprobó:
LUZ STELLA AGUILERA MORALES

BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. - BBVA COLOMBIA

PLIEGO DE CONDICIONES

LICITACIÓN PÚBLICA N. 01

CONTRATACIÓN DE SEGUROS DE VIDA ASOCIADOS A CRÉDITOS CON GARANTÍA HIPOTECARIA Y A CONTRATOS DE LEASING HABITACIONAL

BOGOTÁ D.C., 2018

BBVA Creando Oportunidades

TABLA DE CONTENIDO

CAPÍTULO I - ANTECEDENTES Y CONSIDERACIONES

CAPÍTULO II - GENERALIDADES

2.1. OBJETO DE LA INVITACIÓN
2.2. CRONOGRAMA
2.3. DEFINICIONES
2.4. CONFIDENCIALIDAD
2.5. RESERVA DE INFORMACIÓN DE LOS DEUDORES
2.6. MANEJO DE INFORMACIÓN:
2.7. REQUISITOS DE ADMISIBILIDAD
2.8. REQUISITOS DE ADMISIBILIDAD ADICIONALES
2.8.1. CAPACIDAD FINANCIERA Y PATRIMONIAL
2.8.2. EXPERIENCIA Y ATENCIÓN
2.8.3. REASEGUROS
2.9. NO PARTICIPACIÓN DE INTERMEDIARIOS DE SEGUROS
2.10. ENTREGA Y RECIBO DE COMUNICACIONES

CAPÍTULO III - DE LA LICITACIÓN

3.1. OBJETO
3.2. POSTURAS CONJUNTAS
3.3. REQUISITOS LEGALES
3.4. RETIRO DEL PLIEGO DE CONDICIONES
3.5. ASEGURADORAS ACREDITADAS PARA CONTINUAR EN EL PROCESO
3.6. FORMULACIÓN DE PREGUNTAS SOBRE EL PLIEGO DE CONDICIONES
3.7. RESPUESTAS DE INQUIETUDES Y AJUSTE AL PLIEGO DE CONDICIONES
3.8. CONFIRMACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS DE ADMISIBILIDAD
3.9. ENTREGA DE LA INFORMACIÓN NECESARIA PARA PRESENTAR POSTURAS
3.10. PRESENTACIÓN DE LA POSTURA
3.11. RETIRO O MODIFICACIÓN DE LA POSTURA
3.12. VALIDEZ DE LA POSTURA
3.13. GARANTÍA DE SERIEDAD DE LA OFERTA
3.14. NO CESIÓN
3.15. ADJUDICACIÓN
3.16. CIERRE DEL PROCESO DE LICITACIÓN

CAPÍTULO IV - DE LA POSTURA Y LA CONTRATACIÓN

4.1. OBJETO
4.2. CONDICIONES GENERALES DE LOS SEGUROS Y DEL CONTRATO DE SEGUROS
4.2.1. CONDICIONES GENERALES
4.2.2. CONTINUIDAD DE AMPARO
4.2.3. TRÁMITE DE PÓLIZAS ENDOSADAS
4.2.4. TARIFAS DE SEGUROS

4.3. INFRAESTRUCTURA OPERATIVA
4.4. EXPEDICIÓN DE LAS PÓLIZAS Y DE CERTIFICADOS INDIVIDUALES
4.5. COBRO Y PAGO MENSUAL DE PRIMAS
4.6. MANEJO DE DEVOLUCIONES DE PRIMAS
4.7. CLÁUSULA DE PAGOS COMERCIALES.
4.8. INFORMES
4.9. COMITÉS Y ACUERDOS DE NIVELES DE SERVICIO
4.10. OTRAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES DE LA ASEGURADORA ADJUDICATARIA
4.11. VIGENCIA DE LOS CONTRATOS DE SEGUROS
4.11.1. VIGENCIA PÓLIZA COLECTIVA
4.11.2. VIGENCIA CERTIFICADOS INDIVIDUALES
4.12. CLÁUSULA DE REVOCATORIA UNILATERAL
4.13. TARIFA DE SERVICIO DE RECAUDO DE LAS PRIMAS DE SEGURO
4.14. NO CESIÓN DEL CONTRATO DE SEGUROS
4.15. TERMINACIÓN ANTICIPADA Y UNILATERAL DEL CONTRATO
4.16. GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

CAPÍTULO V – ANEXOS

ANEXO No. 1 ACUERDO DE CONFIDENCIALIDAD
ANEXO No. 2 CARTA DE PRESENTACIÓN DE REQUISITOS DE ADMISIBILIDAD
ANEXO No. 3 CARTA DE PRESENTACIÓN DE POSTURAS
ANEXO No. 4 JUSTIFICACIÓN DE LOS REQUISITOS ADICIONALES
ANEXO No. 5 TARIFA DE RECAUDO
ANEXO No. 6 FORMATO DE SOLICITUD DE SEGURO
ANEXO No. 7 FORMATO DE SOLICITUD ACTUAL

CAPÍTULO I

ANTECEDENTES Y CONSIDERACIONES

BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. - BBVA COLOMBIA (en adelante **BBVA COLOMBIA**) como entidad financiera vigilada por la Superintendencia Financiera de Colombia, dentro de su objeto social está facultado para otorgar créditos con garantía hipotecaria y para celebrar operaciones de leasing habitacional.

En atención a las disposiciones legales vigentes y especialmente al Decreto 2555 de 2010, y lo reglamentado por la Circular Básica Jurídica, emitida por la Superintendencia Financiera de Colombia, invita a todas las Compañías de Seguros autorizadas para operar el ramo de Vida Grupo, a participar en el proceso de licitación que se adelantará con el fin de seleccionar a la Compañía de Seguros con la que **BBVA COLOMBIA** contratará los seguros de Vida Grupo Deudor, que amparen los riesgos de incapacidad total y permanente y muerte de sus deudores, en los casos en que el Banco actúe como tomador de los seguros asociados a créditos garantizados con hipoteca o a contratos de leasing habitacional por cuenta de sus deudores o locatarios.

CAPÍTULO II

GENERALIDADES

2.1. OBJETO DE LA INVITACIÓN

BBVA COLOMBIA conforme a las disposiciones legales vigentes, especialmente al Decreto 2555 de 2010 y lo reglamentado por la Circular Básica Jurídica, recibirá posturas de Aseguradoras autorizadas por la Superintendencia Financiera de Colombia para operar el ramo de Vida Grupo Deudor, donde **BBVA COLOMBIA** será tomador y beneficiario de las mismas, las cuales deben contener las coberturas de Muerte e Incapacidad Total y Permanente que cubran los saldos insolutos de las obligaciones garantizadas con hipoteca o contratos de Leasing Habitacional.

En casos de titularización de cartera quien actuará como beneficiario será la Titularizadora Colombiana S.A., o la entidad con la cual se lleve a cabo el proceso de titularización. Queda expreso que las pólizas podrán cambiar de beneficiario, cuando el tomador así lo considere.

2.2. CRONOGRAMA

BBVA COLOMBIA ha definido para la contratación de los seguros de Vida deudores, el siguiente cronograma, el cual contempla en términos generales los procesos que surtirá la presente licitación, y cuyo cumplimiento generará la atención de la misma de manera efectiva.

ACTIVIDAD	PLAZO
Dar aviso a la Superintendencia Financiera de Colombia del inicio del proceso	12 de septiembre de 2018
Publicación del inicio del proceso en la página web del Banco	12 de septiembre de 2018
Envío cartas de invitación a las aseguradoras autorizadas para operar los ramos a licitar	12 de septiembre de 2018
Suministro del pliego	20 de septiembre de 2018 hasta las 04:00 Pm
Formulación de preguntas sobre el pliego	28 de septiembre de 2018 hasta las 04:00 Pm
Respuestas a las preguntas sobre el pliego y publicación en la página web del Banco	5 octubre de 2018

Publicación preguntas y respuestas y pliego modificado	5 de octubre de 2018
Presentación de requisitos de admisibilidad y adicionales	16 de octubre de 2018 hasta las 04:00 Pm
Evaluación requisitos de admisibilidad y adicionales	22 de octubre de 2018
Comunicación escrita a las aseguradoras que no cumplen requisitos de admisibilidad.	23 de octubre de 2018
Plazo para sanear inconformidades sobre los requisitos de admisibilidad.	31 de octubre de 2018 hasta las 04:00 Pm
Posible declaratoria de desierta de la invitación si menos de dos aseguradoras cumplen los requisitos de admisibilidad.	1 de noviembre de 2018
Comunicación escrita a todas las aseguradoras sobre la definición de las que cumplen requisitos de admisibilidad.	6 de noviembre de 2018
Entrega a las aseguradoras calificadas de la información necesaria para que puedan preparar y presentar ofertas.	6 de noviembre de 2018 hasta las 04:00 Pm
Presentación de posturas por parte de las aseguradoras junto con la póliza de Seriedad de la Oferta	20 de noviembre de 2018 entre las 10:00 Am y hasta 11:00 Am
Audiencia de adjudicación	20 de noviembre de 2018 a las 11:00 Am
Posible declaratoria desierta de la licitación si no se presentan posturas o éstas no se ajustan a los pliegos.	20 de noviembre de 2018
Publicación resultados y acta en la página web	21 de noviembre de 2018
Envío comunicación a la Superintendencia Financiera de Colombia sobre el resultado del proceso	21 de noviembre de 2018
Entrega de las pólizas colectivas por parte de la aseguradora adjudicataria	21 de diciembre de 2018

2.3. DEFINICIONES

Dando cumplimiento a la Circular Básica Jurídica, para la interpretación del presente documento debe tenerse en cuenta las siguientes definiciones, con el fin de que cada participante tenga claras las condiciones, significados y peticiones derivadas de dichos términos.

- **Pliego:** Documento por medio del cual se reflejan las condiciones, características, requisitos y demás aspectos necesarios para la participación en la licitación de los seguros de Vida Grupo Deudor.
- **Adendas:** Es el documento emitido por **BBVA COLOMBIA** con el cual modifica el Pliego de Condiciones.
- **Banco:** BBVA COLOMBIA
- **Asegurados:** Clientes actuales y futuros de **BBVA COLOMBIA** bajo los créditos con garantía hipotecaria o contratos de Leasing Habitacional que cuentan con póliza tomada por BBVA Colombia.
- **Oferentes:** Serán las entidades aseguradoras que se presenten a la convocatoria.
- **Oferente adjudicatario:** Será la entidad aseguradora que se presente a la convocatoria y que posterior a ser admitida, y haber cumplido con los términos de la presente convocatoria sea quien se adjudique el contrato.
- **Programa de seguros:** Una vez sea asignada la licitación se entenderá como programa de seguros, el manejo de la adjudicación de la licitación, incluyendo el manejo operativo, tecnológico, comercial y demás aspectos que conlleven a la adecuada administración.
- **Requisitos de Admisibilidad:** Son los requisitos que deben cumplir las Aseguradoras interesadas en participar en esta licitación, en virtud de lo señalado por el Decreto 2555 de 2010, las normas que lo modifican o reglamentan y lo establecido en este Pliego de Condiciones.
- **Requisitos de Admisibilidad Adicionales**: Son las condiciones adicionales que deben cumplir las aseguradoras interesadas en participar en esta licitación, en virtud de lo señalado por la Circular Básica Jurídica, emitida por la Superintendencia Financiera de Colombia.
- **Obligaciones Contractuales**: Son las obligaciones que debe cumplir la aseguradora adjudicataria en virtud de lo señalado en la Circular Básica Jurídica de la Superintendencia Financiera de Colombia. De no cumplirse alguna de estas obligaciones o de no acreditar su cumplimiento en las fechas definidas expresamente para el efecto en este Pliego de Condiciones, **BBVA COLOMBIA** estará facultado para terminar de manera anticipada y unilateral el Contrato de Seguro e iniciar un nuevo proceso de licitación.
- **Crédito:** Es el contrato de mutuo existente o que exista entre **BBVA COLOMBIA** y el Deudor o Locatario.
- **Deudor o Locatario:** Es (Son) la(s) persona(s) obligada(s) al pago de la obligación adeudada a **BBVA COLOMBIA** y por cuenta de quienes el Banco toma el Contrato de Seguro que incluye deudores y locatarios.
- **Incapacidad Total y Permanente:** Se considera como incapacidad total y permanente para efectos de este seguro, con independencia de que pertenece o no a un régimen especial de calificación de invalidez, cuando exista una calificación de pérdida e incapacidad laboral, en firme, realizada por la EPS o la ARL o la AFP a la cual se encuentra afiliado o por la junta regional o nacional de calificación de invalidez, siempre que la misma arroje una pérdida de capacidad laboral igual o superior al 50%. La fecha del siniestro será la fecha de emisión de la correspondiente calificación.
- **Contrato de Crédito:** Incluye contrato de crédito inicial y contrato modificado y/o normalizado por regulación (modificación o reestructuración del préstamo original) de conformidad con lo previsto en la Circular Externa 026 de 2017 expedida por la Superintendencia Financiera de Colombia.

2.4. CONFIDENCIALIDAD

Toda la información que haya sido o sea suministrada por **BBVA COLOMBIA** derivada del presente proceso licitatorio son de su propiedad, por consiguiente las entidades aseguradoras se comprometen a hacer uso de ésta exclusivamente para la presentación de la postura, obligándose a guardar absoluta reserva sobre dicha información.

Previo a la entrega por parte de **BBVA COLOMBIA**, de la información necesaria para presentar las posturas, cada aseguradora deberá entregar el acuerdo de confidencialidad indicado en el anexo No. 1, del presente documento.

El acuerdo de confidencialidad deberá ser suscrito por el Representante Legal de la Compañía de Seguros interesada en presentar postura, el documento debe presentarlo en dos (2) originales al momento del retiro de la Información Mínima para Presentar Posturas.

2.5. RESERVA DE INFORMACIÓN DE LOS DEUDORES

Teniendo en cuenta que dentro del proceso de licitación y posterior programa de seguros, los oferentes pueden llegar a tener acceso a información de tipo confidencial, estos no podrán utilizar dicha información para fines diferentes a la presentación de la oferta y posterior manejo del programa de seguros.

Por lo tanto, la transferencia que se realiza a la Aseguradora es única, exclusiva y restrictivamente para estos fines. Las aseguradoras participantes en el proceso de licitación y la aseguradora adjudicataria son responsables del tratamiento de la información que reciben de **BBVA COLOMBIA**, incluso la que pertenece a los deudores o locatarios del Banco, incluyendo la información que se encuentra en las bases de datos y, por ende, sólo podrán ser utilizada para los fines aquí previstos, quedando total y expresamente prohibida cualquier otra utilización o tratamiento.

2.6. MANEJO DE INFORMACIÓN:

Las Compañías de Seguros se obligan a no divulgar, ni revelar, en forma alguna, estudios, planes, programas, Know How, negocios, costos, proveedores, clientes e infraestructura, a la cual tendrán acceso y que será revelada por **BBVA COLOMBIA**, y en general cualquier información que pudiese obtener, ya sea con autorización o sin ella, en desarrollo del presente proceso de Licitación.

Para tal efecto, en consideración a lo establecido en la legislación vigente y a lo dispuesto por las normas que regulan la materia, toda información que circule, se conozca, se solicite, se transfiera en desarrollo del presente proceso licitatorio, deberá reunir los siguientes requisitos de confidencialidad, calidad y seguridad:

a) **Duración de confidencialidad:** La obligación a que se refiere el apartado anterior, surtirá efectos a partir de que **BBVA COLOMBIA** haga entrega de la información necesaria para presentar las posturas y tendrá vigencia aún después de concluido el proceso licitatorio, por un período (5) cinco años contados a partir de la adjudicación y respecto de la Compañía Adjudicataria, los cinco (5) años se contarán a partir de la fecha de terminación de dicha relación, con el fin de proteger la confidencialidad de todos los intereses anteriormente descritos.

b) **Información confidencial:** Tendrá el carácter de confidencial toda información que repose en los archivos, sea esta comercial, profesional, técnica, administrativa y financiera así como a la que tenga acceso de las compañías Aseguradoras con ocasión de o en desarrollo de las actividades de éste proceso licitatorio, cualquiera que sea la forma en que se pueda llegar a

conocer la información, y cualquiera que sea el formato en que se conserve ésta, en adelante la Información Confidencial.

c) **Propiedad Industrial:** las compañías Aseguradoras se obligan a no divulgar ni revelar, en forma alguna, datos, especificaciones, técnicas, secretos, métodos, sistemas y en general cualquier mecanismo relacionado con la tecnología e información a la cual tendrán acceso y que será revelada por una parte de **BBVA COLOMBIA**. En caso de existir alguna duda en cuanto si alguna información es un secreto comercial esta deberá ser tratada como confidencial y, por ende, estará sujeta a los términos de ésta oferta.

Los datos, información y resultados que sean revelados por **BBVA COLOMBIA** o a los que tengan acceso las Compañías Aseguradoras participantes en el proceso licitatorio son y serán de propiedad de **BBVA COLOMBIA** y constituyen un secreto industrial de este, razón por la cual las Compañías Aseguradoras no podrán divulgarlos ni darles un uso o tratamiento diferente al aquí permitido, sin la autorización previa, expresa y por escrito de **BBVA COLOMBIA**.

d) **Exclusiones:** No obstante lo previsto anteriormente, esta condición no aplicará a ninguna información que las Compañías Aseguradoras puedan demostrar que:

1. Estaba en el dominio público al momento de su divulgación.
2. Después de su divulgación, fue publicada, o bien llega a formar parte del dominio público sin que esto represente falta alguna de las compañías Aseguradoras.
3. Fue recibida después de su divulgación de una tercera parte que tenía el derecho legítimo de divulgar tal información;
4. Fue independientemente desarrollada por la Compañía Aseguradora sin referencia a la información confidencial de **BBVA COLOMBIA**.
5. Estaba en posesión de la Compañía Aseguradora al momento de su divulgación.

e) **Deber de reserva:** Las Compañías Aseguradoras se obligan a administrar, guardar, custodiar y conservar la información suministrada y a la que tengan acceso en desarrollo del presente proceso licitatorio bajo reserva, debiendo utilizar las medidas de seguridad, que utilizaría para el manejo de su propia información confidencial, absteniéndose de revelar a cualquier título la Información Confidencial a personas distintas de sus empleados, contratistas y dependientes, y sólo para los fines aquí autorizados.

f) **Manejo de documentación:** Toda documentación en medio físico o magnético que reciban las compañías Aseguradoras y que será revelada por BBVA COLOMBIA deberá ser devuelta a **BBVA COLOMBIA**, en los términos previstos en el presente pliego de condiciones.

Cuando cualquiera de las Compañías Aseguradoras participantes en el proceso de licitación tengan conocimiento de la pérdida, destrucción no autorizada, hurto o robo de la información que les ha sido suministrada, se compromete a avisar a **BBVA COLOMBIA** por escrito el mismo día en el cual ocurra o conozca del siniestro, Igualmente, deberá presentar copia de la denuncia instaurada sobre el hecho o siniestro si fuera el caso, a fin de tomar las medidas necesarias tendientes a evitar el uso fraudulento de la información, sin perjuicio de las acciones de responsabilidad correspondientes.

g) **Efectividad, Confiabilidad y Eficiencia de la Información:** La información que sea recopilada, poseída, manejada, intercambiada, distribuida o almacenada debe ser pertinente, oportuna, correcta, útil y veraz. Además deberá haber sido obtenida de forma transparente y lícita, y debe ser creíble, fidedigna, y sin error.

h) **Consecuencias:** El incumplimiento de las obligaciones aquí previstas, dará lugar al pago de una indemnización a favor de **BBVA COLOMBIA** y/o de sus clientes, según el caso, por los perjuicios directamente causados.

i) **Restitución y/o Destrucción de la Información:** Las Compañías Aseguradoras restituirán dentro de los quince (15) días siguientes a la terminación del proceso de licitación, o cuando **BBVA COLOMBIA** lo solicite, toda la información recibida de éste o por cuenta de éste, o en desarrollo de la presente licitación.

En el evento de realizar la destrucción de la información, la Compañía Aseguradora que la destruya deberá presentar el certificado de Destrucción de la información confidencial dentro de los plazos previstos en este literal.

2.7. REQUISITOS DE ADMISIBILIDAD

Las aseguradoras oferentes deberán demostrar el cumplimiento cabal de los siguientes requisitos de admisibilidad:

2.7.1. Acreditar su existencia y representación legal mediante el certificado que expida la Superintendencia Financiera de Colombia con una antigüedad no superior a treinta (30) días a la fecha de apertura de la licitación. En el mismo certificado se debe acreditar que se encuentran autorizadas para operar el ramo de seguros objeto de esta licitación.

2.7.2. La Aseguradora proponente debe contar con una calificación de fortaleza financiera igual o superior a **"A"** otorgada por una sociedad calificadora de riesgo vigilada por la Superintendencia Financiera de Colombia.

2.8. REQUISITOS DE ADMISIBILIDAD ADICIONALES

Además de los Requisitos de Admisibilidad, las Aseguradoras que deseen participar en el presente proceso de licitación, deberán acreditar los siguientes Requisitos de Admisibilidad Adicionales:

2.8.1. CAPACIDAD FINANCIERA Y PATRIMONIAL

Los oferentes deben certificar que cumplen con los siguientes parámetros mínimos en cuanto a su solvencia y respaldo financiero y patrimonial.

A continuación se relacionan los indicadores financieros, que reflejan un panorama de la estabilidad y solidez financiera de las compañías del sector asegurador, en términos de generación de valor, liquidez, endeudamiento y resultados:

INDICADOR	CÁLCULO / FÓRMULA	PARÁMETRO EXIGIDO
Resultado técnico – Vida Grupo	Formato 290 de la Superintendencia Financiera de Colombia	Mayor o igual a $0

Nivel de Endeudamiento	(2-Pasivos menos 26-Reservas Técnicas) / (1-Activos menos 1680-Reservas Técnicas parte Reaseguradores)	Menor o igual a 10.0%
Índice de Siniestralidad – Vida Grupo	Siniestralidad Cuenta Compañía / Primas Devengadas, según Formato 290 de la Superintendencia Financiera de Colombia	Menor o igual a 35.0%
Respaldo de la Reserva – Vida Grupo	(13-Inversiones + 1680-Reservas Técnicas parte Reaseguradores) / 26-Reservas	Mayor o igual a 1 vez
Patrimonio Técnico vs Patrimonio Adecuado	Patrimonio Técnico / Patrimonio Adecuado	Mayor o igual a 1 vez

Esta información deberá ser acreditada por certificación firmada por Revisor Fiscal y representante Legal. (Anexo 4)

Para la validación respectiva, se tendrá en cuenta la información publicada en la Superintendencia Financiera de Colombia al cierre del 31 de diciembre de 2017: Balance, Formato 290 y el Margen de Solvencia y Patrimonio Técnico.

2.8.2. EXPERIENCIA Y ATENCIÓN

Los oferentes interesados deben informar y demostrar que tienen presencia física mediante oficinas de atención en las principales ciudades del País donde **BBVA COLOMBIA** tiene establecidos sus Centros Territoriales y zonales, estas son Bogotá, Medellín, Manizales, Cali, Barranquilla y Bucaramanga. Así mismo deberán acreditar que cuentan con un Sistema de Atención al Consumidor Financiero (SAC) que permita de manera efectiva la recepción de reclamaciones por siniestros, la atención oportuna de los siniestros y especialmente los de tipo masivo en caso de catástrofe, y los pagos de los siniestros.

De igual manera deben informar y demostrar que cuentan con una red suficiente (propia o contratada) de médicos y laboratorios para los procesos de suscripción en las ciudades donde **BBVA COLOMBIA** tiene mayor presencia, que en adición a las anteriores mencionadas son: Armenia, Buga, Buenaventura, Cartagena, Cúcuta, Florencia, Ibagué, La Dorada, Manizales, Montería, Neiva, Pasto, Pereira, Popayán, Santa Marta, Tunja, Villavicencio y Valledupar.

Para la demostración de los requisitos anteriormente señalados bastará con la certificación firmada por el representante legal donde conste:

- La existencia de un sistema SAC con las condiciones antes señaladas.
- La existencia de la Red de atención.
- Relación de los Centros médicos o médicos adscritos a la Red del oferente, que debe tener como mínimo:

  ✓ Nombre del Centro Médico o Médico adscrito.

- ✓ Dirección del Centro Médico o Médico adscrito.
- ✓ Dirección de correo electrónico del Centro Médico o Médico adscrito.
- ✓ Teléfonos de contacto.

Teniendo en cuenta que **BBVA COLOMBIA** tiene métricas tiempos de respuesta exigentes frente a sus clientes que garanticen la buena experiencia del servicio, las aseguradoras deberán adherir y garantizar el cumplimiento de las obligaciones previstas en el capítulo IV, en lo especial en los puntos 4.3 INFRAESTRUCTURA OPERATIVA y 4.9 COMITÉS Y ACUERDOS DE NIVELES DE SERVICIO del presente pliego de condiciones.

Las compañías oferentes deben acreditar que cuentan con un Plan de Contingencia y Continuidad del Negocio adecuado para administrar la operación, Plan dentro del cual se contemple como mínimo la prevención y atención de emergencias, administración de crisis, planes de contingencia para responder a las fallas e interrupciones específicas de un sistema o proceso y, capacidad de retorno a la operación normal.

Adicional a lo anterior, las compañías oferentes deben demostrar que han tenido experiencia durante los años 2015, 2016 y 2017 en el manejo de programas de seguros deudores en las líneas de crédito hipotecario o leasing habitacional a entidades financieras vigiladas, mediante certificación suscrita por el representante Legal de una entidad Financiera vigilada por la Superintendencia Financiera de Colombia, en la que deberá constar como mínimo lo siguiente:

- Nombre de la entidad Financiera.
- Fecha de vigencia del programa de seguros.
- Amparos ofrecidos
- Valor Asegurado al último corte.
- Valor de primas emitidas por la Compañía.
- Asegurados incluidos.
- Número de siniestros atendidos.
- Valor indemnizado de los de Siniestros atendidos.
- Calificación general del servicio de la Compañía (buena, regular o mala)

La certificación debe ser entregada en original o copia, en papelería de la entidad financiera emisora, con los datos la persona que la firma y teléfono para su verificación.

No se aceptarán certificaciones donde la calificación de la entidad no sea favorable para el oferente.

2.8.3. REASEGUROS

Los oferentes deberán entregar a **BBVA COLOMBIA** la lista de Reaseguradores con las cuales respaldará el programa de seguros que será adjudicado, así como el porcentaje de participación.

Para verificar la idoneidad de los reaseguradores estos deben estar inscritos en el Registro de Reaseguradores y Corredores de Reaseguros del Exterior (REACOEX).

2.9. NO PARTICIPACIÓN DE INTERMEDIARIOS DE SEGUROS

BBVA COLOMBIA no usará los servicios de ningún corredor o intermediario de seguros en el presente proceso, ni en la administración de las pólizas de seguros que del mismo se deriven.

2.10. ENTREGA Y RECIBO DE COMUNICACIONES

Las comunicaciones, documentos, preguntas, y en resumen todos los documentos requeridos para el proceso de licitación, deberán ser entregados en la dirección Carrera 9 No. 72 - 21 Piso 7 - Bogotá, Dirección de Compras Colombia y conforme a las publicaciones que conforme a la ley deba realizar **BBVA COLOMBIA**, se harán en su página web: www.bbva.com.co

CAPÍTULO III
DE LA LICITACIÓN

3.1. OBJETO

En atención a las disposiciones legales vigentes, y especialmente del Decreto 2555 de 2010, reglamentado por la Circular Básica Jurídica emitida por la Superintendencia Financiera de Colombia, se establece mediante el presente documento, y en especial en los siguiente puntos, la manera, forma, medio y demás aspectos que deben tener en cuenta las aseguradoras oferentes para la presentación de los requisitos de admisibilidad, preguntas, respuestas, y final oferta que conlleve a la designación del programa de seguros de Vida Grupo Deudores que ampare a las personas que sean deudores o locatarios de **BBVA COLOMBIA**, en obligaciones con garantía hipotecaria o contratos de leasing habitacional.

3.2. PRESENTACIÓN DE POSTURAS

Cada oferente debe realizar sus posturas de manera individual o a través de coaseguro, para lo cual se señala que cuando las compañías presenten postura a través de coaseguro, deberán designar una compañía como Líder, indicando el porcentaje en que cada una de ellas participa y acompañando prueba satisfactoria de que la persona que firma está autorizada por las participantes para hacerlo en su nombre y que las representa en todos los aspectos relacionados con la licitación y posteriormente con el manejo y atención de las pólizas. En la cláusula de liderato que se inserte en las pólizas se dejará constancia que la otra compañía se someterá a las decisiones de la compañía líder, a las condiciones particulares y generales de la póliza y anexos que se suscriban.

La compañía coaseguradora debe presentar y cumplir con todos los requisitos de admisibilidad, requisitos de admisibilidad adicionales y el pliego de condiciones. Las posturas deberán estar firmadas por los Representantes Legales de los participantes y en el caso de propuestas presentadas en coaseguro, por los Representantes Legales de las Compañías que lo integran, a menos que uno de los integrantes esté debidamente facultado para hacerlo a nombre del otro, de lo cual deberá anexarse la prueba escrita correspondiente.

3.3. REQUISITOS LEGALES

El proponente no debe estar impedido por causa de las inhabilidades e incompatibilidades para contratar, especialmente por las establecidas en el artículo 40 de la Ley 45 de 1990. Con la firma de la propuesta el oferente declara bajo gravedad del juramento que no se halla incurso en ninguna causal de incompatibilidad o inhabilidad.

3.4. RETIRO DEL PLIEGO DE CONDICIONES

El Pliego de condiciones se podrá retirar en la Carrera 9 No. 72 – 21 piso 7, Dirección de Compras **BBVA COLOMBIA**, de la Ciudad de Bogotá, de acuerdo con el Cronograma de Actividades.

3.5. ASEGURADORAS ACREDITADAS PARA CONTINUAR EN EL PROCESO

Realizado el proceso de verificación de los Requisitos de Admisibilidad y los Requisitos de Admisibilidad Adicionales, **BBVA COLOMBIA** procederá a informar a través de su página web www.bbva.com.co, la relación de aseguradoras que cumplieron los requisitos exigidos. Así mismo el Banco **BBVA COLOMBIA** informará de manera escrita las aseguradoras que no cumplieron con los requisitos y su respectiva justificación.

3.6. FORMULACIÓN DE PREGUNTAS SOBRE EL PLIEGO DE CONDICIONES

Una vez puesto el pliego de condiciones a disposición de las aseguradoras, el(los) oferente(s) podrá(n) formular preguntas por escrito a más tardar a las 04:00 pm del último día establecido para en el cronograma para la formulación de preguntas, la formulación de preguntas deberá dirigirse a la Dirección de Compras de **BBVA COLOMBIA** ubicada en la Carrera 9 No. 72 – 21 piso 7 de la ciudad de Bogotá. La comunicación deberá venir en documento físico y en archivo editable digital.

3.7. RESPUESTAS DE INQUIETUDES Y AJUSTE AL PLIEGO DE CONDICIONES

Las respuestas a las inquietudes y los ajustes al pliego de condiciones, si hubo lugar a ello, serán publicados en la página web de **BBVA COLOMBIA** conforme al cronograma establecido en el presente pliego de condiciones. Así mismo se señala que en atención al resultado de esta etapa, **BBVA COLOMBIA** podrá realizar las aclaraciones o modificaciones al presente pliego de condiciones, que considere necesarias.

3.8. CONFIRMACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS DE ADMISIBILIDAD

Una vez se atiendan todas las inquietudes del pliego, dentro del plazo establecido en el cronograma, los oferentes deberán presentar a **BBVA COLOMBIA** la siguiente documentación, la cual debe ser entregada físicamente a nombre del Gerente de Compras de **BBVA COLOMBIA**, ubicado en Carrera 9 No. 72– 21 piso 7, Dirección de Compras **BBVA COLOMBIA** de la ciudad de Bogotá.

a. Carta de presentación y aceptación de requisitos, de acuerdo con el modelo de comunicación anexo No.2, suscrita por el Representante Legal.
b. Estados Financieros enviados a la Superintendencia Financiera con corte a 31 de Diciembre de 2017, firmados por el representante legal, el contador y el revisor fiscal de la Compañía Aseguradora, junto con las notas a los estados financieros, de ser aplicables.
c. Constancia del envío a la Superintendencia Financiera de Colombia de los estados financieros con corte a 31 de Diciembre de 2017.
d. Documento de cálculo de los indicadores financieros de capacidad financiera y patrimonial y la correspondiente certificación de cumplimiento suscrita por el Representante Legal y Revisor Fiscal.
e. Copia autorizada del acta del órgano social competente que de acuerdo con los estatutos sociales del oferente faculte a quien suscribe la carta de presentación para suscribirla, cuando a ello hubiere lugar.
f. Certificado de existencia y representación legal expedido por la Superintendencia Financiera de Colombia, con una antelación no superior a treinta (30) días en relación con la fecha de presentación de la propuesta
g. Certificación emitida por una Calificadora de riesgos autorizada por la Superintendencia Financiera de Colombia donde conste la calificación de Fortaleza Financiera mínimo “A”. Nota: La Calificadora de riesgos debe estar autorizada por la SFC.
h. Lista de reaseguradores con los cuales respaldará el programa de seguros. Los reaseguradores deberán contar con la aprobación de la Superintendencia Financiera de Colombia para operar en el país y deberán estar inscritos en registro REACOEX.
i. Certificación o certificaciones de experiencia durante los años 2015, 2016 y 2017 en el manejo de programas de seguros grupos deudores ramos de vida asociados a crédito de vivienda con garantía hipotecaria leasing habitacional a entidades financieras vigiladas, expedida por cliente del sector financiero.

3.9. ENTREGA DE LA INFORMACIÓN NECESARIA PARA PRESENTAR POSTURAS

BBVA COLOMBIA efectuará la entrega de la información a cada uno de los oferentes habilitados, únicamente en la fecha y hora establecida en el cronograma de la licitación, en la Carrera 9 No. 72 – 21 piso 7, Dirección de Compras **BBVA COLOMBIA** de la ciudad de Bogotá, para lo cual los oferentes deberán previamente entregar a **BBVA COLOMBIA** la carta de autorización firmada por el Representante Legal de la aseguradora, en donde se indique nombre, número de cédula y cargo del funcionario que está facultado para el retiro de la misma, así como el acuerdo de confidencialidad Anexo No. 1 debidamente suscrito por el Representante Legal.

3.10. PRESENTACIÓN DE LA POSTURA

La Aseguradora deberá entregar una carta de presentación junto con la postura de conformidad con el Anexo No. 3, donde indique la aceptación de la totalidad de las condiciones solicitadas en el Pliego de Condiciones definitivo, el cual se encontrará publicado en la página web de **BBVA COLOMBIA**, dicha comunicación deberá estar acompañada del original de la garantía de seriedad de la oferta con su respectivo comprobante de pago de la prima.

La postura deberá depositarse en la urna que **BBVA COLOMBIA** instalará para tal fin en la Carrera 9 No. 72 – 21 Auditorio Sótano 1 de la ciudad de Bogotá, en la fecha y horario establecido en el cronograma de la licitación.

Los documentos deberán estar firmados por el Representante Legal de la Aseguradora.

3.11. RETIRO O MODIFICACIÓN DE LA POSTURA

Después de recibida(s) la(s) postura(s), no se permite su retiro parcial o total, los errores u omisiones por parte del (de los) oferente(s) en la elaboración de su oferta no lo relevan de ninguna de las obligaciones contraídas en ella ni le confiere derechos para retirarla o revisarla. Si un oferente, dentro del periodo de validez de la oferta, llegare a retirarla o manifestar que no sostiene los términos o condiciones de la misma, **BBVA COLOMBIA** hará efectiva la garantía de seriedad de la oferta y el oferente no hará parte del proceso de adjudicación.

3.12. VALIDEZ DE LA POSTURA

BBVA COLOMBIA validará que todos los requisitos de la postura se cumplan, incluidos los dispuestos en el Decreto 2555 de 2010 y demás normas concordantes.

No se podrán presentar dos o más posturas, ni ofertas parciales, condicionadas, ni por fuera de los términos, fechas y horarios establecidos para tal fin, o sin la firma de sus representantes legales.

Las posturas que no cumplan con los requisitos exigidos en este pliego no serán válidas y por tal motivo no serán tenidas en cuenta para la adjudicación del programa de seguros.
Las ofertas deberán tener validez de noventa (90) días calendario, contados a partir de la fecha y hora de la entrega de las ofertas, conforme al cronograma del presente pliego.

3.13. GARANTÍA DE SERIEDAD DE LA OFERTA

Para garantizar la seriedad de la postura, cada oferente deberá constituir a favor de **BBVA COLOMBIA** una garantía irrevocable de seriedad de la oferta, otorgada por una Compañía de Seguros legalmente establecida en Colombia, diferente a la oferente, y cuya calificación otorgada por una sociedad calificadora de riesgos autorizada por la Superintendencia Financiera de Colombia sea igual o superior a “A”.

El original de la garantía y el comprobante de pago deberán ser entregados por la compañía oferente junto con la postura. Como asegurado o beneficiario de este seguro debe aparecer **BBVA COLOMBIA**, NIT 860.003.020-1.

La garantía será por un valor de TRES MIL MILLONES DE PESOS ($3.000.000.000,oo) y con una vigencia de noventa (90) días calendario contados a partir de la fecha de cierre de la presente licitación, en la que se garantice la postura presentada.

Efectividad de la Garantía de Seriedad de la Postura. BBVA COLOMBIA hará efectiva la garantía de seriedad de la postura en los siguientes casos:

- **Antes de la adjudicación:** Se hará efectiva la garantía de seriedad de la postura si después del cierre y antes de la audiencia de adjudicación de la licitación es retirada la postura retractándose el oferente.

- **Después de la audiencia de adjudicación:** Si el adjudicatario no entrega dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la adjudicación el original de la póliza debidamente suscrita por el Representante Legal de la Compañía, junto con los anexos de la póliza, en los que constan las coberturas, amparos y exclusiones y el original de la garantía de cumplimiento exigida en el presente pliego.

3.14. NO CESIÓN

La Aseguradora Oferente no podrá ceder bajo ninguna circunstancia ni modalidad, su posición en el presente proceso de licitación.

3.15. ADJUDICACIÓN

BBVA COLOMBIA efectuará la adjudicación de la licitación pública el mismo día definido para la presentación de posturas, en la fecha y horario establecido en el cronograma de la licitación, en Carrera 9 No. 72-21 Auditorio Sótano 1 de la ciudad de Bogotá.

En esta Audiencia los participantes deberán insertar su propuesta en sobre cerrado en la urna dispuesta por el Banco antes de las 11:00 am. Acto seguido se procederá a la apertura de la Urna y se dará lectura a cada una de las posturas presentadas. Se efectuará la adjudicación a la aseguradora que presente la oferta con el menor precio de la prima de seguros para el deudor, ésta deberá ser presentada con la fórmula de tasa anual ponderada y con seis decimales.

Teniendo en cuenta lo mencionado en el punto 4.2.4 TARIFAS DE SEGUROS y lo señalado en el Decreto 2555 de 2010 y la Circular Básica Jurídica: (i) el promedio ponderado que se considerará, será el aplicado por valor asegurado en cada edad alcanzada definida; (ii) La postura deberá incluir y discriminar el costo del recaudo de las primas de seguro.

Fórmula de cálculo de tasa ponderada:

Sean:

I= Edad alcanzada
VAi = Cúmulo de valor asegurado de los clientes de edad i
TI = Tasa comercial de la edad alcanzada por ciento
TP= Tasa ponderada por ciento

$$TP = \frac{\sum_{I=18}^{90} VAi * TI}{\sum_{I=18}^{90} VAi} \text{ Por ciento}$$

En caso de empate entre dos o más ofertas, **BBVA COLOMBIA** adjudicará el Contrato de Seguro a la Aseguradora Oferente que primero haya presentado la postulación.

3.16. CIERRE DEL PROCESO DE LICITACIÓN

BBVA COLOMBIA, dando cumplimiento al Decreto 2555 de 2010 y la Circular Básica Jurídica, actuando como tomador de seguros por cuenta de sus deudores, una vez hecha la adjudicación de la licitación, publicará los resultados y el acta de adjudicación en la página www.bbva.com.co y enviará comunicación en el mismo sentido a la Superintendencia Financiera de Colombia.

CAPÍTULO IV
DE LA POSTURA Y LA CONTRATACIÓN

4.1. OBJETO

Seguro de Vida Grupo Deudores que ampare a las personas que sean deudores de **BBVA COLOMBIA**, de Créditos con garantía hipotecaria o locatarios con quienes **BBVA COLOMBIA** ha celebrado o celebre un contrato de leasing habitacional.

4.2. CONDICIONES GENERALES DE LOS SEGUROS Y DEL CONTRATO DE SEGUROS

4.2.1. CONDICIONES GENERALES

4.2.1.1 Beneficiario: **BBVA COLOMBIA.** En casos de titularización de cartera se dejará como beneficiario Titularizadora Colombiana S.A. o la entidad con la que se realice la titularización. Queda expreso que las pólizas podrán cambiar de beneficiario, cuando el tomador así lo considere.

4.2.1.2 Edad mínima de ingreso: 18 Años

4.2.2.3 Edad de Ingreso en Vida hasta: 74 años y 364 días,

4.2.2.4 Edad de Ingreso en ITP hasta: 69 años y 364 días.

4.2.2.5 Edad de permanencia: En el amparo de vida incluyendo suicidio y homicidio hasta la cancelación del crédito, en incapacidad total y permanente hasta los 71 años y 364 días.

4.2.2.6 Coberturas mínimas: (i) En el amparo básico de Vida se cubre muerte por cualquier causa, incluyendo homicidio y suicidio a partir del primer día de vigencia, incluyendo la ocasionada por SIDA siempre y cuando no sea preexistente y no haya sido declarada en el formato de asegurabilidad. (ii) Para Incapacidad Total y Permanente (ITP) una vez la pérdida de capacidad laboral sea igual o superior al 50%, debidamente dictaminada por el ente competente.

4.2.2.7. Requisitos de Suscripción: Teniendo en cuenta que las compañías aseguradoras pueden establecer requisitos mínimos para la suscripción de cada nuevo riesgo, se valorarán requisitos a partir de los siguientes términos:

Para valores inferiores a MIL QUINIENTOS MILLONES DE PESOS M/CTE ($1.500.000.000) el deudor queda asegurado de manera automática, sin ningún requisito adicional al diligenciamiento de la declaración de asegurabilidad, la cual servirá para la comprobación de reticencia del cliente.

La posibilidad de realizar exámenes médicos o pedir información complementaria por parte de la Compañía Aseguradora para otorgar la cobertura solamente operará cuando el deudor declare tener una enfermedad o exceda el límite señalado en el párrafo anterior.

Los exámenes que realice la Aseguradora tendrán una vigencia de 8 meses a partir del día en que el cliente se los tome.

En todo caso, se requerirá la realización de exámenes médicos cuando la cobertura a otorgar sea superior a MIL QUINIENTOS MILLONES DE PESOS M/CTE ($1.500.000.000) por cúmulo.

La aseguradora adjudicataria deberá realizar la suscripción con el formato de solicitud dispuesto por el Banco y disponible en el Anexo 6, el cual podrá suscribirse de manera física o electrónica, para ello el método de autenticación será el que el Banco escoja.

Durante la vigencia de la adjudicación la Compañía Aseguradora no podrá hacer ajustes a las tarifas.

Para facilitar los procesos de suscripción y la información hacia los clientes, la aseguradora adjudicataria sólo podrá hacer efectivo el cobro de extraprimas una vez valorado el riesgo cuando este porcentaje sea igual o mayor al **100%**.

La aseguradora adjudicataria del presente proceso no podrá revocar unilateralmente el contrato de seguros conforme a lo indicado en el Decreto 673 de 2014.

Los formatos de solicitud de seguro tendrán una vigencia de hasta 180 días que se contarán desde la fecha de firma del mismo hasta el desembolso del crédito hipotecario y/o leasing habitacional. La aseguradora adjudicataria deberá realizar la suscripción de seguros con el formato de la aseguradora vigente actualmente hasta junio 30 de 2019. Se adjunta el formato actual (Anexo 7).

Las condiciones de asegurabilidad para los demás deudores solidarios, serán las mismas aplicables a los deudores principales, no obstante podrá existir una rebaja en la tasa de seguro aplicable a estos, toda vez que son parte de un grupo cubriendo riesgo diferente pero el mismo crédito o contrato leasing habitacional .

4.2.2.8. Valor asegurado individual: El valor asegurado será el saldo insoluto de las obligaciones a la fecha de ocurrencia del siniestro, para la cobertura de Vida será la fecha de fallecimiento o del dictamen de muerte presunta y para la cobertura ITP será la fecha de la correspondiente calificación. Si el crédito está otorgado en Unidades de Valor Real el valor se expresará en dichas unidades y se pagarán a la cotización del día en la cual la aseguradora gire estos valores.

4.2.3. CONTINUIDAD DE AMPARO

Una vez adjudicado el pliego la aseguradora adjudicataria amparará a cada uno de los asegurados ya incluidos en las pólizas colectivas anteriores, sin que exista solución de continuidad, considerándose como una única relación, ininterrumpida de las pólizas contratadas, debiendo mantener las condiciones inicialmente pactadas (extraprima o limitación de coberturas), sin que se pueda excepcionar preexistencia. La aseguradora no podrá exigir a los clientes actuales ni al Banco mayores requisitos a los ya cumplidos con anterioridad, ni exámenes adicionales en el entendido que se trata de un riesgo ya asumido.

Esto mismo aplica para los clientes que se encuentren en trámite de la formalización de su crédito y su seguro y hayan sido valorados por la aseguradora vigente en la actualidad.

Para los casos de reestructuraciones y normalizaciones de crédito, el seguro continuará con las condiciones aprobadas en el crédito inicial. Para estos casos, no se firmará un nuevo formato de solicitud ni tendrá una valoración de suscripción por parte de la aseguradora ya que se tomará el originalmente firmado para el crédito original, en la medida que se trata de una única la relación, ininterrumpida.

4.2.4. TRÁMITE DE PÓLIZAS ENDOSADAS

Si durante la vigencia del programa de seguros se encuentran clientes que carezcan de seguro por vencimiento de la vigencia del endoso presentado o por revocatoria del mismo, de ser el caso, se incorporarán a la póliza colectiva sin restricciones o condiciones de ingreso.

4.2.5. TARIFAS DE SEGUROS

Las compañías de seguros oferentes deberán presentar las tarifas aplicables a cada cliente por su edad alcanzada, la cual será aplicada por el saldo insoluto de la obligación.

La propuesta de tarifa, deberá fijar un descuento de por lo menos el 10% para los clientes definidos como Banca Personal, Banca Premium y compra de cartera con cesión hipotecaria.

Para los clientes deudores solidarios, la tarifa aplicada será la tarifa por edad alcanzada menos un 20% teniendo en cuenta que hacen parte del mismo contrato de crédito o leasing habitacional.

Será facultad del Banco aplica o no los descuentos mencionados anteriormente.

4.3. INFRAESTRUCTURA OPERATIVA

Los oferentes deberán presentar a disposición de **BBVA COLOMBIA** un grupo de trabajo dedicado al manejo del programa, el cual debe tener mínimo (5) personas de manera exclusiva y otras que pueden ser de manera compartida dependiendo de su rol en el manejo y administración.

El grupo de (5) personas lo compondrá: Un Gerente de la cuenta quien será el encargado de manejar la relación Banco Oferente Adjudicatario y quien llevará el seguimiento de los seguros otorgados, sus cancelaciones, siniestros y demás información establecida por **BBVA COLOMBIA** para el correcto manejo del programa; las otras (4) personas serán analistas que gestionarán al interior de BBVA COLOMBIA las validaciones de endoso de seguros, su gestión, control, administración y posterior ingreso a la póliza colectiva si el cliente no realiza la debida prórroga del seguro.

Este grupo de trabajo junto con el Gerente tendrá entre otras las siguientes funciones:

- Recibir llamadas a nivel nacional, en el horario laboral de lunes a viernes, para atender las consultas por parte de los clientes de la red bancaria acerca de los productos contratados.
- Realizar seguimiento permanente a las cifras del programa de seguros adjudicado: Producción, Siniestros y Retribuciones, y velar por el cumplimiento del presupuesto correspondiente.
- Elaborar y presentar informes mensuales de gestión del programa de seguros.
- Preparar, coordinar y realizar las capacitaciones sobre producto y estrategias de ventas en coordinación con el área de seguros del BBVA Colombia.
- Monitorear y garantizar que se cumplan los términos fijados con **BBVA COLOMBIA** para pagos de siniestros, aprobación de seguros que requieran exámenes, generación de certificaciones y gestión de reclamaciones de los clientes.
- Llevar el control de los seguros asociados a cada uno de los créditos Hipotecario y Leasing Habitacional, mediante el cruce de archivos y las herramientas que **BBVA COLOMBIA** facilite para este fin.

Teniendo en cuenta la Red de **BBVA COLOMBIA**, cada oferente debe estar dispuesto a prestar su apoyo presencial y deberá capacitar periódicamente a los funcionarios del **BBVA COLOMBIA** en la Red de oficinas y FFVV, en cada una de sus zonas, descritas a continuación:

Territorial	Zona	Dirección Oficina	Ciudad Residencia
Centro	Centro Oriente	Calle 31 No. 38-10	Villavicencio
	Centro Occidente	Calle 13 No 2 – 38	Ibagué
	Altiplano	Carrera 15 No 98 - 26, Piso 2	Bogotá
	Santanderes	Calle 34 No 19 - 41 Torre Norte, Oficina 414, Edificio la Triada	Bucaramanga
Norte	Barranquilla	Carrera 51 B No 80 - 58. Piso 8 Edificio Smart Office	Barranquilla
	Caribe Medio	Centro plaza de la Aduana, No 4-65, piso 2	Cartagena
	Alto Caribe	Calle 16 No 11 - 04, Piso 2	Valledupar
Occidente	Pacífico Sur	Avenida 6 A Norte No 25 A N 31, Piso 3	Cali
	Pacífico Norte	Avenida 6 A Norte No 25 A N 31, Piso 3	Cali
	Medellín Norte	Carrera 43 A No 1 A Sur - 31, Piso 7	Medellín
	Medellín Sur	Carrera 43 A No 1 A Sur - 31, Piso 7	Medellín
	Eje Cafetero	Avenida 30 de Agosto No 36 – 60	Pereira
Bogotá	Bogotá Oriental	Carrera 15 No. 93 -75, Piso 1	Bogotá
	Bogotá Sur	Carrera 15 No. 93 -75, Piso 1	Bogotá
	Bogotá Occidental	Carrera 15 No 122 - 67, Piso 2	Bogotá
	Bogotá Norte	Carrera 15 No 122 - 67, Piso 2	Bogotá

En cada uno de estos territorios debe estar en disposición de:

- Asesorar a funcionarios de BBVA COLOMBIA nivel nacional, sobre el manejo operativo de las pólizas, en días hábiles y el horario laboral de BBVA COLOMBIA.
- Atender los requerimientos de los empleados para ofrecer respuestas oportunas y soluciones a inconvenientes que se presenten.
- Apoyar a las sucursales de la red bancaria en los trámites de suscripción cuando sean necesarias y gestionar dentro de la aseguradora su atención.
- Apoyar a las oficinas bancarias en la correcta suscripción de los seguros en especial sobre los valores a asegurar.
- Ofrecer permanente apoyo a los Gerentes Zonales y Territoriales.
- Capacitar periódicamente a los asesores de venta de créditos con hipoteca o leasing habitacional.

Teniendo en cuenta que los oferentes ya disponen de áreas especializadas, estas deberán dedicar parte de su tiempo en la atención del programa de seguros, dentro de ellas tenemos:

Áreas de suscripción, a fin de atender las valoraciones de los riesgos, esto sin detrimento a lo mencionado en el punto 2.8.2 EXPERIENCIA Y ATENCIÓN y el punto 4.9 COMITÉS Y ACUERDOS DE NIVELES DE SERVICIO.

Área de Siniestros que atienda adecuadamente los trámites en los términos del contrato y con los acuerdos de servicio indicados en el punto 4.9 COMITÉS Y ACUERDOS DE NIVELES DE SERVICIO, esta área deberá tener por lo menos dos interlocutores que atiendan las consultas de los promotores y las líneas de atención del Call Center.

Área de Atención de Quejas y Reclamos que responda tanto a las peticiones o quejas de clientes como a las solicitadas por entes de control. Esta atención quedará enmarcada dentro de los Acuerdos de servicio y operación mencionados en los puntos 2.8.2 y 4.9 del presente documento.

Para lo anterior se establecerán indicadores de calidad donde se realizará un seguimiento sobre la gestión realizada en el proceso de colocación, mantenimiento y cancelación del producto adquirido.

El oferente debe poner a disposición de los clientes de BBVA COLOMBIA todas sus líneas de comunicación como Call Center, página blanca, buzones y demás canales que tenga disponibles para la atención y solución de inquietudes o procesos derivados del contrato de Seguros. Igualmente el oferente se compromete a prestar asesoría a los funcionarios del Banco para despejar dudas acerca del producto y procesos derivados del seguro contratado.

4.4. EXPEDICIÓN DE LAS PÓLIZAS Y DE CERTIFICADOS INDIVIDUALES

La Compañía de Seguros Adjudicataria deberá entregar a **BBVA COLOMBIA** dentro de los diez (10) días Hábiles siguientes a la adjudicación, el original de la póliza, debidamente suscrita por el Representante Legal de la Compañía, junto con los anexos, en los que constan las coberturas, amparos y exclusiones y el original de la garantía de cumplimiento exigida en el numeral 4.16 del presente pliego.

De conformidad con lo previsto en Decreto 2555 de 2010 y la Circular Básica Jurídica, la Compañía de Seguros adjudicataria entregará a **BBVA COLOMBIA** la información necesaria para que se pueda informar dentro de los plazos previstos en la normatividad, a los deudores y locatarios acerca del seguro contratado.

BBVA COLOMBIA dentro de su aplicativo de crédito dispone de un módulo de seguros el cual realiza de manera automática la emisión de los certificados individuales de seguros, por ello cuando

se desembolsa un crédito o formaliza un contrato de Leasing Habitacional el sistema le crea un consecutivo con los datos básicos para su manejo (edad, saldo, tarifa aplicable, etc.) esta información le será entregada al oferente adjudicatario mensualmente conforme a los reportes generados por el aplicativo.

Para los clientes que requieren valoración médica sea por antecedentes o por cuantía la emisión del certificado la realizará la aseguradora, para ello dispondrá de una o más terminales del aplicativo de **BBVA COLOMBIA**, para ello deberá contar con la seguridad mínima exigida por **BBVA COLOMBIA** para la instalación de estas terminales, en caso de no cumplir con dichos requisitos deberá disponer de los funcionarios encargados de esta labor en las instalaciones de **BBVA COLOMBIA**.

4.5. COBRO Y PAGO MENSUAL DE PRIMAS

En caso de que la aseguradora adjudicataria opte por recaudar las primas a través de **BBVA COLOMBIA,** el cobro mensual de las primas de seguros se realizará en el aplicativo que tiene **BBVA COLOMBIA** para tal fin, y se recaudará en conjunto con la cuota del crédito o canon correspondiente.

BBVA COLOMBIA, con cargo a cada crédito o contrato leasing habitacional, pagará los valores cobrados a cada cliente a la compañía de seguros en procesos nocturnos diarios, generando la correspondiente relación de los mismo y entregándola al oferente adjudicatario. Esta labor se realizará conforme a lo indicado en el punto 4.11.2 VIGENCIA CERTIFICADOS INDIVIDUALES.

Para el manejo del programa de Seguros, el oferente adjudicatario deberá contar con una cuenta corriente o de ahorros en **BBVA COLOMBIA**, la cual será destinada para el pago de las correspondientes primas de seguros.

En el proceso de pagos de primas, **BBVA COLOMBIA** descontará de la cuenta del oferente adjudicatario los valores correspondientes al costo de recaudo establecido en el punto 4.13 TARIFA DE SERVICIO DE RECAUDO DE LAS PRIMAS DE SEGURO.

Este proceso de cobro se realizará incluso cuando el cliente presente mora hasta de 6 meses, hasta que sea judicializado o hasta que se castigue el crédito, lo que ocurra primero, para cartera Titularizada el cobro de las primas y pago al oferente adjudicatario será independiente al estado de mora de la cartera.

4.6. MANEJO DE DEVOLUCIONES DE PRIMAS

El oferente adjudicatario, realizará la devolución de las primas cobradas a los clientes de **BBVA COLOMBIA** en aquellos casos donde por errores operativos o tecnológicos se haya realizado un cobro que no corresponda, como en casos de endosos no registrados, cobros posteriores al siniestro por fallecimiento, errores en liquidación, etc.

Los reintegros de primas serán a cargo del oferente adjudicatario y los podrá realizar directamente a las cuentas del cliente o a **BBVA COLOMBIA** a fin que este las consigne al crédito en un tiempo no mayor a quince (15) días hábiles, luego del conocimiento del caso.

4.7. CLÁUSULA DE PAGOS COMERCIALES.

La Aseguradora que sea adjudicataria concederá pagos comerciales hasta por **DOS MIL MILLONES DE PESOS ($2.000.000.000),** por cada año contado desde la fecha de adjudicación o prórroga, con el fin de amparar los siniestros, para aquellos casos en que por algún motivo, no se reporte el ingreso o cancelación de un asegurado o se reporte equívocamente, y en general si se comente errores u

omisiones en la información. En ese orden la Compañía Aseguradora pagará los siniestros, en caso de presentarse. Igualmente en caso de siniestro y de no encontrarse la declaración de asegurabilidad, la aseguradora pagará el siniestro, previa constancia del pago de las primas causadas por el seguro.

4.8. INFORMES

Sin perjuicio del informe que debe presentar la compañía de seguros adjudicataria, de conformidad con lo establecido en el Decreto 2555 de 2010 y la Circular Básica Jurídica, con el fin de realizar una adecuada administración del programa de seguros, el oferente adjudicatario deberá entregar toda la información relevante al manejo de las pólizas contratadas, esta información debe contener como mínimo:

- Informe de suscripciones: Mensualmente debe entregar un comparativo de los ingresos de clientes nuevos a la póliza colectiva. Dentro de dicho informe debe entregarse los clientes que fueron valorados por el oferente adjudicatario, su valoración y calificación (extraprima o coberturas condicionadas).

- Informe de postventa: Mensualmente el oferente adjudicatario se compromete a entregar un informe acerca de la entrega física o electrónica del clausulado y carátula del certificado individual a los clientes nuevos, de igual manera deberá informar los motivos por los cuales existan pendientes.

- Informe de Primas recaudadas: Mensualmente se deberá entregar un informe de las primas generadas en el programa, su evolución y pago de recaudo.

- Informe de Siniestros: Mensualmente el oferente adjudicatario deberá presentar un informe de los siniestros presentados durante el mes, separados por amparo y anexo, la respuesta generada ante cada caso (pagado u objetado) estableciendo claramente los motivos de los no pagados.

El informe deberá contener el comparativo mes a mes de los siniestros en trámite y finalizados, así como un resumen de las principales causas por las cuales se encuentran siniestros en trámite y las acciones emprendidas para su culminación.

A fin de asegurar los tiempos de servicio, el informe debe contener el promedio de días de atención de los mismos.

- **Informe de PQR:** Mensualmente la aseguradora adjudicataria entregará un informe de las peticiones realizadas por los clientes, así como su estado, comparando mes por mes la evolución de las mismas. El informe debe contener las causales más comunes de peticiones y quejas, así como hacer énfasis en los aspectos de servicio a mejorar para mitigar la presentación de las mismas incluyendo los planes de acción que permitan mitigar la ocurrencia e impacto sobre los clientes.

- **Informe de condiciones de Admisibilidad:** La aseguradora adjudicataria deberá reportar anualmente la misma información entregada para la admisibilidad del pliego, a fin de demostrar que continúan manteniendo los niveles adecuados de para el aseguramiento de la cartera.

- **Informe de Atención de los promotores y líneas de servicio:** De manera mensual el oferente adjudicatario entregará un informe de las consultas, quejas y solicitudes realizadas

por los clientes internos y externos, agrupándolas por tipos, con el fin de establecer las acciones que mitiguen dichas consultas o peticiones.

Adicionalmente a los informes mencionados, **BBVA COLOMBIA** podrá pedir mayor información acerca del manejo del programa, para ellos bastará con realizar la solicitud por escrito, indicando el tipo de información, estructura y periodicidad.

4.9. COMITÉS Y ACUERDOS DE NIVELES DE SERVICIO

Para el seguimiento de los informes descritos en el punto anterior, mensualmente se realizará una reunión entre miembros de **BBVA COLOMBIA** y la compañía adjudicataria, con el fin de revisarlos y tomar acciones o medidas que permitan mejorar la atención a los clientes internos y externos.

Para ello y de acuerdo con el volumen a tratar de temas el comité se podrá dividir en los siguientes:

- Comité de Riesgos Asegurados.
- Comité de siniestros.
- Comité operativo y de PQR.

Sobre los acuerdos de servicio, **BBVA COLOMBIA** ha definido que los mismos deben guardar relación con los que se manejan al interior de la institución, por ello ha definido los siguientes Acuerdos de Niveles de Servicios - ANS.

Suscripción: Para las respuestas de asegurabilidad el oferente adjudicatario tendrá (16) horas hábiles para brindarla, para ello la aseguradora definirá claramente la documentación que debe ser aportada en cada caso dependiendo del antecedente médico o valor de cúmulo del cliente. Para los clientes catalogados como de Banca Personal o Premium el tiempo máximo será de (4) horas hábiles.

Red médica: El oferente deberá disponer de una Red médica propia o a través de terceros o IPS en las ciudades descritas en el numeral 2.8.2 EXPERIENCIA Y ATENCIÓN, al igual dentro de esta red debe existir un grupo de médicos que realicen los exámenes a domicilio con el fin de brindar una atención conforme a relevancia del cliente, estos exámenes a domicilio deberán ser cubiertos en las siguientes ciudades: Armenia, Barranquilla, Bogotá, Ibagué, Medellín, Pasto, Pereira, Santa Marta, Bucaramanga, Cali, Villavicencio y Valledupar.

Siniestros: Respuesta en (15) días hábiles una vez se tenga la totalidad de documentos exigidos para cada amparo o anexo, esta documentación deberá ser entregada por medio físico o electrónico, para lo cual el oferente adjudicatario entregará a **BBVA COLOMBIA** la herramienta tecnológica que maneje para esta atención y la dispondrá a la red de oficinas de **BBVA COLOMBIA**. Los documentos que se deben presentar son:

Para reclamación por muerte del asegurado:

- Registro Civil de Defunción.
- Carta de reclamación del seguro.
- Certificación de saldo del crédito.

Para reclamación por incapacidad total y permanente - ITP:

- Certificado de incapacidad expedido por un órgano competente (EPS, ARL, Junta Regional de Calificación de invalidez, etc.).

- Carta de reclamación del seguro.
- Certificación de saldo del crédito.

La herramienta tecnológica deberá al menos soportar la carga de los documentos soporte del siniestro, informar el estado y respuesta del mismo. El costo de la instalación de dicha herramienta debe ser asumido por el oferente adjudicatario, así como los costos que incurra el Banco en la instalación en cada uno de los computadores y su puesta en funcionamiento a nivel nacional. El oferente adjudicatario deberá entregar el manual de dicha herramienta, así como realizar las capacitaciones a nivel nacional para el correcto manejo de la misma, de manera presencial, así como incurrirá en los costos asociados a esta capacitación.

Todas las respuestas de los siniestros deberán ser entregadas a **BBVA COLOMBIA** como tomador de los seguros e informarse a los reclamantes.

Para la atención de siniestros masivos, cada oferente adjudicatario deberá contar con un plan de atención conforme a las normas actuales, el cual deberá ser adecuado a las necesidades de **BBVA COLOMBIA** y de sus clientes.

Peticiones, Quejas y Reclamos: Para la atención de los clientes de **BBVA COLOMBIA**, la aseguradora atenderá las solicitudes en un plazo no mayor a (7) días hábiles, para las peticiones de clientes de Banca Personal y Premium la atención se realizará en (4) días.

Para las consultas efectuadas por medio del Call center o de los promotores de seguros la atención será inmediata, salvo que dependa de procesos operativos o comerciales que deban ser atendidos centralizadamente.

BBVA COLOMBIA en el desarrollo conjunto del programa con el oferente adjudicatario, podrá revisar periódicamente el estado de los acuerdos de servicio, indicando mejoras a los procesos y procedimiento y estableciendo para ello nuevos niveles de servicio o ajustes a los indicados

Penalidades en la atención de siniestros: En caso de incumplimiento en el tiempo estipulado para el pago, el oferente adjudicatario reconocerá a **BBVA COLOMBIA**, sobre el valor de la indemnización un interés a la tasa máxima legalmente permitida sobre el valor desde el momento del incumplimiento de los términos establecidos para la respuesta y hasta la fecha efectiva de pago.

4.10. OTRAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES DE LA ASEGURADORA ADJUDICATARIA

BBVA COLOMBIA como entidad financiera responsable y comprometida con el servicio a sus clientes, he definido que los oferentes deben conservar dicha filosofía en el trato y servicio que ofrecen a los clientes internos y externos de **BBVA COLOMBIA**, por lo anterior establece unas obligaciones, que si bien es cierto no constituyen requisito de admisibilidad, si es necesaria su prestación.

Dentro de dichas obligaciones se encuentran los Acuerdos de Nivel de Servicio del punto 4.9 del presente pliego, así como la estructura operativa mencionada en el punto 4.3, esto aunado a los resultados de los comités donde se definirán las estrategias para mejora continua de procesos de atención a clientes internos y externos.

Por último, el oferente adjudicatario deberá presentar un informe final del manejo del programa de seguros que contenga como mínimo la recopilación de todos y cada uno de los informes periódicos, así como de las sugerencias y recomendaciones que estime conveniente para una administración

más eficaz hacia el futuro. Se entiende que dentro del informe final se tendrá en cuenta el detalle de la siniestralidad que será base para el siguiente proceso de licitación.

Sobre la integración tecnológica entre el oferente adjudicatario y **BBVA COLOMBIA**. Teniendo en cuenta que este último es quien realiza el cobro de las primas de seguros junto con las cuotas o cánones, la Compañía de Seguros Oferente Adjudicataria se compromete a recibir la información de **BBVA COLOMBIA** para el manejo y administración de los procesos de seguros, recibiendo por parte del este la información en los medios electrónicos que posee para el cobro de los mismos.

Esta información será generada mensualmente en medios magnéticos bajo la estructura que **BBVA COLOMBIA** tiene preestablecida y que será entregada a los oferentes que cumplan con los requisitos de admisibilidad, tanto de cobro diario como de pólizas vigentes al corte de cada mes.

La entrega de los archivos periódicos se realizarán por un medio Seguro, el cual es utilizado normalmente por las instituciones para la entrega de la información, para ello el oferente deberá realizar la integración tecnológica a través de Web Service u otras herramientas tecnológicas bajo los parámetros que **BBVA COLOMBIA** le informe.

4.11. VIGENCIA DE LOS CONTRATOS DE SEGUROS

Las vigencias de los contratos estarán determinadas por la póliza colectiva y los certificados individuales para cada cliente.

4.11.1. VIGENCIA PÓLIZA COLECTIVA

La vigencia será de un año la cual comenzará a partir del primero (1) de enero del año dos mil diecinueve (2019) desde las 00:00 horas y finalizará el treinta y uno (31) de diciembre de dos mil diecinueve (2019) a las 24:00 horas, esta vigencia podrá ser prorrogada por un año adicional es decir desde el primero (1) de enero de dos mil veinte (2020) a las 00:00 horas hasta el treinta y uno (31) de diciembre de dos mil veinte (2020) a las 24:00 horas.

La prórroga automática será bajo las mismas condiciones económicas y no tendrá ningún incremento. Conforme a lo indicado en el Decreto 2555 de 2010, el Oferente Adjudicatario NO podrá revocar unilateralmente el contrato que se derive del presente proceso.

4.11.2. VIGENCIA CERTIFICADOS INDIVIDUALES

El seguro de vida y la cobertura de Incapacidad Total, comenzarán a partir de la fecha de desembolso del crédito y hasta la cancelación del mismo o hasta que el cliente tenga una mora mayor a ciento ochenta (180) días, se encuentre en estado castigado o sea judicializado, lo que ocurra primero. En los casos de ventas de cartera a una entidad diferente a la Titularizadora Colombiana S.A., o cuando la entidad compradora no mantenga la administración de los créditos con **BBVA COLOMBIA** el seguro estará vigente hasta la venta a la entidad compradora, siempre y cuando este no haya sido cancelado por los motivos antes mencionados. Para cartera titularizada, el seguro tendrá vigencia mientras el crédito se encuentre activo, sin cancelarse por mora o por judicialización o castigo.

4.12. CLÁUSULA DE REVOCATORIA UNILATERAL

De acuerdo con lo establecido en el Decreto 2555 de 2010 y la Circular Básica Jurídica expedida por la Superintendencia Financiera de Colombia, la aseguradora adjudicataria no podrá revocar de

manera unilateral ninguna de las pólizas ni los amparos correspondientes y deberá incluir en éstas la cláusula de No Revocatoria Unilateral.

4.13. TARIFA DE SERVICIO DE RECAUDO DE LAS PRIMAS DE SEGURO

La Compañía Aseguradora podrá realizar el recaudo de las primas de seguros a través de cualquier medio o entidad, conforme al Decreto 2555 de 2010.

En caso de optar por realizar el recaudo de las primas de seguros a la par de la cuota de los créditos hipotecarios y cánones de leasing habitacional, y que para ello **BBVA COLOMBIA** dispone de toda su infraestructura operativa y Tecnología, le realizará un cobro mensual a la compañía de Seguros adjudicataria por tal labor, el cual corresponde a **ONCE MIL PESOS M/CTE ($11.000.oo) + IVA** por cada recaudo. (Anexo 3).

Este valor se le descontará de la cuenta que la Compañía disponga en **BBVA COLOMBIA** para el manejo del programa de seguros junto con el IVA correspondiente del servicio.

4.14. NO CESIÓN DEL CONTRATO DE SEGUROS

Bajo ninguna circunstancia ni modalidad, la aseguradora adjudicataria puede ceder los derechos económicos que se deriven del Contrato de Seguro sin el consentimiento previo, expreso y escrito de **BBVA COLOMBIA**.

4.15. TERMINACIÓN ANTICIPADA Y UNILATERAL DEL CONTRATO

De acuerdo con establecido en las Circular Básica Jurídica expedida por la Superintendencia Financiera de Colombia, **BBVA COLOMBIA** establece las siguientes causales de terminación anticipada:

- Cuando el oferente adjudicatario incumpla con alguno de los requisitos de admisibilidad o cualquier condición contractual del presente documento, lo cual no generará indemnización alguna al oferente.

- Cuando la aseguradora incurra en alguna causal de liquidación, disolución o su patrimonio se comprometa de tal manera que corran riesgo de impago los siniestros de los deudores y locatarios.

- Cuando de manera constante y reiterada incumpla los acuerdos de servicio, ya sea en tiempo o en la calidad del servicio.

- Cuando a causa de los trámites internos del oferente adjudicatario, los procesos de comercialización de **BBVA COLOMBIA** en créditos hipotecarios o leasing habitacional se vean perjudicados y por este motivo se compruebe la pérdida de clientes.

4.16. GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

La aseguradora adjudicataria se obliga a constituir a su costa y a favor de **BBVA COLOMBIA** una garantía irrevocable de cumplimiento, otorgada por una Compañía de Seguros o Entidad Bancaria legalmente establecida en Colombia, diferente a la oferente, y cuya calificación otorgada por una sociedad calificadora de riesgos autorizada por la Superintendencia Financiera de Colombia sea igual o superior a “A”.

La garantía de cumplimiento deberá amparar la totalidad de los perjuicios derivados del incumplimiento total o parcial de cualquiera de las obligaciones a su cargo, derivadas del Contrato de Seguro.

Para el efecto, la aseguradora adjudicataria deberá ser la tomadora y **BBVA COLOMBIA** el asegurado y beneficiario de la póliza correspondiente. La póliza deberá tener una vigencia igual al término de duración de la adjudicación de un (1) año y un (1) año más; en caso de que el contrato de seguro se prorrogue, la póliza de cumplimiento se deberá prorrogar en las mismas condiciones de manera que cubra la vigencia de los contratos de seguro incluida la prórroga y un (1) año más.

El valor asegurado en la póliza para el amparo de cumplimiento del contrato será equivalente a **CINCO MIL MILLONES DE PESOS ($5.000.000.000.oo).** La aseguradora adjudicataria asume la obligación de entregar a **BBVA COLOMBIA** la póliza de cumplimiento requerida, a más tardar el diez (10) día hábil siguiente a la adjudicación del contrato de seguro. La no entrega de la póliza de cumplimiento dará lugar a la ejecución de la póliza de seriedad de la oferta.

CAPÍTULO V
ANEXOS

Anexo No. 1 Acuerdo de Confidencialidad
Anexo No. 2 Carta de Presentación de Requisitos de Admisibilidad
Anexo No. 3 Carta de Presentación de Posturas
Anexo No. 4 Justificación de los Requisitos Adicionales
Anexo No. 5 Tarifa de Recaudo
Anexo No. 6 Formato de Solicitud de Seguro
Anexo No. 7 Formato solicitud Actual

ANEXO No. 1
ACUERDO DE CONFIDENCIALIDAD CELEBRADO ENTRE
_____ Y BBVA COLOMBIA

Este acuerdo de confidencialidad realizado y suscrito entre _____, identificada con el NIT No. _____, con domicilio en la ciudad de _____, representada legalmente por _____, identificado con la cédula de ciudadanía No. _____ expedida en _____, según consta en el certificado de existencia y representación legal expedido por la Superintendencia Financiera de Colombia, y que anexo, en adelante la **COMPAÑÍA DE SEGUROS**, y **BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. – BBVA COLOMBIA**, identificado con el NIT No. _____ representado legalmente por _____, identificado con la cédula de ciudadanía No. _____ expedida en _____, tal y como consta en el certificado de existencia y representación legal expedido por la Superintendencia Financiera de Colombia, conjuntamente denominadas **LAS PARTES**, tiene como finalidad establecer los términos que rigen el suministro, uso y la protección de la información durante el proceso de licitación y posible programa de seguros, que adelanta **BBVA COLOMBIA** para contratar los seguros de Vida Grupo Deudor, que amparen los riesgos de incapacidad total y permanente y muerte de sus deudores, en los casos en que el Banco actúe como tomador de los seguros asociados a créditos garantizados con hipoteca o a contratos de leasing habitacional por cuenta de sus deudores o locatarios., de acuerdo a las siguientes consideraciones:

CONSIDERACIONES:

Que **BBVA COLOMBIA** actúa como tomador de seguros asociados a créditos hipotecarios y contratos de leasing habitacional por cuenta de sus deudores o locatarios, y que para la contratación de los mismos se debe adelantar un proceso licitatorio en los términos descritos en el Decreto 2555 de 2010, y lo reglamentado en Circular Básica Jurídica expedida por la Superintendencia Financiera de Colombia.

Que **BBVA COLOMBIA** dio apertura al mencionado proceso licitatorio y que la **COMPAÑÍA DE SEGUROS** ha manifestado su interés de participar en el mismo.

Que en el desarrollo del proceso licitatorio que realiza **BBVA COLOMBIA**, éste hará entrega o revelará a la **COMPAÑÍA DE SEGUROS** la información necesaria para presentar una postura.

Que es la voluntad de **BBVA COLOMBIA** y la **COMPAÑÍA DE SEGUROS** que la información suministrada sea tratada como información confidencial, con el máximo de cuidado, diligencia y velando en todo momento por la protección de los datos.

CLÁUSULA PRIMERA: OBJETO

En virtud del presente Acuerdo la **COMPAÑÍA DE SEGUROS** se obliga a no revelar, divulgar, exhibir, mostrar, comunicar, utilizar y/o emplear con persona natural o jurídica, en su favor o en el de terceros, la información confidencial que reciban de BBVA COLOMBIA y en consecuencia a mantenerla de manera confidencial y privada y a proteger dicha información para evitar su divulgación no autorizada, ejerciendo sobre esta el mismo grado de diligencia que utilizan para proteger información confidencial de su propiedad.

BBVA COLOMBIA no usará ni revelarán en ningún evento, directa o indirectamente, en detrimento de **BBVA COLOMBIA**, la información entregada bajo estricta confidencialidad, salvo si se requiere

por Ley aplicable, decreto, sentencia u orden de autoridad competente en ejercicio de sus funciones legales o jurisdiccionales. En todo caso, en la medida de lo posible y de lo permitido por la Ley, la **COMPAÑÍA DE SEGUROS** informará a **BBVA COLOMBIA** de manera escrita y de forma inmediata sobre el requerimiento para que pueda tomar las medidas necesarias para proteger su información confidencial. Así mismo, la **COMPAÑÍA DE SEGUROS** requerida y sus representantes, filiales, subsidiarias, vinculadas o contratistas, deberán revelar solo la parte de la Información que legalmente se requiere sea revelada, tomando todas las medidas que resulten razonables para mantener la confidencialidad de la Información.

CLÁUSULA SEGUNDA: DEFINICIÓN DE INFORMACIÓN CONFIDENCIAL:

Información Confidencial significa toda información técnica, financiera, comercial y estratégica y cualquier información relacionada con las operaciones de negocios presentes y futuros, o condiciones financieras de **BBVA COLOMBIA**. Adicionalmente, cualquier información suministrada, previa a la celebración del presente Acuerdo, se considerará como confidencial y estará sujeta a los términos del mismo, siempre que no sea de aquella que al tiempo de ser suministrada esté disponible al público en general, o, es o llegue a ser de conocimiento de la **COMPAÑÍA DE SEGUROS** de forma no confidencial por una fuente distinta a **BBVA COLOMBIA**, entendido que en su conocimiento, dicha fuente no tiene prohibición legal o contractual de revelar dicha información y que por lo mismo se conoció de manera legítima, previo a ser revelada por o en representación de la **COMPAÑÍA DE SEGUROS**.

CLÁUSULA TERCERA: NO – OBLIGATORIEDAD

Este Acuerdo no obliga a **BBVA COLOMBIA**, por sí solo, a dar a conocer información sea confidencial o no, ni a celebrar contrato alguno.

CLÁUSULA CUARTA: OBLIGACIONES DE CONFIDENCIALIDAD

BBVA COLOMBIA se obliga para con la **COMPAÑÍA DE SEGUROS** a contar, previo al suministro de cualquier información, con las autorizaciones necesarias para la recolección, administración, consulta, tratamiento, divulgación y suministro de la misma, de manera íntegra y con las debidas seguridades en caso de ser requeridas dichas autorizaciones, en cumplimiento de los requisitos establecidos en las disposiciones vigentes, dentro de las cuales se encuentran, sin limitarse, la garantía de la protección de los datos, garantía del derecho de habeas data al titular y la conservación de la información bajo altos estándares de seguridad y privacidad. En consecuencia, **BBVA COLOMBIA** solo entregará a la **COMPAÑÍA DE SEGUROS** información respecto de la cual cuente con la debida autorización.

La **COMPAÑÍA DE SEGUROS** se obliga a conservar y utilizar la información confidencial de conformidad con los términos del presente acuerdo y abstenerse de usarla en detrimento de **BBVA COLOMBIA**, en su propio interés o para fines diferentes a los establecidos en el mismo y en consecuencia, se obliga íntegramente a cumplir la política de protección de datos de **BBVA COLOMBIA**, la cual manifiesta conocer y aceptar.

La **COMPAÑÍA DE SEGUROS** se obliga a no distribuir, publicar o divulgar la información confidencial a persona alguna, salvo a sus empleados que tengan necesidad de conocerla para el propósito para el cual es suministrada, con las excepciones mencionadas en la Cláusula Primera del presente Acuerdo, eventos en cuya ocurrencia se compromete a tomar todas las medidas que resulten razonables para mantener la confidencialidad de la Información.

La **COMPAÑÍA DE SEGUROS** informará a cada uno de sus empleados, trabajadores, asesores o directivos que reciben Información Confidencial, de su naturaleza confidencial y sobre la existencia de este Acuerdo, y los instruirá para manejar la información confidencial y no utilizarla sino conforme a los términos del mismo y será responsable por cualquier uso inadecuado de la información confidencial.

La **COMPAÑÍA DE SEGUROS** responderá frente a **BBVA COLOMBIA** por el incumplimiento de este acuerdo por parte de sus empleados, directivos, asesores, agentes, contratistas o subcontratistas.

La **COMPAÑÍA DE SEGUROS** devolverá a **BBVA COLOMBIA** la información suministrada confidencial o no que sea propiedad de esta última, junto con las copias que de ella se hubieren hecho, dentro de los quince (15) días siguientes a la terminación del proceso de licitación, o cuando **BBVA COLOMBIA** lo solicite. Se podrán acordar la destrucción de la información, la cual se hará en presencia de las personas que designe **BBVA COLOMBIA**, suscribiendo para dichos efectos el acta correspondiente. Lo anterior, sin perjuicio del cumplimiento de las disposiciones vigentes en materia de conservación de documentos, en caso de resultar aplicables.

La **COMPAÑÍA DE SEGUROS** debe observar y cumplir todas las normas legales y regulaciones de cualquier orden, en lo relativo a las negociaciones y al uso adecuado de cualquier tipo de información que se obtenga como resultado de este Acuerdo.

En el caso en que **BBVA COLOMBIA** encuentre evidencia del incumplimiento del presente Acuerdo o de alteración o manipulación indebida de la información, lo informará a la **COMPAÑÍA DE SEGUROS** inmediatamente conozca de tal situación, para que esta tome las medidas necesarias e inmediatas encaminadas a impedir el incumplimiento del presente acuerdo, así como la divulgación o uso de la información o la extensión del riesgo o perjuicio.

La **COMPAÑÍA DE SEGUROS** se obliga a no ceder, vender ni transferir bajo ningún título el presente Acuerdo.

CLÁUSULA QUINTA: DESTINACIÓN

La información sólo podrá ser utilizada para facilitar los propósitos expresados en las consideraciones de este documento. Adicionalmente solo podrá reproducirse dicha información confidencial si ello resulta necesario para cumplir tal finalidad y solo podrá darse a conocer a aquellos empleados, trabajadores, asesores contratistas o subcontratistas de la **COMPAÑÍA DE SEGUROS** que tenga necesidad de conocerla para la mencionada finalidad. En caso de que se les entregue información confidencial a dichos empleados, trabajadores o asesores, se les debe advertir su carácter confidencial y se les deberá enterar de los términos de este Acuerdo, los cuales deben aceptar y adherir antes de recibirla.

CLÁUSULA SEXTA: PROPIEDAD

Sin perjuicio de los derechos amparados por el ordenamiento en materia de datos de carácter privado, la información a que se refiere el presente acuerdo es de propiedad de **BBVA COLOMBIA** y se revela únicamente con el propósito de facilitar el desarrollo de los temas de que trata este Acuerdo.

Ninguna parte adquirirá derechos de propiedad o disposición respecto de la información suministrada por la otra parte.

CLÁUSULA SÉPTIMA: CUSTODIA

La **COMPAÑÍA DE SEGUROS** garantiza que aplica las mismas medidas de seguridad razonables para evitar divulgación, fuga o uso no autorizado de información confidencial o patentada y aceptan que protegerán la información confidencial suministrada, de la misma manera y en el mismo grado en que protegen su propia información confidencial.

Se conviene que toda la información confidencial sea guardada por la **COMPAÑÍA DE SEGUROS** en un lugar con acceso limitado únicamente a los empleados, trabajadores, asesores o directivos (representantes legales y miembros de Junta Directiva) y quienes en forma razonable requieran conocer la información confidencial.

CLÁUSULA OCTAVA: DURACIÓN

El presente acuerdo tendrá vigencia indefinida desde la fecha de su suscripción, en consideración a la naturaleza y objeto del mismo.

CLÁUSULA NOVENA: CONCORDANCIA CON LA LEY

Cada parte debe observar y cumplir con todas las leyes, ordenanzas, órdenes, reglas y regulaciones de todas las agencias gubernamentales, nacionales, distritales, departamentales, autoridades, juntas directivas o comisiones que tengan jurisdicción en lo relativo a las conversaciones y el uso de cualquier tipo de información que se obtenga como resultado de este Acuerdo.

CLÁUSULA DÉCIMA: SOLUCIÓN DE CONFLICTOS

Cualquier controversia que surja entre **BBVA COLOMBIA** y la **COMPAÑÍA DE SEGUROS** como consecuencia de la celebración, ejecución, interpretación, incumplimiento o terminación del presente Acuerdo, que no puedan ser dirimidas directamente por los representantes legales de las partes, serán sometidas a la justicia ordinaria.

CLÁUSULA UNDÉCIMA: IDIOMA

El idioma oficial de este Acuerdo es el castellano y, por consiguiente, todos los documentos, incluidos los manuales técnicos y la correspondencia técnica, deberán obrar en este idioma.

CLÁUSULA DUODÉCIMA: NO OTORGAMIENTO DE DERECHOS

La entrega de información, sea confidencial o no, no concede, ni expresa ni implícitamente, autorización, permiso o licencia de uso de marcas comerciales, patentes, derechos de autor o de cualquier otro derecho de propiedad industrial o intelectual. Ni este Acuerdo, ni la entrega o recepción de información, sea confidencial o no, constituirá o implicará promesa de efectuar contrato o alianza alguna.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCERA: PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES: En caso de que la información confidencial que se emplee o sea conocida en desarrollo del presente acuerdo, incluya datos personales o datos sensibles en los términos de la Ley 1581 de 2012, sobre Protección de Datos y de más normas concordantes, la **COMPAÑÍA DE SEGUROS** se compromete a presentar la política de protección de datos personales, así mismo se compromete a dar el adecuado tratamiento de datos de la información que se transfiera.

LAS PARTES garantizan la legalidad de los datos personales o datos sensibles que transmitan a la otra Parte, y se obligan a utilizar dicha información exclusivamente para el cumplimiento del objeto

del presente Acuerdo, dado que cualquier uso distinto al antes indicado les queda estrictamente prohibido, salvo que resulte aplicable alguna de las excepciones legales.

LAS PARTES manifiestan y garantizan cada una a la otra, que cuenta con los mecanismos y procedimiento necesarios para proteger los datos personales de conformidad con los niveles de seguridad que requiere la ley y las demás disposiciones derivadas de ésta.

LAS PARTES de común acuerdo se comprometen a cuantas obligaciones les sean legalmente exigibles, de acuerdo a la normativa o reglamentos vigentes sobre el tratamiento de datos personales, dejando en todo momento indemne a la otra parte de cuantas reclamaciones, sanciones, violaciones, y demás pudieran derivarse como consecuencia de cualquier incumplimiento de dichas disposiciones.

CLÁUSULA DÉCIMA CUARTA: DISPOSICIONES VARIAS
Ley Reguladora: Este Acuerdo debe ser realizado, interpretado y ejecutado de acuerdo con las leyes de la República de Colombia.
Disposiciones Inválidas: Si alguna de las disposiciones de este Acuerdo llegare a ser ilegal, inválida o sin vigor bajo las leyes presentes o futuras, dicha disposición deberá excluirse, y este Acuerdo deberá, al alcance posible y sin destruir su propósito, ser realizado y ejecutado como si dicha disposición ilegal, inválida o sin vigor, no hubiera hecho parte del mismo y las restantes disposiciones aquí contenidas deberán conservar el mismo valor y efecto y no deben ser afectadas por la disposición ilegal, inválida o sin vigor.
Copias: Este Acuerdo consta de dos ejemplares de un mismo original, cada una de ellas con el mismo tenor.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: COMUNICACIÓN
Las comunicaciones que cualquiera de **LAS PARTES** deba dirigir a la otra, se enviarán a las siguientes personas, siendo necesario que el recibo de la correspondencia sea confirmado por las personas autorizadas que **LAS PARTES** designan a continuación:

_____
Atn: _____
Dirección: _____
Teléfono: _____
Ciudad: _____

BBVA COLOMBIA
Atn : _____
Dirección: _____
Teléfono: _____
Ciudad: _____

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA: ACUERDO TOTAL
Este Acuerdo representa el Acuerdo total entre las partes con respecto al asunto del objeto del mismo y puede modificarse únicamente mediante acuerdo suscrito por ambas partes en el presente Acuerdo de Confidencialidad.

En constancia de lo anterior y dando fe de lo que allí se consagra, se suscribe el presente Acuerdo por quienes en él intervinieron, por parte la **COMPAÑÍA DE SEGUROS** en _____ el ___ del mes

de _____de 2018, y por **BBVA COLOMBIA** en Bogotá el ____ del mes de _____de 2018. El presente Acuerdo rige a partir de la firma de **LAS PARTES.**

_____	_____
LA COMPAÑÍA DE SEGUROS	**BBVA COLOMBIA**

ANEXO No. 2
CARTA DE PRESENTACIÓN DE REQUISITOS DE ADMISIBILIDAD

Bogotá D.C., ____ de _____ de 2018

Señores:
BBVA COLOMBIA
Ciudad

Referencia: Presentación de Requisitos de Admisibilidad - Licitación Seguros de Vida Asociados a Créditos Cartera Hipotecaria y Contratos de Leasing Habitacional.

Estimados señores:

El suscrito _____, mayor de edad, identificado con _____, en mi calidad de Representante Legal de _____, compañía de seguros identificada con NIT. _____, legalmente constituida en Colombia y autorizada por la Superintendencia Financiera de Colombia para operar el ramo de _____, estando debidamente facultado, en respuesta a la carta de invitación presentada por **BBVA COLOMBIA**, manifiesto a ustedes el interés de la Aseguradora que represento en participar en el proceso de licitación de la referencia.

Atendiendo la Carta de Invitación y con el fin de ser calificadas como Aseguradora Oferente, manifiesto que la Aseguradora cumple con los Requisitos de Admisibilidad y los Requisitos de Admisibilidad Adicionales exigidos por **BBVA COLOMBIA** y consignados en el Pliego de Condiciones.

Para acreditar dicho cumplimiento, adjunto los siguientes documentos:

1. Certificado de Existencia y Representación legal expedido por la Superintendencia Financiera de Colombia, con una antigüedad no superior a 30 días, donde se acredite la autorización para funcionar en el país, la calidad del suscrito y la autorización para operar el ramo objeto de la licitación.

2. Certificación (con vigencia no mayor a 30 días a la fecha de presentación) emitida por una sociedad calificadora de riesgos autorizada por la Superintendencia Financiera de Colombia. Dicha calificación deberá ser igual o superior a “A”.

3. Certificado de Existencia y Representación legal expedido por la Superintendencia Financiera de Colombia con una antigüedad no superior a 30 días a la fecha de apertura de la licitación, donde se acredite la existencia de la sociedad calificadora y el Representante Legal que certifica la calificación.

4. Anexo No. 1 – Acuerdo de Confidencialidad suscrito por el Representante Legal de la Aseguradora.

5. Estados Financieros enviados a la Superintendencia Financiera con corte a 31 de Diciembre de 2017, firmados por el Representante Legal, el contador y el revisor fiscal de la Compañía Aseguradora, junto con las notas a los estados financieros, de ser aplicables.

6. Constancia del envío a la Superintendencia Financiera de Colombia de los estados financieros con corte a 31 de Diciembre de 2017 y copia de la autorización de dicha entidad para someter a consideración de la Asamblea General de Accionistas estos estados financieros, si a ello hubo lugar.

7. Documento de cálculo de los indicadores financieros de capacidad financiera y patrimonial y la correspondiente certificación de cumplimiento suscrita por el Representante Legal.

8. Copia autorizada del acta del órgano social competente que de acuerdo con los estatutos sociales del oferente faculte a quien suscribe la carta de presentación para suscribirla, cuando a ello hubiere lugar.

9. Lista de reaseguradores con los cuales respaldará el programa de seguros, junto con la certificación de calificación.

10. Certificación(es) de experiencia durante los años 2015, 2016 y 2017 en el manejo de programas de seguros deudores en el ramo de vida asociados a crédito hipotecario o leasing habitacional a entidades financieras vigiladas, mediante certificación escrita firmada por el Representante Legal de un cliente del sector Financiero.

11. Certificación suscrita por el Representante Legal de la Aseguradora en la que garantiza que los Reaseguradores que respaldarán la oferta cumplen con los requisitos exigidos en la Carta de Invitación y en el Pliego de Condiciones.

12. Relación de oficinas y/o puntos de atención de la Aseguradora, suscrita por el Representante Legal.

13. Certificación suscrita por el Representante Legal en la que acredita que la Aseguradora cuenta con un Sistema de Atención al Consumidor Financiero (SAC) que permita de manera efectiva la recepción de reclamaciones por siniestros, la atención oportuna de los siniestros y especialmente los de tipo masivo en caso de catástrofe, y los pagos de los siniestros.

14. Certificación suscrita por el Representante Legal en la que acredita que la Aseguradora cuenta con un Plan de Contingencia y Continuidad del Negocio adecuado para administrar la operación, que incluya elementos como: prevención y atención de emergencias, administración de crisis, planes de contingencia para responder a las fallas e interrupciones específicas de un sistema o proceso y, capacidad de retorno a la operación normal.

15. Compromiso suscrito por el Representante Legal conforme al cual, en caso de presentar Posturas, las tasas cotizadas y que se mantendrán vigentes durante la ejecución del contrato, cumplirán con los principios de equidad y suficiencia y que serán el producto de la utilización de información estadística que cumpla con las exigencias de homogeneidad y representatividad, de conformidad con lo establecido en la Circular Básica Jurídica de la Superintendencia Financiera de Colombia.

Manifiesto que ni la Aseguradora ni el suscrito está: (i) vinculada por parte de las autoridades competentes a cualquier tipo de investigación por delitos de narcotráfico, terrorismo, secuestro, lavado de activos y/o conexos, (ii) incluida en listas para el control de lavado de activos administradas por cualquier autoridad nacional o extranjera, tales como la Oficina de Control de Activos en el Exterior (OFAC) del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos de América o (iii) condenada

por parte de las autoridades competentes en cualquier tipo de proceso judicial relacionado con la comisión de cualquier hecho punible.

Para efectos del proceso de la referencia, manifiesto que la Aseguradora recibirá notificaciones y comunicaciones en el correo electrónico

_____
[FIRMA REPRESENTANTE LEGAL]
[NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL]
[DOCUMENTO DE IDENTIDAD]

ANEXO No. 3

CARTA DE PRESENTACIÓN DE POSTURA

Bogotá D.C., ____ de _____ de 2018

Señores:
BBVA COLOMBIA
Ciudad

Referencia: Presentación de Postura - Licitación Seguros de Vida Asociados a Créditos Cartera Hipotecaria y Contratos de Leasing Habitacional

Estimados señores:

El suscrito _____, mayor de edad, identificado con _____, en mi calidad de Representante Legal de _____, compañía de seguros identificada con el NIT. _____, legalmente constituida en Colombia y autorizada por la Superintendencia Financiera de Colombia para operar el ramo de _____, estando debidamente facultado, en respuesta a la Carta de Invitación presentada por **BBVA COLOMBIA**, presento la Postura que esta Compañía formula a **BBVA COLOMBIA** para que se le adjudique el Contrato de Seguros que **BBVA COLOMBIA** contratará los seguros de Vida Grupo Deudor, que amparen los riesgos de incapacidad total y permanente y muerte de sus deudores, en los casos en que el Banco actúe como tomador de los seguros asociados a créditos garantizados con hipoteca o a contratos de leasing habitacional por cuenta de sus deudores o locatarios.

Para el efecto adjunto Postura, firmada por el Representante Legal de la Aseguradora.

Así mismo, manifiesto que la Postura que formulo en nombre de la Aseguradora que represento responde al conocimiento suficiente de la información suministrada por **BBVA COLOMBIA** y de los riesgos que asume la Aseguradora, que acepto los términos, bases y demás condiciones de la licitación y que en caso de Adjudicación del Contrato de Seguros, la Aseguradora acepta y cumplirá con todos los términos y condiciones establecidos en el Pliego de Condiciones y sus Anexos.

La presente oferta es firme e irrevocable y tiene una validez de noventa (90) días a partir del _____ de septiembre de 2018.

Adjunto el original de la Garantía de Seriedad de la Oferta en las condiciones requeridas en el Pliego de Invitación.

_____
[FIRMA REPRESENTANTE LEGAL]
[NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL]

ANEXO No. 4
JUSTIFICACIÓN DE LOS REQUISITOS ADICIONALES

Con los indicadores de rentabilidad, denominados también de rendimiento el Ofertante BBVA Colombia, mide la efectividad de la administración de las empresas oferentes con respecto al control de los costos y gastos, evaluando con ello la forma en que transforman sus primas emitidas en utilidades, así como el logro de los resultados propuestos; entonces, se evalúa si los oferentes no recurren a la deuda, de ser así corren riesgos operativos, caso contrario sería operativos y financieros.

2.8.1 CAPACIDAD FINANCIERA Y PATRIMONIAL

Resultado Técnico: En la medida en que el resultado técnico muestra el resultado del ejercicio de la actividad aseguradora sin tener en cuenta otros gastos o ingresos ajenos a la actividad, es una forma de certificar la continuidad en los resultados de la entidad en el ramo que corresponda.

Nivel de endeudamiento: Establece el máximo nivel de tolerancia permitido al endeudamiento de la entidad.

Índice de Siniestralidad: Evidencia una adecuada gestión del riesgo, lo cual disminuye la probabilidad del incremento en los precios del seguro por la insuficiencia de primas.

Respaldo de la Reserva: Pretender certificar que la entidad cuenta con recursos suficientes para cubrir el efecto de los riesgos esperados.

Patrimonio Técnico vs Patrimonio Adecuado: Pretende certificar la suficiencia y solidez patrimonial con la que opera la entidad.

2.8.2 EXPERIENCIA Y ATENCIÓN

BBVA Colombia se destaca como una entidad comprometida con el desarrollo económico y social del país, con presencia en más de 122 municipios a lo largo del territorio Nacional, a través de una red de 390 sucursales y con clientes con crédito hipotecario y/o locatarios a nivel nacional. Con el objetivo de continuar cumpliendo con nuestro objetivo de ser una entidad ágil, que trabaja para construir relaciones duraderas con las personas y aportar el máximo posible para hacer más sencilla la vida de todos, de este modo, BBVA Colombia requiere que la aseguradora adjudicataria tenga presencia física en las principales ciudades del país donde se tienen establecidas los Centros Territoriales como son Bogotá, Cali, Medellín, Barranquilla y Bucaramanga.

Para la debida atención de todos los clientes del BBVA Colombia, la aseguradora también deberá demostrar una red suficiente se tiene mayor presencia que, adicional a las ciudades ya mencionadas se encuentran: Armenia, Buga, Buenaventura, Cartagena, Cúcuta, Florencia, Ibagué, La Dorada, Manizales, Montería, Neiva, Pasto, Pereira, Popayán, Santa Marta, Tunja, Villavicencio y Valledupar.

2.8.3. REASEGUROS

Teniendo en cuenta el volumen de la cartera hipotecaria en BBVA Colombia, se hace necesario la presentación de la calificación del reasegurador, con el fin de poder asegurarle a nuestros clientes un respaldo amplio y suficiente en caso de siniestro.

4.3 INFRAESTRUCTURA OPERATIVA

Siguiendo en línea con el compromiso de brindar un óptimo servicio a los clientes del Banco, se hace necesaria la presencia de un grupo de trabajo compuesto por (5) personas y un equipo para apoyo presencial, con el fin de apoyar de manera personalizada e inmediata las inquietudes acerca de los productos a los funcionarios que requieran información, especialmente a la Red Comercial de Oficinas.

ANEXO No. 5
TARIFA DE RECAUDO

CÁLCULO DE LA TARIFA

Tarifa por recaudo de Seguros deudores de BBVA Colombia Año 2018

Concepto	Tarifa 2018	Observación general del proceso
Plataforma de Pagos	$3.001	Costo transaccional en los canales por el recaudo del pago
Envío Extractos	$1.094	Envío de extractos para el cobro mensual de los seguros
Envío pólizas y novedades	$1.062	Envío de pólizas, novedades y otras comunicaciones
Operativa de formalización	$3.728	Costo vinculación de seguros en proceso de alta y formalización
Operativa informativa	$2.115	Utilización de recursos en host, aplicativos, uso máquinas y demás
Total tarifa	**$11.000**	

La tarifa será de $11.000 + IVA

BBVA Creando Oportunidades

ANEXO No. 6
FORMATO DE SOLICITUD DE SEGURO

BBVA
NIT. 860.003.020-1

SOLICITUD/CERTIFICADO
SEGURO VIDA GRUPO DEUDORES PÓLIZA No.

Amparos: Vida e Incapacidad Total y Permanente.

FECHA DE CONTABILIZACIÓN DEL CRÉDITO			SUCURSAL	CIUDAD
Año	Mes	Día		
BENEFICIARIO			**NIT**	
BBVA COLOMBIA S.A			860.003.020-1	
VIGENCIA DESDE			**VIGENCIA HASTA**	
Año	Mes	Día	FIN DEL CREDITO A LAS 24 HORAS	

DATOS DEL TOMADOR/ASEGURADO

NOMBRES Y APELLIDOS		IDENTIFICACIÓN		EDAD
DIRECCIÓN		**TELÉFONO**	**CIUDAD**	
FECHA DE NACIMIENTO	Año / Mes / Día	**SEXO** M F	**OCUPACIÓN/ PROFESIÓN**	

DATOS DEL SEGURO

TASA	EXTRA PRIMA	ANEXO ITP		OBLIGACIÓN NO	VALOR DE LA OBLIGACIÓN (Vr. Asegurado)
%	%	Si	No		
PRIMA ANUAL	$	**PERIODICIDAD**	A S T M	**Vr. PRIMA**	

Beneficiario en exceso del seguro (Únicamente para créditos de Libranza y Consumer finance)

NOMBRES Y APELLIDOS	PARENTESCO	% PARTICIPACIÓN

TODAS LAS PREGUNTAS DEBEN SER CONTESTADAS A MANO POR EL ASEGURADO EN FORMA CLARA SIN USAR RAYAS NI COMILLAS

DECLARACIÓN DE ASEGURABILIDAD (DATOS SENSIBLES)

ESTATURA	cm	PESO	Kg	FUMA	Si	No	Cuántos cigarrillos diarios?

Deportes que practica		Si	No
¿HA SIDO SOMETIDO A ALGUNA INTERVENCIÓN QUIRÚRGICA?			
¿SUFRE ALGUNA INCAPACIDAD FÍSICA O MENTAL?			
¿HA SIDO SOMETIDO A TRATAMIENTO ANTIALCOHÓLICO O POR DROGADICCIÓN?			
¿HA SUFRIDO O SUFRE ALGUNA ENFERMEDAD PROFESIONAL?			
¿HA SUFRIDO O SUFRE DE ALGUNA ENFERMEDAD O PROBLEMA DE SALUD DE LOS SIGUIENTES APARATOS, SISTEMAS U ÓRGANOS?			
TRASTORNOS MENTALES O PSIQUIÁTRICOS			
PARÁLISIS, EPILEPSIA, VÉRTIGOS, TEMBLOR, DOLORES DE CABEZA FRECUENTES O ENFERMEDADES DEL SISTEMA NERVIOSO			
BOCIO, DIABETES O ENFERMEDADES DEL SISTEMA ENDOCRINO			
REUMATISMO, ARTRITIS, GOTA O ENFERMEDADES DE LOS HUESOS, MÚSCULOS O COLUMNA			
ENFERMEDADES DEL BAZO, ANEMIAS, INFLAMACIÓN DE GANGLIOS LINFÁTICOS O ENFERMEDADES DEL SISTEMA HEMOLINFÁTICO O ENFERMEDADES INMUNOLÓGICAS			
DOLOR EN EL PECHO, TENSIÓN ARTERIAL ALTA, INFARTO O CUALQUIER ENFERMEDAD DEL CORAZÓN			
ENFERMEDADES RENALES-CÁLCULOS-PRÓSTATA-TESTÍCULOS			
ASMA, TOS CRÓNICA, TUBERCULOSIS O CUALQUIER ENFERMEDAD DE LOS PULMONES O DEL SISTEMA RESPIRATORIO			
ÚLCERA DEL ESTÓMAGO O DUODENO, ENFERMEDADES DEL RECTO, ESÓFAGO, VESÍCULA, HÍGADO, DIARREAS FRECUENTES O ENFERMEDADES DEL SISTEMA DIGESTIVO			
ENFERMEDADES EN LOS OJOS, OÍDOS, NARIZ, GARGANTA, RONQUERA O PROBLEMAS DE ÓRGANOS DE LOS SENTIDOS			
CÁNCER O TUMORES DE CUALQUIER CLASE			
SI ES MUJER, ¿HA TENIDO ENFERMEDADES O TUMORES EN SENOS, MATRIZ, OVARIOS?			
¿HA SIDO SOMETIDO EN ALGUNA OCASIÓN O LE HAN SUGERIDO LA PRÁCTICA DE EXAMEN PARA DIAGNÓSTICO DEL SIDA? CASO POSITIVO INDIQUE EL RESULTADO.			
¿SUFRE O HA SUFRIDO CUALQUIER PROBLEMA DE SALUD NO CONTEMPLADO ANTERIORMENTE?			

SI CONTESTÓ AFIRMATIVAMENTE CUALQUIERA DE LAS ANTERIORES PREGUNTAS, DETALLE LA ENFERMEDAD Y FECHAS DE OCURRENCIA:

Expresamente declaro que todas las respuestas aquí son exactas, completas, verídicas y acepto que cualquier omisión, inexactitud o reticencia de las mismas, sean tratadas de acuerdo con el artículo 1058 del código de comercio.

En créditos de libranza y Consumer finance, si hay lugar a pago de indemnización que exceda el valor de la deuda, la proporción en exceso se entregará a los beneficiarios designados por el asegurado o en su defecto a los beneficiarios de ley.

Las actividades a las que me dedico son lícitas y no generan ningún riesgo o azarosidad contra mi vida.

En desarrollo al artículo 34 ley 23 de 1981, autorizo a cualquier médico, hospital, clínica, compañía de seguros u otra institución para suministrar a los beneficiarios o a la Aseguradora toda información que posea sobre mi salud y/o epicrisis o historias clínicas aún con posterioridad a la ocurrencia de los riesgos amparados. La presente solicitud formará parte del contrato de seguro que aquí se solicita, si éste llegare a celebrarse.

AUTORIZACIÓN DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES

La Aseguradora recolectará, usará y tratará sus datos personales principalmente para fines relacionados con la actividad y prestación de servicios afines a la actividad aseguradora, así como para actividades de marketing, mercadeo, atención al cliente y demás establecidas en nuestra política de tratamiento de datos personales disponible en www.bbvaseguros.com. El cliente imparte de manera previa, expresa e informada las siguientes autorizaciones: La Aseguradora como responsable del tratamiento, a los encargados del mismo o a quien represente sus derechos, para las siguientes finalidades: El cumplimiento de obligaciones establecidas en la ley, en normas extranjeras e internacionales, análisis de riesgos, generación de estadísticos, de control, supervisión, muestreos, mercadeo y comercialización de productos, verificación y actualización de información. En todo caso, el cliente se reserva el derecho de solicitar que no se utilice la información con fines de mercadeo y/o promoción de productos o servicios, en desarrollo de lo anterior los mismos podrán: a) almacenar, consultar, procesar, reportar, obtener, actualizar, compilar, tratar, intercambiar, compartir, enviar, modificar, emplear, utilizar, eliminar, ofrecer, suministrar, grabar, conservar y divulgar a responsables o encargados del tratamiento de datos personales, los operadores, centrales o bases de información y/o cualquier otra entidad nacional o extranjera que tenga los mismos fines así como a contratistas y/o terceras personas con las cuales se establezcan relaciones comerciales, legales, contractuales, que permitan el desarrollo del objeto social de la Aseguradora, la información de carácter personal, incluida la de carácter financiero, así como aquella que se derive de la relación y/u operaciones que llegue a celebrar con el responsable del tratamiento o que llegaren a conocer, siempre que a tales compañías, contratistas y/o terceros se les exija cumplir la ley Colombiana sobre protección o tratamiento de datos personales y las políticas internas del BBVA; b) transferir o transmitir, nacional o internacionalmente, y suministrar toda la información para los fines indicados y el desarrollo, prestación de los servicios principales, accesorios y conexos del responsable, los encargados y demás sujetos citados. Igualmente, se informa que es facultativo que responda preguntas sobre datos sensibles (salud, sexo, religión, entre otros) o sobre menores de edad. Sus derechos son los previstos en la constitución y las leyes 1266 de 2008 y 1581 de 2012 los cuales puede ejercer observando igualmente nuestra política de tratamiento de datos personales que se encuentra en nuestra página web. El cliente se obliga a suministrar información veraz y verificable, actualizar la información personal, comercial y financiera, por lo menos una vez al año o cada vez que así lo solicite la aseguradora entregando los soportes y documentos correspondientes.

"Terminación automática del contrato de seguro, la mora en el pago de la prima de la póliza o de los certificados o anexos que se expidan con fundamento en ella, producirá la terminación automática del contrato y dará derecho al asegurador para exigir el pago de la prima devengada y de los gastos causados con ocasión de la expedición del contrato" Art. 1068 Código de Comercio.

El clausulado con las condiciones generales de su póliza están a su disposición, a través de las páginas: www.bbva.com.co y

CERTIFICO QUE RECIBÍ LA INFORMACIÓN RELATIVA AL PRODUCTO DE FORMA CLARA Y COMPLETA, QUE DILIGENCIÉ LIBREMENTE LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN ÉSTA SOLICITUD INCLUYENDO MI ESTADO REAL DE SALUD Y SUSCRIBO EL PRESENTE DOCUMENTO COMO CONSTANCIA DE ACEPTACIÓN DEL PRESENTE SEGURO.

Para constancia se firma en _____ a los ___ días del mes de _____ de _____

ASEGURADO

Dirección para notificaciones:
Línea de Atención y Servicio al Cliente:
Consumidor Financiero Carrera 9 N 72-21 Piso 6 en Bogotá D.C.; Teléfono 3438385, e-mail:defensoria.bbvacolombia@bbva.com.co

ORIGINAL CLIENTE-COPIA 1 BANCO COPIA 2 ASEGURADORA

VI130-0116-1

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

BBVA Creando Oportunidades

ANEXO No. 7
FORMATO DE SOLICITUD ACTUAL

SOLICITUD INDIVIDUAL
PARA SEGURO DE VIDA GRUPO DEUDORES
BBVA COLOMBIA

DATOS DEL TOMADOR

TIPO DE DOCUMENTO		RAZÓN SOCIAL	
☐ CC ☐ CE ☒ NIT No. 860.003.020-1		BBVA COLOMBIA	
DIRECCIÓN: CARRERA 9 # 72 - 21	TELÉFONO: 3471600	CIUDAD / MUNICIPIO: BOGOTÁ	DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA

INFORMACIÓN DEL ASEGURADO

TIPO DE DOCUMENTO: CC ☐ CE ☐	NÚMERO DE DOCUMENTO	LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN: DÍA MES AÑO	
NOMBRES Y APELLIDOS			
DIRECCIÓN DOMICILIO	TELÉFONO FIJO / CELULAR	CIUDAD / MUNICIPIO	DEPARTAMENTO
CORREO ELECTRÓNICO	LUGAR Y FECHA DE NACIMIENTO: DÍA MES AÑO	GÉNERO: M ☐ F ☐	PESO: Kg / ESTATURA: Cm
DEPORTES QUE PRACTICA		VALOR CRÉDITO (SEGURO DE GRUPO DEUDORES): $	
☐ DIESTRO ☐ AMBIDIESTRO ☐ ZURDO	ESTADO CIVIL: ☐ SOLTERO ☐ CASADO ☐ VIUDO ☐ SEPARADO ☐ DIVORCIADO ☐ UNIÓN LIBRE		
OCUPACIÓN DETALLADA	EN CASO DE SER PENSIONADO, MARQUE TIPO: ☐ POR SERVICIO ☐ POR EDAD ☐ POR SANIDAD ☐ POR INVALIDEZ ☐ POR SUSTITUCIÓN		

DECLARACIÓN DE ASEGURABILIDAD

1. ¿HA PADECIDO O ESTÁ EN TRATAMIENTO DE ALGUNA ENFERMEDAD O INCAPACIDAD RELACIONADA CON LO SIGUIENTE?

CORAZÓN	SI ☐ NO ☐	PRESIÓN ARTERIAL	SI ☐ NO ☐	ENFERMEDADES NEUROLÓGICAS	SI ☐ NO ☐	RIÑONES	SI ☐ NO ☐
CÁNCER	SI ☐ NO ☐	DIABETES	SI ☐ NO ☐	ENFERMEDADES HEPÁTICAS	SI ☐ NO ☐	PULMONES	SI ☐ NO ☐
ENFERMEDADES PSIQUIÁTRICAS	SI ☐ NO ☐	INFECCIÓN POR HIV	SI ☐ NO ☐	TRASTORNOS MENTALES	SI ☐ NO ☐		

2. ¿HA PADECIDO, PADECE O ES TRATADO ACTUALMENTE DE DEPRESIÓN, DEMENCIA O TRASTORNOS MENTALES U OTRA ENFERMEDAD DIFERENTE A LAS MENCIONADAS EN EL NUMERAL ANTERIOR? SI ☐ NO ☐

3. ¿HA TENIDO O TIENE ALGUNA PÉRDIDA FUNCIONAL O ANATÓMICA, HA PADECIDO ACCIDENTES QUE IMPIDAN DESEMPEÑAR LABORES PROPIAS DE SU OCUPACIÓN O SABE SI SERÁ HOSPITALIZADO O INTERVENIDO QUIRÚRGICAMENTE? SI ☐ NO ☐

4. ¿HA TENIDO O TIENE ALGÚN PROCEDIMIENTO QUIRÚRGICO PENDIENTE? SI ☐ NO ☐

EN CASO DE HABER CONTESTADO AFIRMATIVO A ALGUNA DE LAS PREGUNTAS ANTERIORES, POR FAVOR DAR DETALLES: _____

CLÁUSULA DE AUTORIZACIÓN

DECLARO QUE ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA ENTIDAD COOPERATIVA ME HA INFORMADO: 1) QUE EL AVISO DE PRIVACIDAD Y EL MANUAL DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES SE ENCUENTRAN EN LA PÁGINA WEB: HTTPS://WWW.ASEGURADORASOLIDARIA.COM.CO; 2) QUE SON FACULTATIVAS LAS RESPUESTAS A LAS PREGUNTAS SOBRE DATOS DE NIÑAS, NIÑOS, ADOLESCENTES Y AQUELLAS QUE VERSEN SOBRE DATOS SENSIBLES Y EN CONSECUENCIA NO HE SIDO OBLIGADO A RESPONDERLAS; 3) QUE COMO TITULAR DE LA INFORMACIÓN, ME ASISTEN LOS DERECHOS PREVISTOS EN LAS LEYES 1266 DE 2008 Y 1581 DE 2012. EN ESPECIAL, ME ASISTE EL DERECHO A CONOCER, ACTUALIZAR, RECTIFICAR, REVOCAR Y SUSPENDER LAS INFORMACIONES QUE SE HAYAN RECOGIDO SOBRE MÍ.

AUTORIZO DE MANERA PREVIA, EXPRESA E INFORMADA A ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA ENTIDAD COOPERATIVA Y/O CUALQUIER SOCIEDAD CONTROLADA, DIRECTAMENTE O INDIRECTAMENTE QUE TENGA PARTICIPACIÓN ACCIONARIA O SEA ASOCIADO, DOMICILIADO EN COLOMBIA Y/O EN EL EXTERIOR, TERCEROS CONTRATADOS POR ESTA O A QUIEN LA REPRESENTE, EN ADELANTE LA ASEGURADORA PARA:

A) RECOLECTAR, SOLICITAR, CONSULTAR, VERIFICAR, ALMACENAR, COMPARTIR, ENVIAR, REPORTAR, MODIFICAR, TRANSFERIR, TRANSMITIR, ACTUALIZAR, USAR, GRABAR Y CONSERVAR MIS DATOS PERSONALES, FINANCIEROS Y CREDITICIOS, ASÍ COMO AQUELLA INFORMACIÓN DERIVADA DE LA RELACIÓN CONTRACTUAL, SIEMPRE Y CUANDO SEA PARA LA SIGUIENTE FINALIDAD: 1) DESARROLLAR LAS ACTIVIDADES PROPIAS DEL CONTRATO DE SEGURO.

B) RECOLECTAR, SOLICITAR, CONSULTAR, VERIFICAR, ALMACENAR, COMPARTIR, ENVIAR, REPORTAR, MODIFICAR, ACTUALIZAR, USAR, GRABAR Y CONSERVAR LOS DATOS PERSONALES DE MIS HIJOS MENORES DE EDAD EN MI CALIDAD DE SU REPRESENTANTE LEGAL, SIEMPRE Y CUANDO SE CUMPLA CON EL INTERÉS PREVALENTE DEL MENOR CONFORME AL ARTÍCULO 12 DEL DECRETO 1377 DE 2013.

C) RECOLECTAR, SOLICITAR, CONSULTAR, VERIFICAR, ALMACENAR, COMPARTIR, ENVIAR, REPORTAR, MODIFICAR, ACTUALIZAR, USAR, GRABAR Y CONSERVAR MIS DATOS PERSONALES SENSIBLES INCLUYENDO LA HISTORIA CLÍNICA Y DATOS SOBRE MI ESTADO DE SALUD, AÚN DESPUÉS DE MI FALLECIMIENTO, ENTENDIÉNDOSE LA POSIBILIDAD DE OBTENER COPIA DE MI HISTORIA CLÍNICA, SIEMPRE Y CUANDO SE CUMPLA CON LO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 6 DE LA LEY 1581 DE 2012.

D) TRANSMITIR Y TRANSFERIR MIS DATOS PERSONALES A TERCEROS PAÍSES SIEMPRE QUE SE REQUIERA CUMPLIR LAS FINALIDADES DESCRITAS O SE ENCUENTRE ESTIPULADA POR EL ARTÍCULO 26 DE LA LEY 1581 DE 2012.

DECLARACIONES – FIRMA

PARA EFECTOS DE LA PRESENTE SOLICITUD, DECLARO EXPRESAMENTE LO SIGUIENTE:

1. TANTO MI PROFESIÓN U OFICIO DECLARADOS EN LA PRESENTE SOLICITUD, SON LÍCITAS Y LAS EJERZO DENTRO DE LOS MARCOS LEGALES Y NO PRACTICO DEPORTES O AFICIONES QUE AFECTEN MI INTEGRIDAD. LOS DINEROS UTILIZADOS PARA PAGAR LA PRIMA DE SEGUROS NO PROVIENEN DE NINGUNA ACTIVIDAD ILÍCITA DE LAS CONTEMPLADAS EN EL CÓDIGO PENAL COLOMBIANO.
2. LAS DECLARACIONES CONTENIDAS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTAS, COMPLETAS Y VERÍDICAS EN LA FORMA QUE APARECEN DESCRITAS, POR LO TANTO, LA FALSEDAD, OMISIÓN, ERROR O RETICENCIA EN ELLAS TENDRÁN LAS CONSECUENCIAS ESTIPULADAS EN LOS ARTÍCULOS 1058 Y 1158 DEL CÓDIGO DE COMERCIO.

COMO CONSTANCIA DE HABER LEÍDO, ENTENDIDO Y ACEPTADO LO ANTERIOR, DECLARO QUE LA INFORMACIÓN QUE HE SUMINISTRADO ES EXACTA EN TODAS SUS PARTES Y FIRMO EL PRESENTE DOCUMENTO A LOS _____ DÍAS DEL MES DE _____ DEL AÑO _____ EN LA CIUDAD DE _____.

NOMBRES Y APELLIDOS

FIRMA SOLICITANTE
C.C.

GERENCIA DE PROCESOS Y CALIDAD SOLICITUD INDIVIDUAL PARA SEGURO DE VIDA GRUPO DEUDORES BBVA COLOMBIA FM-GCOM-34 V 2 13/05/2016

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA
VIGILADO

MEMORIAL PARA REGISTRAR DR. CHAVARRO MAHECHA RV: SUSTENTACION RECURSO APELACION RADICADO 1110013103 027 2019 00860 01

Secretario 02 Sala Civil Tribunal Superior - Seccional Bogota <secsctribsupbta2@cendoj.ramajudicial.gov.co>
Lun 06/02/2023 8:58

Para: **2 GRUPO CIVIL <2grupocivil@cendoj.ramajudicial.gov.co>**

1 archivos adjuntos (4 MB)
SUSTENTACION RECURSO APELACION CON SUS ANEXOS.pdf;

MEMORIAL PARA REGISTRAR DR. CHAVARRO MAHECHA

Cordial Saludo,

OSCAR FERNANDO CELIS FERREIRA
Secretario Sala Civil
Tribunal Superior de Distrito Judicial de Bogotá
Avenida Calle 24 N° 53-28 Torre C Oficina 305
Teléfono 423 33 90 Extensión 8349
Email: secsctribsupbta2@cendoj.ramajudicial.gov.co

De: Alexandra Pava <alepavah@gmail.com>
Enviado: lunes, 6 de febrero de 2023 8:44 a. m.
Para: Secretario 02 Sala Civil Tribunal Superior - Seccional Bogota <secsctribsupbta2@cendoj.ramajudicial.gov.co>
Asunto: SUSTENTACION RECURSO APELACION RADICADO 1110013103 027 2019 00860 01

Estando dentro del término para sustentar, en mi calidad de apelante remito escrito de sustentación

--

Alexandra Pava Hernández
Abogada, experta en logística y gestión de riesgos,
Practitioner en PNL, Alta Gerencia Política y Gobernabilidad.

DOCTOR:

JAIME CHAVARRO MAHECHA

Magistrado

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE BOGOTÁ SALA DE DECISIÓN CIVIL

E.S.D.

REF: ESCRITO DE SUSTENTACIÓN A RECURSO DE APELACIÓN DE SENTENCIA.

PROCESO: RESTITUCIÓN DE TENENCIA

RADICADO: 1110013103 027 2019 00860 01

DTE: FRANCISCO ORTIZ ALFONSO

DDOS: ADRIANA ESTEBAN GARAY, ANA BEATRIZ ORTIZ MEDINA, JUAN BERNARDO ORTIZ MEDINA, LUIS CARLOS ORTIZ MEDINA Y ROSA MARIA ORTIZ MEDINA.

ALEXANDRA PABA HERNÁNDEZ, mayor de edad, domiciliada y residente en la ciudad de Bogotá, identificada con la cédula de ciudadanía número 45.501.344, abogada con tarjeta profesional número 77430 del C.S. de la J/tura., actuando en calidad de apoderada judicial de los señores ANA BEATRIZ ORTIZ MEDINA, JUAN BERNARDO ORTIZ MEDINA, LUIS CARLOS ORTIZ MEDINA Y ROSA MARIA ORTIZ MEDINA, parte apelante dentro del proceso de la referencia, por medio del presente escrito y oportunamente, me permito presentar en adjunto el escrito de sustentación al recurso de apelación presentado contra la sentencia de fecha 26/10/2022 emitida por el Juzgado Veintisiete Civil del Circuito de Bogotá, recurso admitido por su despacho y el cual debe ser sustentado por escrito, esto de acuerdo a lo establecido en el auto del día 26/10/2022, notificado por estrado en dicha calenda, sustentación que hago en los siguientes términos:

1. RAZONES DE INCONFORMIDAD CON LA PROVIDENCIA APELADA

De conformidad con lo establecido en el artículo 322 numeral 1 inciso 2° y numeral 3° del Código General del Proceso, me permito presentar las inconformidades que

le asisten a mis poderdantes respecto al fallo emitido por el Juzgado Veintisiete Civil del Circuito de Bogotá.

Las inconformidades básicamente se encuentran sustentadas en el hecho de no haberse demostrado plenamente el comodato precario que se demanda y haberse ignorado por completo los actos de posesión de mis prohijados al momento de fallar, ya que se demostró en el expediente en el cual se les aducía como meros comodatarios, que los mismos nunca reconocieron tal calidad, lo cual aparece palmariamente demostrado en los interrogatorios a que fueron sometidos mis mandantes ANA BEATRIZ ORTIZ MEDINA, JUAN BERNARDO ORTIZ MEDINA, LUIS CARLOS ORTIZ MEDINA Y ROSA MARIA ORTIZ MEDINA, los cuales, además indicaron al fallador que realizan hasta la fecha actos posesorios tales como arrendamiento de partes del inmueble de la carrera 8 No. 11-30 sur, y que en el inmueble se encontraba hasta el momento del desalojo en el mes de noviembre de 2022 una fábrica de cubrecamas, ocupando una parte del segundo piso del inmueble, además, hasta la fecha del desalojo se estuvo explotando económicamente una parte del inmueble como parqueadero, en el espacio donde en un tiempo fungieron canchas deportivas y patio de recreo, cuando en dicho inmueble estaba funcionando una institución educativa denominada Colegio Isaac Newton, que en alguna época fue una explotación conjunta entre demandante y demandados, los cuales son además de lo anterior padre e hijos.

Por otra parte, se ignora por parte del A- Quo, lo relacionado con las fuentes de las obligaciones, ya que para que exista un contrato deben reunirse una serie de condiciones tales como se relata:

1.- EL CONTRATO COMO FUENTE DE LAS OBLIGACIONES

“La más autorizada doctrina nos explica que toda obligación tiene su fuente u origen en la ley, que ésta es la única fuente legítima -causa- del nacimiento de todo lazo o nexo jurídico -obligación-; sin embargo, si bien es cierto que en cualquier sistema de derecho escrito como el nuestro, la obra del legislador es en último término la causa generadora de las obligaciones, no menos cierto resulta que la ley por sí sola no es la causa única de su nacimiento, sino que por el contrario, lo que da vida a las obligaciones son los diferentes acontecimientos naturales y acciones humanas -hechos y actos jurídicos- que actualizan los supuestos normativos contenidos en la ley.”[1]

Así lo sostiene el gran civilista francés Bonnecase en su obra "Elementos de Derecho Civil, Derecho las Obligaciones, de los Contratos y del Crédito", cuando

[1] https://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/tribunalm/biblioteca/luisfernando/fuentesobligaciones.htm

dice que: "*Al mismo tiempo, estamos obligados a declarar que las obligaciones, ya se deriven de actos o de hechos jurídicos, encuentran su origen en la ley, erigida por tanto como fuente suprema de las obligaciones.- Se hace bien al considerar la cuestión en todos sus aspectos; siempre se encontrará la ley, en el sentido amplio del término, como origen de los efectos del acto y del hecho jurídicos. Por tanto, el mecanismo jurídico constituido por estas dos nociones técnicas, tiene por objeto inmediato la aplicación de la ley, sin que pueda tener otro. Las situaciones jurídicas que de ella se derivan son sus consecuencias mediatas, ya se trate de obligaciones o de derechos reales* ".

En consecuencia, por hecho jurídico debemos entender aquel acontecimiento natural o del hombre que el derecho toma en cuenta para atribuirles consecuencias jurídicas. En tanto que por acto jurídico se entiende la manifestación exterior de la voluntad que se hace con el fin de crear, transmitir, modificar o extinguir una obligación o un derecho y que esa manifestación de voluntad produzca el efecto deseado por su autor, existiendo de tal manera actos en los que sólo interviene una voluntad, llamados unilaterales, y aquellos en que es necesaria la concurrencia de dos o más voluntades, denominados actos bilaterales; los hechos jurídicos pueden ser voluntarios e involuntarios, y aquellos a su vez lícitos e ilícitos.

En Colombia, para que un contrato sea válido se requiere que cumpla con los siguientes requisitos generales:

- ☐ Que las partes contratantes sean legalmente capaces, es decir, que tengan capacidad legal para poder obligarse.
- ☐ Que se dé el consentimiento y este se encuentre libre de vicio, es decir, que de manera libre y espontánea se dé la aceptación.

Adicionalmente, cada contrato tiene una serie de requisitos formales que deben ser observados, como la identificación de las partes, la firma de las partes, el precio, la fecha de cumplimiento, el lugar de cumplimiento de la obligación, etc.

Nuestro Código Civil en su ARTICULO 1495 consagra: *“Contrato o convención es un acto por el cual una parte se obliga para con otra a dar, hacer o no hacer alguna cosa. Cada parte puede ser de una o de muchas personas”.*

Por su parte el ARTICULO 1502. De la misma codificación señala *“<REQUISITOS PARA OBLIGARSE>. Para que una persona se obligue a otra por un acto o declaración de voluntad, es necesario:*

1o.) que sea legalmente capaz.

2o.) que consienta en dicho acto o declaración y su consentimiento no adolezca de vicio.

3o.) que recaiga sobre un objeto lícito.

4o.) que tenga una causa lícita.

La capacidad legal de una persona consiste en poderse obligar por sí misma, sin el ministerio o la autorización de otra."

El demandante, señor FRANCISCO ORTIZ ALFONSO, aduce que celebró un contrato de comodato impropio con los demandados ANA BEATRIZ ORTIZ MEDINA, JUAN BERNARDO ORTIZ MEDINA, LUIS CARLOS ORTIZ MEDINA Y ROSA MARIA ORTIZ MEDINA, y que por la confianza entre padres e hijos no se le colocó término, ni se efectuó firma de documento, situaciones estas que ponen en duda la celebración de dicho contrato y que este haya nacido a la vida jurídica, agrega además que entregó las partes que ocupan a los demandados por mera liberalidad, pero sin ceder derechos diferentes a éstos que los de la mera tenencia comodataria.

Al tenor de la norma transcrita (artículo 1502 código civil), el último presupuesto "*que tenga una causa lícita"* no se cumple en razón a que el bien ubicado en la carrera 8 No. 11-30 sur, fue adquirido de manera conjunta con dineros de ambas partes, previa liquidación de una sociedad conyugal anterior entre el ahora demandante Francisco Ortiz Alfonso y la señora MARIA ALICIA MEDINA DE ORTIZ, quien fallece el día 18/08/1983, generando hijuelas para cada una de las partes, esto es, la demandante por su calidad de cónyuge y los demandados como hijos de la finada, situación que es reconocida por el demandante en su interrogatorio donde además agrega que a la demandada ROSA MARIA ORTIZ MEDINA, le entregó la mayor parte de la herencia que le correspondió en efectivo y que por ello no tiene derecho de reclamar nada. Lo anterior aunado a que la misma apoderada del demandante en una de las preguntas que le realiza al testigo GERMÁN ACOSTA, lo interroga sobre si tiene conocimiento de los dineros con los cuales se compró el bien objeto de la litis y si conocia de la sucesión de la finada MARIA ALICIA MEDINA DE ORTIZ, lo cual se debe considerar como una confesión de la parte actora de la Litis.

En la diligencia de Inspección judicial en el inmueble objeto de este proceso, el despacho encuentra las explotaciones económicas antes anotadas, léase fábrica de cubrelechos y explotación de parqueadero privado, pero no hace mención a las mismas en ninguna parte del fallo, considerándolas irrelevantes, lo cual afecta de manera rotunda el derecho que les asiste a los demandados como lo que son, verdaderos poseedores durante más de 20 años, tiempo en que se adquieren derechos para convertirse en propietarios, derecho que les ha sido consuetudinariamente vulnerado por el demandante, quien de manera fraudulenta, ha intentado mediante diversos procesos sacarlos del inmueble, tratandolos de diferentes calidades, entre ellas la de poseedores, tal como ocurrió en el juicio llevado a cabo en el Juzgado 48 Civil del Circuito, radicado No. 495/2013, proceso este de tipo reivindicatorio, en contra de mis prohijados. Siendo este juicio Reivindicatorio, es una confesión por parte del demandante FRANCISCO ORTIZ

ALFONSO, de que sus hijos, hoy igualmente demandados son más que meros comodatarios, ya que al comodatario no se le puede demandar mediante una juicio Reivindicatorio, y al hacerlo el mismo está dándoles el carácter que en realidad detentan, esto es el de Poseedores.

Esta conducta del demandante frente a sus hijos es vulnerativa del principio de la buena fe, violando los lazos familiares mas íntimos en un atentado, a toda vista, fraudulento en contra de las personas a las que debió proteger, conducta que puede considerarse dolosa de acuerdo con los presupuestos del artículo 1515 del Código Civil.

En cuanto al comodato se desconoce una vez más la legislación vigente ya que el ARTICULO 2202, del Código Civil consagra." <LIMITACIONES DEL COMODATARIO>. El comodatario no puede emplear la cosa sino en el uso convenido, o a falta de convención en el uso ordinario de las de su clase".

Se probó en el expediente, incluso en interrogatorio del mismo demandante quien manifestó que sus hijos, demandados *"hacían en el bien lo que les daba la gana…"*, sin respetar ni pedir permisos o autorizaciones para ejecutar, contratos, mejoras y actos que son verdaderamente de un carácter más posesorio y que rebasan los límites de la tenencia alegada.

Es así como quedó demostrado que la demandada ANA BEATRIZ ORTIZ MEDINA, tuvo hasta el momento del desalojo y acatando una orden judicial, alquilado el apartamento que ocupa dentro del bien objeto de restitución, acto este en desconocimiento de calidad de tenedora y configurándose como poseedora, actuando como señora y dueña del predio.

Por su parte el demandado JUAN BERNARDO ORTIZ MEDINA, realizó ampliación y construcción de un piso adicional sobre su apartamento, totalmente nuevo, sin pedir permiso alguno, actuando en calidad de poseedor tal cual como lo ha venido haciendo desde que se mudaron al predio, es decir por más de 20 años, habida cuenta que residió allí desde 1986, hasta la fecha del desalojo.

La demandada ROSA MARIA ORTIZ MEDINA, explotó económicamente el bien ubicado en la carrera 8 No. 11-30 sur, hasta la fecha del desalojo, en actividades de Parqueadero Privado y Arriendos varios a diferentes personas.

No debe olvidarse que el código civil consagra:

"ARTICULO 762. <DEFINICION DE POSESION>. La posesión es la tenencia de una cosa determinada con ánimo de señor o dueño, sea que el dueño o el que se da por tal, tenga la cosa por sí mismo, o por otra persona que la tenga en lugar y a nombre de él.

El poseedor es reputado dueño, mientras otra persona no justifique serlo."

La posesión es "la tenencia de una cosa determinada con ánimo de señor o dueño". De aquí se desprenden sus dos elementos esenciales: el corpus y el animus. El corpus es el cuerpo de la posesión, esto es el elemento material, objetivo, los hechos físicamente considerados con que se manifiesta la subordinación en que una cosa se encuentra respecto del hombre. El animus, por su parte, es el elemento interno o subjetivo, es el comportarse "como señor y dueño" del bien cuya propiedad se pretende.[2]

Tanto la posesión como la mera tenencia pueden probarse con los medios ordinarios y, en general, con cualesquiera medios que sean útiles para la formación del convencimiento del juez. En forma particular el Art. 981 del Código Civil establece que se deberá probar la posesión del suelo por hechos positivos de aquellos a que sólo da derecho el dominio, como el corte de maderas, la construcción de edificios, la de cerramientos, las plantaciones o sementeras, y otros de igual significación, ejecutados sin el consentimiento del que disputa la posesión.[3]

Tanto la posesión como la mera tenencia pueden probarse con los medios ordinarios y, en general, con cualesquiera medios que sean útiles para la formación del convencimiento del juez (Art. 175 Código de Procedimiento Civil).

En este caso hasta el demandante en persona en su interrogatorio reconoce abiertamente haber perdido la autoridad sobre el inmueble demandado en comodato precario, que muchas veces hasta ha tenido dificultad para entrar al predio, así también, existen pruebas de acciones ejecutadas por los demandados que inequívocamente revelan que son más que meros tenedores o comodatarios, es por ello que las razones esbozadas permiten inferir que el comodato impropio no fue demostrado, que solo existe en la mente del demandante, y que el fallo apelado no refleja la realidad procesal ni la real.

Para administrar justicia debe primero encontrarse la verdad de los hechos que sean relevantes conforme al derecho sustancial. La verdad se presenta como una correspondencia entre lo ocurrido en el mundo y la reconstrucción que de ello hace el juez en la sentencia a partir de las diferentes versiones alegadas por los sujetos procesales, teniendo en cuenta las normas que regulan lo atinente a la aportación, práctica y valoración probatoria.

De igual forma para que exista justicia se requiere que previamente se encuentre la verdad: *"… la veracidad y la aceptabilidad del juicio sobre los hechos es condición necesaria (obviamente no suficiente) para que pueda decirse que la decisión judicial es justa. En consecuencia, hay un posible margen de injusticia de*

[2] Sentencia T-518/03 Corte Constitucional.
[3] Ibidem

la sentencia, que coincide teóricamente con la eventual desviación entre la forma concreta en que los hechos se determinen y su verdad empírica"[4]

Atendiendo a la oportunidad de allegar pruebas de que trata el numeral 3 del artículo 327 del CGP, aporto con este libelo contratos de arrendamientos suscritos después del término para pedir pruebas en primera instancia, entre mis poderdantes y diferentes particulares, para efectos de demostrar la posesión de los mismos sobre el inmueble, tal como se alegó en la primera instancia.

Dejo constancia que cuando me fue solicitada la asistencia jurídica por los demandados ya se habían vencido los términos para presentar las pruebas, por lo cual estas no pudieron ser tenidas en cuenta en la primera instancia y que para lograr una verdadera justicia dentro de este asunto, solicito a usted considerarlas ya que su objeto es demostrar hechos alegados en la primera instancia.

En consecuencia aporto:

Contrato de arrendamiento de local comercial suscrito entre la demandada Rosa Maria Ortiz Medina y el señor ALBERTO JAVIER VALENCIA GAMBA, mayor de edad, identificado con la cédula de ciudadanía No. 19.431.969, quien reside en Bogotá D.C. Dirección Calle 10a sur.# 6-56, el cual desarrollaba hasta la fecha del desalojo, la actividad de Taller de Ebanistería y fabricación de muebles en madera y similares, suscrito el día 10 de noviembre de 2021.

Contrato de arrendamiento de local comercial suscrito entre la demandada Rosa Maria Ortiz Medina y el señor DAWISON HERRERA CARDENAS, mayor de edad, identificado con la cédula de ciudadanía No. 79.911.064, , quien reside en Bogotá D.C. dirección Cra 123 #14b-46 conjunto residencial Solsticio etapa 6 apartamento 404, el cual desarrollaba hasta la fecha del desalojo, la actividad de Taller de mecánica automotriz, suscrito el día septiembre veintisiete (27) de dos mil veintiuno (2021)

Contrato de arrendamiento de salón suscrito entre el demandado Luis Carlos Ortiz Medina y el señor MIGUEL ANGEL MONZON SANTANA, mayor de edad, identificado con la cédula de ciudadanía No. 1000139738, quien reside en Bogotá D.C. dirección calle 31 sur #2-22, con correo electrónico: miguelangelmonzonn@gmail.com, el cual se llevó a cabo hasta la fecha del desalojo, suscrito el día 03 de febrero de dos mil veintidós (2022)

Contrato de arrendamiento de autorización de grabación suscrito entre el demandado Luis Carlos Ortiz Medina y la señora ANA CAROLINA RODRIGUEZ GARCIA, mayor de edad, identificada con la cédula de ciudadanía No. 1001315680, quien reside en Bogotá D.C. el cual desarrollaba hasta la fecha del desalojo, grabaciones audiovisuales para televisión, suscrito el día 03 de febrero de dos mil veintidós (2022)

---

[4] (TARUFFO. 2005. p. 64).

Contrato de arrendamiento de vivienda urbana suscrito entre la demandada ANA BEATRIZ ORTIZ MEDINA y el señor Juan Fernando Orrego Mendoza, identificado con cédula de ciudadanía No. 80211042, quien actualmente se localiza en la Calle 17 sur #12d 27, con correo electrónico juanfer7725@gmail.com el cual hasta la fecha del desalojo, residió en el inmueble objeto de esta litis, suscrito el día 01 de noviembre de dos mil veintiuno (2021)

De igual forma para demostrar los hechos constitutivos de posesión de mis defendidos solicito se decreten las declaraciones de los señores:

1. Edwin Yes Hernandez Rodriguez. C.c. 80777384. Correo Yesidhr777@gmail.com con domicilio en la Cra 11a No. 10-40 sur. Ciudad Berna.

2. Didier Alejandro Giraldo Naranjo. C.c.1013633395. correo: didieralejandrogiraldo@gmail.com con domicilio en la Diag 15b sur No. 11-49 Barrio San Cristobal.

3. Willian Alexander Pardo Hernandez C.C. 80112450 .Correo : alexbey@hotmail.com con domicilio en la Calle 33 Sur NO. 7-21 Barrio 20 de Julio.

4. Harold Ortiz C.C. 17065195 correo cdynamo91@gmail.com. con domicilio en Calle 13 sur No.8-06 apto 105 Quinta Ramos.

5. Hugo Alirio Hernandez Beltran C.C. 19291109 correo huguitomillos@hotmail.com con domicilio en la calle 10B bis sur No. 16-43 int 13 apto 402 Barrio Restrepo

Los anteriormente citados tenían hasta la fecha del desalojo contrato de parqueadero en el inmueble objeto de litis, con la señora Rosa Maria Ortiz Medina.

2. PETICIÓN

En razón de lo antes mencionado, respetuosamente me permito solicitarle a usted su señoría lo siguiente:

1.- Se REVOQUE la decisión tomada por el A quo en fecha 26/10/2022 y en su defecto se expida un nuevo pronunciamiento que refleje la realidad que se encuentra demostrada a lo largo del proceso, esto es que el COMODATO IMPROPIO alegado no fue demostrado porque nunca existió ni nació a la vida jurídica.

2.- Como consecuencia de lo anterior, se reconozca la calidad de poseedores de mis poderdantes y su reintegro al inmueble ubicado en la carrera 8 No. 11 -30 sur.

3.- Que se decrete el reconocimiento y pago de los perjuicios a que haya lugar, a cargo de la parte demandante, provenientes del cumplimiento de lo ordenado en

la sentencia de fecha 26/10/2022, expedida por el Juzgado Veintisiete (27) Civil del Circuito de Bogotá, se hayan generado a mis poderdantes.

Atentamente,



ALEXANDRA PABA HERNANDEZ

C.C. No. 45501.344

T.P. 77.430 C S de la J/tura.

CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE LOCAL COMERCIAL

CIUDAD Y FECHA: Bogotá, noviembre diez (10) de dos mil veintiuno (2021)

ROSA MARIA ORTIZ MEDINA, mayor de edad, identificada con la cédula de ciudadanía No. 51.748.406, de Bogotá, de nacionalidad colombiana, con domicilio en la ciudad de Bogotá, quien obra en nombre propio y para efectos de este contrato se denominará el "Arrendador", por una parte, y por la otra, **ALBERTO JAVIER VALENCIA GAMBA**, mayor de edad, identificado con la cédula de ciudadanía No. 19.431.969, quien para efectos de este contrato se denominará el "Arrendatario", manifestaron que han decidido celebrar un CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE LOCAL COMERCIAL, en adelante el "Contrato", el cual se rige por las siguientes cláusulas:

Primera. – **Objeto:** Por medio del presente Contrato el Arrendador entrega a título de arrendamiento al Arrendatario el siguiente bien inmueble: Local comercial distinguido como 2-212 y 2-213 ubicados en el segundo piso del inmueble de la carrera 8 No. 11-30 sur de la ciudad de Bogotá. Las medidas y linderos del mismo se encuentran en el certificado de tradición del inmueble, distinguido con el número de matrícula inmobiliaria No. 50S-1145039

Segunda. – **Canon de Arrendamiento**: El canon de arrendamiento mensual es la suma de UN MILLON CUATROCIENTOS CIN CUENTA MIL PESOS ($1.450.000,oo) que el Arrendatario pagará anticipadamente al Arrendador o a su orden, en la carrera 8 No. 11-30 sur de la ciudad de Bogotá, dentro de los primeros cinco (05) días de cada mes, dejando constancia que los periodos mensuales son indivisibles.

Cuarta. – **Vigencia**: El arrendamiento tendrá una duración de un (1) año contados a partir de noviembre diez (10) de dos mil veintiuno (2021). No obstante, lo anterior, el término del arrendamiento se prorrogará automáticamente por periodos consecutivos de un (1) año, si ninguna de las Partes con una antelación de tres (03) meses al vencimiento del periodo inicial o de cualquiera de sus prorrogas informa a la otra Parte su decisión de terminar este Contrato. Lo anterior sin perjuicio del derecho a la renovación consagrado en el Artículo 518 del Código de Comercio. Si se acordare entre las partes un término de prorroga menor, deberá estipularse por escrito, indicando renta, plazo, lugar de pago de la renta y demás clausulas adicionales.

Quinto. – **Entrega**: El Arrendatario en la fecha de suscripción de este documento declaran recibir el Inmueble de manos del Arrendador en perfecto estado.

Sexta. - **Reparaciones**: Los daños que se ocasionen al Inmueble por parte del Arrendatario, por responsabilidad suya o de sus dependientes, serán reparados y cubiertos sus costos de reparación en su totalidad por los Arrendatarios. En todo caso, los Arrendatarios se obligan a restituir el Inmueble en el mismo estado en que lo ha recibido, salvo el deterioro natural por el uso legítimo. Las reparaciones locativas al Inmueble estarán a cargo de los Arrendatarios.

Parágrafo 1: El Arrendatario se abstendrá de hacer mejoras de cualquier clase al Inmueble sin permiso previo y escrito del Arrendador. Las mejoras al Inmueble serán del propietario del Inmueble y no habrá lugar al reconocimiento de costo, precio o indemnización alguna al Arrendatario por las mejoras realizadas. Las mejoras no podrán retirarse salvo que el Arrendador lo exija por escrito, a lo que el Arrendatario accederá inmediatamente y a su costa, dejando el Inmueble en el mismo buen estado en que lo recibió del Arrendador.

Parágrafo 2: Los arrendatarios permitirán en cualquier tiempo las visitas que el arrendador o sus representantes ó apoderados realicen al local comercial para efectos de verificar el estado de conservación del inmueble, el pago de los servicios públicos y cualquier circunstancia de interés.

Séptima. – **Servicios Públicos**: El Arrendatario pagará al arrendador oportuna y totalmente el porcentaje acordado de acuerdo a división de factura de los servicios públicos del Inmueble (acueducto, alcantarillado, energía eléctrica) desde la fecha en que comience el arrendamiento hasta la restitución del Inmueble. Si el Arrendatario no paga los servicios públicos a su cargo, el Arrendador podrá hacerlo para evitar que los servicios públicos sean suspendidos. El incumplimiento del Arrendatario en el pago oportuno de los servicios públicos del Inmueble se tendrá como incumplimiento del Contrato y el Arrendatario deberá cancelar de manera incondicional e irrevocable al Arrendador las sumas que por este concepto haya tenido que pagar, pago que deberá hacerse de manera inmediata.

Parágrafo 1: Los Arrendatarios declaran que han recibido en perfecto estado de funcionamiento y de conservación las instalaciones para uso de los servicios públicos del Inmueble, que se abstendrá de modificarlas sin permiso previo y escrito del Arrendador y que responderá por daños y/o violaciones de los reglamentos de las correspondientes empresas de servicios públicos.

Parágrafo 2: El Arrendatario reconoce que el Arrendador en ningún caso y bajo ninguna circunstancia es responsable por la interrupción o deficiencia en la prestación de cualquiera de los servicios públicos del Inmueble. En caso de la prestación deficiente o suspensión de cualquiera de los servicios públicos del Inmueble, los Arrendatarios reclamarán de manera directa a las empresas prestadoras del servicio y no al Arrendador.

Parágrafo 3: Si el Arrendador hiciere el pago de los servicios públicos domiciliarios, podrá exigir a los Arrendatarios el pago de las sumas canceladas en cualquier momento por la vía ejecutiva con la presentación de las facturas pagadas y copia del presente contrato de arrendamiento.

Octava. – **Destinación**: El Arrendatario, durante la vigencia del Contrato, destinará el Inmueble única y exclusivamente para el desarrollo de su negocio, objeto social o actividad comercial, la cual consiste en: Taller de Ebanistería y fabricación de muebles en madera y similares. En ningún caso el Arrendatario podrá subarrendar o ceder en todo o en parte este arrendamiento, de conformidad con lo establecido para el efecto en el Artículo 523 del Código de Comercio. En el evento que esto suceda, el Arrendador podrá dar por terminado válidamente el Contrato en forma inmediata, sin lugar a indemnización alguna en favor del Arrendatario y podrá exigir la devolución del Inmueble sin necesidad de ningún tipo de requerimiento previo por parte del Arrendador.

Parágrafo 1: El Arrendador declara expresa y terminantemente prohibida la destinación del inmueble a los siguientes fines: ceder el contrato a terceros; No cancelar los servicios públicos; Efectuar mejoras al local sin previa autorización por escrito del arrendador; dar al inmueble una finalidad distinta para la cual fue arrendado; manipular los medidores de servicios públicos domiciliarios o cometer fraude a las empresas prestadoras de servicios públicos; utilizar el local en actividades de Prostitución o trata de Blancas; expender licor adulterado. De presentarse cualquiera de las anteriores acciones se tendrán por causales de terminación del contrato de arrendamiento por justa causa por parte del Arrendador.

Novena. - **Restitución**: Vencido el periodo inicial o la última prórroga del Contrato, el Arrendatario (i) restituirá el Inmueble al Arrendador en las mismas buenas condiciones en que lo recibió, salvo el deterioro natural causado por el uso legítimo.

Parágrafo 1: No obstante, lo anterior, el Arrendador podrá negarse a recibir el Inmueble, cuando a su juicio existan obligaciones pendientes a cargo del Arrendatario que no hayan sido satisfechas en forma

debida, caso en el cual se seguirá causando el canon de arrendamiento hasta que el Arrendatario cumpla con lo que le corresponde.

Parágrafo 2: La responsabilidad del Arrendatario subsistirá aún después de restituido el Inmueble, mientras el Arrendador no haya entregado la paz y salvo correspondiente por escrito al Arrendatario.

Décima. – **Renuncia**: El Arrendatario declara que renuncia en beneficio del Arrendador o de su cesionario, a todo requerimiento para constituirlos en mora en el cumplimiento de las obligaciones a su cargo derivadas de este Contrato.

Décima Primera. – **Cesión**: El Arrendatario faculta al Arrendador a ceder total o parcialmente este Contrato y declara al cedente del Contrato, es decir al Arrendador, libre de cualquier responsabilidad como consecuencia de la cesión que haga de este Contrato.

Décima Segunda. – **Incumplimiento**: El incumplimiento del Arrendatario sobre cualquiera de sus obligaciones legales o contractuales, faculta al Arrendador para ejercer las siguientes acciones, simultáneamente o en el orden que él elija: (i) Declarar terminado este Contrato y reclamar la devolución del Inmueble judicial y/o extrajudicialmente. (ii) Exigir y perseguir a través de cualquier medio, judicial o extrajudicialmente, al Arrendatario por el monto de los perjuicios resultantes del incumplimiento, así como de la multa por incumplimiento pactada en este Contrato.

Décima Tercera. – **Validez**: El presente Contrato anula todo convenio anterior relativo al arrendamiento del mismo Inmueble y solamente podrá ser modificado por escrito suscrito por la Partes.

Décima Cuarta. – **Merito Ejecutivo**: El Arrendatario declara de manera expresa que reconoce y acepta que este Contrato presta mérito ejecutivo para exigir a favor del Arrendador el pago de (i) los cánones de arrendamiento causados y no pagados, (ii) las multas y sanciones que se causen por el incumplimiento de los Arrendatarios de cualquiera de las obligaciones a su cargo en virtud de la ley o de este Contrato, (iii) las sumas causadas y no pagadas por los Arrendatarios por concepto de servicios públicos del Inmueble, cuotas de administración y cualquier otra suma de dinero que por cualquier concepto deba ser pagada por los Arrendatarios; para lo cual bastará la sola afirmación de incumplimiento del Arrendatario hecha por el Arrendador, afirmación que solo podrá ser desvirtuada por el Arrendatario con la presentación de los respectivos recibos de pago.

Décima Quinta – **Costos**: Cualquier costo que se cause con ocasión de la celebración o prorroga de este Contrato, incluyendo el impuesto de timbre, será sumido en su integridad por el Arrendatario.

Décima Sexta. – **Cláusula Penal**: En el evento de un incumplimiento cualquiera de las Partes a las obligaciones a su cargo contenidas en la ley o en este Contrato, la Parte incumplida deberá pagar a la otra Parte una suma equivalente a tres (03) cánones de arrendamiento vigentes en la fecha del incumplimiento, a título de pena. En el evento que los perjuicios ocasionados por la Parte incumplida, excedan el valor de la suma aquí prevista como pena, la Parte incumplida deberá pagar a la otra Parte la diferencia entre el valor total de los perjuicios y el valor de la pena prevista en esta Cláusula.

Décima Séptima. – **Autorización**: El Arrendatario autoriza expresa e irrevocablemente al Arrendador y/o al cesionario de este Contrato a consultar información del mismo que obre en las bases de datos de información del comportamiento financiero y crediticio o centrales de riesgo que existan en el país, así como a reportar a dichas bases de datos cualquier incumplimiento del Arrendatario a este Contrato.

Décima Octava. – **Abandono**: El Arrendatario autoriza de manera expresa e irrevocable al Arrendador para ingresar al Inmueble y recuperar su tenencia, con el solo requisito de la presencia de dos (2)

testigos, en procura de evitar el deterioro o desmantelamiento del Inmueble, en el evento que por cualquier causa o circunstancia el Inmueble permanezca abandonado o deshabitado por el término de dos (2) meses o más y que la exposición al riesgo sea tal que amenace la integridad física del bien o la seguridad del vecindario.

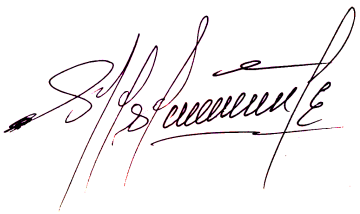
Para constancia el presente Contrato se firma en la ciudad de Bogotá a noviembre diez (10) del año dos mil veintiuno (2021), en dos (2) ejemplares del mismo valor, cada uno de ellos con destino a cada una de las partes.

El Arrendador



ROSA MARIA ORTIZ MEDINA
C.C. No. 51.748.406 de Bogotá

Arrendatario



ALBERTO JAVIER VALENCIA GAMBA
C.C. No. 19.431.969 de Bogotá

CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE LOCAL COMERCIAL

CIUDAD Y FECHA: Bogotá, septiembre veintisiete (27) de dos mil veintiunos (2021)

ROSA MARIA ORTIZ MEDINA, mayor de edad, identificada con la cédula de ciudadanía No. 51.748.406, de Bogotá, de nacionalidad colombiana, con domicilio en la ciudad de Bogotá, quien obra en nombre propio y para efectos de este contrato se denominará el "Arrendador", por una parte, y por la otra, **DAWISON HERRERA CARDENAS**, mayor de edad, identificado con la cédula de ciudadanía No. 79.911.064, quien para efectos de este contrato se denominará el "Arrendatario", manifestaron que han decidido celebrar un CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE LOCAL COMERCIAL, en adelante el "Contrato", el cual se rige por las siguientes cláusulas:

Primera. – **Objeto:** Por medio del presente Contrato el Arrendador entrega a título de arrendamiento al Arrendatario el siguiente bien inmueble: Local comercial EN EL COSTADO SUR DEL PARQUEADERO ubicado en la carrera 8 No. 11-30 sur de la ciudad de Bogotá. Las medidas y linderos del mismo se encuentran en el certificado de tradición del inmueble, distinguido con el número de matrícula inmobiliaria No. 50S-1145039

Segunda. – **Canon de Arrendamiento**: El canon de arrendamiento mensual es la suma de UN MILLON QUINIENTOS SESENTA MIL PESOS ($1.560.000,oo) que el Arrendatario pagará anticipadamente al Arrendador o a su orden, en la carrera 8 No. 11-30 sur de la ciudad de Bogotá, dentro de los primeros cinco (05) días de cada mes, dejando constancia que los periodos mensuales son indivisibles.

Cuarta. – **Vigencia**: El arrendamiento tendrá una duración de un (1) año contados a partir de septiembre veintisiete (27) de dos mil veintiuno (2021). No obstante, lo anterior, el término del arrendamiento se prorrogará automáticamente por periodos consecutivos de un (1) año, si ninguna de las Partes con una antelación de tres (03) meses al vencimiento del periodo inicial o de cualquiera de sus prorrogas informa a la otra Parte su decisión de terminar este Contrato. Lo anterior sin perjuicio del derecho a la renovación consagrado en el Artículo 518 del Código de Comercio. Si se acordare entre las partes un término de prorroga menor, deberá estipularse por escrito, indicando renta, plazo, lugar de pago de la renta y demás clausulas adicionales.

Quinto. – **Entrega**: El Arrendatario en la fecha de suscripción de este documento declaran recibir el Inmueble de manos del Arrendador en perfecto estado.

Sexta. - **Reparaciones**: Los daños que se ocasionen al Inmueble por parte del Arrendatario, por responsabilidad suya o de sus dependientes, serán reparados y cubiertos sus costos de reparación en su totalidad por los Arrendatarios. En todo caso, los Arrendatarios se obligan a restituir el Inmueble en el mismo estado en que lo ha recibido, salvo el deterioro natural por el uso legítimo. Las reparaciones locativas al Inmueble estarán a cargo de los Arrendatarios.

Parágrafo 1: El Arrendatario se abstendrá de hacer mejoras de cualquier clase al Inmueble sin permiso previo y escrito del Arrendador. Las mejoras al Inmueble serán del propietario del Inmueble y no habrá lugar al reconocimiento de costo, precio o indemnización alguna al Arrendatario por las mejoras realizadas. Las mejoras no podrán retirarse salvo que el Arrendador lo exija por escrito, a lo que el Arrendatario accederá inmediatamente y a su costa, dejando el Inmueble en el mismo buen estado en que lo recibió del Arrendador.

Parágrafo 2: Los arrendatarios permitirán en cualquier tiempo las visitas que el arrendador o sus representantes ó apoderados realicen al local comercial para efectos de verificar el estado de conservación del inmueble, el pago de los servicios públicos y cualquier circunstancia de interés.

Séptima. – **Servicios Públicos**: El Arrendatario pagará al arrendador oportuna y totalmente el porcentaje acordado de acuerdo a división de factura de los servicios públicos del Inmueble (acueducto, alcantarillado, energía eléctrica) desde la fecha en que comience el arrendamiento hasta la restitución del Inmueble. Si el Arrendatario no paga los servicios públicos a su cargo, el Arrendador podrá hacerlo para evitar que los servicios públicos sean suspendidos. El incumplimiento del Arrendatario en el pago oportuno de los servicios públicos del Inmueble se tendrá como incumplimiento del Contrato y el Arrendatario deberá cancelar de manera incondicional e irrevocable al Arrendador las sumas que por este concepto haya tenido que pagar, pago que deberá hacerse de manera inmediata.

Parágrafo 1: Los Arrendatarios declaran que han recibido en perfecto estado de funcionamiento y de conservación las instalaciones para uso de los servicios públicos del Inmueble, que se abstendrá de modificarlas sin permiso previo y escrito del Arrendador y que responderá por daños y/o violaciones de los reglamentos de las correspondientes empresas de servicios públicos.

Parágrafo 2: El Arrendatario reconoce que el Arrendador en ningún caso y bajo ninguna circunstancia es responsable por la interrupción o deficiencia en la prestación de cualquiera de los servicios públicos del Inmueble. En caso de la prestación deficiente o suspensión de cualquiera de los servicios públicos del Inmueble, los Arrendatarios reclamarán de manera directa a las empresas prestadoras del servicio y no al Arrendador.

Parágrafo 3: Si el Arrendador hiciere el pago de los servicios públicos domiciliarios, podrá exigir a los Arrendatarios el pago de las sumas canceladas en cualquier momento por la vía ejecutiva con la presentación de las facturas pagadas y copia del presente contrato de arrendamiento.

Octava. – **Destinación**: El Arrendatario, durante la vigencia del Contrato, destinará el Inmueble única y exclusivamente para el desarrollo de su negocio, objeto social o actividad comercial, la cual consiste en: Taller de mecánica automotriz. En ningún caso el Arrendatario podrá subarrendar o ceder en todo o en parte este arrendamiento, de conformidad con lo establecido para el efecto en el Artículo 523 del Código de Comercio. En el evento que esto suceda, el Arrendador podrá dar por terminado válidamente el Contrato en forma inmediata, sin lugar a indemnización alguna en favor del Arrendatario y podrá exigir la devolución del Inmueble sin necesidad de ningún tipo de requerimiento previo por parte del Arrendador.

Parágrafo 1: El Arrendador declara expresa y terminantemente prohibida la destinación del inmueble a los siguientes fines: ceder el contrato a terceros; No cancelar los servicios públicos; Efectuar mejoras al local sin previa autorización por escrito del arrendador; dar al inmueble una finalidad distinta para la cual fue arrendado; manipular los medidores de servicios públicos domiciliarios o cometer fraude a las empresas prestadoras de servicios públicos; utilizar el local en actividades de Prostitución o trata de Blancas; expender licor adulterado. De presentarse cualquiera de las anteriores acciones se tendrán por causales de terminación del contrato de arrendamiento por justa causa por parte del Arrendador.

Novena. - **Restitución**: Vencido el periodo inicial o la última prórroga del Contrato, el Arrendatario (i) restituirá el Inmueble al Arrendador en las mismas buenas condiciones en que lo recibió, salvo el deterioro natural causado por el uso legítimo.

Parágrafo 1: No obstante, lo anterior, el Arrendador podrá negarse a recibir el Inmueble, cuando a su juicio existan obligaciones pendientes a cargo del Arrendatario que no hayan sido satisfechas en forma

debida, caso en el cual se seguirá causando el canon de arrendamiento hasta que el Arrendatario cumpla con lo que le corresponde.

Parágrafo 2: La responsabilidad del Arrendatario subsistirá aún después de restituido el Inmueble, mientras el Arrendador no haya entregado la paz y salvo correspondiente por escrito al Arrendatario.

Décima. – **Renuncia**: El Arrendatario declara que renuncia en beneficio del Arrendador o de su cesionario, a todo requerimiento para constituirlos en mora en el cumplimiento de las obligaciones a su cargo derivadas de este Contrato.

Décima Primera. – **Cesión**: El Arrendatario faculta al Arrendador a ceder total o parcialmente este Contrato y declara al cedente del Contrato, es decir al Arrendador, libre de cualquier responsabilidad como consecuencia de la cesión que haga de este Contrato.

Décima Segunda. – **Incumplimiento**: El incumplimiento del Arrendatario sobre cualquiera de sus obligaciones legales o contractuales, faculta al Arrendador para ejercer las siguientes acciones, simultáneamente o en el orden que él elija: (i) Declarar terminado este Contrato y reclamar la devolución del Inmueble judicial y/o extrajudicialmente. (ii) Exigir y perseguir a través de cualquier medio, judicial o extrajudicialmente, al Arrendatario por el monto de los perjuicios resultantes del incumplimiento, así como de la multa por incumplimiento pactada en este Contrato.

Décima Tercera. – **Validez**: El presente Contrato anula todo convenio anterior relativo al arrendamiento del mismo Inmueble y solamente podrá ser modificado por escrito suscrito por la Partes.

Décima Cuarta. – **Merito Ejecutivo**: El Arrendatario declara de manera expresa que reconoce y acepta que este Contrato presta mérito ejecutivo para exigir a favor del Arrendador el pago de (i) los cánones de arrendamiento causados y no pagados, (ii) las multas y sanciones que se causen por el incumplimiento de los Arrendatarios de cualquiera de las obligaciones a su cargo en virtud de la ley o de este Contrato, (iii) las sumas causadas y no pagadas por los Arrendatarios por concepto de servicios públicos del Inmueble, cuotas de administración y cualquier otra suma de dinero que por cualquier concepto deba ser pagada por los Arrendatarios; para lo cual bastará la sola afirmación de incumplimiento del Arrendatario hecha por el Arrendador, afirmación que solo podrá ser desvirtuada por el Arrendatario con la presentación de los respectivos recibos de pago.

Décima Quinta – **Costos**: Cualquier costo que se cause con ocasión de la celebración o prorroga de este Contrato, incluyendo el impuesto de timbre, será sumido en su integridad por el Arrendatario.

Décima Sexta. – **Cláusula Penal**: En el evento de un incumplimiento cualquiera de las Partes a las obligaciones a su cargo contenidas en la ley o en este Contrato, la Parte incumplida deberá pagar a la otra Parte una suma equivalente a tres (03) cánones de arrendamiento vigentes en la fecha del incumplimiento, a título de pena. En el evento que los perjuicios ocasionados por la Parte incumplida, excedan el valor de la suma aquí prevista como pena, la Parte incumplida deberá pagar a la otra Parte la diferencia entre el valor total de los perjuicios y el valor de la pena prevista en esta Cláusula.

Décima Séptima. – **Autorización**: El Arrendatario autoriza expresa e irrevocablemente al Arrendador y/o al cesionario de este Contrato a consultar información del mismo que obre en las bases de datos de información del comportamiento financiero y crediticio o centrales de riesgo que existan en el país, así como a reportar a dichas bases de datos cualquier incumplimiento del Arrendatario a este Contrato.

Décima Octava. – **Abandono**: El Arrendatario autoriza de manera expresa e irrevocable al Arrendador para ingresar al Inmueble y recuperar su tenencia, con el solo requisito de la presencia de dos (2)

testigos, en procura de evitar el deterioro o desmantelamiento del Inmueble, en el evento que por cualquier causa o circunstancia el Inmueble permanezca abandonado o deshabitado por el término de dos (2) meses o más y que la exposición al riesgo sea tal que amenace la integridad física del bien o la seguridad del vecindario.

Para constancia el presente Contrato se firma en la ciudad de Bogotá a septiembre veintisiete (27) del año dos mil veintiuno (2021), en dos (2) ejemplares del mismo valor, cada uno de ellos con destino a cada una de las partes.

El Arrendador



ROSA MARIA ORTIZ MEDINA
C.C. No. 51.748.406 de Bogotá

Arrendatario



DAWISON HERRERA CARDENAS
C.C. No. 79.911.064 de Bogotá

CONTRATO DE AUTORIZACIÓN DE GRABACIÓN EN LOCACIÓN

De una parte Ana Carolina Rodriguez Garcia, mayor de edad, con C.C. *1001315680*, actuando en nombre y representación del cortometraje "La sombrilla de mamá", se denominará de ahora en adelante la **PRODUCTORA**.

Por otra parte LUIS CARLOS ORTIZ MEDINA, mayor de edad, con C.C. 79.420.693, actuando en nombre y representación legal de _____, domiciliado en BOGOTA con dirección: Carrera 8 #11 Sur - 30, se denominará el **REPRESENTANTE LEGAL** de ahora en adelante, en su condición de residente de la misma.

MANIFIESTAN

Que se reconocen mutuamente con capacidad legal suficiente para contratar y de acuerdo las dos partes pactan el presente Contrato de Autorización de Grabación en Locación (en adelante, el "Contrato") con las siguientes:

CLÁUSULAS

1.- IDENTIDAD DE LA *LOCALIZACIÓN*

El REPRESENTANTE *LEGAL permite a la PRODUCTORA el acceso y el uso de la* propiedad _____, *situada en Carrera 8 #11 Sur - 30, en conexión* con la *producción cinematográfica universitaria para llevar a cabo el ensayo, el rodaje/filmación* de las secuencias y las tomas fotográficas *como foto fijas y del detrás* de escenas para la producción titulada "La sombrilla de mamá".

2.- AUTORIZACIÓN Y CESIÓN DE DERECHOS

El REPRESENTANTE LEGAL *cede a la* PRODUCTORA con facultad de cesión los derechos exclusivos de reproducción, distribución, comunicación pública y transformación de las imágenes del interior de la propiedad y de su contenido, y ello para su explotación en todo el mundo, en cualquier soporte o formato, incluyendo a título meramente enunciativo la explotación en televisión, en salas, en vídeo, en Internet, etc.

El REPRESENTANTE LEGAL autoriza a la PRODUCTORA para que, con propósitos de trabajo, obtenga fotografías del interior de la propiedad. Asimismo el REPRESENTANTE LEGAL accede a que la PRODUCTORA represente las imágenes obtenidas de la propiedad y, a tal fin, accede a que la PRODUCTORA exhiba, publicite y promocione la producción, en cualquier medio audiovisual y/o

de comunicación y/o reproducción, en todo el mundo.

La PRODUCTORA se abstendrá de mostrar en el producto audiovisual final el nombre y/o dirección de la locación en cuestión, si así lo desea el REPRESENTANTE LEGAL. Esto incluye a las foto fijas.

3.- DERECHOS DE ACCESO

La PRODUCTORA tendrá derecho de llevar el personal y el equipamiento (incluido la utilería y ambientación) que crea necesario a la propiedad y se compromete a retirarlo al finalizar el uso de la misma. Al igual que se compromete a restaurar todo aquello que se haya trasladado de ubicación durante el periodo de acceso a la propiedad.

4.- PERIODO DE ACCESO

La autorización del uso de la propiedad le garantiza al REPRESENTANTE LEGAL en el presente Contrato será de las 09:00 horas del 11 de Mayo de 2022 a las 21:00 horas del 16 de Mayo de 2022. El período de tiempo mencionado está sujeto a disminución y estará en el margen de un periodo de tiempo diario que permite a la PRODUCTORA el uso de la propiedad hasta las 21:00 horas cada día correspondiente. Este plazo no podrá ser ampliado por la PRODUCTORA.

5.- PAGO

Como remuneración por el uso de la propiedad y en consideración de los términos expresados en el presente Contrato, la PRODUCTORA pagará al REPRESENTANTE LEGAL la cantidad total de $100.000,- pesos colombianos por el día de uso de la locación.

6.- ALTERACIONES DE LA LOCALIZACIÓN

La PRODUCTORA acuerda que cambios, alteraciones o reorganizaciones de cualquier elemento perteneciente a la propiedad, la PRODUCTORA volverá a colocar el mencionado equipamiento en los mismos lugares y en las mismas condiciones originales en las que se encontraban con anterioridad a su entrada en la propiedad. Al igual que se retirarán de la propiedad todos los elementos de la producción al finalizar el periodo de acceso, acordado en la cláusula 4 previamente.

7.- GARANTÍAS

La PRODUCTORA se hará responsable de cualquier daño en conexión con la producción que se haya ocasionado a la propiedad, por parte de la PRODUCTORA.

A efectos de lo previsto en el párrafo anterior, en caso de que el REPRESENTANTE LEGAL considere que se ha producido algún daño en la propiedad o en alguno de sus elementos, deberá presentar a la PRODUCTORA un documento demostrando y describiendo brevemente dichos daños (el "Informe de Daños") en el plazo de [2] días hábiles desde la finalización del periodo establecido en la Cláusula 4 anterior. Transcurrido dicho plazo sin que se hubiera presentado el citado Informe de Daños, la PRODUCTORA quedará automáticamente exenta de cualquier responsabilidad por los daños ocasionados en la propiedad. La recepción del Informe de Daños por parte de la PRODUCTORA no implicará en modo alguno su aceptación automática, pudiendo alegar las excepciones que considere convenientes en un nuevo plazo de [2] días hábiles desde dicha recepción, en cuyo caso las partes deberán intentar llegar a un acuerdo en relación con las discrepancias existentes.

8.- FALTA DE INCENTIVOS

El REPRESENTANTE LEGAL afirma que ni él ni ninguna persona actuando en su nombre ha dado o ha acordado nada de valor, a ningún miembro del equipo o a ninguna persona o representante de la PRODUCTORA o asociado a la misma, o a ninguna cadena de televisión o medio de comunicación, para mencionar o mostrar el nombre del REPRESENTANTE LEGAL o la marca, en su caso, para que aparezca como localización de rodaje de la producción.

9.- IDENTIFICACIÓN DE LA PROPIEDAD

El REPRESENTANTE LEGAL reconoce que cualquier identificación de la propiedad, dado que la PRODUCTORA podrá ambientarla, será al sólo criterio de la PRODUCTORA, sin que en ningún caso la mencionada identificación vaya más allá de lo que sería razonable con relación al contenido de la producción. Por lo acordado en el tercer párrafo de la cláusula 2 previa, la PRODUCTORA se abstiene de mostrar la identificación de la propiedad, si así lo desea el REPRESENTANTE LEGAL.

10.- EXIMENTES

El REPRESENTANTE LEGAL exime y descarga a la PRODUCTORA y equipo de trabajo, de cualquier reclamación, demanda o contencioso que pudiera surgir, ahora o en el futuro, en relación con causas de difamación, invasión de la intimidad o derechos de publicidad, infracción de derechos de propiedad intelectual o violación de cualquier otro derecho que pudiera sobrevivir o con relación con cualquiera de los derechos otorgados en el presente Contrato, y se compromete a mantenerla indemne frente a dichas reclamaciones, demandas o contenciosos.

Y para que conste a todos los efectos, se firma el presente Contrato por duplicado.

En Bogotá D.C. a 19 de Febrero de 2022.

LA PRODUCTORA

C.C. 1001315680
Srta. Ana Carolina Rodríguez Garcia

EL REPRESENTANTE LEGAL

C.C. 79142069 BOGOTA.
Sr.

W- 09219574

CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE VIVIENDA URBANA

LUGAR Y FECHA DE CELEBRACIÓN DEL CONTRATO

ARRENDADOR (S) Ana Beatriz Ortiz Medina

Nombre e identificación CC 51.794930

Nombre e identificación

ARRENDATARIO (S) Juan Fernando Orrego

Nombre e identificación CC 80.211.042. Cra 8 # 11-30 Sur

Dirección del inmueble

Precio o canon 1.000.000 = $ ( )

Avalúo Catastral $ ( )

Término de duración del contrato 1 AÑO

Fecha de iniciación del contrato: Día (1) días

Mes (21) Mes Noviembre

Año (2021)

El inmueble consta de los servicios de Agua - Luz - Gas

Cuyo pago corresponde a 1 Arrendatario

Además de las anteriores estipulaciones, las partes de común acuerdo convienen las siguientes cláusulas:

PRIMERA. - OBJETO DEL CONTRATO: Mediante el presente contrato, el (los) arrendador (es) se obliga (n) a conceder a el (los) arrendatario (s) el goce del inmueble urbano destinado a vivienda cuyos linderos se determinan en la cláusula décima quinta de este contrato junto con los demás elementos que hacen un inventario separado firmado ya las partes, y el (los) arrendatario (s), a pagar por este goce el canon o renta estipulado. **SEGUNDA. - PRECIO, OPORTUNIDAD Y SITIO:** El (los) arrendatario (s) se obliga (n) a pagar a el (los) arrendador (es) por el goce del inmueble y demás elementos, el precio o canon acordado en Bogotá la suma de un millon de pesos $ 1.000.000) dentro de los primeros cinco (5) ( ) días de cada período contractual, a el (los) arrendador (es) o a su orden. El canon podrá ser incrementado anualmente de acuerdo con el porcentaje acordado legalmente. Si el canon se pagare en cheque, el canon se considera satisfecho en la fecha de pago sólo una vez que el banco haga el respectivo abono en cuenta y cuando el cheque haya sido presentado en tiempo para su pago al respectivo banco. **TERCERA. - DESTINACIÓN:** El (los) arrendatario (s) se compromete (n) a dar al inmueble el uso para vivienda de él (ellos) y su (s) familia (s), y no podrá (n) darle otro uso, ni ceder, ni transferir el arrendamiento sin la autorización escrita de el (los) arrendador (es). El incumplimiento de esta obligación, dará derecho a el (los) arrendador (es) para dar por terminado este contrato y exigir la entrega del inmueble. En caso de cesión o subarriendo por parte de el (los) arrendatario (s), el (los) arrendador (es) podrá dar por terminado el contrato y exigir la entrega del inmueble, o podrá (n) celebrar un nuevo contrato de arriendo con los cesionarios, sin necesidad de negociación, liquidación o pérdida de los dineros recibidos (n) expresamente el (los) arrendatario (s). **CUARTA. - RECIBO Y ESTADO:** El (los) arrendatario (s) declara (n) que ha (n) recibido el inmueble objeto de este contrato, en buen estado, conforme al inventario que se adjunta, el cual hace parte de este contrato, en el mismo se determinan los servicios, cosas y usos comunes. El (los) arrendatario (s) se obliga (n) a la terminación del contrato a devolver al (los) arrendador (es) el inmueble en el mismo estado que se recibió, salvo el deterioro proveniente del transcurso del tiempo y el uso legítimo del bien arrendado. **QUINTA. - REPARACIONES:** El (los) arrendatario (s) tendrá (n) a su cargo las reparaciones locativas a que se refiere la Ley y no podrá (n) realizar otras sin el consentimiento escrito de el (los) arrendador (es). En caso que el (los) arrendatario (s) realice (n) reparaciones indispensables, no locativas, que se causen sin su culpa, a menos que las partes acuerden otra cosa, podrá (n) el (los) arrendatario (s) descontar el costo de las reparaciones del valor de la renta, sin que tales descuentos excedan el treinta por ciento (30%) del valor de la misma. Si el costo de las reparaciones fuere mayor, el (los) arrendatario (s) puede (n) descontar periódicamente hasta el treinta por ciento (30%) del valor de la renta, hasta completar el costo total. **SEXTA. - OBLIGACIONES ESPECIALES DE LAS PARTES:** a) De el (los) arrendador (es): 1. El (los) arrendador (es) hará (n) entrega material del inmueble a el (los) arrendatario (s) el día ( ), del mes de del año ( ), en buen estado de servicio, seguridad y sanidad, y podrá (n) a su disposición los servicios, cosas y usos comunes convenidos en el presente contrato, mediante inventario, del cual hará entrega a el (los) arrendatario (s), así como copia del contrato con firmas originales. En caso que el (los) arrendador (es) no suministre (n) a el (los) arrendatario (s) copia del contrato con firmas originales, será (n) sancionado (s) por la autoridad competente con multas equivalentes a tres (3) mensualidades de arrendamiento. 2. Mantener en el inmueble los servicios, las cosas y los usos comunes y adicionales, en buen estado de servir para el cumplimiento del objeto del contrato. 3. Librará (n) a el (los) arrendatario (s) de toda turbación en el goce del inmueble. 4. Hacer las reparaciones necesarias, del buen objeto del arriendo, y las locativas pero sólo cuando estas provinieren de fuerza mayor o caso fortuito, o de la mala calidad de la cosa arrendada. **Parágrafo.** Cuando sea procedente, por tratarse de viviendas sometidas al régimen de propiedad horizontal el (los) arrendador (es) hará (n) entrega a el (los) arrendatario (s) de una copia del reglamento interno de propiedad horizontal al que se encuentre sometido el inmueble. 5. Cuando se trate de vivienda compartida, mantener en adecuadas condiciones de funcionamiento, de seguridad y de sanidad las zonas y servicios de uso común y de efectuar por su cuenta las reparaciones y sustituciones necesarias, cuando no sean imputables a el (los) arrendatario (s), y garantizar el mantenimiento del orden interno de la vivienda. 6. Expedir comprobante escrito en el que conste la fecha, cuantía y período al cual corresponde el pago del arrendamiento, so pena que sea (n) obligado (s), en caso de renuencia, por la autoridad competente. 7. Las demás obligaciones contenidas en la ley. b) **De el (los) arrendatario(s):** 1. Pagar a el (los) arrendador (es) en el lugar y término convenido en la cláusula segunda del presente contrato, el precio del arrendamiento. Si el (los) arrendador (es) se rehúsa (n) a recibir el canon o renta, el (los) arrendatario (s) cumplirá (n) su obligación consignando dicho pago en la forma prevista en el artículo 10 de la ley 820 de 2003. 2. Cuidar del inmueble según los términos y espíritu de este contrato. 3. Velar y cuidar por la conservación del inmueble y las cosas recibidas en arrendamiento. En caso de daño o deterioros debidos a los derivados del uso normal o de la acción del tiempo y que fueren imputables al mal uso del inmueble o a su propia culpa, efectuar oportunamente y por su cuenta las reparaciones o sustituciones del caso. 4. Cumplir con las normas consagradas en el reglamento de propiedad horizontal, si estuviere sometido a dicho régimen. 5. Restituir el inmueble a la terminación del contrato, en el estado en que le (s) fue entregado salvo el deterioro natural causado por el tiempo y el uso legítimo y poniéndolo a disposición de el (los) arrendador (es). El (los) arrendatario (s) restituirá (n) el inmueble con todos los servicios públicos domiciliarios totalmente al día y a paz y salvo con las empresas prestadoras del servicio, y se obliga (n) a cancelar las facturas debidas que lleguen posteriormente pero causadas en vigencia del contrato. En ningún caso el (los) arrendador (es) será (n) responsable (s) por el pago de servicios o conexiones o acometidas que fueren directamente contratados por el (los) arrendatario (s), salvo pacto expreso entre las partes. 6. No hacer mejoras al inmueble distintas de las locativas, sin autorización de el (los) arrendador (es). Si las hiciere (n) serán de propiedad de este. 7. El (Los) arrendador (es) se obliga (n) a promover y el (los) arrendatario (s) se compromete a permitir la Revisión Técnica Reglamentaria de las instalaciones de gas natural realizada por la empresa y de los elementos que de este servicio dependan, y entregando al arrendador el documento donde consta el servicio, si el inmueble tiene este servicio público. Será de cargo de el (los) arrendador (es) el costo de dicha revisión y del reemplazo o reparación de los equipos según recomendación, y si estos fueren de el (los) arrendatarios este (os) deberá subrogar dicho (s) costo (s). **SÉPTIMA. - TERMINACIÓN DEL CONTRATO:** Son causales de terminación unilateral del contrato, las de ley y especialmente las siguientes: **1. Por parte de el (los) arrendador (es):** 1. La no cancelación por parte de el (los) arrendatario (s) del precio del canon y reajustes dentro del término estipulado del mismo. 2. La no cancelación de los servicios públicos que ocasione la desconexión o pérdida del servicio, o del pago de las expensas comunes cuando su pago estuviere a cargo de el (los) arrendatario (s). 3. El subarriendo total o parcial del inmueble, la cesión

legis
Todos los derechos Reservados

del contrato o del goce del inmueble, o el cambio de destinación del inmueble sin consentimiento expreso de el (los) arrendador (es). 4. Las mejoras, cambios y ampliaciones que se hagan al inmueble sin autorización expresa de el (los) arrendador (es) o la destrucción total o parcial del inmueble o área arrendada por parte de el (los) arrendatario (s). 5. La incursión reiterada de el (los) arrendatario (s) en procederes que afecten la tranquilidad ciudadana de los vecinos, o la destinación del inmueble para actos delictivos o que impliquen alguna contravención, debidamente comprobados ante la autoridad de policía. 6. La violación por el (los) arrendatario (s) de las normas del respectivo reglamento de propiedad horizontal cuando se trate de viviendas sometidas a este régimen. **Z.** El (los) arrendador (es), con el cumplimiento de lo establecido en el artículo 24 de la ley 820 de 2003 podrá (n) dar por terminado unilateralmente el contrato de arrendamiento durante las prórrogas, previo aviso escrito dirigido a el (los) arrendatario (s) a través del servicio postal autorizado, con una antelación no menor de tres (3) meses y el pago de una indemnización equivalente al precio de tres (3) meses de arrendamiento. Cumplidas estas condiciones el (los) arrendatario (s) estará (n) obligado (s) a restituir el inmueble. **B.** El (los) arrendador (es) podrá (n) dar por terminado unilateralmente el contrato de arrendamiento a la fecha de vencimiento del término inicial o de sus prórrogas invocando cualquiera de las siguientes causales especiales de restitución, previo aviso escrito a el (los) arrendatario (s) a través del servicio postal autorizado con una antelación no menor a tres (3) meses, a la referida fecha de vencimiento: a) Cuando el (los) propietario (s) o poseedor (es) del inmueble necesitare (n) ocuparlo para su propia habitación, por un término no menor a un (1) año; b) Cuando el inmueble haya de demolerse para efectuar una nueva construcción, o cuando se requiere desocuparlo con el fin de ejecutar obras independientes para su reparación; c) Cuando haya de entregarse en cumplimiento de las obligaciones originadas en un contrato de compraventa; d) La plena voluntad de dar por terminado el contrato, siempre y cuando, el contrato de arrendamiento cumpliere como mínimo cuatro (4) años de ejecución. En este último caso el (los) arrendador(es) deberá (n) indemnizar a el (los) arrendatario (s) con una suma equivalente al precio de una punto cinco (1.5) meses de arrendamiento. Cuando se trate de las causas previstas en los literales a), b) y c), el (los) arrendador (es) acompañará (n) al aviso escrito la constancia de haber constituido una caución en dinero, bancaria u otorgada por la compañía de seguros legalmente reconocida, constituida a favor de el (los) arrendatario (s) por un valor equivalente a seis (6) meses del precio del arrendamiento vigente, para garantizar el cumplimiento de la causal invocada dentro de los seis (6) meses siguientes a la fecha de restitución. Cuando se trate de la causal prevista en el literal d), el pago de la indemnización se realizará mediante el procedimiento establecido en el artículo 24 de la ley 820 de 2003. De no mediar constancia por escrito del preaviso, el contrato de arrendamiento se entenderá renovado automáticamente por un término igual al inicialmente pactado. **II. Por parte de el (los) arrendatario (s):** 1. La suspensión de la prestación de los servicios públicos al inmueble, por acción premeditada de el (los) arrendador (es) o porque incurra (n) en mora en los pagos que estuvieren a su cargo. En estos casos el (los) arrendatario (s) podrá (n) optar por asumir el costo del restablecimiento del servicio y descontarlo de los pagos que le corresponda hacer como arrendatario (s). 2. La incursión reiterada de el (los) arrendador (es) en procederes que afecten gravemente el disfrute cabal por el (los) arrendatario (s) del inmueble arrendado, debidamente comprobada ante la autoridad policiva. 3. El desconocimiento por parte de el (los) arrendador (es) de los derechos reconocidos a el (los) arrendatario (s) por la Ley o el contrato. 4. El (los) arrendatario (s) podrá (n) dar por terminado unilateralmente el contrato de arrendamiento dentro del término inicial o durante sus prórrogas, previo aviso escrito dirigido a el (los) arrendador (es) a través del servicio postal autorizado, con una antelación no menor de tres (3) meses y el pago de una indemnización equivalente al precio de tres (3) meses de arrendamiento y siguiendo el procedimiento que trata el artículo 25 de la ley 820 de 2003. Cumplidas estas condiciones el (los) arrendador (es) estará (n) obligado (s) a recibir el inmueble; si no lo hiciere (n), el arrendatario podrá hacer entrega provisional mediante la intervención de la autoridad competente con el procedimiento del artículo 24 de la ley 820 de 2003, sin perjuicio de acudir a la acción judicial correspondiente. 5. El (los) arrendatario (s) podrá (n) dar por terminado unilateralmente el contrato de arrendamiento a la fecha de vencimiento del término inicial o de sus prórrogas, siempre y cuando de (n) previo aviso escrito a el (los) arrendador (es) a través del servicio postal autorizado, con una antelación no menor de tres (3) meses a la referida fecha de vencimiento. En este caso el (los) arrendatario (s) no estará (n) obligado (s) a invocar causal alguna diferente a su plena voluntad, ni deberá (n) indemnizar a el (los) arrendador (es). De no mediar constancia por escrito del preaviso, el contrato de arrendamiento se entenderá renovado automáticamente por un término igual al inicialmente pactado. **Parágrafo:** No obstante, las partes en cualquier tiempo y de común acuerdo podrán dar por terminado el presente contrato sin pago de indemnización alguna. **OCTAVA. - MORA:** Cuando el (los) arrendatario (s) incumpliere (n) el pago de la renta en la oportunidad, lugar y forma acordada en la cláusula segunda, el (los) arrendador (es) podrá (n) hacer cesar el arriendo y exigir judicial o extrajudicialmente la restitución del inmueble. **NOVENA - CLÁUSULA PENAL:** Salvo lo que la ley disponga para ciertos casos, el incumplimiento de cualquiera de las partes de las obligaciones derivadas de este contrato, la constituirá en deudora de la otra por la suma de ( ) salarios mínimos mensuales vigentes a la fecha del incumplimiento, a título de pena, sin menoscabo del pago de la renta y de los perjuicios que pudieren ocasionarse como consecuencia del incumplimiento. En caso de mora en el pago del canon de arriendo, el (los) arrendador (es) podrá (n) cobrar ejecutivamente el valor de los cánones debidos, la pena aquí pactada, los servicios dejados de pagar por el (los) arrendatario (s), la indemnización de perjuicios, bastando para ello la sola afirmación del incumplimiento y estimación de los perjuicios y la presentación de este contrato. El (Los) arrendatario (s) renuncia (n) desde ya a cualquier tipo de constitución en mora que la ley exija para que le sea exigible la pena e indemnización que trata esta cláusula. **DÉCIMA - PRÓRROGA:** El presente contrato se entenderá prorrogado en iguales condiciones y por el término inicial, siempre que cada una de las partes haya cumplido con las obligaciones a su cargo, y, que el arrendatario, se avenga a los reajustes de la renta autorizados por la Ley (Art.6. Ley 820 de 2003). **DÉCIMA PRIMERA - GASTOS:** Los gastos que cause la firma del presente contrato serán a cargo de:

DÉCIMA SEGUNDA - DERECHO DE RETENCIÓN: En todos los casos en los cuales el (los) arrendador (es) deba (n) indemnizar a el (los) arrendatario (s), este (os) no podrá (n) ser privado (s) del inmueble arrendado sin haber recibido el pago previo de la indemnización correspondiente o sin que se le hubiere asegurado debidamente el importe de ella por parte de el (los) arrendador (es). **DÉCIMA TERCERA - COARRENDATARIOS:** Para garantizar a el (los) arrendador (es) el cumplimiento de sus obligaciones, el(los) arrendatario (s) tiene (n) como coarrendatario (s) a , mayor y vecino de , identificado (a) con y , mayor y vecino de , identificado (a) con , quien (es) declara (n) que se obliga (n) solidariamente con el (los) arrendador (es) durante el término de duración del contrato y el de sus prórrogas y por el tiempo que permanezca el inmueble en poder de éste (os). **DÉCIMA CUARTA.** El (Los) arrendatario (s) faculta (n) expresamente a el (los) arrendador (es) para llenar en este documento el espacio en blanco destinado a los linderos.

DÉCIMA QUINTA. - LINDEROS DEL INMUEBLE:

DECIMA SEXTA: Las partes firmantes señalan las siguientes direcciones para recibir notificaciones:

En constancia de lo anterior, se firma por las partes el día Veintiuno (21), del mes de Noviembre del año 2021 dos mil veintiuno ( )

ARRENDADOR

C. C. o NIT. No 51 794 930 Bta

ARRENDATARIO ( ) COARRENDATARIO ( )

Marque con una equis (X)

C. C. o NIT. No

ARRENDATARIO

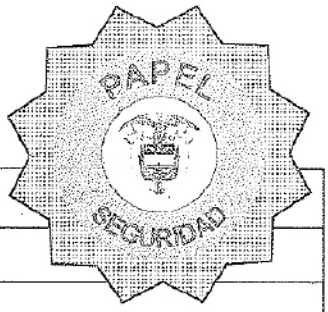
Juan Fernando Orrego

C. C. o NIT. No 80 811 042 Bogotá

COARRENDATARIO

C. C. o NIT. No

No. [ ]



CONTRATO DE ARRENDAMIENTO

FECHA Y LUGAR: 03 - Febrero - 2022 Bogotá. D.C.

ARRENDADOR: Luis Carlos Ortiz Medina

ARRENDATARIO: Miguel Angel Monzón Santana

OBJETO: Conceder un inmueble que consta de: Salon 9x6 m

DIRECCION: Cra 8 No 11-30 Sur

LINDEROS: (Los linderos correspondientes a este bien se detallan en la cláusula Décima de este contrato)

CANON:

pesos ($) 250.000)m/te. mensuales, pagaderos dentro de los (5) días de cada periodo mensual, al arrendador o a su orden

AVALUO CATASTRAL:

TERMINO DE DURACIÓN: Marzo 2023

FECHA DE INICIACIÓN: 13 meses

SERVICIOS DE: Agua y Luz, Parqueadero

POR CUENTA DE:

PENA POR INCUMPLIMIENTO: $

además de las anteriores estipulaciones, el arrendador y el arrendatario convienen las siguientes: PRIMERA - PAGO, OPORTUNIDAD Y SITIO - El arrendatario se obliga a pagar el canon acordado dentro de las piezas previstas on

El canon se reajustará anualmente en la producción máxima que autorice el gobierno, en principio en el 90% del incremento del indice de precios al consumidor en el año calendario inmediatamente anterior. Salvo qué la ley lo autorice, no podrá pactarse un reajuste superior. SEGUNDA.- MORA. La mora por falta de pago de la renta mensual en la oportunidad y forma acordada facultará al arrendador para hacer cesar el arriendo y exigir judicial o extrajudicialmente la restitución del bien. TERCERA DESTINACION - El arrendatario se obliga a usar el inmueble para la vivienda de él y de su familia y no podrá darle otro uso, ni ceder ni transferir el arrendamiento sin la autorización escrita del arrendador. El incumplimiento de esta cláusula dará derecho al arrendador para dar por terminado el contrato y exigir la entrega del inmueble o, en caso de cesión o subarriendo abusivos, celebrar un nuevo contrato con los usuarios reales, sin necesidad de requerimientos judiciales o privados, a los cuales renuncia el arrendatario, CUARTA. - ENTREGA - El arrendador se obliga a entregar al arrendatario el inmueble el día (03) del mes de Febrero de 2022 ( ) junio con los elementos que lo integran, los que se detallarán en escrito separado o firmado por contratantes, el cual se considera parte integrante de este contrato. En el mismo se determinan los servicios, cosas y usos conexos y adicionales. El arrendatario restituirá el inmueble al arrendador a la terminación del contrato en el mismo estado que lo recibe, salvo el deterioro natural derivado de su uso legitimo. QUINTA - MEJORAS. - El arrendatario tendrá a su cargo las reparaciones locativas a que se refiere la ley (artículos 2028, 2029 y 2030 del C.C.) y no podrá realizar otras sin el consentimiento

escrito del arrendador. SEXTA. - PREAVISO. - El arrendador podrá dar por terminado el contrato de arrendamiento durante cualquiera de sus prórrogas, nunca durante la vigencia inicial del contrato, mediante preaviso dado al arrendatario con tres meses de anticipación y el pago de la indemnización que prevé la ley (artículo 15, lay 56 de 1985, inciso final). SÉPTIMA. - CLAUSULA PENAL. - El incumplimiento por cualquiera de las partes de las obligaciones derivadas de este contrato la constituirá en deudora de la otra por la suma de ($) a título de pena, sin menoscabo del pago del canon y de los perjuicios que pudieren ocasionarse como consecuencia del incumplimiento. El arrendatario renuncia expresamente a los requerimientos de que tratan los artículos 2007 y 2035 del C.C. y 424 del C.P.C. y al derecho de oponerse a la cesación del arrendamiento y el lanzamiento mediante la caución a que se refiere el citado artículo 2035 del C.C. OCTAVA. - GASTOS. - Los gastos que cause este instrumente serán a cargo del arrendatario. NOVENA. - FIADOR. - Para garantizar al arrendador el cumplimiento de la obligación, el arrendatario tiene como fiador o fiadores.

quien(es) declara(n) que se obliga(n) solidariamente con su fiado, conforme a las obligaciones que este contrae, durante el término de duración del contrato y por todo el tiempo que permanezca el inmueble en poder de éste, renunciando al beneficio de excusión, y suscribe en tal calidad el contrato. DECIMA. - LINDEROS. - Los linderos correspondientes al inmueble que se rinda son:

Para constancia se firma por las partes y el fiador o fiadores el día (03) del mes de Febrero de (2022)

ARRENDADOR Luis Carlos Ortiz Medina	ARRENDATARIO Miguel Angel Herrera Santana
C.C. 79.420.693	C.C. 1000.139.738
FIADOR	
C.C.	
	ARRENDATARIO
	C.C.
FIADOR	TESTIGO
C.C.	C.C.

MEMORIAL PARA REGISTRAR DR. CHAVARRO MAHECHA RV: SUSTENTACION RECURSO APELACION RAD: 2014-00530. PERTENENCIA. DTE: GILMA OTILIA SICACHA CORTES. DDA: GLADYS MARTGOTH REYES DE SICACHA

Secretario 02 Sala Civil Tribunal Superior - Seccional Bogota <secsctribsupbta2@cendoj.ramajudicial.gov.co>
Lun 06/02/2023 11:49

Para: **2 GRUPO CIVIL <2grupocivil@cendoj.ramajudicial.gov.co>**

MEMORIAL PARA REGISTRAR DR. CHAVARRO MAHECHA

Cordial Saludo,

OSCAR FERNANDO CELIS FERREIRA
Secretario Sala Civil
Tribunal Superior de Distrito Judicial de Bogotá
Avenida Calle 24 N° 53-28 Torre C Oficina 305
Teléfono 423 33 90 Extensión 8349
Email: secsctribsupbta2@cendoj.ramajudicial.gov.co

De: liliana jaramillo <lili3000jaramillo@yahoo.com>
Enviado: lunes, 6 de febrero de 2023 11:33 a. m.
Para: Secretario 02 Sala Civil Tribunal Superior - Seccional Bogota <secsctribsupbta2@cendoj.ramajudicial.gov.co>
Asunto: SUSTENTACION RECURSO APELACION RAD: 2014-00530. PERTENENCIA. DTE: GILMA OTILIA SICACHA CORTES. DDA: GLADYS MARTGOTH REYES DE SICACHA

LILIANA JARAMILLO P.

ABOGADA
DERECHO CIVIL Y DE FAMILIA
ESPECIALISTA EN DERECHO NOTARIAL Y REGISTRAL
UNIVERSIDAD EXTERNADO DE COLOMBIA

SEÑORES
TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE BOGOTA.
SALA CIVIL.
ATT. M.P. DR. JAIME CHAVARRO MAHECHA
E. S. D.

RADICADO: 2014-00530 04
ASUNTO: ESCRITO DE SUSTENTACION A RECURSO DE APELACION.
EN PROCESO: PROCESO VERBAL DECLARACION DE PERTENENCIA Y EN RECONVENCION REINVINDICATORIO
DEMANDANTE: GILMA OTILIA SICACHA CORTES. EN RECONVENCION. GLADYS MARGOT REYES DE SICACHA
DEMANDADO: GLADYS MARGOT REYES DE SICACHA. EN RECONVENCION: GILMA OTILIA SICACHA CORTES
JUZGADO: CUARENTA Y NUEVE CIVIL DEL CIRCUITO DE ORALIDAD DE BOGOTA

LILIANA JARAMILLO PAQUE, mayor de edad, domiciliada y residente en la Ciudad de Cali (V), de condiciones civiles ya conocidas dentro del proceso de la referencia, actuando en mi calidad de apoderada judicial de la señora ***GLADYS MARGOT REYES DE SICACHA,*** *parte apelante dentro del proceso de la referencia, por medio del presente escrito y oportunamente, me permito presentar escrito de sustentación al recurso de apelación presentado contra la SENTENCIA d*el día 27 de mayo del 2019, en cuanto a los numerales 2º. y 3º. Inc. Final del RESUELVE, emitida por el Juzgado Cuarenta y nueve Civil del Circuito de Bogota, recurso admitido por su despacho y el cual debe ser sustentado por escrito, esto de acuerdo a lo establecido en el auto del día 27 del mes de enero del 2023, notificado por estados el día 30 del mes de enero del 2023. Sustentación que hago en los siguientes términos:

I. RAZONES DE INCONFORMIDAD CON LA PROVIDENCIA APELADA

De conformidad con lo establecido en el artículo 322 numeral 1 inciso 2º. Y numeral 3º. Del Código General del Proceso, me permito presentar las inconformidades que le asisten a mi poderdante respecto al fallo día 27 de mayo del 2019, en cuanto a los numerales 2º. y 3º. Inc. Final del RESUELVE, emitida por el Juzgado Cuarenta y nueve Civil del Circuito de Bogota.

Las inconformidades se encuentran sustentadas en cuanto a la interpretación del fallador manifiesta en su sentencia, las que en escrito de reparos relacione y argumente extensamente, por lo que presento como sustentación de la apelación lo ya dicho y argumentado en dicho escrito de reparos. Así:

LILIANA JARAMILLO P.

ABOGADA

DERECHO CIVIL Y DE FAMILIA

ESPECIALISTA EN DERECHO NOTARIAL Y REGISTRAL

UNIVERSIDAD EXTERNADO DE COLOMBIA

El fallador manifiesta en su sentencia, en el numeral 2º. del RESUELVE: "NEGAR las pretensiones de la demanda de reconvención formulada por GLADYS MARGOTH REYES DE SICHACAHA", en contra de GILMA OTILIA SICACHA CORTES, conforme a lo indicado en precedencia"

> En cuanto a lo argumentado y/o considerado por el fallador manifiesta: "Estuvo en el medio de situaciones de orden contractual, llámese contrato de comodato, llámese obligación de no hacer, no me interpongo a la acción judicial si a mí me me cumplen con una previsión de orden familiar y que fue respetada como confesó la parte demandada, demandante en reconvención relativa a la permanencia de la señora en el predio, entonces ni siquiera por el hecho de la demanda logra desvirtuarse eso porque continua entonces en el aire la eventualidad de resolver una serie de situaciones de orden contractual y sin que se haya podido demostrar la interversion de los títulos, los testigos lo único que pueden dar a entender es que la posesión no cumplió con los requisitos de forma, en este caso de que hubiera sido publica, que entre otras cosas fue uno de los argumentos de la parte demandada, y que contradictoriamente en su demanda de reconvención formulo al decir de una parte que era tenedora y de otra parte que sí lo era como de mala fe" Todas esas circunstancias conllevan a la decisión que finalmente este despacho profiere y en esta caso que ambas pretensiones están llamadas al fracaso".
>
> Es preciso manifestar y fundamentar el presente reparo en lo siguiente:
>
> Si bien es cierto en el escrito de contestación de la demanda principal, siempre manifesté y reitero la calidad de mera tenedora en cabeza de la demandante principal señora Gilma Otilia Sicacha Cortes, pues como también siempre lo he reiterado en el mismo escrito, la misma no hizo pública la calidad que decía ostentar o por lo menos, si se aprecia con objetividad y por confesión de la misma demandante principal cuando rinde interrogatorio, el día 27 de mayo del 2019, manifestó, que nunca le hizo saber al señor VICTOR MANUEL SICHACHA GONZALEZ (anterior propietario del inmueble que se discute), dicha calidad o sea la de poseedora (posesión oculta, clandestina); pero también es cierto que en el momento en que presento en mi calidad de apoderada de la señora GLADYS MARGOT REYES DE SICACHA, demanda de reconvención –acción reivindicatoria, la que se dio el día 31 del mes de mayo del 2017, tal y como obra en el plenario; ya la señora GILMA OTILIA SICACHA CORTES, se puede decir ostenta dicha calidad, (poseedora), pues al entendimiento e interpretación de esta abogada, el acto como tal o sea ya de manera legal y de hecho, lo hace público, cuando el Juzgado de conocimiento inicial de la demanda principal, o sea 9º. Civil del Circuito de Bogotá, por petición de la apoderada de la demandante, en la demanda principal;

ordena la inscripción de dicha demanda o sea la de DECLARACION DE PERTENENCIA POR PRESCRIPCION ADQUISITIVA EXTRAORDINARIA DE DOMINIO, al Registrador de Instrumentos Públicos de Bogotá- Zona Centro, la que se hace mediante oficio No. 3035 del 17-09-2014 y es radicado en dicha dependencia el día 24-09-2014, tal y como consta en la ANOTACION Nro. 5 del folio de matrícula inmobiliaria 50C-302808, siendo por ello que ya así queda el acto publicitado y por ende ya podría hablarse que es solo en ese momento (24-09-2014), desde cuando se podría tener o dar la calidad de poseedora, dejando de ser de esta manera, la mera tenedora, solo desde ese momento; calidad que siempre tuvo (mera tenedora) y ostento durante los años que dice haber poseído el inmueble objeto de litigio, si así lo hizo, fue de manera clandestina, y por ende no pública. Siendo así, el fallador, debió, acoger las pretensiones de la demanda con acción Reivindicatoria en Reconvención presentada en momento oportuno y de la que no hubo pronunciamiento alguno por la parte demandada en reconvención, para este caso la señora Gilma Otilia Sicacha Cortes. (Aunque el fallador en su sentencia de primera instancia de fecha 04 de febrero del 2021, al referirse a los alegatos de conclusión en mi caso presentados, textualmente manifiesta " un aspecto que también fue anotado por la demandante en reconvención, es que no se probó la interversion del título, entonces es imposible contearlos sino a partir de la presentación de la demanda, que es el único hecho revelador de tal circunstancia; que también resulta desnaturalizado mercé de todas las probanzas que se han aquí memorado, del propio interrogatorio y de su conducta procesal con la contestación de la demanda (…)" , siendo así enfático en manifestar, que tampoco dicha situación o sea cuándo presenta la demanda en julio del 2014, la demandante, en demanda principal, ni cuando es inscrita en el folio de matrícula inmobiliaria, podría tomarse como posesión, por lo antes expuesto.

Es por ello su señoría, que para el entender de esta profesional del derecho en el momento en que presento la demanda con acción Reinvindicatoria (31 de mayo del 2017), ya la demandante principal y demandada en reconvención, podía reconocérsele la calidad de poseedora; por todo lo anteriormente manifestado o sea vuelvo y repito cuando se publicita el acto o la intención de prescribir y el que solo se hace bien en el momento en que por orden del Juzgado de conocimiento inicial de la demanda principal (9 Civil del Circuito), (lo que conllevo por la presentación de la demanda y petición dentro de la misma); el Registrador de Instrumentos Públicos-Zona Centro, acata la orden, o sea la publicita mediante la inscripción en el folio de matrícula inmobiliaria (24-09-2014), solo desde ese momento podría empezarse a computar el tiempo en

calidad de poseedora (si asi se evidenciara) y nunca antes cuando solo actuó en calidad de mera tenedora y por ende el fallo en dicho sentido. Por lo anterior es que no comparto la determinación del Juez de conocimiento, en cuanto que existe contradicción de mi parte, por lo ya explicado. Por lo anteriormente relacionado, no hay razón de ser, ni sustento alguno en lo manifestado por el fallador, en cuanto a este reparo se refiere y, por consiguiente, deberán acogerse las pretensiones solicitadas dentro de la demanda Reivindicatoria, oportunamente presentada y que como ya se dijo y consta en el plenario nunca fue contestada por aquella a traves de su apoderado. (Advertir al despacho que la posesión la realizó de manera clandestina, nunca pública, por ello no se reunen los presupuestos axiologicos para así hacerlo, o sea para demandar en declaración de pertenencia).

En relación al numeral 3º. Inciso final del Resuelve: "SIN COSTAS POR NO APARECER CAUSADAS".

Es preciso anotar, que la demandante principal y demandada en reconvención; señora Gilma Otilia Sicacha Cortes, sin asistirle el derecho para hacerlo, invoco acción de DECLARACION DE PERTENENCIA POR PRESCRIPCION EXTRAORDINARIA ADQUISITIVA DE DOMINIO; sin existir como se observa con toda objetividad, ni menos aún cumplir con los presupuestos axiológicos para así hacerlo, tal y como se indica en los artículos 762,764,770,775,777, 2531 y 2532 del Código Civil; desgastando inoficiosamente al aparato judicial y más aun haciendo incurrir en gastos y costas, como en agencias en derecho se refiere a mi poderdante, señora GLADYS MARGOTH REYES DE SICACHA, quien reside en la Ciudad de Cali (V), haciendo oneroso el desplazamiento, no solo de ella, sino de la profesional en derecho contratada para oponerse y ejercer las acciones de defensa a lo que legítimamente le pertenece, al igual que sus testigos; es por ello su señoría, que deberá ser condenada en costas, como en derecho se refiere (aclarar que dichas diligencias ocurrieron cuando aún estábamos ante la presencialidad)

En lo que se refiere a la ADICION A LOS REPAROS, ya presentados, sobre los cuales también versara mi sustentación ante el Superior a la sentencia proferida dentro de los procesos referidos, el día 27 de mayo del 2019, en cuanto a los numerales 2º. y 3º. Inc. Final del RESUELVE; tal y como lo ordena el artículo 322 numeral 3 inciso 2º. En los siguientes términos:

El fallador desecha la pretensión de declaración de pertenencia de la señora Gilma Otilia Sicacha Cortes y además niega la pretensión reivindicatoria de mi representada señora GLADYS MARGOT REYES DE SICACHA, lo que conlleva a

concluir que dicha decisión es incongruente, porque si Gilma Otilia Sicacha Cortes, no reúne los requisitos para prescribir, es porque mi patrocinada la señora Reyes de Sicacha, sigue siendo dueña del inmueble, que entonces no está en posesión, porque Gilma (Tenedora) se lo impide.

En el expediente está la escritura pública 1.317 DEL 08 DE ABRIL DEL 2014 de la Notaria 21 del Circulo de Cali (V), por la cual Gladys Margot Reyes de Sicacha compró el inmueble y el certificado de tradición que la acredita como propietaria, ninguna de esas pruebas han sido anuladas, conservan todo su valor probatorio, lo cual indica que la sentencia del Juez 49 Civil del Circuito de Bogotá D.C. incurre en violación Constitucional de conformidad con el artículo 228 de la Carta Política, que reza: "La administración de Justicia es función pública. Sus decisiones son independientes. Las actuaciones serán públicas y permanentes con las excepciones que establezca la ley y en ellas prevalecerá el derecho sustancial. Los términos procesales se observarán con diligencia y su incumplimiento será sancionado. Su funcionamiento será desconcentrado y autónomo".

Ante todo lo mencionado anteriormente en los diferentes párrafos, se evidencia que el a quo incurrió en varios yerros procesalmente hablando durante el trámite del proceso, esto es en lo relativo a la valoración del material probatorio allegados durante el trámite del proceso, configurándose ante esta actuación el llamado "Defecto Factico por omisión y valoración Defectuosa del material probatorio", concepto desarrollado jurisprudencialmente por parte de la Corte Constitucional de Colombia en indistintas providencias entre las que se encuentra la Sentencia T-006 de 2018, la que a su vez cita la Sentencia C-1270 del 2000, providencia por medio de las cuales se esboza que "El defecto factico, ha sido entendido por esta Corte como una anomalía protuberante y excepcional que puede presentarse en cualquier proceso judicial y se configura cuando " el apoyo probatorio en que se basó el juez para aplicar una determinada norma es absolutamente inadecuado".

"La jurisprudencia constitucional ha señalado que se configura una vía de hecho por defecto factico cuando en el curso de un proceso: (i) se omita la practica o decreto de pruebas o (ii) el material probatorio aportado no sea valorado adecuadamente, esto es, cuando excede el marco de la sana crítica y tiene trascendencia en la decisión proferida por el Juez, pues desconoció la realidad probatoria del proceso. En el primer evento, denominado defecto factico por omisión, se incurre en una vía de hecho cuando el juez se niega a decretar,

practicar o valorar un elemento probatorio con el cual se podría llegar a la verdad procesal y dar por probado un hecho, sin que exista justificación alguna. En segundo lugar, se incurre en un defecto factico por acción cuando existiendo los elementos probatorios dentro del expediente el juez incurre en un error en su interpretación al dar por probado un hecho que no aparece en el proceso o, b) al examinar de forma incompleta o, c) al valorar pruebas que fueron practicadas o recaudadas sin ajustarse al debido proceso o defensa de la contraparte. (…)" **Sentencia T-118ª de 2013 Corte Constitucional.**

"El **defecto factico** se produce cuando el juez toma una decisión sin que los hechos del caso se subsuman adecuadamente en el supuesto de hecho que legalmente la determina, como consecuencia de una omisión en el decreto o valoración de las pruebas; de una valoración irrazonable de las mismas; de la suposición de una prueba, o del otorgamiento de un alcance contraevidente a los medios probatorios.

Para la Corte, el defecto Factico puede darse como en una dimensión positiva, que comprende los supuestos de una valoración por completo equivocada, o en la fundamentación de una decisión en una prueba no apta para ello, como en una dimensión negativa, es decir por la omisión en la valoración de una prueba determinante, o en el decreto de pruebas de carácter esencial." **Sentencia de Unificación SU-774 de 2014 Corte Constitucional.**

Fundamentada en lo anteriormente expuesto, se puede evidenciar que el a quo. Claramente incurrió en el llamado defecto factico por la dimensión positiva, esto debido a que valoró de forma errónea el material probatorio allegado al proceso en cuanto a la accion reinvindicatoria se trata, pues nunca se ha desconocido, ni menos ser objeto de contradiccion la titularidad que le asiste a la señora Gladys Margoth Reyes de Sicacha, como legitima propietaria; titulos que gozan de toda la legalidad y legitimidad, a quien dejaria en un limbo juridico con la decisión de no reinvindicar, ante una peticion alejada de la realidad y la legitimidad de demandar, como ya lo expresé lejos de cumplir los presupuestos axiologicos para adquirir en declaracion de pertenencia por prescripcion extraordinaria adquisitiva de dominio, como asi lo hizo la demandante para dicha accion señora Gilma Otilia Sicacha Cortes. (por lo cual no fueron acogidas sus pretenciones obviamente).

Además de lo antes mencionado, el a quo también incurre en el defecto factico por la dimensión negativa, esto a que omitió decretar de oficio pruebas que dieran claridad a dicha situacion reinvindicatoria si no encontraba claridad en la demanda y material que lo sustentaba. "Las pruebas pueden ser decretadas a petición de parte o **de oficio** cuando sean útiles para la verificación de los hechos relacionados con las alegaciones de las partes." Y que **El Juez deberá decretar pruebas de oficio**, en las oportunidades probatorias del proceso y de los incidentes **y antes de fallar, cuando sean necesarias para esclarecer los hechos objeto de la controversia".**

LILIANA JARAMILLO P.

ABOGADA
DERECHO CIVIL Y DE FAMILIA
ESPECIALISTA EN DERECHO NOTARIAL Y REGISTRAL
UNIVERSIDAD EXTERNADO DE COLOMBIA

"En los supuestos de esta especie, la actividad oficiosa del juzgador no depende de su prudente y razonable juicio, sino que ella debe desplegarse por requerimiento legal, de manera que su incumplimiento genera la inobservancia de un deber de conducta que pesa sobre el" **Corte Suprema de Justicia, 7 noviembre 2000, rad. 5606.**

Por tanto, ha destacado la Corte que "la adopción de pruebas oficiosas no es cuestión de discrecionalidad, sino un imperativo de justicia que se impone en cabeza del Juez de conocimiento". **(Corte Suprema de Justicia, 28 de junio. 2010, Rad. 00015-01).**

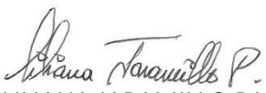
PETICION

En razón de lo antes expuesto, respetuosamente le solicito a su señoría lo siguiente:

REVOCAR la sentencia No. 27 de mayo del 2019, en cuanto a los numerales 2º. y 3º. Inc. Final del RESUELVE y en su lugar se **DECLARE** que pertenece en dominio pleno y absoluto a la señora **GLADYS MARGOT REYES DE SICACHA,** el bien inmueble objeto de demanda; Que como consecuencia de la anterior declaración se condene a la demandada señora **GILMA OTILIA SICACHA CORTES,** a restituir una vez ejecutoriada la sentencia, a favor de la demandante el inmueble mencionado y debidamente descrito e identificado tanto en los hechos como en las pretensiones y se declaren tambien las demás pretensiones solicitadas.

Para los fines de notificaciones y comunicaciones es necesario manifestarle que mi correo electrónico es: lili3000jaramillo@yahoo.com, que es idéntico y coincide con el que aparece inscrito en el Registro Nacional de Abogados.

Del señor Magistrado,
Atentamente,



LILIANA JARAMILLO PAQUE.
C.C. No. 25.363.874 de Caloto (C)
T.P. No. 55.569 del C.S. de la J.

Celular. 3136057481
Correo electronico: lili3000jaramillo@yahoo.com
Cali-Valle